TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SECRETARIA

TRASLADO EXCEPCIONES PARG.2. ART. 175 CPACA

MAGISTRADO DR. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS

No. PROCESO	PARTES	INICIA	FINALIZA
2019-00614	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA VS MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020
2019-00425	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE DANIEL TORRES TORRES VS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y OTROS	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020
2019-00631	REPARACIÓN DIRECTA GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO VS FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020
2018-00613	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DELFINA QUIÑONES QUIÑONES VS MINEDUCACIÓN Y OTROS	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020
2019-00661	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO VS DPTO DE NARIÑO Y OTROS	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020
2019-00667	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CARLOS ALBERTO REALPE ERASO VS FOMAG	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020
2020-00042	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LIBARDO MARTINEZ GOMEZ VS PROCURADURIA GNRAL DE LA NACIÓN Y OTROS	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020

2020-00055	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MARIA DORADALY BARON SALAZAR VS UGPP	20 DE AGOSTO DEL 2020	24 DE AGOSTO DEL 2020

FIJO el presente **TRASLADO** por el término de 3 días hábiles, hoy **DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2020),** en lugar visible de la Secretaría de este Tribunal, término que de conformidad a lo previsto en el art. 110 del CGP, empieza a correr el **VEINTE (20) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2020),** a partir de las 7:00 de la mañana. Se **DESFIJA** el presente traslado, el **VEINTIUNO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2020),** a las 4:00 de la tarde.

VER EXCEPCIONES A CONTINUACIÓN



CONTESTACIÓN GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA - 2019 - 00614

Mensaje enviado con importancia Alta.

DN

DENAR NOTIFICACION <denar.notificacion@policia.gov.co>
Mié 29/07/2020 11:49 AM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

CONT GLORIA ISABEL NIÑO - 2019 - 00614_compressed.pdf
6 MB

DIOS Y PATRIA BUENOS DÍAS

CORDIAL SALUDO, POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA, LA CUAL CONTIENE 30 FOLIOS,

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
HONORABLE MAGISTRADO EDGAR CABRERA
PROCESO NO 2019-00614,
DEMANDANTE GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA
DEMANDADO: POLICÍA NACIONAL
MEDIO DE CONTROL. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Lo anterior teniendo en cuenta el levantamiento de la suspensión de términos Judiciales y administrativos previstos a partir de 1 de julio de 2020, mediante acuerdos PCSJA20-11567 DE 2020, PCSJA20-11581 Y ACUERDO No. CSJNAA20-21 (24 de junio de 2020)

ARTICULO TERCERO.- Utilización de medios virtuales para la recepción de demandas, memoriales y demás trámites judiciales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 806 de 2020, a partir del 1º de julio de 2020, las demandas, acciones de tutela y hábeas corpus, así como las solicitudes que se presenten a través de memoriales y petición de revisión de expedientes serán recibidas y tramitadas por medios virtuales a través de los correos electrónicos institucionales contenidos en documento anexo y que serán publicados en la página web de la Rama Judicial y en las puertas de acceso a las edificaciones y sedes de los despachos judiciales, en la oficina judicial, en los centros de servicios judiciales y demás dependencias administrativas.

(…).. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físico.

Atentamente,

Subteniente

RAFAEL ALBERTO RUBIO ORDOÑEZ
Abogado Unidad Defensa Judicial DENAR

denar.notificación@policia.gov.co
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Secretaría General
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DENAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
UNIDAD DEFENSA JUDICIAL NARIÑO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Honorable Magistrado Dr. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
E. S. D.

REF. PROCESO : 2019 - 00614
DEMANDANTE : GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA
DEMANDADO : NACION – MINDEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS
ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

RAFAEL ALBERTO RUBIO ORDOÑEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1144136494 de Cali – (Valle), con Tarjeta Profesional 233495 del Consejo Superior de la Judicatura, quien en el proceso de la referencia actúo como apoderado judicial de la parte demandada, NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, conforme al poder debidamente otorgado, por medio del presente escrito y dentro del término legal me permito presentar **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

EL DEMANDADO, DOMICILIO Y REPRESENTANTE LEGAL

La demanda viene dirigida contra la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL, cuyo representante legal es el señor Ministro de Defensa Nacional, con domicilio principal en el C. A. N, en la ciudad de Bogotá D. C, quien ha delegado sus facultades, tanto de notificarse del auto Admisorio de la demanda, como de constituir apoderado, en este caso, en el señor Comandante del Departamento de Policía Nariño, quien se encuentra representado en el presente proceso por el suscrito apoderado.

FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

pretende el convocante que se declare la Nulidad del acto administrativo contenido en la calificación por muerte proferida por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el día 12 de octubre de 2018 denominado Calificación Informe Administrativo Prestacional por Muerte N° 009/2017 del señor PT. VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER en "***MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD***"

Empero, se considera que existe **CADUCIDAD DE LA ACCION**, porque el acto administrativo, fue notificado el 16 de Octubre de 2018.

La **CADUCIDAD** es un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de ejercer ante la jurisdicción, las acciones previstas en la ley por la circunstancia de no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley para el efecto. Por cuanto el término previsto está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un

Escaneado con CamScanner

derecho opte por accionar o no, **de allí que no pueda ser materia de convención antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.** La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, **pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, el cual resulta improrrogable y no susceptible de interrupción o de suspensión.** Así lo ha dicho también el Consejo de Estado en sentencia de fecha 03 de marzo de 2010 Radicado 2009-00013-01(37585), C.P. MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR.

En relación con el requisito del término de caducidad, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

"Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
*Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, **dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación**. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".*

De la normativa en cita se puede concluir que para instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el actor debe presentar la conciliación extrajudicial dentro del término de caducidad de cuatro (4) meses siguientes a la expedición del acto administrativo, contados a partir del día de su notificación, ejecución o publicación.

Así las cosas, del estudio de la demanda presentada por la actora se evidencia que la fecha de radicación de la misma fue el día **25 de noviembre de 2019** ante la Dirección General de la Policía Nacional (entidad convocada); entonces, si tenemos que la demandante tuvo conocimiento del acto administrativo desde el día de la notificación, es decir el **16 de octubre de 2018** (según formato de notificación informativos prestacionales por lesiones o muerte de fecha 16/10/2019), tenían hasta el **16 de febrero de 2019** para iniciar la Acción de Nulidad Y restablecimiento del Derecho o presentar solicitud de Conciliación Prejudicial, y no como lo quiere hacer ver el apoderado de la parte convocante, al tratar de aplicar el silencio administrativo como excusa y poder revivir los termino.
Ya que al estar inconforme con la calificación debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como se anotó anteriormente dentro del plazo establecido, y de igual manera ejercer el derecho que le cabe de solicitar la modificación de la calificación ante la Dirección General de la Policía Nacional, tal como se hizo (10/01/2019), y no dejar que se le venciera el termino y solicitar la

Escaneado con CamScanner

prejudicialidad; con el fin de que se pudiese contar con la calificación administrativa prestacional por muerte definitiva frente a su solicitud.

FRENTE A LOS HECHOS

A LOS HECHOS 1 y 2.- ES CIERTO.- conforme al expediente administrativo, en donde se muestra un tiempo de servicio de 05 años, 07 meses y 16 días.

A LOS HECHOS 3, 4, 5, 6 y 7 SON CIERTOS. Conforme a las pruebas obrantes dentro del proceso.

AL HECHO 8 NO ME CONSTA, lo anterior tendrá que ser objeto de debate en etapa probatoria.

AL HECHO 9 ES CIERTO, tal como quedo registrado en el informe administrativo por muerte No 009/2018.

A LOS HECHOS 10, 11 Y 12 PARCIALMENTE CIERTO, toda vez que se dio respuesta del oficio del 10 de enero de 2019, mediante numero radicado S-2019-059124-SEGEN con fecha del 31 de octubre de 2019.

AL HECHO 13 ES CIERTO, que para el día 22 de octubre de 2019 se realizó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 156 Judicial II para asuntos administrativos de la ciudad de Pasto.

FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DE LA DEFENSA

En primer lugar, es importante aclarar que el régimen de imputación de responsabilidad bajo el cual deben estudiarse los daños causados a quienes prestan los servicios de defensa y seguridad del Estado de forma profesional y voluntaria difiere respecto de quienes lo hacen de forma obligatoria – conscriptos-.

En efecto, en relación con los primeros quien demanda debe demostrar la responsabilidad subjetiva del Estado – falla del servicio- por el incumplimiento de un deber obligacional a su cargo, mientras que respecto de los segundos, por la situación de especial sujeción el Estado se obliga a devolverlos en iguales condiciones en que se encontraban antes de su reclutamiento, por lo que en estos casos el régimen de responsabilidad es objetivo típico de una obligación de resultado.

Conforme a lo anterior la parte actora dentro de sus argumentos jurídicos establece, que la Policía Nacional asume el papel de posición de garante, ante lo cual su señoría es una total mentira, por cuanto que la decisión exclusiva de atentar en contra de la integridad del patrullero FREDY ALEXANDER VILLAMIZAR NIÑO, fue en cabeza exclusiva de el mismo, escapa de la esfera de la Policía Nacional, la decisión intempestiva que tomo dicho uniformad, toda vez que era conocedor que la utilización del arma de dotación oficial, estaba por fuera de los parámetros legales establecidos en los instructivos y actas que el extinto patrullero firmo, obligándose a los deberes de seguridad a los cuales estaba sujeto.

Escaneado con CamScanner

CULPA EXCLUSIVA DEL SEÑOR FREDY ALEXANDER VILLAMIZAR NIÑO

Es claro que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya como lo señala el precedente de la sala un "*Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos*", dicho daño tiene como característica que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Sin embargo, no es suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, sino que es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe o no atribuirlo fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, si opera alguna de las causales exonerativa de responsabilidad o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

La imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera con fundamento en los distintos criterios de imputación consolidados en el precedente de la sala: falta o falla en la prestación del servicio-simple, presunta y probada; daño especial-desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En razón de lo anterior, considero respetuosamente que al no haberse demostrado la responsabilidad de la Policía Nacional o alguno de sus Agentes se **DEBEN DESPACHAR NEGATIVAMENTE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**.

PRUEBAS

Documentales:

- Acta de compromiso para dotación individual material de guerra, donde se le indica al señor FREDY ALEXANDER VILLAMIZAR NIÑO sobre el cuidado y seguridad que se debe tener con las armas de fuego en un folio.
- Copia del Informe Administrativo Prestacional por Muerte No. 009/2018 de fecha 12 de octubre del 2018 en tres folios.
- Copia de la Hoja de vida del señor Patrullero FREDY ALEXANDER VILLAMIZAR NIÑO.
- Copia de notificación personal Informe Administrativo Prestacional por Muerte No. 009/2018 de fecha 16 de octubre del 2018 en un folio.
- Copia del Oficio No. S-2019-059124 – SEGEN de la oficina de Orientación e Información de la Policía Nacional, dando respuesta a la petición con radicado No. E-2019-013433-MEBUC.

Escaneado con CamScanner

ANEXOS Y PERSONERIA

- ✓ Poder debidamente otorgado.
- ✓ Copia de Resolución 3969 del 30 de noviembre de 2006 *"(...) por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional..."*
- ✓ Copia de la Resolución 4535 del 29 de junio de 2017 *(...) Por la cual se establece la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se promueve la acción de repetición, se delega la facultad de constituir apoderados para conciliar y se dictan otras disposiciones..."*
- ✓ Resolución 0191 del 2020, por la cual se traslada a unos Oficiales Superiores de la Policía Nacional
- ✓ Constancia laboral emitida por el Jefe del Área de Talento Humano que certifica que el suscrito labora y es funcionario de la Policía Nacional.

Del Honorable Juez,

RAFAEL ALBERTO RUBIO ORDOÑEZ
C. C. No. 1.144.136.494 expedida en Cali - Valle
T. P. No. 233.495 del C.S de la J.

Calle 20 Nº 26-54 Esquina Barrio Las Cuadras
Oficina de Defensa Judicial
denar.grune@policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL

SECRETARIA GENERAL- UNIDAD DEFENSA JUDICIAL NARIÑO

Doctor
JOHN ALEXANDER HURTADO PAREDES
JUEZ OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO
E. S. D.

Radicado:	2019- 00614
Referencia:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante:	GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA
Demandado:	MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL

NELSON DABEY PARRADO MORA mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.824.152 de Bogotá D.C, en mi condición de Comandante del Departamento de Policía Nariño, de conformidad a la Resolución No. 0191 del 30 de Enero de 2020 y en virtud de las facultades conferidas a través de la resolución No. 3969 de Noviembre 30 de 2006 y 4535 del 29 de junio del 2017, de manera respetuosa, manifiesto que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente como apoderado a **RAFAEL ALBERTO RUBIO ORDOÑEZ,** abogado en ejercicio identificado con cédula de ciudadanía N° 1.144.136.494 de Cali – Valle, portador de la Tarjeta Profesional Nro. 233.495 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación de **LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL,** adelante las diligencias inherente a la atención del presente proceso, hasta su culminación.

El apoderado cuenta con todas y cada una de las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, como son recibir, desistir, transigir, sustituir, reasumir, contestar demanda, proponer excepciones, alegar, conciliar, celebrar pactos de cumplimiento, apelar y todas aquellas diligencias tendientes al éxito de este mandato,

Solicito se sirva reconocer personería para actuar.

Atentamente,

Coronel **NELSON DABEY PARRADO MORA**
C. C. No. 79.824.152 de Bogotá D.C.

Acepto,

RAFAEL ALBERTO RUBIO ORDOÑEZ
C. C. 1.144.136.494 de Cali – Valle
T. P. No. 233.495 del C.S.J

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ES FIEL FOTOCOPIA TOMADA DE SU ORIG
FECHA
Área Defensa Judicial

RESOLUCIÓN NÚMERO 3969 DE 2006

(30 NOV 2006)

Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

EL COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en particular las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9 de la Ley 489 de 1998, 8 numeral 2 del Decreto 1512 de 2000, y del Decreto 049 de 2003, 23 de la Ley 446 de 1998, 149 del Código Contencioso Administrativo y 64 del Código de Procedimiento Civil, y

CONSIDERANDO:

Que según lo previsto en el articulo 211 de la Constitución Política, la ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los Ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores. Alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que en virtud de la norma en cita la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

Que de conformidad Con lo consagrado en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad concitada ley, "están habilitadas para transferir el ejercicio de funciones y la atención y decisión de los asuntos a ellas confiados por la ley, mediante acto de delegación, a los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley".

Que, de.. acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el cumplimiento de sus funciones, procurándose en el desarrollo de la función pública, de manera prioritaria, dar aplicación a los principios de coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas y entre los organismos del respectivo sector.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 446 de 1998 cuando en un proceso ante cualquier jurisdicción intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente al Representante Legal de la Entidad Pública o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones.

Escaneado con CamScanner

Continuación de la resolución "Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional."

Que mediante Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, el Gobierno Nacional modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional con relación a la estructura orgánica de la Policía Nacional, determinando en el articulo 20, que la representación judicial y administrativa de la Institución es función del Secretario General previa delegación del Ministro de Defensa Nacional de conformidad con las normas vigentes.

Que teniendo en cuenta la clase, volumen y naturaleza de los procesos en que es parte la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se hace necesario delegar la facultad de notificarse y constituir apoderados, en algunos servidores públicos de esa dependencia, en orden a garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, moralidad, economía y celeridad en la gestión litigiosa.

Que de conformidad con el inciso primero del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, la Nación y demás entidades de derecho público, podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas.

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Delegar en el Secretario General de la Policía Nacional las siguientes funciones:

1. Notificarse de las demandas y constituir apoderados en los procesos contencioso administrativos que contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, cursen en el Consejo de Estado, Tribunales Contencioso Administrativos y Juzgados Contencioso Administrativos.

2. Notificarse y constituir apoderados en las acciones de tutela, de cumplimento, populares y de grupo, que cursen ante las diferentes autoridades judiciales, a fin de contestar y defender a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

3. Notificarse de las demandas y designar apoderados dentro de los procesos que cursen en los juzgados civiles, penales y laborales de todo el territorio nacional en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

4. Designar apoderados para que se constituyan en parte civil, en los términos y para los efectos de la Ley 190 de 1995.

5. Para efectos de la Ley 1066 de 2006 y demás normas concordantes, otorgar poderes a funcionarios abogados de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional según lo requieran las necesidades del servicio, para que atiendan los trámites tendientes a la recuperación de la cartera por cobro coactivo, así como asignar funciones de secretario a un empleado de la misma entidad, con el fin de apoyar las funciones administrativas correspondientes.

6. Notificarse y designar apoderados para atender y realizar las gestiones necesarias que se requieran o deban realizarse ante las Inspecciones de Policía, Ministerio de la Protección Social y cualquier otra entidad de la Administración Pública.

7. Designar apoderados con el fin de iniciar las acciones que se requieran en defensa de los intereses de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional ante las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria.

Escaneado con CamScanner

Continuación de la resolución "Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional."

ARTÍCULO 2°. Delegar la función de notificarse de las demandas y constituir apoderados en los procesos contencioso administrativos, acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo y de cumplimiento que contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, cursen en los Tribunales o Juzgados del país, así como la de notificarse de las demandas en la jurisdicción ordinaria (asuntos civiles, penales y laborales) y procesos que cursen ante las diferentes autoridades administrativas, en los Comandantes de las Unidades Policiales que se indican a continuación:

Despacho Judicial Contencioso Administrativo	Departamento	Delegatario
Medellín	Antioquia	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
Arauca	Arauca	Comandante Departamento de Policía
Barranquilla	Atlántico	Comandante Departamento de Policía
Barrancabermeja	Santander del Sur	Comandante Departamento de Policía del Magdalena Medio
Cartagena	Bolivar	Comandante Departamento de Policía
Tunja	Boyacá	Comandante Departamento de Policía
Buenaventura	Valle del Cauca	Comandante Departamento de Policía del Valle del Cauca
Buga	Valle del Cauca	Comandante Departamento de Policía del Valle del Cauca
Manizales	Caldas	Comandante Departamento de Policía
Florencia	Caquetá	Comandante Departamento de Policía
Popayán	Cauca	Comandante Departamento de Policía
Montería	Córdoba	Comandante Departamento de Policía
Yopal	Casanare	Comandante Departamento de Policía
Valledupar	Cesar	Comandante Departamento de Policía
Quibdo	Choco	Comandante Departamento de Policía
Facatativa	Cundinamarca	Secretario General de la Policía Nacional
Girardot	Cundinamarca	Secretario General de la Policía Nacional
Riohacha	Guajira	Comandante Departamento de Policía
Neiva	Huila	Comandante Departamento de Policía
Leticia	Amazonas	Comandante Departamento de Policía
Santa Marta	Magdalena	Comandante Departamento de Policía
Villavicencio	Meta	Comandante Departamento de Policía
Mocoa	Putumayo	Comandante Departamento de Policía
Cúcuta	Norte de Santander	Comandante Departamento de Policía
Pasto	Nariño	Comandante Departamento de Policía
Pamplona	Norte de Santander	Comandante Departamento de Policía Norte de Santander
rmenia	Quindío	Comandante Departamento de Policía
ereira	Risaralda	Comandante Departamento de Policía
an Gil	Santander	Comandante Departamento de Policía de Santander
ucaramanga	Santander	Comandante Departamento de Policía
an Andrés, Providencia	San Andrés	Comandante Departamento de Policía

Escaneado con CamScanner

Continuación de la resolución "Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional."

y Santa Catalina		
Santa Rosa de Viterbo	Boyacá	Comandante Departamento de Policía Boyacá
Sincelejo	Sucre	Comandante Departamento de Policía
Ibagué	Tolima	Comandante Departamento de Policía
Turbo	Antioquia	Comandante Departamento de Policía Uraba
Cali	Valle del Cauca	Comandante Policía Metropolitana de Santiago de Cali
Zipaquira	Cundinamarca	Secretario General de la Policía Nacional

PARAGRAFO. Podrá igualmente el Secretario General de la Policía Nacional, constituir apoderados en todos los procesos contencioso administrativos que cursen ante los Tribunales o Juzgados Contencioso Administrativos y demás autoridades judiciales y administrativas en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 3°. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN.

La delegación efectuada a través de la presente resolución, serán ejercidas por los funcionarios delegatarios conforme a las siguientes condiciones:

1. La delegación es una decisión discrecional del delegante y su cumplimiento es vinculante para el delegatario.
2. El ejercicio de las competencias que por medio de la presente resolución se delegan, está sujeto a la observancia plena de los requisitos y parámetros relacionados con la actividad litigiosa de las entidades públicas establecidas en la ley, manuales y políticas del Ministerio de Defensa Nacional.
3. Cuando lo estime conveniente, el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias delegadas por medio del presente acto.
4. La delegación establecida en el artículo 2 de esta Resolución no comprende la facultad a mutuo propio, o a través de apoderado de conciliar, transar o utilizar cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos en nombre de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
5. Las facultades delegadas mediante la presente resolución son indelegables.
6. La delegación eximirá de toda responsabilidad al delegante, y será asumida plenamente y de manera exclusiva por el delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política el delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia, revisar y revocar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
7. El delegatario deberá observar estrictamente las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de la delegación y es responsable de las decisiones que tome en ejercicio de la misma.
8. El delegatario deberá desempeñarse dentro del marco de actividades establecido en este acto de delegación.
9. El delegatario deberá atender oportunamente los requerimientos sobre el ejercicio de la delegación, hechos por el delegante.
10. El delegatario deberá cumplir las orientaciones generales dadas por el delegante.
11. El delegatario facilitará la revisión de sus decisiones por el delegante.
12. Los servidores públicos que ejerzan la defensa judicial, deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 111 de 1996.

Escaneado con CamScanner

Continuación de la resolución "Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional."

13. En virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción de legalidad de los actos administrativos, el simple cambio de funcionario delegante y/o delegatario no extingue los efectos del acto de delegación. De ahí que, en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos, las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos que se han citado en el presente acto administrativo para la delegación de competencias, hasta tanto se expida un nuevo acto administrativo que las reasigne.
14. Las responsabilidades y consecuencias de la presente delegación, se rigen por las normas legales aplicables, y en particular por los artículos 9° y siguientes de la Ley 489 de 1998.
15. Este acto tiene fuerza ejecutoria mientras no sea revocado, suspendido, modificado, derogado o anulado por autoridad competente.

ARTÍCULO 4°. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN, APODERAMIENTO Y DEFENSA JUDICIAL.

Los funcionarios de la Policía Nacional, que tengan como función la actividad litigiosa ante las diferentes Jurisdicciones, deberán suscribir un compromiso anticorrupción que reposará en su folio de vida, en el que se exprese explícitamente su voluntad de abogar por la transparencia en los procesos litigiosos y la responsabilidad de rendir informes de su actuación, compromiso a través del cual, asumirán como mínimo los siguientes:

No ofrecer ni dar prebenda ni ninguna otra forma de contraprestación a ningún funcionario público.

No propiciar que nadie, bien sea empleado de la entidad o familiar ofrezca o dé prebendas o contraprestación a ningún funcionario de la entidad a su nombre;

No recibir directa o indirectamente prebendas ni ninguna otra forma de contraprestación o beneficio a ningún interesado en los procesos que realiza para el cumplimiento de las funciones a su cargo, ni para retardar el ejercicio de dichas funciones.

No realizar conductas que atenten contra la seguridad del personal y de las instalaciones, así como de los intereses de la institución que pongan a la entidad en desventaja frente a otras personas naturales o jurídicas.

Informar al inmediato superior de las conductas que se detecten relacionadas con falta de transparencia en el ejercicio del cargo, por parte de los funcionarios responsables del litigio.

No realizar acuerdos ni utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos sin el previo análisis y aprobación del Comité de Conciliación de la Entidad.

Asumir y reconocer expresamente, las consecuencias que se deriven del incumplimiento del compromiso anticorrupción precedente o de cualquiera otra de sus obligaciones legales asociadas a las gestiones propias de la actividad litigiosa a su cargo, ante las diferentes autoridades encargadas de llevar a cabo las correspondientes investigaciones.

ARTÍCULO 5°. INFORME SEMESTRAL. Los funcionarios encargados de la actividad litigiosa de la Policía Nacional, deberán rendir informe semestral de las actuaciones y del estado de los procesos al Secretario General de la Policía Nacional.

Escaneado con CamScanner

30 NOV 2006

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2006 HOJA No 6

...ación de la resolución "Po... ...asignan y coordinan funciones ... competencias ...das con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea p... la Nación - ... Defensa - Policía Nacional."

PARAGRAFO: El Secretario General de la Policía Nacional presentará un informe semestral a este ...cho, como uno de los mecanismos para efectuar el seguimiento y control de la función delegada en este acto administrativo.

ARTÍCULO 6°. EMPALME EN CASO DE CAMBIO DE MANDO. Cuando haya cambios de los funcionarios designados como delegatarios a través de la presente resolución, éstos deberán preparar un informe de situación y ejecución de las funciones asignadas a su cargo, dejando constancia de la información y documentación entregada al nuevo funcionario que ejercerá las fu... ...competencia respectiva, cuya copia será remitida a la Secretaría General de la Pol... ...nal para su control y seguimiento.

ARTICU... ...GENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su pu... ...roga las normas que le sean contrarias.

PUBLÍ... ...PLASE,

30 NOV. 2006

...ENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
...AS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL
...ENSA NACIONAL

FREDDY

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 4535 DE 2017

(29 JUN 2017)

Por la cual se establece la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se promueve la acción de repetición, se delega la facultad de constituir apoderados para conciliar y se dictan otras disposiciones.

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 9 y 61 parágrafo de la Ley 489 de 1998, artículo 75 de la ley 446 de 1998, en concordancia con los artículos 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 13 de la Ley 1285 de 2009, el Capítulo III del Decreto 1069 de 2015 y el Decreto 1167 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, dispuso que las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen;

Que el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, estableció como requisito de procedibilidad para las acciones previstas en los artículos 139, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el adelantamiento de la conciliación extrajudicial;

Que a través la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, el Decreto 1069 de 2015 y el Decreto 1167 de 2015, se reglamentó lo relacionado con los Comités de Conciliación, estableciendo las reglas de su integración y funcionamiento.

Que de conformidad con lo señalado en el Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional hacen parte integral de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, en donde de conformidad con las leyes se debe constituir un Comité de Conciliación.

Que mediante Decreto 4222 de 2006, se modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y se establecieron las funciones de la Secretaría General de la Policía Nacional.

Que mediante Decretos 3123 de 2007, 4481 de 2008, 4320 de 2010 y 1381 de 2015, se modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional.

Que los Comités de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, deben conocer de la procedencia o improcedencia de la conciliación ante las diferentes jurisdicciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 2001, Decreto 1069 de 2015 y la Directiva Presidencial número 05 del 22 de mayo de 2009;

Que se hace necesario adecuar la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1069 de 2015 y 1167 de 2016 y exista representación de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional. Los Comités de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional estarán integrados por los funcionarios que se relacionan a continuación, quienes serán miembros permanentes con voz y voto, así:

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

1. Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional

1.1 El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
1.2 El Asesor que señale el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
1.3 El Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, quien además ostenta la calidad de ordenador del gasto del rubro de sentencias y conciliaciones en la Gestión General del Ministerio de Defensa.
1.4 Un delegado de la Inspección General del Ejército Nacional en el grado de Coronel, designado por el Comandante de la Fuerza.
1.5 Un delegado de la Inspección General de la Armada Nacional en el grado de Capitán de Navío o Coronel, designado por el Comandante de la Fuerza.
1.6 Un delegado de la Inspección General de la Fuerza Aérea en el grado de Coronel, designado por el Comandante de la Fuerza.
1.7 El Director de Planeación y Presupuestación del Sector Defensa.
1.8 El Director de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.
1.9 El Coordinador del Grupo Contencioso Constitucional o el Coordinador del Grupo de Procesos Ordinarios de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, cuando se someta al Comité asuntos relacionados con sus funciones, según corresponda.
1.10 Un delegado del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional en grado de Coronel.

2. Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Policía Nacional

2.1 El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
2.2 El Secretario General de la Policía Nacional.
2.3 El Ordenador del Gasto del Rubro de Sentencias en la Policía Nacional, quien lo presidirá.
2.4 El Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, o su delegado.
2.5 El Jefe del Área de Defensa Judicial de la Policía Nacional.
2.6 El Jefe del Área de Defensa Jurídica de la Policía Nacional.
2.7 Un delegado de la Inspección General de la Policía Nacional de Colombia.

PARÁGRAFO 1. Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto: El apoderado que represente los intereses de la entidad en cada proceso; el Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional y quien haga sus veces en la Policía Nacional para el caso del Comité de Conciliación de esa institución, y los Secretarios Técnicos de los Comités.

PARÁGRAFO 2. Los Comités de Conciliación a que hace referencia este artículo serán presididos por los ordenadores del gasto de los rubros de sentencias y conciliaciones, respectivamente.

ARTÍCULO 2. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y el de la Policía Nacional tendrán las siguientes funciones:

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del Ministerio de Defensa y Policía Nacional para determinar las causas generadoras de los conflictos, el índice de condenas, los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la Entidad y las deficiencias en las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de otros mecanismos de arreglo directo tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso en concreto.

5. Determinar en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concille en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición.

8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.

9. Designar los funcionarios que ejercerán la Secretaría Técnica del Comité, uno por parte del Ministerio de Defensa Nacional y otro de la Policía Nacional, preferentemente un profesional del derecho.

10. Solicitar al Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional y dependencia que haga sus veces en la Policía Nacional, un informe semestral de las conciliaciones estudiadas durante ese periodo, para efectos de evaluar la gestión y emitir recomendaciones que sirvan como fundamento para prevenir las fallas del servicio que comprometan la responsabilidad de la Nación Ministerio de Defensa y Policía Nacional y la de sus funcionarios.

11. Dictar su propio reglamento.

ARTÍCULO 3. SESIONES Y VOTACIÓN. Los Comités se reunirán ordinariamente una vez a la semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente. Los Comités podrán sesionar con un mínimo de tres (3) de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple, se deberá garantizar que en cada sesión asista por lo menos un profesional del Derecho.

ARTÍCULO 4. El Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por quienes asistan a la respectiva sesión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión.

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.

3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses.

4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses de la entidad.

5. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.

6. Informar a los apoderados del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional según el caso, la decisión tomada por el Comité de Conciliación de conciliar o no conciliar junto con su fundamento, con el fin de que sea presentada dicha decisión en la audiencia de conciliación judicial o extrajudicial citada por el funcionario de conocimiento de la misma, decisión que será de obligatorio cumplimiento por el apoderado de la Entidad.

7. Las demás que le sean asignadas por el comité.

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Continuación de la Resolución "Por la cual se establece la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se promueve la acción de repetición, se delega la facultad de constituir apoderados para conciliar y se dictan otras disposiciones".

PARÁGRAFO. La designación de los Secretarios Técnicos del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, se efectuará por parte de los miembros del Comité, la cual deberá ser informada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

ARTÍCULO 5. El Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional deberá realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el Ordenador del Gasto, una vez opere el pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los 2 meses siguientes a la decisión.

PARÁGRAFO. La Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, según el caso, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.

ARTÍCULO 6. Será obligación de los apoderados:

1. Ante toda solicitud de conciliación extrajudicial, deberá solicitar, de manera oportuna, a la dependencia competente que conoce del caso, los antecedentes necesarios para presentar propuesta al Comité de Conciliación de la Entidad.

2. Iniciar los procesos de repetición dentro del plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la decisión de iniciar el proceso de repetición dada por el Comité.

3. Informar a la Secretaría Técnica del Comité con periodicidad mensual, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, el resultado de la audiencia de conciliación, las sumas conciliadas y el ahorro patrimonial logrado con la conciliación, allegando copia del acta de la audiencia. En el evento de que la conciliación no sea aprobada por la autoridad competente deberá informar dicha circunstancia a la secretaría técnica del comité.

ARTÍCULO 7. Delegar la facultad de constituir apoderados especiales para asistir a las diligencias prejudiciales o judiciales de Conciliación, para asistir a las audiencias que se surten al interior de las Acciones Constitucionales, solicitar conciliación ante las autoridades o Instituciones acreditadas para conocer de la conciliación prejudicial o judicial en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de la Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, cuando los hechos así lo requieran y para iniciar procesos de repetición, en el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional y en el Jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional, respectivamente.

ARTÍCULO 8. Para los casos de la Policía Nacional, delegar la facultad de designar apoderados para conocer de la conciliación prejudicial o judicial y para iniciar procesos de repetición previa autorización y parámetros del Comité de Conciliación de la Policía Nacional, en los Comandantes de las Unidades Policiales que se indican a continuación:

DEPARTAMENTO	JURISDICCION	DELEGATARIO
Amazonas	Leticia	Comandante Departamento de Policía Amazonas.
Antioquia	Medellín	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
		Comandante Departamento de Policía Antioquia.
	Turbo	Comandante Departamento de Policía Urabá.

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Continuación de la Resolución "Por la cual se establece la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se promueve la acción de repetición, se delega la facultad de constituir apoderados para conciliar y se dictan otras disposiciones".

Arauca	Arauca	Comandante Departamento de Policía Arauca.
Atlántico	Barranquilla	Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla.
		Comandante Departamento de Policía Atlántico.
Bolívar	Cartagena	Comandante Policía Metropolitana Cartagena de Indias.
		Comandante Departamento de Policía Bolívar.
Boyacá	Tunja	Comandante Departamento de Policía Boyacá.
	Santa Rosa de Viterbo	
Caldas	Manizales	Comandante Departamento de Policía Caldas.
Caquetá	Florencia	Comandante Departamento de Policía Caquetá.
Casanare	Yopal	Comandante Departamento de Policía Casanare.
Cauca	Popayán	Comandante Departamento de Policía Cauca.
Cesar	Valledupar	Comandante Departamento de Policía Cesar.
Chocó	Quibdó	Comandante Departamento de Policía Chocó.
Córdoba	Montería	Comandante Departamento de Policía Córdoba.
Guajira	Riohacha	Comandante Departamento de Policía Guajira.
Huila	Neiva	Comandante Departamento de Policía Huila.
Magdalena	Santa Marta	Comandante Departamento de Policía Magdalena.
Meta	Villavicencio	Comandante Departamento de Policía Meta
Nariño	Pasto	Comandante Departamento de Policía Nariño
Norte de Santander	Cúcuta	Comandan de Policía Metropolitana de Cúcuta.
		Comandante Departamento de Policía Norte de Santander.
	Pamplona	Comandante Departamento de Policía Norte de Santander.

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Continuación de la Resolución "Por la cual se establece la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se promueve la acción de repetición, se delega la facultad de constituir apoderados para conciliar y se dictan otras disposiciones".

Putumayo	Mocoa	Comandante Departamento de Policía Putumayo
Quindío	Armenia	Comandante Departamento de Policía Quindío.
Risaralda	Pereira	Comandante Departamento de Policía Risaralda.
San Andrés	San Andrés	Comandante Departamento de Policía San Andrés.
Santander	Bucaramanga	Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.
		Comandante Departamento de Policía Santander.
	San Gil	Comandante Departamento de Policía Santander.
	Barrancabermeja	Comandante Departamento de Policía Magdalena Medio.
Sucre	Sincelejo	Comandante Departamento de Policía Sucre.
Tolima	Ibagué	Comandante Departamento de Policía Tolima.
Valle del Cauca	Cali	Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.
		Comandante Departamento de Policía Valle.
	Buga	Comandante Departamento de Policía Valle.
	Buenaventura	
	Cartago	

ARTÍCULO 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolución número 3200 del 31 de julio de 2009.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUN 2017

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

LUIS C. VILLEGAS ECHEVERRI

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 0191 DE 2020

(30 ENE 2020)

Por la cual se traslada a unos Oficiales Superiores de la Policía Nacional

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En ejercicio de la facultad legal que le confiere el artículo 42 numeral 2 literal b) del Decreto Ley 1791 de 2000,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Trasladar a los Oficiales Superiores de la Policía Nacional que se relacionan a continuación, a partir de la comunicación del presente acto administrativo, a las unidades que en cada caso se indica, así:

Coronel BORJA MIRANDA NECTON LINCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.651.248, del Departamento de Policía Cundinamarca a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Coronel AMAYA OLMOS GUILLEN ALEXANDER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.333.851, del Departamento de Policía Vichada a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Coronel SOLARTE CASTILLO OSCAR FAVIAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.755.127, de la Región de Policía No. 6 a la Policía Metropolitana de Santa Marta, como Comandante.

Coronel RESTREPO MOSCOSO JUAN CARLOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.18.511.543, del Departamento de Policía Huila al Departamento de Policía Casanare, como Comandante.

Coronel BERDUGO GARAVITO GUSTAVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.260.989, de la Policía Metropolitana de Santa Marta al Departamento de Policía Meta, como Comandante.

Coronel BENAVIDES GUANCHA LUIS HERNANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.999.073, del Departamento de Policía Quindío a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Coronel RAMIREZ HINESTROZA JOSE LUIS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.589.835, del Departamento de Policía Casanare al Departamento de Policía Quindío, como Comandante.

Coronel FORERO BENITEZ FARLEY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.411.590, del Departamento de Policía Magdalena Medio a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Coronel LAVERDE RAMIREZ HOOVER AQUIMIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.375.044, de la Oficina de Telemática al Departamento de Policía Sucre, como Comandante.

Coronel GELVEZ ALEMAN FRANCISCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.358.320, de la Policía Metropolitana de San Jose de Cúcuta al Departamento de Policía Putumayo, como Comandante.

Vo.Bo. COORDINADORA GRUPO NEGOCIOS GENERALES
Revisó: ABOGADA GRUPO NEGOCIOS GENERALES

Vo.Bo.: SECRETARIO GENERAL
Vo.Bo.: DIRECTORA ASUNTOS LEGALES (E)

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Coronel ALZATE DUQUE JHON HARVEY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.034.112, de la Dirección Nacional de Escuelas al Departamento de Policía Norte de Santander, como Comandante.

Coronel AGUDELO ALVAREZ JORGE ELIECER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.395.207, de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión al Departamento de Policía Guajira, como Comandante.

Coronel CABRA DIAZ JORGE MIGUEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.609.688, del Departamento de Policía Antioquia a la misma Unidad, como Comandante.

Coronel THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.746.891, de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" al Departamento de Policía Vichada, como Comandante.

Coronel PARRADO MORA NELSON DABEY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.824.152, del Departamento de Policía Nariño a la misma Unidad, como Comandante.

Coronel MONTENEGRO RAMIREZ WILSON ARMEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.386.863, de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión a la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, como Comandante.

Coronel DE LOS REYES VALENCIA JESUS MANUEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.641.971, del Departamento de Policía Norte de Santander al Departamento de Policía Cesar, como Comandante.

Coronel RODRIGUEZ CASTELLANOS HECTOR JORGE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.555.229, del Departamento de Policía Meta al Departamento de Policía Amazonas, como Comandante.

Coronel BARRERA GANTIVA HAROLD MAURICIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.523.191, del Departamento de Policía Putumayo al Departamento de Policía Huila, como Comandante.

Coronel MARTINEZ BUSTOS GUSTAVO ADOLFO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.419.518, del Departamento de Policía Cundinamarca al Departamento de Policía Magdalena Medio, como Comandante.

Coronel RIVERA SUESCÚN TAHIR SUZETH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.222.293, del Departamento de Policía Caquetá al Departamento de Policía Bolívar, como Comandante.

Coronel CASTRO GUERRERO CESAR OVIDIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.242.725, del Departamento de Policía Boyacá al Departamento de Policía Cundinamarca, como Comandante.

Coronel VERA MORENO RAUL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.754.180, de la Metropolitana de Manizales a la misma Unidad, como Comandante.

Coronel RAMIREZ RAMIREZ HENRY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.386.131, de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL al Departamento de Policía Meta.

Vo.Bo. COORDINADORA GRUPO NEGOCIOS GENERALES

Vo.Bo. SECRETARIO GENERAL

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Coronel LAMPREA PINZON OSCAR ANDRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.599.984, del Departamento de Policía Bolívar al Departamento de Policía Caquetá, como Comandante.

Coronel PUENTES AGUILAR HEINAR GIOVANY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.314.198, del Departamento de Policía Córdoba al Departamento de Policía Urabá, como Comandante.

Coronel PARADA GONZALEZ WILSON JAVIER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.725, de la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonso López Pumarejo" al Departamento de Policía Santander.

Coronel GALAN SIERRA HENRY MAURICIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.458.219, del Departamento de Policía Chocó a la misma Unidad, como Comandante.

Coronel GOMEZ REYES EVER YOVANNI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.395.211, del Departamento de Policía Caquetá al Departamento de Policía Antioquia.

Coronel MOLANO LOSADA HUGO FERNANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.266.065, de la Escuela de Policía "Gabriel González" al Departamento de Policía Atlántico, como Comandante.

ARTÍCULO 2. Por intermedio de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional comunicar el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D.C., a los, 30 ENE 2020

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
UNIDAD DEFENSA JUDICIAL NARIÑO

EL SUSCRITO JEFE DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR

Que el señor Subteniente **RAFAEL ALBERTO RUBIO ORDOÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.144.136.494 de Cali Valle, portador de la Tarjeta Profesional Nro. 233.495, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien se encuent vinculado a la Policía Nacional mediante Resolución No. 9231 del 17 de octubre de 2016, actualmente se desempeña como Abogado de la Unidad de Defensa Judicial del Departamento de Policía Nariño.

Se expide la presente constancia en San Juan de Pasto - Nariño.

Capitán **JHONATHAN LOZADA QUIROGA**
Jefe Grupo Talento Humano Departamento de Policía Nariño

Elabore por. PT Marcela Ordoñez
Revisado por. CT. Jhonathan Lozada Quiroga
Fecha de Elaboración: 09/09/2019
Archivo: Mis Documentos-PODERES-poderes abogados 2019

Calle 20 26-54 Las cuadras Pasto.
Teléfonos: 7233106 – 7235137
[illegible]

Scanned by CamScanner

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Lugar y fecha 05-04-2018

ACTA DE COMPROMISO
PARA DOTACION INDIVIDUAL MATERIAL DE GUERRA.

Yo Freddy Alexander Valencia N. CC 1015974383 de San Andres (Sder.)
Dirección Comas Depoy Tel 3177015524 correo electrónico Freddy.Valencia2566@correo.policia.gov.co perteneciente a: Unidad Tercera, me comprometo a cumplir las normas y parámetros ordenados por Comando Operacional en la presente acta, como requisito para el uso en Servicio de Seguridad, que recibo como dotación individual, Así:

1. Al salir a franquicia, vacaciones, permisos, licencias, incapacidades, excusas del servicio, suspensiones, traslado de la unidad, adelantar cursos de capacitación o ascenso, traslado interno o retiro de la Institución debo depositar el material de guerra asignado, inmediatamente en el almacén de armamento del Comando Depoy o en uno de los armeritos autorizados previamente por el almacén de Armamento de la Seccional de Protección.
2. Me comprometo a presentar el material de guerra asignado ante la respectiva unidad, los días 15 al 27 de cada mes para la revista o en la fecha que el almacén o Subalmacen lo requiera.
3. No ingresar con el arma a sitios abiertos al público en actividades fuera del servicio donde representen peligro para la integridad propia y de los elementos del servicio.
4. Extremar las medidas de seguridad tanto personales como de los elementos bajo mi cuidado, en todos los desplazamientos, evitando la rutina y actos que me generen riesgo de atentados o hurtos.
5. No dejar el armamento dentro de los vehículos bajo ninguna circunstancia.
6. Ser precavido y recatado en el porte del armamento para no ser sorprendido por la audacia de los delincuentes.
7. Tener en cuenta el decálogo de seguridad con las armas de fuego.
8. Dejo constancia que he recibido instrucción de manejo, mantenimiento y medidas de seguridad con el armamento asignado por parte de los funcionarios del almacén de armamento.

Grado Apellidos y nombres
Almacenista de Armamento
Entregué

Grado Apellidos y nombres
Documento de identidad
Recibí cc. 1015974382

Scanned by CamScanner

Escaneado con CamScanner

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICOS ESPECIALES

Bogotá D.C., 12 OCT 2018

CALIFICACIÓN INFORME ADMINISTRATIVO PRESTACIONAL POR MUERTE No. 009/2018

DATOS DEL FALLECIDO

GRADO:	**PATRULLERO**
APELLIDOS Y NOMBRES:	**VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**1.101.597.383 DE SAN ANDRES (SANTANDER)**

VISTOS:

Se encuentra ante el despacho del suscrito Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, para calificar el informe administrativo prestacional No. 009/2018, por la muerte del señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 1.101.597.383 expedida en San Andrés (Santander), por hechos acontecidos el día 01 de octubre de 2018. En ese orden de ideas, atendiendo el marco legal en materia prestacional y pensional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, Decreto 1091 de Junio 27 de 1995, *"Régimen de asignaciones y prestaciones del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional"* Título II, Capítulo IV, Artículo 71 y en los casos de muerte previstos en los artículos 68, 69 y 70 de este Decreto, y Decreto 4433/2004, en tal virtud se procede a indicar las circunstancias en que se produjo la muerte del citado policial, en atención a las siguientes consideraciones.

SITUACIÓN FÁCTICA

Que mediante comunicado electrónico No. 2018-041447-DEPUY de fecha 01 de octubre de 2018, el señor Teniente DIEGO FERNANDO HIDALGO URBANO, informa sobre el acontecimiento presentado el día 01 de octubre del presente año con el señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, quien según lo informado por el señor oficial, dicho día siendo las 15:15 horas, cuando se encontraba apoyando el esquema de Protección del señor JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO Representante a la Cámara del Departamento del Putumayo, se presentó un accidente de tránsito a la altura del sitio conocido como CEA Kilómetro 5+250 con una motocicleta marca Baja de placas KDL-83D conducida por el señor VICTOR EUSTORGIO CRIOLLO IMBAQUIN, quien debido a la gravedad de las heridas fue trasladado al Centro Hospitalario José María Hernández del Municipio de Mocoa, donde fue atendido por el señor Patrullero OSCAR CACERES GOMEZ integrante del cuadrante vial No. 2, quien al llegar al lugar de los hechos se entrevistó con el señor Patrullero Villamizar, manifestándole éste que el señor Representante a la Cámara en mención era quien iba conduciendo el vehículo y éste después de lo sucedido procedió a descender del mismo indicándole al señor Patrullero Villamizar que se inculpara sobre lo sucedido que después arreglaba todo; después de escuchar la versión del uniformado la autoridad de transito continuo con las indagaciones y minutos después escucharon una detonación y al verificar hallaron el cuerpo sin vida del señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER junto a su arma de dotación tipo pistola SIG SAUER de serie No. SPO218855.

RECAUDO PROBATORIO

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 176 del Código General del Proceso, "Apreciación de las Pruebas" el despacho procede a valorar las pruebas obrantes en el proceso, en atención a que son conducentes y pertinentes para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos en los cuales perdió la vida el funcionario, al igual para establecer las circunstancias administrativas en que se presentó el fallecimiento.

1. Fotocopia del comunicado electrónico No. 2018-041447-DEPUY de fecha 01 de octubre de 2018, suscrito por el señor Teniente DIEGO FERNANDO HIDALGO URBANO **(Ver folio 2 y 3).**
2. Fotocopia del poligrama No. 174 de fecha 01 de octubre de 2018 suscrito por el señor Teniente Coronel EDILBERTO GARCIA GUAUTA Comandante de Departamento de Policía Putumayo **(V.fl.4).**

Escaneado con CamScanner

3. Fotocopia del poligrama No. 345 de fecha 27 de septiembre de 2018 suscrito por el señor Teniente Coronel EDILBERTO GARCIA GUAUTA Comandante de Departamento de Policía Putumayo **(V.fl.6).**

4. Fotocopia del formato de desplazamiento esquema de protección **(V.fls.7 y 8).**

5. Fotocopia del comunicado electrónico No. 2018-041462-DEPUY de fecha 01 de octubre de 2018, suscrito por la señora Subteniente LEIDY JOHANNA OSPINA OCHOA **(V.fl.12).**

6. Fotocopia del comprobante dotación individual material de Guerra de fecha 05 de abril de 2018 **(V.fl.13).**

7. Fotocopia del libro minuta de servicios diarios del personal del Grupo perteneciente a la unidad Policial para la Edificación para la Paz en el Departamento de Putumayo DIPRO UNIPEP **(V.fl.14).**

8. Fotocopia del informe policial de accidente de tránsito No. C-00750944 de fecha 01 de octubre de 2018 suscrito por el señor Patrullero REINA QUIÑONEZ ANGEL DAVID **(V.fls.15 y 16).**

9. Fotocopia del formato de actuación del primer respondiente con noticia criminal No. 860016000503201800273 de fecha 01 de octubre de 2018 suscrito por el señor Patrullero OSCAR MAURICIO CACERES **(V.fl.17).**

10. Fotocopia del acta de inspección técnica a cadáver FPJ-10 con noticia criminal No. 860016000503201800273 **(V.fls.18 al 22).**

11. Fotocopia del formato contestación derecho de petición suscrito por el señor JORGE WILSON GUANCHA CAICEDO Profesional Universitario Forense **(V.fls.23 y 24).**

12. Fotocopia del certificado de defunción antecedente para el registro civil de defunción No. 71704081-4 **(V.fl.25).**

13. Fotocopia del registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía del extinto señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER **(V.fls.26 y 27).**

14. Pantallazo extraído del Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH), donde están registrados los datos de los beneficiarios del fallecido **(V.fl.28).**

15. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA **(V.fl.29).**

16. Fotocopia del registro de defunción del señor PEDRO ALEJANDRINO VILLAMIZAR VILLAMIZAR **(V.fl.30).**

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Luego de haber verificado el acervo probatorio allegado al expediente y considerando que las pruebas allegadas al proceso guardan plena autenticidad y que los documentos tienen calidad de públicos, por cuanto fueron expedidos por funcionarios idóneos en el ejercicio de su cargo y desarrollo de sus funciones, que dan fe de la veracidad de los mismos, obteniendo fuerza probatoria y brindando así seguridad jurídica para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el fallecimiento del señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, en tanto este despacho procede a realizar un análisis de los antecedentes allegados, concluyendo que el deceso ocurrió momentos en que el señor Patrullero se encontraba apoyando a la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Putumayo, como se evidencia en la minuta de servicios diarios del personal del Grupo perteneciente a la unidad Policial para la Edificación para la Paz en el Departamento de Putumayo DIPRO UNIPEP **(V.fl.14r/v)**, ejerciendo funciones como Hombre de Protección del señor JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO Representante a la Cámara del Departamento del Putumayo y que su función de acuerdo al formato de desplazamiento Esquema de Protección, era brindarle seguridad en el vehículo tipo camioneta marca Toyota TX color gris de Placas IFO-318, al señor Representante en mención, quien arribo vía aérea el día 27/09/2018 desde la ciudad de Bogotá D.C. al Municipio de Chachagui y posteriormente se dirigía al Departamento del Putumayo con su esquema de seguridad **(V.fls.7 y 8).**

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el deceso se obtuvo de acuerdo a lo manifestado por la señora Subteniente LEIDY JOHANNA OSPINA OCHOA a través de la comunicación electrónico No. 2018-041462-DEPUY de fecha 01 de octubre de 2018 **(V.fl.12)** que el día

Escaneado con CamScanner

01 de octubre de 2018, se presentó un accidente de tránsito en el sitio conocido como CEA Kilómetro 5+250 entre la camioneta marca Toyota TX color gris de Placas IFO-318, asignada al servicio protectivo del Representa a la Cámara por el Departamento del Putumayo y una motocicleta marca Baja de placas KDL-83D conducida por el señor VICTOR EUSTORGIO CRIOLLO IMBAQUIN, quien debido a la gravedad de las heridas fue trasladado al centro Hospitalario José María Hernández del Municipio de Mocoa, situación por la que arribo al lugar de los hechos el señor Patrullero OSCAR MAURICIO CACERES GOMEZ integrante de la Seccional de Transito del Departamento de Policía Putumayo, quien de acuerdo a lo registrado en el acta de inspección técnica a cadáver FPJ-10 con noticia criminal No. 860016000503201800273, cuando indagaba sobre los conductores de la camioneta se le acercó un joven manifestándole que él era el Hombre de Protección del señor YIMMI DIAZ y que el funcionario en mención era quien iba manejando y que se había retirado del lugar, indicándole que se hiciera cargo del caso porque tenía que viajar, que el respondía por dinero; el Patrullero OSCAR MAURICIO CACERES GOMEZ continuo con las labores de recolección de información con las personas que se encontraban en el lugar y observo que el Hombre de Protección se sentó en el muro de la vía, posterior a ello cuando las personas se dispersaron y brindando información a sus superiores escucho un disparo, se acercó hacia la zona boscosa y hayo el cuerpo sin vida del señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER junto con su arma de dotación **(V.fls.18r/v)**, versión que guarda analogía con lo registrado en el formato de actuación del primer respondiente con noticia criminal No. 860016000503201800273 de fecha 01 de octubre de 2018 por el señor Patrullero OSCAR MAURICIO CACERES **(V.fl.17)**, como también con los siguientes documentos; comunicado electrónico No. 2018-041447-DEPUY de fecha 01 de octubre de 2018, suscrito por el señor Teniente DIEGO FERNANDO HIDALGO URBANO **(V.fl.2 y 3)** y el poligrama No. 174 de fecha 01 de octubre de 2018, suscrito por el señor Teniente Coronel EDILBERTO GARCIA GUAUTA Comandante de Departamento de Policía Putumayo **(V.fl.4)**, en ese orden de ideas y atendiendo lo registrado en los diferentes soportes documentales, se obtuvo certeza qué; si bien es cierto, el funcionario se encontraba en servicio para el momento de lo acaecido, este hecho no fue consecuencia del ejercicio de sus funciones policiales como Hombre de Protección, ni mucho menos con relación a la misionalidad constitucional, en el entendido que de acuerdo a las probanzas aportadas el extinto Patrullero se propino la muerte con su arma de dotación, en tal sentido, se debe dar aplicabilidad a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 1091 de 1995, parágrafo único, así: "***Parágrafo. Cuando la muerte sobrevenga*** *en la comisión de actos violatorios de la ley, los reglamentos u órdenes del servicio* ***o como consecuencia de suicidio, esta se calificará para todos los efectos como ocurrida simplemente en actividad***". (sombreado fuera de texto)

Corolario de lo anterior, este Despacho determina que el infortunio que nos ocupa, en el cual perdió la vida el señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, atendiendo que las circunstancias que rodearon lo acaecido, no se ligan dentro de un accidente laboral, es decir, que el fallecimiento no se presentó por causa y razón de las actividades propias de la labor policial o misión constitucional, en consecuencia; teniendo en cuenta los preceptos de la normatividad transcrita inicialmente, proyecta el sentido de la presente calificación como "*Muerte Simplemente en Actividad*", de acuerdo con lo citado en el artículo 68 del Decreto 1091 del 27 de junio de 1995 y articulo 29 del Decreto 4433 de 2004.

Así mismo se tiene que; de acuerdo con el pantallazo extraído del Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH), figura como beneficiaria del extinto Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, la señora GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA identificada con cedula No. 28.161.530 expedida en Guaca (Santander), en calidad de madre del extinto policial **(V.fl.28 y 29).**

En mérito de lo antes referido y de conformidad con los factores determinantes de la competencia "factor funcional" como autoridad competente para conocer del presente informativo, el suscrito Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 71 del Decreto 1091 de Junio 27 de 1995, "Régimen asignaciones y prestaciones del nivel ejecutivo", considera emitir la siguiente:

CALIFICACIÓN:

1. Calificar la muerte del señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 1.101.597.383 expedida en San Andrés (Santander), acaecida el día 01 de Octubre de 2018, como ***"MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD"***, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 68 del Decreto 1091 del 27 de junio de 1995 "Régimen de asignaciones y prestaciones del personal del nivel ejecutivo de la policía nacional" y articulo 29 del Decreto 4433 de 2004.

Escaneado con CamScanner

2. Se comisiona a la oficina Asuntos Jurídicos de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, para comunicar la presente decisión a la señora GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA identificada con cedula No. 28.161.530 expedida en Guaca (Santander), en calidad de madre del extinto policial.

3. Informar a la beneficiaria que el informe administrativo por muerte está sujeto a las modificaciones a que haya lugar, bien sea de oficio o por solicitud de parte, cuando se conozcan nuevas pruebas que así lo ameriten. La ley ha facultado al señor Director de la Policía Nacional para avocar la modificación de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 71 del Decreto 1091 de Junio 27 de 1995.

4. Una vez comunicada la presente decisión, la oficina Asuntos Jurídicos de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, tramitará el informativo administrativo por muerte al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, en cumplimiento a la Directiva Administrativa permanente No. 007 del 16 de octubre de 2014.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Brigadier General **JULIO CÉSAR GONZÁLEZ BEDOYA**
Director de Protección y Servicios Especiales

Elaboró: PT. Tatiana Amaya Puentes
Revisó: SI. Jorge Ortynge Poveda
Revisó: IC. Orlando Bello Triana
Fecha de elaboración: 15/10/2018
Ubicación: C:\administrativos prestacionales por muerte 2018

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

verificacion de datos

FEB-19-20 09:46 AM

HOJA DE VIDA

I. INFORMACION PERSONAL



Grado.	PATRULLERO
Identificación	1101597383
Apellidos y Nombres	VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER
Estado Civil	Soltero (a)
Cuerpo	VIGILANCIA
Fecha y Lugar de Nacimient	06 SEP 1991 GUACA
Dirección	CALLE 10 A # 11 - 40 B/CENTRO
Teléfono	76360250
Ciudad	MOCOA

II. INFORMACION FAMILIAR

Apellidos y Nombres Conyu
Identificación
Fecha Matrimonio

Apellidos y Nombres de los Hijos	Fecha Nacimiento	Fallecido. (a)

III. FORMACION ACADEMICA

Cursos Adelantados en el País y en el Exterior

Estudios	Fecha fin	Título Obtenido	Nombre del Establecimiento	Lugar
BASICA SECUNDARIA	02 DIC 2011	BACHILLER ACADEMICO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA	SAN ANDRES
TECNICA	20 MAR 2014	TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICIA	ESCUELA DE CARABINEROS PAFA EL NUÑEZ	COROZAL
SEMINARIO	23 AGO 2014	SEMINARIO MANEJO DE PISTOLA PARA EL SERVICIO POLICIAL CON ENFASIS EN	ESCUELA DE CARABINEROS PAFA EL NUÑEZ	COROZAL
CERTIFICACION	05 SEP 2014	PROGRAMA DE INDUCCION	DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER	BUCARAMANGA
SEMINARIO	22 DIC 2014	SEMINARIO PRIMER RESPONDIENTE ANTE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE	VÉLEZ
SEMINARIO	25 SEP 2015	SEMINARIO DE ACTUACION POLICIAL EN EL PROCESO ELECTORAL	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO TALLER	29 MAY 2016	SEMINARIO TALLER INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN LA	ESCUELA DE POLICIA CARLOS HOLGUIN	MEDELLÍN
SEMINARIO	10 SEP 2016	SEMINARIO CONCEPTUALIZACION DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE	VÉLEZ
SEMINARIO	05 AGO 2016	SEMINARIO BASICO EN PROTECCION Y SEGURIDAD A PERSONAS	ESCUELA DE POLICIA EN PROTECCION Y	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	12 AGO 2016	SEMINARIO ACTUALIZACION EN SEGURIDAD Y PROTECCION A PERSONAS	ESCUELA DE POLICIA EN PROTECCION Y	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	26 AGO 2016	SEMINARIO INTEGRAL PREDESPLIEGUE PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ	ESCUELA DE POLICIA EN PROTECCION Y	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	12 DIC 2016	SEMINARIO ACTUALIZACION CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	05 DIC 2016	SEMINARIO ESTRATEGIA CONTRA EL HURTO DE CELULARES (ESHUC	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE	VÉLEZ
SEMINARIO	31 MAR 2017	SEMINARIO FUNDAMENTOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
CERTIFICACION	22 ABR 2017	PROGRAMA DE INDUCCION	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	FLORENCIA
SEMINARIO	26 MAY 2017	SEMINARIO ACTUALIZACION CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE	VÉLEZ
SEMINARIO	31 OCT 2017	SEMINARIO ACTUALIZACION CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA	ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ	ESPINAL
SEMINARIO TALLER	25 NOV 2017	SEMINARIO TALLER EN SEGURIDAD VIAL	ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL	BOGOTA, D.C.

IV. INFORMACION INSTITUCIONAL

Ascensos

Grado	Tipo Disposición	Numero Disposición	Fecha Fiscal
PATRULLERO	RESOLUCION	03239	19 AGO 2014

Unidades Laboradas

Grado	Unidad	Sigla	Fecha Inicio	Fecha Termino	Tiempo Total
PT	DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER	DESAN	22 AGO 2014	16 MAR 2017	02 - 06 - 24
PT	UNIDAD PROTECCION MECANISMOS MONITOREO Y VERIFDIPRO UNIPEP DECAQ		17 MAR 2017	25 MAY 2018	01 - 02 - 09

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 1 Código: 1AJ-FR-0051 Fecha: 01-10-2014 Versión: 0	PROCESO ACTUACIÓN JURÍDICA FORMATO DE NOTIFICACIÓN INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS PRESTACIONALES POR LESIONES O MUERTE.	POLICÍA NACIONAL

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

NOTIFICACIÓN PERSONAL INFORME ADMINISTRATIVO PRESTACIONAL POR MUERTE No. 009/2018

En el municipio de Bucaramanga (Santander) a los DIECISEIS (16) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la oficina del Grupo de Talento Humano MEBUC, se presenta la señora GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA identificada con cédula de ciudadanía No. 28.161.530 expedida en Guaca (Santander), en calidad de madre del extinto Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 1.101.597.383 expedida en San Andrés (Santander), con el propósito de notificarse personalmente del contenido del informativo administrativo prestacional por muerte No. 009/2018 de fecha 12 de octubre de 2018, emitido por el señor Director de Protección y Servicios Especiales; para lo cual me permito transcribir la parte resolutiva: "*Calificar la muerte del señor Patrullero VILLAMIZAR NIÑO FREDY ALEXANDER, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 1.101.597.383 expedida en San Andrés (Santander), acaecida el día 01 de Octubre de 2018, como* ***"MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD"****, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 68 del Decreto 1091 del 27 de junio de 1995 "Régimen de asignaciones y prestaciones del personal del nivel ejecutivo de la policía nacional" y articulo 29 del Decreto 4433 de 2004"*, leyéndole en su totalidad el contenido del presente auto y haciéndole entrega de una copia del mismo.

Se le hace saber que la presente decisión es susceptible de solicitud de modificación de calificación, la cual debe ser dirigida al Director General de la Policía Nacional y presentada ante el despacho notificador, dentro de los tres (03) meses siguientes a la presente diligencia.

GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA
Documento de identidad: 28.161.530 de Guaca (S)
Dirección de residencia: Calle 6 # 11-14 Barrio Villabel Floridablanca.
Teléfono: 3167295207 - 3203800742
Fecha de notificación: Octubre - 16 - 18
Dirección correo electrónico: gloriisabelguaca@hotmail.com

Firma:
Grado: Intendente Jefe ELIO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ.
Cargo: Responsable Historias Laborales MEBUC.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
El suscrito HECTOR ELIAS ARIZA VELASCO
Notario Séptimo del circulo de Bucaramanga,
Hace constar
Que este folio es auténtico como copia del original que se ha tenido a la vista
25 NOV 2019
HECTOR ELIAS ARIZA VELASCO
NOTARIO SEPTIMO DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA

Elaboró: PT. YESID GARCIA
Revisó: IJ. ELIO ALVAREZ
Fecha elaboración: 16/10/2018
Archivo: UBICACIÓN, Notificaciones 2018

Escaneado con CamScanner

S-2019-059124-SEGEN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL

No. S-2019-_____/ ARPRE - GROIN – 1.10

Bogotá D.C.

31 OCT 2019

Señor
CARLOS ALIVER NAVARRO NIÑO
Poderdante: GLORIA ISABEL NIÑO MATAGIRA
Carrera 7 N° 7 12
Piedecuesta - Santander

Asunto: Respuesta Petición radicado N° E-2019-013433-MEBUC

En atención a su requerimiento allegado a esta dependencia, a través de la cual solicita información del estado de la solicitud de modificación del Informativo Administrativo por Muerte Nº 099/2018, al respecto me permito informar:

Que a la fecha esta dependencia se encuentra efectuando estudio jurídico de su derecho de petición, siendo necesario verificar la totalidad de antecedentes prestacionales que descansa en el proceso y si como resultado de dicha revisión amerita emanar un acto administrativo con el cual se resuelva de fondo la petición, este surtirá unas formalidades internas para la revisión y posterior firma del Subdirector de la Policía Nacional, así:

I- Elaboración del acto administrativo
II- Revisión jurídica y firma por el jefe Grupo de Orientación e Información.
III- Revisión jurídica y firma del jefe del Área Prestaciones Sociales.
IV- Revisión jurídica por el asesor jurídico de la Secretaría General.
V- Revisión jurídica y firma del Secretario General.
VI- Firma del Subdirector Policía Nacional de Colombia

En este orden de ideas, al revisar la trazabilidad de su expediente prestacional se evidencia que el proyecto de resolución que resuelve de fondo sus pretensiones posterior a cumplir con la revisión y firmas de la administración, incluida la revisión jurídica ante el asesor de la Dirección General de la Policía Nacional, será notificado a más tardar el día 25/11/2019.

Para mayor ilustración y seguimiento del mismo puede comunicarse a los abonados telefónicos. 515-9020 y 515-9046

Atentamente,

Capitán **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ**
Jefe Grupo de Orientación e Información

Elaborado por: APT10 Diana [illegible]
Revisado por: CT Yezid Guerrero Rodriguez
Fecha elaboración 31/10/2019
Archivo: Respuesta peticionario de 2019

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos 5159000 ext. 9020
seguimiento.oficios@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

San Juan de Pasto, 7 de Noviembre de 2019

Doctor:
H.M. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Palacio de Justicia Tercer Piso
Pasto - Nariño

Tribunal Administrativo de Nariño
06 NOV. 2019
SECRETARIA

Referencia: Contestación de Demanda
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 2019-00425
Accionante: Jorge Daniel Torres Torres
Accionado: Procuraduría General de la Nación

MARTHA LUCIA NARVAEZ ESTUPIÑAN, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía numero 37.007.699 expedida en Pasto y con Tarjeta Profesional 149.369 del Consejo Superior de la Judicatura, actuado como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, en virtud de poder a mí otorgado por el Jefe de la Oficina Jurídica, por medio del presente escrito, estando dentro de la oportunidad legal, me dirijo a Usted para contestar la demanda de a referencia en los siguientes términos:

1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Solicita la parte actora, se declare la nulidad del Acto administrativo por medio del cual se calificó la prueba de análisis de antecedentes, el cual fue publicado en la página web del concurso, dentro del proceso para proveer los cargos de carrera de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la Nación, el cual otorgó un puntaje de 17 puntos, al presuntamente no realizar la evaluación de la experiencia docente, como experiencia concurrente.

Pretende además, que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. 1401 del 27 de junio de 2016 "Por medio del cual se resuelve una reclamación contra el resultado de la prueba de análisis de antecedentes", el cual confirma el resultado de la calificación de la prueba de antecedentes en 17 puntos.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del Derecho solicita el demandante, se condene a las demandadas que mediante nuevo acto administrativo se recalifique la prueba de antecedentes valorando la experiencia docente. También solicita que se incrementen 9 puntos a la calificación final por docencia. Para tal fin, solicita se aplique el criterio de favorabilidad al concursante.

Por otro lado, solicita la modificación o adición del Acto Administrativo No. 343 del 8 de julio de 2016, *"Por medio del cual se establece una lista de elegibles"* para que sea incluido en la lista de elegibles para la convocatoria 008 de Procuradores Judiciales Delegados en Restitución de Tierras.

De igual manera solicita que mediante Acto administrativo se proceda a efectuar el respectivo nombramiento.

Como pretensiones subsidiarias, solicita se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo No. 343 del 8 de julio de 2016 "Por medio del cual se establece una lista de elegibles dentro de la convocatoria 008".

Y como consecuencia de lo anterior, se ordene que mediante acto administrativo se ordene a incluir en la lista de elegibles para la Convocatoria 008 Procuradores Judiciales Delegados en Restitución de Tierras, con un puntaje de 68,21. Para lo anterior, solicita la inaplicación de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y demás normas concordantes.

2. OPOSICION A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Frente a las pretensiones, solicito sean denegadas en su totalidad, con base en los siguientes fundamentos.

La Resolución 040 de 2015, por medio de la cual se reguló el concurso de méritos para proveer los cargos de Procuradores Judiciales I y II, no va en contravía del ordenamiento jurídico ni tampoco desconoce los derechos de los aspirantes, habida cuenta que ella consagra las exigencias y lineamientos establecidos por la Procuraduría para valorar y dar puntuación a las pruebas practicadas en el marco del concurso de méritos, convocatoria ampliamente conocida y aceptada.

Es importante aclarar además, que el accionante tenía pleno conocimiento de las reglas del concurso, como quiera que en el momento de inscripción aceptó acatar los lineamientos de la convocatoria y especialmente de la Resolución No. 040 de 2015, indicando para ello, que los soportes y certificaciones de la experiencia laboral y estudios, debían ser aportados por los aspirantes, quienes asumen la responsabilidad del contenido, la forma y el cumplimiento de los requisitos. Al respecto la Resolución determinó, entre otras, las siguientes reglas específicas:

"...ARTICULO QUINTO. Durante la fase de inscripción también es obligatorio aportar electrónicamente, en el mismo módulo, los soportes de estudios y experiencia adicionales que tengan por objeto la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes.

Es responsabilidad del funcionario actualizar los documentos en su carpeta laboral, hasta el término previsto para los demás aspirantes.

Los títulos de estudios y experiencia profesional que pueden ser tenidos en cuenta para acreditar requisitos mínimos y para la prueba de análisis de antecedentes con los obtenidos y la realizada con posterioridad a la fecha del grado y hasta el día de cierre de la fase de inscripción, siempre que sean acreditados con los documentos y en la forma exigida en éste acto administrativo.

Los documentos que los participantes adjunten a través de la sede electrónica institucional, módulo de inscripciones, son los únicos que se tienen en cuenta en la revisión de los requisitos mínimos y en la prueba de análisis de antecedentes, salvo lo indicado en este artículo para los libros y los funcionarios de la Entidad..."

ARTICULO OCTAVO: DOCUMENTACIÓN PARA ADJUNTAR DURANTE LA FASE DE INSCRIPCION. En la fase de inscripción, los aspirantes deben anexar en el aplicativo web, de conformidad con lo dispuesto en el instructivo respectivo y las reglas del proceso de selección, los archivos electrónicos de los documentos y/o certificaciones, tanto para

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos al empleo seleccionado, como para demostrar los estudios y experiencia profesional adicional que tengan por objeto la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes.

ARTICULO NOVENO. FORMA DE ACREDITAR Y PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA REQUISITOS MINIMOS Y PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Los soportes, certificaciones, constancias y/o documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de los empleos ofertados y los relativos a títulos de estudios y experiencia profesional adicionales que tengan por objeto la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se deben adjuntar en el módulo de inscripción.

ARTICULO DECIMO SEXTO. PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Es una prueba de carácter clasificatorio que tiene por objeto evaluar los títulos de estudios de posgrado y la experiencia profesional adicionales, que sean adjuntados en el módulo de inscripciones o que reposen en su hoja de vida laboral si se trata de servidores de la Entidad, así como los libros presentadas en original y en físico por los concursantes que superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugar que se establezcan en el aviso respectivo.

Los títulos de estudios y experiencia profesional exigidos como requisito mínimo para ejercer los empleos objeto de la convocatoria respectiva no otorgan puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. En esta prueba solo se puntúan los títulos estudios, experiencia profesional relacionada y publicaciones de libros que se acrediten con el lleno de los requisitos exigidos para este concurso.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. CRITERIOS Y VALORES DE PUNTUACION EN LA PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Dentro de esta prueba se valorarán dos criterios:

1. *Títulos de posgrado*
2. *Experiencia profesional relacionada adicional y publicaciones de libros*

En ningún caso podrá otorgarse más de 60 puntos por el concepto de títulos de posgrado e la prueba de análisis de antecedentes.

En ningún caso puede otorgarse más de 60 puntos por experiencia profesional relacionada, incluida la experiencia docente y publicaciones de libros.

Solo se asigna puntaje por cada título de posgrado de los citados en éste artículo, según la convocatoria y que sean acreditados de conformidad con las reglas de este concurso…

Parágrafo Primero: Para asignar puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, solo se tienen en cuenta los títulos de estudios obtenidos y la experiencia profesional relacionada adquirida con posterioridad a la obtención del correspondiente título de abogado (incluida experiencia docente y publicaciones de libros) y hasta el día de cierre de la fase de inscripción siempre que sean acreditados con los documentos y en la forma señalada en este acto administrativo. Las certificaciones y documentos que no cumplan con las condiciones establecidas en éste acto administrativo no serán tenidas en cuenta para el desarrollo del proceso, no darán lugar a puntaje y no podrán ser objeto de posterior complementación.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

Parágrafo Segundo: En la prueba de análisis de antecedentes solo se valoran los criterios que estén expresamente señalados en éste artículo. En ningún caso es posible asignar puntajes diferentes a los enunciados ni por aspectos no definidos en esta Resolución..." *(subraya fuera del texto)*

Como se evidencia, la Resolución 040 consagra que en la prueba de análisis de antecedentes solo se valoran los estudios y experiencia acreditada por los concursantes en la fase de inscripción y los libros aportados en la fecha y hora establecidos por el concurso. Aclara también que en ésta prueba NO se asigna puntaje a los estudios y experiencia profesional exigida como requisito mínimo para el ejercicio de los empleos ofertados (título profesional en derecho y 8 años de experiencia profesional para Procurador Judicial II – convocatoria 001 a 007 y título profesional en derecho y 4 años de experiencia profesional para Procurador Judicial I convocatorias 008 a 014). Tampoco se otorga puntaje por criterios o factores distintos a los expresamente establecidos en la precitada Resolución.

El prenombrado acto administrativo que regula el concurso, se profiere con fundamento en el artículo 205 del Decreto Ley 262 de 200, el cual otorga facultades al Procurador General de la Nación para determinar los parámetros de puntuación de los factores valorados en el análisis de antecedentes. En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 10 del Decreto 263 de 2000 por el cual se establecen los requisitos de los empleos de la Procuraduría General de la Nación incluidos los del Instituto de Estudios del Ministerio Público, indica: *"En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carrera, el Procurador General establecerá las disciplinas académicas específicas que se requieran, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución".*

En ejercicio de tales facultades legales, se expidió la Resolución 040 de 2015, que fundamentó la escogencia de los criterios de puntuación de las diferentes pruebas, entre ellas la prueba de análisis de antecedentes en las necesidades primordiales del servicio, el Manual Específico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales y la Estructura de la Entidad.

Cabe resaltar que la convocatoria es inmodificable, obliga tanto a la Administración como a los participantes, condición que todos los aspirantes aceptaron al momento de realizar la inscripción.

Desde el inicio del proceso de selección de empleados de carrera, regulado por la Resolución 040 de 2015, la entidad puso en conocimiento de los interesados las reglas aplicables al concurso, así como los títulos de posgrado y la experiencia que serían objeto de valoración y la forma en que se puntuarían y cuantificarían los resultados, es decir, la entidad dio publicidad a las reglas aplicables al concurso, las cuales obedecen a los énfasis que requieren las diferentes áreas de trabajo y las necesidades de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, debe ser aplicada de manera integral y en igualdad de condiciones a todos los concursantes en procura de la defensa del debido proceso y del acceso a cargos públicos de carrera, lo cual se sujeta a las reglas de la respectiva convocatoria.

A pesar de conocer las condiciones del concurso y las reglas establecidas con antelación y a pesar de aceptar tales condiciones en el momento de realizar libremente su inscripción, ahora y con motivo de que los resultados que obtuvo lo favorecen, el accionante pretende que, únicamente para favorecer su causa particular, se inapliquen las reglas generales establecidas para el concurso, poniendo en riesgo el derecho a la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la confianza de los demás aspirantes.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

El puntaje obtenido por el demandante en las pruebas, especialmente en la prueba de análisis de antecedentes, estuvo ajustado a los parámetros y lineamientos de la Resolución 040 de 2015 y demás normas que regulan los concursos de la Procuraduría General de la Nación, por tanto el puntaje asignado es de 7 puntos.

De conformidad con la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, los documentos aportados por el demandante al momento de la inscripción para acreditar la experiencia profesional son los siguientes:

CARGO	ENTIDAD	FOLIO	F.INICIAL	F.FINAL	TIEMPO
Asesor Jurídico	Caracol Radio	124450	17-10-2006	30-09-2009	2 Años 11 Meses 2 Días
Abogado Litigante	Juzgado Sexto Civil Municipal	124920	01-10-2009	09-11-2009	0 Años 1 Mes 9 Días
Asesor Jurídico	Proservis	124505	10-11-2009	30-06-2010	0 Años 7 Meses 21 Días
Jefe de Cartera			02-07-2010	30-09-2010	0 Años 2 Meses 29 Días
Varios Cargos	Consejo Superior de la Judicatura	124522	23-12-2010	24-03-2011	0 Años 3 Meses 2 Días
			01-04-2013	20-02-2015	1 Año 10 Meses 20 Días
	TOTAL				6 AÑOS 1 MES 5 DIAS

La Resolución 1401 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual la Oficina de Selección y Carrera, resolvió la reclamación del hoy accionante, explicó la evaluación de la experiencia en los siguientes términos:

"...Cabe aclarar que la certificación del folio 124920, refiere litigio en varios procesos; se tiene en cuenta el proceso 2008-0800, el cual indica que fue iniciado en 2008 y archivado el 30/11/09; sin embargo de este tiempo se valora el periodo del 01/10/09 hasta el 09/11/09 por cuanto el tiempo restante fue valorado como tiempo completo con los folio 124450 y 124505.

Del tiempo total de experiencia, es decir, los 6 años, 1 mes y 5 días, se deben descontar los 4 años exigidos como requisito mínimo, quedando para puntuar un tiempo total de 2 años completos, es decir 10 puntos de 60 máximos posibles dentro del ítem de experiencia. Los meses y los días sobrantes no se tienen en cuenta para la puntuación por cuanto la unidad mínima de medida y valoración es de un año.

Lo anterior de conformidad con la Resolución 040 de 2015 que en su artículo décimo séptimo – numeral 2 establece que se concederá 5 puntos por cada año completo de experiencia profesional adicional relacionada..."

La Resolución 1401 idem, también expone al detalle, la motivación correspondiente a cada uno de los soportes que no fueron objeto de valoración:

"...De otro lado, se aportaron los siguientes documentos que no son objeto de valoración por no cumplir con la normativa del concurso:

Folio	Entidad	Observaciones
124803	Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto	El documento expedido el 26/02/10 certifica litigio en diversos procesos: 2006-0465, 2006-0504, 2006-0803, 2008-0461; sin embargo no indican la fecha de inicio de los mismos (numeral 2.2 Art.9 Resolución 040 de 2015) sin embargo se precisa que a partir del 17/10/06 y hasta el 30/09/2010 se validó experiencia profesional tiempo completo con otros folios.
124920	Juzgado Sexto Civil Municipal	El documento expedido el 25/02/2010, certifica 3 procesos: 2008-0800 del cual se validó una parte del tiempo como se indicó anteriormente; el 2008-1247 indica inactivo pero no refiere fecha y el 2009-0299 indica que está activo, es decir a la fecha de expedición, sin embargo los años 2009 y 2010 fueron validado como tiempo completo, por tanto no puede validarse nuevamente esta experiencia (Art. 9 Resolución 040 de 2015)

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

124907	Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto	Los procesos que certifica el documento no indican fecha de inicio, uno de los procesos indica fecha de terminación 29/10/10 y el otro proceso no indica en qué estado se encuentra, se reitera que el año 2010 fue validado como experiencia tiempo completo con otros folios. (Art. 9 resolución 040 de 2015)
124853	Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pasto	Documento expedido el 26/02/10, certifica litigio en procesos que se encuentran vigentes (a la fecha de expedición), de los años 2007, 2008 y 2009; estos años ya fueron validados como experiencia profesional tiempo completo con otros folios. (Art.9 Resolución 040 de 2015)
124813	Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto	Certificación expedida el 26/02/10, refiere actuaciones como apoderado judicial en proceso del año 2006 y 2007; no precisa fechas de inicio ni estado actual, adicional; adicional desde el 17/10/2006 y hasta el 30/09/2010 se validó experiencia profesional tiempo completo con otros folios.
124830	Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto	Documento expedido el 25/02/10, certifica litigio en procesos de los años 2007, 2008 y 2009, no indica fechas de inicio ni estado de los procesos; no obstante estos años ya fueron validados como experiencia profesional tiempo completo con otros folios (Art. 9 Resolución 040 de 2015)

Al analizar, la reclamación frente a la documentación reseñada, el Jefe de la Oficina de Selección y Carrera señaló:

"...Los documentos anteriores no cumplen con los criterios establecidos porque no precisaron las fechas de los procesos, sobre éste particular el numeral 2.2 del artículo 9 de la Resolución 040 de 2015 establece: "2.2 Certificaciones del litigio: Para efectos de este concurso, el litigio se debe acreditar mediante la presentación de certificaciones de los despachos judiciales en las que consten, de manera expresa, los asuntos o procesos atendidos y las fechas exactas de inicio y terminación de la gestión del abogado (día, mes, año). Cuando la actuación del abogado en determinado proceso esté en curso, la certificación debe indicarlo expresamente, precisando la fecha de inicio de la actuación (día, mes y año) y los demás requisitos señalados"..."

Con respecto a las certificaciones de las periodos de tiempo del 17/10/06 y hasta el 30/09/2010 y del 23/10/10 al 20/02/2015, no es factible su contabilización, habida cuenta que el artículo 9 de la Resolución 040 de 2015 señala que cada periodo se contabiliza UNA SOLA VEZ, aunque existan distintas certificaciones de experiencia profesional. Así lo explicó la Oficina de selección y carrera al resolver la reclamación del accionante, en los siguientes términos:

"Adicional a lo anterior, se debe precisar que los periodos de tiempo del 17/10/06 y hasta el 30/09/2010 y del 23/10/10 al 20/02/2015, fueron validados como experiencia profesional de tiempo completo con otras certificaciones, al respecto en la citada resolución, numeral 2.8 del artículo 9 se establece que:

2.8 Certificaciones de experiencia profesional por un mismo periodo: Cuando se presenten distintas certificaciones de experiencia profesional acreditando el mismo periodo éste se contabilizar una sola vez, como tiempo completo si se allega una certificación de experiencia profesional de medio tiempo, esta solo podrá ser concurrente con otra de medio tiempo por un mismo periodo, con el fin de sumar un tiempo completo.

El tiempo de experiencia docente por hora cátedra puede ser concurrente con el periodo de otras certificaciones de experiencia profesional, para la asignación de

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, según las condiciones y puntajes establecidos para dicha prueba…"

Con respecto a la experiencia docente aportada por el Accionante, la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, realizó el siguiente análisis pormenorizado:

"…

Cargo	Entidad	Folios	Periodo	Horas Semana	Observación
Docente medio tiempo	INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIO SUPERIORES MARIA GORETTI	123731 complementando con folio 124744	06/02/12-09/06/12 01/08/12-02/12/12 06/02/13-12/06/13 05/08/13-05/12/13 03/02/14-06/06/14 04/08/14-05/12/14	18 20 20 20 20 20	Los años 2012, 2013 y 2014 fueron valorados como experiencia profesional al tiempo con otras certificaciones
Docente Hora Cátedra			02/02/15-12/02/15	10	La certificación indica a la fecha, esto es fecha de expedición del documento (tiempo insuficiente para acreditar año lectivo completo, que es la unidad de medida para valoración)

…respecto a la docencia acreditada; se precisa que la Resolución 040 de 2015, como se señaló anteriormente, prevé la concurrencia docente con la experiencia profesional tiempo completo para la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, ***únicamente para la docencia por hora cátedra,*** *adicional se reitera que: "…si se allega una certificación de experiencia profesional de medio tiempo ésta solo podrá ser concurrente con otra de medio tiempo por un mismo periodo, con el fin de sumar un tiempo completo"…"*

Y concluye: *"Dado que los años 2012, 2013 y 2014 fueron valorados como experiencia profesional tiempo completo; no es posible valorar adicionalmente la experiencia docente medio tiempo por los mismos periodos…"*

De igual manera, la oficina de selección y carrera de la Procuraduría, revisó la carpeta física de la hoja de vida del accionante y al respecto afirmó:

"…También se revisó la hoja de vida del reclamante (carpeta física) que reposa en la entidad, frente a lo cual se informa que los documentos allí consignados corresponden a experiencia anterior a la fecha de grado, la cual no es objeto de valoración de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la Resolución 040 de 2015, y no hay documentación relacionada con estudios de posgrado que puedan ser valorados.

En el siguiente cuadro resumen se especifican los valores obtenidos por el reclamante en la prueba de análisis de antecedentes:

ASPECTOS EVALUABLES	PUNTAJE
Por estudios (1 especialización)	7
Por experiencia (2 años completos)	10
Acreditación de requisitos mínimos	No otorga puntaje
TOTAL	17

Es decir, el puntaje otorgado en la prueba de análisis de antecedentes es el que corresponde al reclamante, por lo tanto no hay lugar a su modificación y por el contrario se debe confirmar…"

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

Así las cosas, se solicita desde ya al Despacho, se nieguen las pretensiones encaminadas a que se declare la nulidad de los resultados de puntaje de la prueba de análisis de antecedentes y de la Resolución 1401 de 2016, toda vez que la calificación de los antecedentes del demandante se llevó a cabo de conformidad con las reglas del concurso, las cuales vienen dadas puntualmente por la Resolución 040 de 2015.

Como consecuencia de la negativa de lo anterior, también se solicita denegar la pretensión encaminada a modificar la lista de elegibles contenida en la Resolución 343 del 8 de julio de 2016. Sobre este particular, y como quiera que producto de lo solicitado por la parte actora, eventualmente, se pueden ver afectados derechos de terceros con un interés legítimo, que para el caso concreto vienen a ser los concursantes que actualmente hacen parte de la lista de elegibles, y con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, solicito se vinculen al presente.

Una vez expuestas las razones por las cuales se confirmó la calificación inicial, es evidente, que la Procuraduría no solamente realizó la revisión total, integral y al detalle de cada uno de los documentos aportados por el accionante en la inscripción, también revisó los documentos de la hoja de vida en el archivo físico que reposa en la entidad, es decir, realizó un análisis profundo y explicó al detalle las razones del cálculo y la cuantificación de cada puntaje alcanzado. Tal como se describió en párrafos anteriores, la Procuraduría de manera muy clara expone las razones técnicas y jurídicas de la valoración y puntuación asignada a cada ítem, así como el fundamento que impide valorar la totalidad de certificaciones aportadas. Siendo así, solicito se niegue la pretensión que busca una nueva recalificación de la prueba con miras a que se le otorgue mayor puntaje a la experiencia docente.

De otro lado, y como consecuencia de lo anterior, solicito se niegue la pretensión de que se aplique el criterio de favorabilidad en la evaluación de las pruebas, como quiera que esto implica una interpretación y valoración diferente de la convocatoria frente a los demás aspirantes, situación que soslaya el derecho a la igualdad y la buena fe de los ciudadanos. Así mismo, dado que la convocatoria es vinculante y de obligatoria observancia para la entidad y para los concursantes, mal haría la Procuraduría en establecer unos lineamientos y requisitos del concurso, para luego desconocerlos, inaplicarlos o simplemente ajustarlos y darle alcances interpretativos en favor de casos particulares.

3. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

HECHO 1. Es cierto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-101 de 2013, ordenó a la Procuraduría General de la Nación convocar a concurso público de méritos los cargos de procurador judicial. Para el efecto, dio un término de un año, razón por la cual la Entidad adelantó el proceso de selección regulado por la Resolución 040 de 2015, dentro del cual se emitieron las listas de elegibles el 8 de julio de 2016, se procedió al nombramiento de los concursantes y para la fecha de la presente contestación la gran mayoría ya se encuentran inscritos en el escalafón de carrera de la Entidad producto de haber superado el periodo de prueba.

La Corte Constitucional, con sentencia C-101 de febrero de 2013, ordenó a la Procuraduría General convocar a concurso público para la provisión de carrera administrativa, TODOS los empleos de Procurador Judicial (I y II), sin exclusión, tácita o expresa, de alguno de estos. Por ello, con la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 se dispuso la apertura del respectivo proceso de selección, a través de catorce (14) convocatorias, así:

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

1. De la convocatoria 001-2015 a la 007-2015, para la provisión de los cuatrocientos veintisiete (427) empleos de Procurador Judicial II Código 3PJ Grado EC.

CONVOCATORIA	DEPENDENCIA O AREA DE TRABAJO	CANTIDAD	LISTA DE ELEGIBLES
001-2015	Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras	23	Resolución 349 del 8/07/2016
002-2015	Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios	31	Resolución 348 del 8/07/2016
003-2015	Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles	12	Resolución 347 del 8/07/2016
004-2015	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	208	Resolución 357 del 11/07/2016
005-2015	Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social	14	Resolución 346 8/07/2016
006-2015	Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa	94	Resolución 345 8/07/2016
007-2015	Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia	45	Resolución 344 8/07/2016
TOTAL		427	

2. De la convocatoria 008-2015 a la 014-2015, para la provisión de los trescientos diecisiete (317) cargos de Procurador Judicial I.

CONVOCATORIA	DEPENDENCIA O AREA DE TRABAJO	CANTIDAD	LISTA DE ELEGIBLES
008-2015	Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras	23	Resolución 343 del 8/07/2016
009-2015	Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios	3	Resolución 342 del 8/07/2016
010-2015	Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles	2	Resolución 341 del 8/07/2016
011-2015	Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales	149	Resolución 340 del 11/07/2016
012-2015	Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social	19	Resolución 339 8/07/2016
013-2015	Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa	107	Resolución 338 8/07/2016
014-2015	Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia	14	Resolución 337 8/07/2016
015-2015			
TOTAL		317	

HECHO 2. Es cierto que el demandante se inscribió dentro de la convocatoria número 008 Procuradores Judiciales I Delegada para la Restitución de Tierras.

Los instrumentos de selección dentro de la convocatoria ofertada por la Procuraduría, fueron los siguientes:

- Prueba de conocimientos de carácter eliminatorio, el cual se superaba con 75 puntos sobre 100.
- Prueba de competencias comportamentales de carácter clasificatorio
- Prueba de análisis de antecedentes de carácter clasificatorio

También es cierto que en la resolución 040 de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Decreto 262 de 2000, se determinó que quedarían en la lista de elegibles aquellas personas que obtuvieran un puntaje final igual o superior a 70 puntos.

Es cierto que el 24 de febrero de 2016 se publicaron en la página web de la Procuraduría los resultados de la prueba de análisis de antecedentes, en la cual el demandante obtuvo un puntaje final de 17 puntos, los cuales son el resultado de la aplicación de las reglas preestablecidas del concurso, y que fueron de público conocimiento especialmente de quienes se inscribieron a la convocatoria y fueron aceptadas en el momento de la inscripción.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

Que se pruebe efectivamente el puntaje obtenido por el demandante en la prueba de conocimientos y competencias comportamentales.

HECHO 3. Parcialmente cierto. Es cierto que el demandante presentó la respectiva reclamación dentro del término legal, la misma que fue resuelta por la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación el día 27 de junio de 2016, mediante Resolución 1401, donde se confirma el puntaje obtenido inicialmente de 17 puntos.

No es cierto que la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, NO esté otorgando puntuación a la docencia debidamente acreditada en el momento de la inscripción. Contrario censu, la Procuraduría realizó la calificación y cuantificación de la experiencia, de conformidad con los lineamientos establecidos en la convocatoria, como ley del concurso aplicable a todos los concursantes.

HECHO 4. No es cierto. La experiencia y estudios que no se cuantificaron, se basan estrictamente en las reglas propias del concurso.

HECHO 5. Es Parcialmente Cierto. Es cierto que efectuados los cálculos de la oficina de selección y carrera de la Procuraduría General de la Nación, la experiencia total del accionante es de 6 años, 1 mes y 5 días. También es cierto que en la evaluación de los antecedentes se calculó un total de 17 puntos, resultantes de la especialización que equivale a 7 puntos y 10 puntos por los 2 años completos adicionales a la experiencia mínima exigida.

De otro lado, es falso que la Procuraduría NO esté teniendo en cuenta la experiencia por docencia, como quiera que las vigencias 2012, 2013 y 2014 el accionante aportó certificación como "Docente Medio Tiempo", en consecuencia no podían ser valoradas de manera concomitante con la experiencia profesional de tiempo completo acreditada a través de otras certificaciones para el mismo periodo. Igual aconteció con una certificación aportada como hora cátedra, por un periodo inferior a un año lectivo. Es decir, la Procuraduría simplemente observa la convocatoria y las reglas predefinidas del concurso, mismas que se aplicaron a la totalidad de aspirantes.

HECHO 6. No me consta. Que se pruebe

HECHO 7. No es cierto que la Procuraduría General de la Nación, por una apreciación irrazonable y desproporcionada esté omitiendo la contabilización de 9 puntos en la prueba de valoración de antecedentes y tampoco es cierto que se esté vulnerando el derecho al debido proceso y el acceso a cargos públicos. Si bien el aspirante dice que cuenta con casi 9 años desde su graduación hasta la fecha de inscripción en el concurso, lo cierto es que la experiencia se cuenta con las certificaciones laborales que la acrediten, las mismas que deben cumplir con los requisitos y formalidades de la convocatoria. La Procuraduría no desconoce que el accionante, efectivamente cuenta con experiencia profesional y experiencia docente, pero en el marco del concurso de méritos y en observancia de los lineamientos consagrados en la Resolución 040 de 2015, no es factible sumar todas las certificaciones que presenta, como quiera que algunas de ellas no cumplen con los requisitos para ser valoradas, en tanto el Artículo 17 idem, establece que la unidad mínima de medida y valoración es de un (1) año. En consecuencia los periodos inferiores a éste lapso, no pueden generar puntuación, como tampoco aquellas certificaciones de medio tiempo, habida cuenta que solo se valoran periodos que sumen tiempo completo, es decir, debe acumular dos medios tiempos concomitantes.

Es importante tener en cuenta, que dadas las calidades del cargo, se requiere que el aspirante acredite la formación profesional, la idoneidad y la experiencia necesarias, y no porque de manera caprichosa, irrazonable o desproporcionada lo establezca la Procuraduría General de la Nación, sino porque el artículo 280 de la Constitución Política de Colombia, determina que los agentes del Ministerio Público deben tener los mismos requisitos que los jueces y magistrados, es decir, título de abogado y cuatro (4) u ocho (8) años de experiencia profesional contados con posterioridad al título.

HECHO 8. No es cierto que la convocatoria presente ambigüedad, y menos aún que la Oficina de Selección y Carrera esté "aprovechando" para no contabilizar la experiencia docente.

Contrario a lo expresado por el demandante, las reglas del concurso son claras y precisas, fue así como la Resolución 040 de 2015, estableció que en el evento de concurrencia entre experiencia profesional de tiempo completo y experiencia docente, únicamente se puntuará la docencia cuando sea hora cátedra y en el evento de que se alleguen certificaciones por docencia de medio tiempo, únicamente serán valoradas cuando simultáneamente se cuente con otra certificación laboral por medio tiempo, de manera que entre las dos puedan sumar tiempo completo.

La regla de concurso se establece, en observancia al ya mencionado Artículo 17 idem, donde se definió como unidad mínima de medida de valoración un (1) año, en consecuencia, los tiempos parciales o medios tiempos, no pueden generar puntuación por si mismos de manera independiente, en tanto no son objeto de valoración.

Estas son reglas claras que establece el concurso y que fueron aceptadas y conocidas por todos, por ende, no puede ser catalogada como una ambigüedad que aprovecha la Oficina de Selección y Carrera para no contabilizar las certificaciones aportadas por el Accionante, pues no sería coherente, que la Procuraduría inobserve ésta regla y proceda a contabilizar los términos y requisitos de una manera diferente para privilegiar al demandante, en desmedro de los derechos que les asiste a los demás aspirantes.

3. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

- **CONSIDERACIONES PRELIMINARES FRENTE A LA VINCULACIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS**

Tal y como se pusiera de presente al momento de oponernos a las pretensiones de la demanda, considera esta defensa que en caso de accederse a lo pedido por el demandante, el H Despacho tendría que ordenar modificar la Resolución 338 del 8 de julio de 2016, por medio del cual se conformó la lista de elegibles dentro de la convocatoria 014 de 2015, en donde eventualmente se estarían afectando los derechos de terceros, razón por la cual se solicita de manera respetuosa se ordene la vinculación a la presente Litis de todas y cada una de las personas que integran la misma, so pena de viciarse el proceso que aquí nos ocupa.

- **ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE**

El demandante inicia señalando que en iguales circunstancias fácticas el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales vulnerados frente a los aspirantes al Concurso de

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

Notarios. Decisiones judiciales proferidas en el marco de una acción de tutela, con un contexto diferente y un concurso de méritos con reglas disímiles al caso sub exámine.

Reitera que la Corte Constitucional con el fin de preservar el mérito en la designación de los empleados públicos, de conformidad ordenó al Procurador General de la Nación, adelantar el concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de los Procuradores Judiciales I y II y que en cumplimiento de esa orden la Procuraduría expidió la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015, como reglamento del concurso.

Reconoce que la Resolución 040 de 2015, guarda consonancia con los preceptos normativos constitucionales, pero que en su caso concreto vulnera sus derechos, por la aplicación de criterios muy estrictos, y para explicar su argumento aplica el test de razonabilidad establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Del mencionado test, concluye en primer lugar, que la Actuación de la Procuraduría General de la Nación persigue un objetivo constitucionalmente permitido, como quiera que se busca la aplicación del Artículo 125 de la Constitución Nacional, en segundo lugar, que es adecuado para el logro del objetivo perseguido, habida cuenta que la Resolución 040 de 2015, reglamenta el concurso para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales y como tal, resultó adecuada a la finalidad prevista, en tercer lugar, considera que la Actuación de la Procuraduría resulta desproporcionada para su caso concreto.

Centra su argumentación en 3 puntos básicos.

El primero, señala que después de aprobar el examen de conocimientos y la prueba de competencias, resulte siendo desclasificado de la lista de elegibles con la prueba que menos puntaje ponderado otorga y atribuye a la aplicación de criterios exegéticos y formalistas.

Dice que desde la fecha de graduación como abogado a la fecha de inscripción al concurso, tiene prácticamente 9 años de experiencia, pero que solamente se le contabilizaron 6 años.

El segundo, dice que los raciocinios de la Procuraduría para no tener en cuenta la docencia como experiencia adicional, son de tal formalidad y exigencia, que terminan afectando el derecho de fondo.

Dice que para el año 2012, no se contabilizó la experiencia porque no hay otra experiencia concurrente de medio tiempo, y que por tal razón, debió contabilizarse como hora cátedra independientemente de que la certificación exprese que se trata de medio tiempo y que igual raciocinio debe aplicarse a las certificaciones de docencia de las vigencias 2013 y 2014.

Señala que por tal razón, ésta prueba terminó siendo eliminatoria para él, a pesar de que la única eliminatoria, es la prueba de conocimientos.

En tercer lugar, dice que la reglamentación del concurso le parece contradictoria, habida cuenta que los ítems de valoración y ponderados, afectan el derecho a la igualdad porque dice que hay algunos concursantes que con la sola presentación del examen y la calificación de la prueba comportamental ya se encontraban en la lista de elegibles, independiente de la calificación de antecedentes ya que ésta última es clasificatoria, pero que para el caso de accionante, resulto siendo eliminatoria a pesar de haber sobrepasado la única prueba eliminatoria que es la prueba de conocimientos.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

Señala que esto afecta el derecho a la igualdad, ya que esta prueba debe ser eliminatoria o clasificatoria para todos.

Afirma que no se tuvo en cuenta una especialización en derecho financiero ni las experiencias en litigio, y reconoce que esto sucedió, por cuanto no se ajustaban a los requisitos y condiciones del reglamento, por eso considera que para su caso concreto, estas pruebas debían valorarse en conjunto.

Fundamenta la pretensión subsidiaria, argumentando que la convocatoria 008 Delegada en Restitución de Tierras se ofertaron 23 vacantes y que la lista de elegibles se compuso de 7 integrantes, quedando vacantes 16 cargos.

- **ARGUMENTOS DE LA DEFENSA**

El concurso de méritos adelantado por la Procuraduría, se dio en cumplimiento al mandato impartido por la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013 que ordeno a convocar a un concurso público de méritos para proveer los cargos de Procuradores Judiciales I y II. En consecuencia, mediante Resolución 040 del 20 de enero de 2015 el Procurador General de la Nación procedió a dar apertura y reglamentar la convocatoria del proceso de selección para proveer 744 empleos de carrera de la Procuraduría General de la Nación, acto administrativo que reglamentó las condiciones del concurso, de conformidad con las facultades otorgadas en el Decreto Ley 262 de 2000 y a través de las convocatorias 001-2015 hasta la 014-2015.

De acuerdo a lo anterior, el concurso de méritos se desarrolló a través de las siguientes etapas: Convocatoria, Reclutamiento, Inscripción y lista de admitidos y no admitidos, Aplicación de pruebas e instrumentos de selección, conformación de lista de elegibles, periodo de prueba, y calificación del periodo de prueba de conformidad con el articulo segundo de la Resolución 040 de 2015.

Frente al caso concreto, el demandante discrepa de la aplicación de las reglas contenidas en la Resolución 040 de 2015, a pesar de que reconoce que guarda consonancia con los preceptos normativos constitucionales, pero considera que vulnera sus derechos por la aplicación de criterios muy estrictos, y considera que en su caso concreto se deben inaplicar las reglas de la convocatoria, a efectos de lograr subir su puntaje en la prueba de análisis de antecedentes.

No son procedentes las pretensiones del accionante, como quiera que solicita que se inobserve y se inapliquen los lineamientos de la convocatoria únicamente en su caso a efectos de favorecerlo y otorgarle un mayor puntaje que le permita hacer parte de la lista de elegibles. Valga aquí reiterar, que en el evento de que se acceda a las pretensiones del accionante, se generaría un grave desequilibrio frente a los demás aspirantes, quienes fueron evaluados y puntuados conforme a las reglas del concurso. Esta situación muy seguramente obligaría a realizar el mismo cálculo para la totalidad de aspirantes, evento en el cual, las personas con mejores hojas de vida y mayor experiencia, cambiarían drásticamente su puntaje. En consecuencia, la inobservancia del reglamento propuesta por el demandante, no garantiza su inclusión en la lista de elegibles.

Así las cosas, si el demandante no acreditó en debida forma y conforme las reglas que él mismo aceptó acatar al momento de inscribirse al concurso, no puede dar lugar a considerar que la Procuraduría ha violado norma alguna.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

No puede perderse de vista que el demandante sustenta su argumento de violación en la presunta inconformidad entre la Resolución 040 de 2015, aspecto que resulta ajeno a la presente controversia judicial, la cual debe circunscribirse al estudio de la legalidad de los actos administrativos de contenido particular cuestionados por el demandante y no del acto de contenido general (Resolución 040 de 2015) que reguló el concurso. Si el actor considera que el acto general adolece de vicios de legalidad puede proceder a demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

No obstante ello, y de manera puntual, las apreciaciones realizadas por el demandante sobre la calificación o valoración de la prueba de análisis de antecedentes, son erradas y descontextualizadas, pues como se evidencia, la experiencia docente no fue computada habida cuenta que no cumplía con las exigencias de la Resolución 040 de 2015 para puntuar, en cuanto era concomitante con otros periodos acreditados, y de otro lado, presentó una certificación como docente medio tiempo, la cual no tenía otro medio tiempo laboral para conformar el cómputo como tiempo completo. De tal manera que los documentos aportados, no tienen las calidades requeridas por el concurso para ser cuantificados, y una vez culminado el concurso, cuando los aspirantes que cumplieron con los requisitos han sido nombrados y han superado el periodo de prueba, y se encuentran inscritos en carrera administrativa, el accionante pretende que se inapliquen algunos lineamientos de la Resolución 040 y que se dé una interpretación diferente a su caso concreto, amparándose en el criterio de favorabilidad, con lo que busca que se configuren reglas especiales para su caso, en desmedro del derecho a la igualdad y la buena fe de los demás.

La solicitud del accionante no es válida de conformidad con las reglas del concurso, mas exactamente la contenida en el artículo 9 de la Resolución 040 de 2015, en tanto pretende que se tenga en cuenta la experiencia que busca acreditar como hora cátedra, cuando la misma fue certificada por la Institución Universitaria como docencia medio tiempo, la misma que por sí sola, no genera cuantificación. Busca el accionante, que bajo un supuesto Criterio de Favorabilidad, la Procuraduría interprete la certificación y le dé un alcance diferente al señalado por la Institución Universitaria, y lo considere como hora cátedra, argumento que no es de recibo de la Procuraduría, como quiera que ni las certificaciones, ni las normas procesales admiten interpretación alguna.

Así mismo se dijo que del tiempo total de experiencia 6 años 1 mes y 5 días, se deben descontar los 4 años exigidos como requisito mínimo quedando para puntuar un tiempo total de 2 años, es decir, 10 puntos de 60 máximos posibles dentro del ítem de experiencia.

La razón por la cual sólo se daba 10 puntos por los 2 años sobrantes, y no más por los meses y días faltantes, es porque la Resolución 040 de 2015 regla del concurso y de obligatorio cumplimiento por la administración y el concursante, establecía que los meses y los días sobrantes no se tienen en cuenta para la puntuación, por cuanto la unidad mínima de medida y valoración es de un año. Lo anterior de conformidad con el artículo Décimo Séptimo – numeral 2 ibidem que establece que concederá 5 puntos por cada año completo de experiencia profesional adicional relacionada.

De otro lado, frente al título de posgrado, del cual el accionante señala que no fue evaluado ni puntuado, la Oficina de Selección de carrera, hizo un análisis integral y detallado al resolver la reclamación y dejó en claro, que en virtud de la convocatoria y reglas del concurso, solamente son objeto de puntuación los posgrados previamente establecidos en la convocatoria, en los siguientes términos:

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

"...El documento aportado en el folio 124248 que corresponde al título de especialista en Derecho Constitucional fue validado ya que hace parte de los posgrados que otorgan puntaje para todas las convocatorias para todas las convocatorias; al cual se le asignó 7 puntos por este ítem en atención a los dispuesto en el artículo décimo séptimo d ela Resolución 040 de 2015.

Respecto a la Especialización en Derecho Financiero y Bursátil acreditada a folio 124418, se informa que no es objeto de puntuación toda vez que no hace parte de los títulos de posgrado específicos para la convocatoria 008-2015 y tampoco corresponde a los títulos establecidos para otorgar puntaje para todas las convocatorias.

Se precisa que el artículo 2015 del Decreto Ley 262 de 2000 otorga facultades al Procurador General de la Nación para determinar los parámetros de puntuación de factores valorados en el análisis de antecedentes. En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 10 del Decreto 263 de 2000 por el cual se establecen los requisitos de los empleos de la Procuraduría General de la Nación, incluidos los del Instituto de Estudios del Ministerio Público, indica: "En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carrera, el procurador General establecerá las disciplinas académicas específicas que se requieren, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la Institución..."

Como se vio, del reproche que expone el demandante, los inconformismos radican en la aplicación que de la Resolución 040 de 2015, hizo la Oficina de Selección y Carrera, luego entonces, lo que en el fondo pretende es dejar sin efectos disposiciones contenidas en un acto administrativo que está revestido de la presunción de legalidad, en cuanto no ha sido ni anulado ni suspendido por el H. Consejo de Estado, como lo es la mentada Resolución 040 de 2015.

Es importante reafirmar que no puede ser de recibo la inconformidad del actor, pues todos los participantes desde antes de iniciar el concurso abierto de méritos para Procuradores Judiciales I y II, tenían pleno conocimiento de las reglas del concurso. Por lo tanto pretender que por su infundada inconformidad respecto a los temas aquí debatidos, se trasgreda sus derechos fundamentales, resulta contrario y violatorio del derecho a la igualdad frente a los demás concursantes que si se ciñeron a dichos parámetros y frente a los cuales se les valoró sus hojas de vida.

Cambiar las reglas del concurso en éste momento, implicaría revisión total de cada uno de los requisitos de todos los aspirantes y la recalificación general del proceso, trámite que implicaría prácticamente rehacer de nuevo el concurso con nuevos parámetros y lineamientos, situación que carece de toda lógica.

Ahora bien, se reitera que la inconformidad del actor es frente a la Resolución 040 de 2015 y no frente a la cual se le resolvió su reclamación contra los resultados de la prueba de análisis de antecedentes, pues esta no hizo otra cosa que aplicar la Resolución 040 de 2015 como patrón calificador, por lo que no es cierto que este sea el mecanismo idóneo para presentar su rechazo, si no que el demandante debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a través de los medios de control de nulidad, pues se repite, el inconformismo radica en las reglas contenidas en la Resolución 040 de 2015 y no en la Resolución 1401 del 27 de junio de 2016 que fue simplemente la que definió conforme a las reglas de la convocatoria el puntaje asignado al actor.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

En relación con la presunta vulneración del derecho al debido proceso administrativo, lo primero que habrá que decir es que la Resolución 040 de 2015, es la norma reguladora del concurso que busca proveer los cargos de Procuradores Judiciales I y II, lo que significa que ésta, a voces del Consejo de Estado *"...constituye la regla del proceso de selección, de manera tal que es vinculante tanto para los concursantes como para la Administración..."* y si nos atenemos al término *"vinculante"* según definición de la Real Academia de la Lengua tenemos que el mismo se refiere a algo que vincula *"sujeta a una obligación"* luego es claro que a ella ha de atenerse quienes libre y voluntariamente aceptaron las condiciones del concurso.

Adicionalmente y sin perjuicio de lo que más adelante se diga, es viable poner de presente lo dicho por el Consejo de Estado el 26 de julio de 2007 Radicación número 52001-23-31-000-2007-00150-01 (AC) con ponencia de la Magistrada María Inés Ortíz Barbosa que en lo pertinente dijo:

"La entidad estatal que convoca a un concurso (abierto o cerrado) debe respetar las reglas que ella ha diseñado y a las cuales deben someterse tanto los participantes en la convocatoria como ella misma. El desconocimiento de las normas que regulan el concurso implica e rompimiento de la confianza que se tiene respecto de la institución y atenta contra la buena fe de los participantes. Además con dicha conducta las entidades infringen normas constitucionales y vulneran derechos fundamentales de quienes de buena fe participaron en el concurso."

Tal postura no ha cambiado al interior del Consejo de Estado y en pronunciamiento efectuado en el 2011 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejera Ponente CARMEN TEREZA ORTIZ DE RODRIGUEZ del 16 de marzo de 2011, Radicación número 19001-23-31-000-2011-00010-01 (AC), dijo:

"Reiteradamente se ha dicho que los concursos son el mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempeñarlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad".

La entidad estatal que convoca a un concurso debe respetar las reglas que ella ha diseñado y a las cuales deben someterse tanto los participantes en la convocatoria como la misma entidad, pues el desconocimiento de estas reglas rompe la confianza que se tiene respecto de la institución y atenta contra la buena fe de los participantes. Además con dicha conducta las entidades infringen normas constitucionales y vulneran los derechos fundamentales de quienes de buena fe participaron en el concurso".

Así se puede observar en cada uno de los empleos de procurador judicial en el Manual de la Entidad que puede ser consultado en el siguiente vínculo http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MF.pdf.

En este sentido las reglas de este concurso no pueden ser modificadas, por tanto, no es posible variar una disposición del mismo. En ese orden de ideas debe señalar que el vicio de ilegalidad no se configura en este caso. Tampoco hay falta de competencia, por cuanto el artículo 7, numerales 41 y 45 del Decreto Ley 262 de 2000 otorgan facultades al Procurador

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURIA REGIONAL DE NARIÑO

General de la Nación para expedir los Manuales de Funciones y las convocatorias a concursos públicos de méritos.

Ahora bien es de aclarar que es una facultad discrecional que fue ejercida por la autoridad competente, es proporcional al artículo 280 de la Constitución Política y adecuada a los fines que esta norma busca. En efecto el artículo 280 de la Carta determina que los agentes del Ministerio Público deben tener los mismos requisitos de los jueces y magistrados, es decir, título de abogado y cuatro (4) u ocho (8) años de experiencia profesional, contados con posterioridad al título.

4. LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS

Los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación se sujetaron a la constitucionalidad y legalidad y por tal razón son eficaces y deben producir efectos normales por haber guardado las formas prescitas para ello. Dichos actos se dieron en el marco de un concurso de méritos que nace como consecuencia de una orden impartida por la Corte Constitucional, el cual se desarrolló en estricto apego a los postulados establecidos en el Decreto Ley 262 de 2000 y 263 de 2000, entre otros.

5. PETICION

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, de manera muy respetuosa se solicita al Despacho de conocimiento denegar las suplicas de la demanda.

6. ANEXOS

1. Resolución 1401 de 2016
2. Resolución 040 del 20 de Enero de 2015
3. Resolución 338 del 8 de julio de 2016
4. Copia diploma de grado Especialización Derecho Constitucional
5. Copia diploma de grado Especialización en Derecho Financiero y Bursátil
6. Poder original

NOTIFICACIONES.

Para efectos procesales, téngase como dirección el Edificio: Centro de Negocios Cristo Rey ubicado en la Carrera 24 No. 20-58 Piso 6 de la ciudad de Pasto, Teléfono 7292059. Correo electrónico: regional.narino@procuraduria.gov.co, mlnarvaez@procuraduria.gov.co

Atentamente,

MARTHA LUCIA NARVAEZ ESTUPIÑAN
C.C. 37.007.699
TP. 149.369 del C.S de la J

177

Armando Quintero G.
Abogado
Mg. DERECHO ADMINISTRATIVO

San José de Cúcuta, 09 de diciembre de 2019

18 DIC 2019
33 FL

Doctor
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
Honorable Magistrado
Sala unitaria de decisión
Tribunal Administrativo de Nariño
E. S. D.

Ref.:	**CONTESTACIÒN DE DEMANDA**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Radicado:	**540012333000-2019-00425-00**
Demandante:	**JORGE DANIEL TORRES TORRES**
Demandado:	**PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÒN - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

Cordial saludo.

ARMANDO QUINTERO GUEVARA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.487.199 expedida en Cúcuta, abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 93352, del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado de la **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**, de acuerdo con el memorial poder que aporto, conferido por el señor Rector IVALDO TORRES, el cual se anexa, me permito contestar la demanda en contra de mi representada frente a lo cual, me permito manifestar:

1. OPORTUNIDAD DE LA CONTESTACIÒN DE LA DEMANDA

En concordancia con la nulidad presentada en la cual se advierte la incursión de la causal establecida en el artículo 133 numeral 8 de la ley 1564 de 2012, en el cual, se advierte la indebida notificación del auto admisorio, esta defensa procede a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 301 del Código General del Proceso, considerándose notificado del auto admisorio de la demanda de fecha 16 de agosto de 2019, por conducta concluyente a partir de la fecha, conforme lo prevé el articulo mencionado, que al tenor literal, reza:

> ***"Artículo 301. Notificación por conducta concluyente***
> *La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello,* ***se considerará notificada por conducta***

Av 2A N° 10-18 O. 703 Ed. 1 Of.
316 412 7596 - 6730076
arqs.12@hotmail.com

concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.
Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada por estado de tales providencias.

Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se entenderá surtida por conducta concluyente el día en que se solicitó la nulidad, pero los términos de ejecutoria o traslado, según fuere el caso, solo empezarán a correr a partir del día siguiente al de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior."

Así las cosas, y en aplicación de dicho precepto normativo, me encuentro en la oportunidad legal para presentar contestación de la demanda, dado que contabilizado el término desde el día en que efectivamente llega el escrito de demanda de manera física a la Universidad de Pamplona, esto es, el 03 de octubre de 2019, pues, dado que revisado el correo electrónico oficial creado para el efecto del artículo 197 de la ley 1437 de 2011, notificacionesjudiciales@unipamplona.edu.co, no se evidencia notificación electrónica de la presente demanda, por lo que, encontrándome en el término legal, procedo a efectuar la contestación en los siguientes términos:

2. A LAS PRETENSIONES

Me opongo a la prosperidad de estas respecto de la Universidad de Pamplona toda vez que no se configura causal alguna de nulidad frente a los actos administrativos acusado.

3. A LOS HECHOS

Se responderán los hechos de la demanda en el mismo orden numérico, en que están presentados en la demanda.

Conforme los hechos señalados del 1 al 8: corresponde a decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, dentro del concurso de méritos adelantado en el año 2015, no obstante, las razones expuestas en el acápite de hechos corresponden a justificaciones de la presunta vulneración de la normativa señalada como infringida por parte de las entidades demandadas, los cuales no están llamados a prosperar, conforme pasa a exponerse:

4. CUESTIÒN PREVIA

4.1. FALTA DE LEGITIMACIÒN EN LA CAUSA POR PASIVA

El demandante pretende con la demanda la declaratoria de nulidad de la decisión que calificó con un total de 17 puntos como resultado de prueba de antecedentes así como la Resolución No. 1401 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual, se resuelve la reclamación del señor José Daniel Torres Torres confirmando la calificación de los antecedentes en un total de 17 puntos.

En primer lugar, sea necesario destacar que dichos actos administrativos fueron expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de manera autónoma e independiente, como entidad encargada de adelantar el concurso de méritos para proveer los cargos de la planta de personal de dicho organismo de control.

En segundo lugar, la Procuraduría General de la Nación en virtud de la convocatoria proferida a través de la Resolución No. 040 de 2015, procedió a suscribir contrato No. 179 097 de 2014 con la Universidad de Pamplona, con el objeto de diseñar, construir, aplicar las pruebas de conocimientos y comportamentales, y a su vez efectuar el análisis de antecedentes, hasta la determinación de las personas que integren la lista de elegibles, el cual, fue liquidado de común acuerdo mediante acta del 23 de diciembre de 2016, en la cual, expresamente en el numeral VII de conclusiones, se estipuló:

> A pesar de lo anterior y según lo estipulado en la Ficha Técnica la cual hace parte integral del contrato las partes acuerdan.
>
> - La Universidad de Pamplona continuará apoyando a la Procuraduría General de la Nación con los informes que esta requiera para atender los derechos de petición y tutelas que se presenten hasta la vigencia de la lista de elegibles, según lo dispone el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000: *"Lista de elegibles. ( ) La lista de elegibles se elaborará en riguroso orden de mérito. Tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su publicación y deberá estar contenida en resolución proferida por el Procurador General (.)"* Lo anterior conforme a lo establecido en el capítulo séptimo del pliego de condiciones, en donde se señala como riesgo operacional a cargo del contratista *"La existencia de hechos que afecten el desarrollo normal del proceso, desde la órbita jurídica. Acciones judiciales respecto de las actividades ejecutadas por el contratista"*

Señala lo anterior, que, conforme al riesgo operacional a cargo del contratista, la existencia de hechos que afecten el desarrollo normal del proceso, desde la orbita jurídica. Acciones judiciales respecto de actividades ejecutadas por el contratista.

No obstante, en dicha cláusula, se estipuló que dichas acciones judiciales se adelantarían hasta la vigencia de la lista de elegibles, en el presente asunto, se tiene que la lista de elegibles de la convocatoria 08 procuradores judiciales I y II, fue expedida mediante resolución No. 343 del 08 de julio de 2016, la cual se

anexa, la cual, fue publicada el mismo 08/07/2016 a las 9:06 a.m., por lo que de conformidad en lo preceptuado en el artículo 216 de decreto ley 262 de 2000, la vigencia de la lista de elegibles es de dos años, los cuales, fenecieron el 08 de julio de 2018, encontrándose la presente vinculación a la demanda improcedente, conforme a lo expuesto, debiéndose por tanto ordenar la desvinculación de la entidad que represento al configurarse la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pro las dos razones aquí expuestas.

En efecto, al ser la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.

Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hubieren sido demandadas[1]. De allí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, puesto que, como lo ha precisado el Consejo de Estado:

> *"(...) la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.*
>
> *"la excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado –modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante– que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.*
>
> *"la legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado"*[2].

En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por pasiva supone la verificación de que quien es demandado tenga la titularidad para defender el interés jurídico que se debate en el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones elevadas –lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz del derecho sustancial– sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del trámite judicial.

---

[1] *Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 13503, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.*
[2] *Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.*

En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso[3].

Ahora bien, la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores.

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.

[3] *"[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante..." DEVIS Echandía, Hernando "Teoría General del Proceso", Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.*

Así las cosas, se reitera, se debe declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA por las dos razones aquí expuestas.

5. ARGUMENTOS DE FONDO

El demandante pretende con la demanda la declaratoria de nulidad de la decisión que calificó con un total de 17 puntos como resultado de prueba de antecedentes así como la Resolución No. 1401 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual, se resuelve la reclamación del señor José Daniel Torres Torres confirmando la calificación de los antecedentes en un total de 17 puntos.

En el escrito de demanda se fundamentan los cargos de nulidad en la presunta vulneración de los preceptos normativos articulo 125, 228, 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia.

5.1. FRENTE AL CONCEPTO VIOLACIÓN, SE TIENE:

- **Al primero:**

Se señala en la demanda la existencia de desconocimiento de un precedente jurisprudencial y vulneración a la seguridad jurídica y derecho a la igualdad, por cuanto, el Consejo de Estado en un caso similar mediante sentencia de tutela decidió amparar el derecho del concursante, dentro del proceso 2500023-42-000-2015-05525-01 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, Consejero Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio del 11 de febrero de 2016.

Frente a dicho argumento, es necesario destacar en principio que, según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como "*la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su* ***pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos***

***resueltos**, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo"[4].*

En razón de ello, es necesario resaltar, que la situación fáctica de la sentencia que se pretende se reconozca aplique como precedente judicial no obedece de manera semejante a los hechos aquí planteados, pues, es claro, que en el asunto traído a colación obedece a que no se le tuvo en cuenta el puntaje como docente universitario por estar desempeñando el litigio, pero la decisión adoptada lo que hizo fue aplicar lo dispuesto en el reglamento del concurso de méritos, acuerdo 001 de 2015 proferido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial que establecia los términos en los cuales se debía realizar la calificación de la experiencia, en su artículo 19.

En cambio, en el presente asunto, la decisión adoptada en la resolución 1401 de 2016, lo que hizo fue dar aplicación a lo dispuesto en la norma que reguló el concurso de procuradores judiciales I y II establecido mediante resolución No. 040 de 2015.

Por lo anterior, no resulta aplicable el procedente señalado, y, en su lugar, corresponde al señor juez de instancia analizar cada uno de los argumentos planteados frente a la decisión adoptada mediante Resolución 1401 de 2016, y en su lugar, proceder a negar las súplicas de la demanda, dado que la actuación de la administración se encuentra ajustada a lo planteado en la norma reguladora del concurso que fue conocida por el participante desde el omento de su publicación y convocatoria.

- **Al segundo:**

Se plantea como argumento que la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 proferida por la Procuraduría General de la Nación, por medio de la cual se establecen las reglas y procedimientos de la convocatoria, resulta violatorio al principio de acceso a cargos públicos por mérito, pues está aplicando criterios muy estrictos y formalidades que socavan el derecho sustancial preferente y prevalente.

Frente a este argumento se debe destacar que no resulta de recibo, dado que como puede observarse en la demanda, no existe pretensión alguna que bisque la declaratoria de nulidad de la norma que reguló el concurso como lo es la resolución No, 040 de 2015, pues, de considerar el demandante que es dicho

[4] *Sentencia SU-053 de 2015.Corte Constitucional.*

acto administrativo el que se encuentra vulnerando la situación jurídica del mismo, debió por tanto, proceder a solicitar su nulidad para que desapareciera del ordenamiento jurídico por resultar contraria a la norma superior, lo que demuestra en efecto que dichos argumentos deben ser rechazados frente a los actos administrativos que aquí se demandan.

5.2. FRENTE AL CASO CONCRETO

Se centra el objeto de la presente demanda como argumentos de inconformidad frente a los actos administrativos demandados, que no se tuvo en cuenta por parte de la Procuraduría General de la Nación la experiencia profesional acreditada como docente universitario de horas catedra durante los años 2012, 2013 y 2014, por haber sido concomitante con el ejercicio de la profesión.

En razón de lo expuesto, es necesario extraer lo que la Resolución No. 040 de 2015, lo establecido como norma reguladora del concurso respecto de la valoración en puntaje de la experiencia profesional por un mismo periodo en el artículo 9 numeral 2.8. establece que:

> *"**2.8. Certificaciones de experiencia profesional por un mismo período**: cuando se presentan distintas certificaciones de experiencia profesional acreditando el mismo período **este se contabiliza una sola vez como tiempo completo.** Si se allega una certificación de experiencia profesional de medio tiempo esta solo podrá ser concurrente con otra de medio tiempo por un mismo período, con el fin de sumar un tiempo completo.*
>
> *El tiempo de experiencia docente por hora catedra puede ser concurrente con el período de otras certificaciones de experiencia profesional para la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, según las condiciones y puntajes establecidos para dicha prueba".*

Conforme con lo anterior, se evidencia que lo certificado como experiencia profesional sólo podrá ser contabilizado una sola vez como tiempo completo, por lo que, resulta imposible que para los años 2013 y 2014 se compute puntaje adicional como lo requiere el actor, si está demostrado que ya habían sido validados y sumados como tiempo completo con otras certificaciones en el ejercicio de la profesión.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que no se encuentra computada experiencia del año 2012, conforme se evidencia en el cuadro de los documentos aportados para acreditar la experiencia, lo cierto, es que aun cuando, si se validara dicha información y se contabilizara la misma, el puntaje adicional respecto de dicho año lectivo aumentaría en 3 puntos, conforme lo prevé en su artículo décimo séptimo, la resolución No. 040 de 2015, que señala lo siguiente:

Por cada año lectivo[11] completo de experiencia profesional docente (como profesor o investigador) en materias jurídicas relacionadas, ejercida en instituciones de educación superior, en programas de pregrado o posgrado del nivel profesional universitario, **de tiempo completo**	4 Puntos
Por cada año lectivo[12] completo de experiencia profesional docente (como profesor) en materias jurídicas relacionadas en programas de pregrado o posgrado del nivel profesional universitario y certificada por **hora cátedra de 12 a 19 horas semanales**	3 Puntos
Por cada año lectivo completo de experiencia profesional docente (como profesor) en materias jurídicas relacionadas en programas de pregrado o posgrado del nivel profesional universitario y certificada por **hora cátedra de 3 a 11 horas semanales**	2 Puntos
PUBLICACIONES (LIBROS)	**PUNTAJE**
Por cada libro, con registro ISBN (International Standard Book Number), cuando el concursante sea el **AUTOR**	10 Puntos
Por cada libro, con registro ISBN (International Standard Book Number), cuando el concursante sea **COAUTOR**	5 Puntos

2.1. Experiencia profesional docente

a. No se otorgará puntaje por experiencia docente que no corresponda a programas de pregrado o posgrado de educación superior en el nivel profesional universitario[13] o que no correspondan a materias jurídicas relacionadas.
b. La experiencia profesional docente (como profesor o investigador) solo se tiene en cuenta a partir de la obtención del correspondiente título de formación universitaria.
c. Las certificaciones **por hora cátedra** deben precisar el número de horas dictadas **por semana** (hasta 19 horas semanales), de lo contrario no pueden ser objeto de valoración. Si se allega una certificación de experiencia docente como profesor de medio tiempo (20 a 24 horas semanales), esta podrá ser concurrente con otra igual de medio tiempo, con el fin de sumar un año o un año lectivo de tiempo completo, según las reglas previstas en este artículo para otorgar puntaje.

Conforme a lo anterior, es claro, que dándose aplicación a dicho cuadro de puntaje para validar la experiencia docente por hora catedra, se tiene que el año 2012 aumentaría en un puntaje de 3 puntos, quedando un total en la prueba de antecedentes de 20 puntos en total, lo cual, de acuerdo con los porcentajes establecidos tampoco le otorgaría el puntaje mínimo necesario para ser incluido en la lista de elegibles, conforme se expondrá:

Pruebas	**Resultados actuales**	**Porcentaje**	**Total**	**Resultados modificados**	**Total modificado**
Resultado Prueba de conocimientos	83.67	55%	46.01	83.67	46.01
Resultado prueba comportamental	75.23	25%	18.80	75.23	18.80
Resultado prueba antecedentes	17	20%	3.4	20	4.0

Total		100%	**68.21**		**68.81**

Como puede verse, de igual manera, en el caso de considerar el Despacho la existencia de un error en la falta de valoración del año 2012, de igual manera, ello, no es óbice, para acceder a las pretensiones de la demanda respecto de la inclusión en la lista de elegibles, dado que como lo establece la misma resolución No. 040 de 2015, proferida por la Procuraduría General de la Nación solo integraran la lista de elegibles quienes superen el 70%, así lo prevé:

> *"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: LAS PRUEBAS O INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN. Las pruebas tienen como finalidad evaluar las competencias laborales definidas por la Procuraduría General de la Nación, las aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencia para determinar que las condiciones de los concursantes correspondan con la naturaleza y el perfil de los empleos a proveer, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política, la ley y el Manual Específico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales. Así mismo, permiten la clasificación de los participantes para integrar la lista de elegibles. En el concurso se aplicarán las siguientes pruebas, cuyo carácter, calificación y valor porcentual se determina así:*
>
> En el concurso se aplicarán las siguientes pruebas, cuyo carácter, calificación y valor porcentual se determina así:

PRUEBAS	CARÁCTER	CALIFICACIÓN APROBATORIA	VALOR PORCENTUAL
CONOCIMIENTOS	Eliminatorio	Esta prueba se supera con 75 puntos sobre 100	55%
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	Clasificatorio	N/A	25%
ANALISIS DE ANTECEDENTES	Clasificatorio	N/A	20%
TOTAL			100% Los concursantes que obtengan un puntaje final total igual o superior a **70%** integrarán la lista de elegibles[8]

De manera que, no es procedente aun atribuyendo un porcentaje adicional al actor en relación con la experiencia del año 2012, que sea incluido en la lista de elegibles, pues, conforme al precepto anteriormente transcrito, el demandante no supera el porcentaje del 70% y por tanto no cumple con el requisito establecido, siendo de igual manera, excluido del concurso al no completar el mínimo puntaje final exigido por la norma reguladora del concurso.

Así las cosas, resulta evidente, que la actuación tanto de la Universidad de Pamplona como de la Procuraduría General de la Nación, se enmarco dentro de lo establecido en la convocatoria publicada desde el año 2015, que de ser contraria al ordenamiento jurídico, debió en su lugar, demandar a su vez dicho acto administrativo, al ser ese el que estableció y dispuso las pautas para cada una de las etapas a realizarse, la cual, se encuentra ajustada al marco de la constitución y la ley.

Conforme lo expuesto, está claro que la actuación de la entidad se encuentra ajustada a derecho, la cual se mantiene incólume la presunción de legalidad de los actos expedidos, pues los cargos expuestos no desvirtúan la misma, debiéndose, por tanto, negar las súplicas de la demanda frente a la entidad que represento.

6. RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE PRETENDEN HACER VALER

6.1. Documentales que se aportan: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, así:

A. Contrato de prestación de servicios No. 194 de 2015 suscrito entre la PNG y la UNIPAMPLONA.
B. Acta de liquidación del contrato 194 de 2015.
C. Oficio respuesta de reclamación administrativa resolución 1367 de 2016.
D. Poder otorgado por el Rector de la Universidad de Pamplona, y anexos que acreditan su calidad, por lo que solicito me reconozca personería para actuar dentro del presente proceso.

E. NOTIFICACIONES

Las notificaciones las recibiré en su Despacho o en mi oficina ubicada en la Avenida 2 No. 10-18 Oficina 403 Edificio Ovni – Cúcuta y las notificaciones electrónicas las recibiré a través del correo electrónico.

Respetuoso saludo,

ARMANDO QUINTERO GUEVARA
C.c. No. 13.487.199 de Cúcuta
T.P. No. 93352 del C.S de la J.

Honorable Magistrado.
EDGAR GUILLERMO CABRERA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NARIÑO.
E. S. D.

REF:
RADICADO: **2019 - 00631**
MEDIO DE CONTROL: **REPARACION DIRECTA**
DEMANDANTE: **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y OTROS**
DEMANDADO: **NACION – RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION.**

YERALDINE ELISABETH CADENA VACA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Pasto, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.008.883 de Ipiales, abogada en ejercicio, con Tarjeta Profesional No.120.261 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando dentro del proceso de la referencia, en calidad de apoderada especial de la Nación - Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el poder que se adjunta al presente, de manera respetuosa me dirijo ante su Despacho para CONTESTAR e IMPUGNAR la demanda presentada en contra de la Fiscalía mediante apoderado por el señor **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO** y OTROS.

FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Con relación con los Catorce (14) hechos que se narran como fundamento de la demanda de reparación directa, invocan el trámite de la investigación No. 528386000000020180004 numero interno 2018-00012, que cursó ante la Fiscalía 09 Especializada de Pasto, Juzgado Segundo Penal Municipal de Tuquerres con función de control de garantías de Pasto (N) y Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto en función de conocimiento, respetuosamente, a la defensa de la Fiscalía General de la Nación no le corresponde negar o afirmar la veracidad de tales consideraciones tácticas, sino que éstas deberán probarse en el curso del presente proceso.

Dando por cierto los hechos que tiene que ver con la actuación de mi representada la Fiscalía y que tienen sustento en la obligación de adelantar la investigación penal de acuerdo a la Constitucional y Legal de los artículos 250 C.N. y artículos 306, 308 de la Ley 906 de 2004. Por los delitos de Tráfico, Fabricación, Porte o Tenencia de Armas de fuego para la defensa personal Accesorios partes o Municiones en concurso con el punible de Lavado de Activos.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Honorable Magistrado, me opongo a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en el escrito de la demanda, con base en los argumentos que a continuación expongo:

RAZONES DE LA DEFENSA

El apoderado de la parte actora impreca en el libelo demandatorio:

"…PRETENSIONES

PRIMERA. – Declarar *Que la* ***Nación - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - NACIÓN*** *representada por el señor Fiscal General de la Nación o quien haga sus veces o lo represente y la Nación* ***– RAMA JUDICIAL,*** *representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o por quien haga sus veces o lo represente, son responsables administrativa, patrimonial y extra patrimonialmente de los perjuicios materiales y morales por los actos y omisiones a atribuibles al Fiscal al que le correspondió la investigación del asunto judicial causante de los hechos que ocasionaron los perjuicios y al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto al incurrir en una morosidad injustificada de la devolución de los dineros que le fueron incautados al señor* ***GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO*** *con el argumento que se estaría cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito, pero que la Fiscalía General de la Nación logro determinar que se habrían originado en actividades licitas y a pesar de haberse llegado a esa conclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación y haberlo manifestado así en preacuerdo establecido con la fecha 30 de mayo de 2017, tan solo se ordenó su devolución en sentencia de fecha 29 de mayo de 2018 y se hizo efectiva la ordene el 28 de agosto de 2018 (…)"*

Desde ya fuerza señalar, que en el sub judice no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de mi representada, como quiera que la actuación de la Fiscalía General de la Nación, se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar una falla del servicio y un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error, respecto de la incautación del dinero del señor **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO**.

Es preciso recordar que la Fiscalía General de la Nación fue creada por inspiración constitucional, teniendo precisas funciones que cumplir, las que además se determinan, entre otros ordenamientos, en el estatuto procedimental penal.

En el derecho colombiano, la regla general consiste en que las obligaciones a cargo de la administración, como consecuencia del principio constitucional contenido en el Artículo 6, deben ser determinadas por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo corresponda ejecutar.

Es así como la Fiscalía General de la Nación, en el caso bajo estudio, obró de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 de la Carta Política que señala:

"...ARTICULO 250.- Modificado. A. L. 3/2002, art. 2º.

La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento *por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,* ***siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo****.* (Subrayado y negrilla fuera de texto) *No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.*

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. *Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.*

   El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

   La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

(…)

4. *Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.*

5. *Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.*
6. *Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación a los afectados con el delito.*

(…)

9. *Cumplir las demás funciones que establezca la ley.*

El fiscal general y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que sean favorables al procesado…".

La ley 906 de 2004, por la cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, establece en el artículo 306:

"*Solicitud de imposición de medida de aseguramiento.* ***El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento****, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.* (Negrilla fuera de texto)

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión. (Negrilla fuera de texto)

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia".

En similar sentido se establece en el artículo 308.

"*Requisitos.* ***El juez de control de garantías,*** *a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:*

1. *Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.*
2. *Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.*
3. *Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia".*(Negrilla fuera de texto)

De lo anterior es ajustado a derecho colegir que la Fiscalía General de la Nación en su actuar dentro de la investigación adelantada en contra del señor **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO**., obró de conformidad con la obligaciones y funciones establecidas en el Artículo 250 de la Carta Política y todas aquellas disposiciones legales, tales como el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las normas tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos.

Aquí, es necesario remitirnos nuevamente a lo previsto en el artículo 250 Constitucional, modificado por el artículo 2 del A. L. 3 de 2002., el cual establece como **obligación** de la Fiscalía "….***realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento*** *por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,* ***siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo****. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio"*

Así mismo, y como ya se indicó, el nuevo Código de Procedimiento Penal, establece en su artículo 306, "*la* ***Solicitud de imposición de medida de aseguramiento se hará por El fiscal al juez de control de garantías****, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente".* (Negrilla fuera de texto)

Y a renglón seguido establece, la citada ley, la obligación del juez de control de garantías de emitir la decisión ***de imponer o no imponer la medida solicitada, una vez escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa*****.** (Negrilla fuera de texto)

Otro de los requisitos que ordena la Ley 906 de 2004, para legitimar la imposición de la medida de aseguramiento y dar validez a la respectiva audiencia, es la presencia del defensor. Requisitos todos que se reunieron en el presente caso.

Señor Juez, es conveniente señalar que de acuerdo al precedente normativo, le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para que de acuerdo con la prueba obrante en ese momento procesal pueda solicitar, como medida de aseguramiento, la detención preventiva del sindicado, **solicitar las medidas cautelares de incautación** de los elementos materiales probatorios

correspondiéndole al Juez de Control de garantías analizar el material probatorio aportado por la Fiscalía como sustento de su solicitud, para luego si establecer la viabilidad o no de la imposición de la medida de aseguramiento, y de decretar o no la incautación es decir, que finalmente, si todo se ajusta a derecho, es el Juez de Control de Garantías quien tiene la potestad de decidir y decretar la medida de aseguramiento a imponer, no mi representada. Así como hacer control constitucional de las medidas cautelares.

En el presente caso, es de precisar que fue el juez de la preliminar quien consideró, conforme al caudal probatorio allegado a la investigación, que se cumplía a cabalidad con los presupuestos objetivos y subjetivos exigidos por la norma procedimental, razón por la cual legalizó la captura del señor **YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO,** en calidad de conductor del vehículo donde se trasportaba el dinero del señor **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO** y profirió medida de aseguramiento domiciliaria en su contra, y fue quien declaro la legalidad de la incautación de los elementos materiales probatorios en este caso el dinero en una suma total de ($469.000.000) consistente en 9.380 billetes de $50.000 pues es el Juez de Control de Garantías y no otra persona quien ostenta dicha facultad.

Nótese como, es el Juez penal quien luego de realizar un análisis probatorio y ayudado de su sana critica decide, en primer lugar, legalizar la captura y posteriormente decretar la medida de aseguramiento en contra del conductor **YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO y decreta la incautación de los dineros de** hoy demandante, no mi representada.

En el caso bajo estudio, la Fiscalía General de la Nación, no incurrió en falla para que se despache favorablemente las pretensiones de la demanda, cual es *"Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración"*

Partiendo del precepto de que todo aquel responsable de un daño debe repararlo, es de precisar que en el ámbito constitucional, el artículo 90 determina la responsabilidad de carácter patrimonial que le cabe al estado por los daños antijurídicos que se le imputen provenientes de la acción u omisión de las autoridades públicas; igualmente del mismo articulado se colige una responsabilidad basada en la antijuricidad del daño, entendiéndolo en el sentido de que el sujeto pasivo del sufrimiento no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Al respecto, doctrinaria y jurisprudencialmente se han establecido como elementos sustanciales para poder hablar de una responsabilidad administrativa los siguientes:

1.- Actuación de la administración

Entendiéndola como la conducta irregular generada mediante actos, hechos, operaciones, vías de hecho u omisiones por culpa, falta o falla del servicio o culpa de la administración imputable a una persona pública.

2.- Daño o perjuicio

El cual debe ser cierto, es decir que efectivamente haya lesionado un derecho al perjudicado. Especial o particular a las personas que exclusivamente lo reclaman. Debe exceder los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio. Que se refiera a una situación jurídicamente protegida. Que el daño sea antijurídico

3.- Nexo causal

Entendido como la relación de causalidad entre la actuación imputable a la administración y el daño causado.

En este orden de ideas no existe el nexo causal, si se tiene en cuenta que no puede la administración, particularmente la FISCALIA GENERAL DE LA NACION entrar a responder por el presunto daño inferido a la hoy demandante, pues los funcionarios de la Entidad, siempre obraron con diligencia en todo el trámite procesal de la investigación penal en contra del señor **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO** al adelantar la investigación por el delito de LAVADO DE ACTIVOS.

En efecto, **la medida de cautelar** de que fue víctima la hoy demandante, en el caso materia de la litis, no puede tildarse de “injusta” pues dicha medida estuvo fundada en pruebas que fueron legalmente aportadas a la investigación, y con ella no se vulneró ningún derecho fundamental, ajustándose la providencia que la determinó a las exigencias tanto de fondo como de forma que prevé la ley penal para el momento en que se profirió como quiera que, previo al señalamiento que hicieran en principio el informe de Policía Nacional de Vigilancia el 20 de septiembre de 2016 en el puesto de control y prevención del Municipio de Mallama corregimiento de Piedrancha, específicamente en la vía que de Junín conduce al corregimiento del pedregal a la altura del kilómetro 51 más 800 se realiza el pare del vehículo de placas CXP 985, tipo automóvil marca Renault línea Symbol, modelo 2008 color almagro, servicio particular, el que era conducido por el señor YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO y al solicitar el registro del auto motor se encuentra un compartimiento tipo caleta en el cual se halla un bolso de niña en cuyo interior se halla una arman de fuego tipo revolver calibre 38 marca Smith Weston con su respectiva carga de municiones y cinco paquetes envueltos en poliéster que un su interior llevaban dinero en una cantidad de 9.380 billetes de denominación $50.000 para un aproximado de ($469.000.000) por lo que procedieron a leer los derechos del capturado.

Por estos hechos se logró identificar e individualizar al conductor, y el dinero del hoy demandante, quien en su momento esto es el 20 de septiembre de 2016, fue decretada legal la captura y la incautación del dinero porque presuntamente tenía participación en la comisión del ilícito.

Ahora bien, el hoy demandante después del proceso de investigación que realizo mi representada logro demostrar la legalidad de la procedencia de los dineros y fueron exonerado de responsabilidad de los cargos que le profirió la Fiscalía por el delito de Lavado de activos, y a su vez suscribiendo preacuerdo con el conductor por el delito de Porte de Arma, por esta razón mi representada solicitó la preclusión de la investigación, por el delito de Lavado de activos como quiera que, pese a existir el señalamientos del informe de captura el flagrancia, el mismo por sí solo no constituiría un elemento probatorio contundente para continuar adicional a lo anterior se tuvo en cuenta las pruebas sobrevinientes que desdibujaron el delito de Lavado de activos; es decir en la investigación se logró probar que los dineros del demandante tenían procedencia licita y no tenía que ver con el ilícito lo que termino resultando aún más imposible sostener la acusación de conformidad con la prueba sobreviniente; en este sentido mi representad cumplió a cabalidad con la investigación, y no tiene nada que ver con el presunto daño causado al demandante debido a que la morosidad en la entrega del dinero no fue a consecuencia de alguna actuación de mi representada.

Por lo anterior, no puede afirmarse que la investigación haya sido injusta e injustificada, pues existían unos hechos reprochables y que en principio guardaron silencio y que por lo tanto debían ser investigados, adicionalmente por ser un delito de gran connotación no permite, por mandato legal, ningún beneficio, ni subrogado penal.

Sin embargo, si en el transcurso de la investigación y del proceso aparecen circunstancias que favorecen a los presuntos responsables de una conducta delictiva, ello no puede implicar directamente una investigación injusta que el Estado deba resarcir, pues precisamente en el procedimiento penal existen etapas que deben surtirse para el esclarecimiento de los hechos, y la obligación de la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados y como ente acusador, es la de investigar toda aquella conducta que revista las características de delito hasta el final.

Así expuesto, solicito comedidamente a usted denegar las súplicas de la demanda en razón a que a la Fiscalía General de la Nación no se le puede imputar la comisión de los hechos fundamento de la litis, por consiguiente no puede llegar a apreciarse lo inexistente como anormalmente deficiente, como quiera que mi representada, en el giro ordinario de su actividad, cumplió con los deberes que le impone la ley y sus reglamentos cuyo desconocimiento acarrearía consecuencias

desfavorables, tanto penales como disciplinarias, al funcionario que omite dicho mandato, omisión que iría en contra de la naturaleza estatal, pues para imputar responsabilidad a mi representada, es preciso combinar una serie de circunstancias previstas en el marco legal Colombiano, fundamentalmente el Artículo 90 de la Carta Política, una acción o una omisión, donde participe activamente uno de sus agentes; un daño, como consecuencia de lo anterior, y, un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño; lo que en el sub judice no se configura, ni mucho menos se prueba.

EXCEPCIONES DE MERITO

No obstante lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito proponer las siguientes siguiendo los sucesos, en el marco de los parámetros legales, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, se encuentra que el tan pregonado Daño antijurídico que se pretende demostrar no tuvo como causa eficiente actuación por parte de la Fiscalía General de la Nación por tal motivo propongo las siguientes excepciones.

- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL

En el expediente se encuentra demostrado que la incautación del bien tenía fundamento legal, dada la forma en que fue enviado y transportado el dinero, la suma que fue despachada, a lo que se adiciona que venía camuflado en un bolso de niña junto con una arma de fuego sin salvo conducto para portarla, como se hizo constar en el respectivo informe de policía nacional de captura el flagrancia, a lo que se agrega que quien procedió a remitir la encomienda fueron los mismos propietarios del dinero, quienes prometieron la conductor el pago de $300.000 pesos con el fin de transporta el dinero hasta el Municipio de Tumaco zona de gran afluencia delincuencial; razón por la cual era preciso y necesario que las autoridades ordenaran su incautación con fines de decomiso y que se iniciara la investigación penal correspondiente como efectivamente sucedió en este caso.

Se precisa que la dificultad que se presentó en la investigación penal obedeció al hecho de que la persona que alegaba ser la propietario del dinero debió demostrar la procedencia de ser licito y quien debió acreditar con documentos de contabilidad, documentos de créditos y demás con el fin de probaran las transacciones comerciales que demostrara la procedencia para dar como resultado la certeza sobre el derecho que les asistía.

No obstante, una vez que se logra acreditar que el demandante no cometió ninguna conducta típica y antijurídica y se logró determinar que efectivamente la actividad comercial a la que se dedicaba el demandante era lícita y que el dinero sí era de su propiedad, la Fiscalía General de la Nación procedió a solicitar la Preclusión de la investigación en su contra y a ordenar la devolución del dinero objeto de la medida

cautelar.

Así que entonces, tanto la investigación penal a que se vio sometida el demandante, como la devolución del dinero incautado fue producto del cumplimiento de los trámites legales.

***AUSENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN*.**

Tanto la demanda como de las pretensiones que le subyace, los hechos fueron impetrados sobre la base de un defectuoso funcionamiento del servicio por la actuación retardataria e injustificada de la entidad demandada que conllevó a la devolución de un dinero incautado.

Evento de responsabilidad que se predica de todas aquellas actuaciones judiciales que se suceden al interior del proceso y que en condiciones normales son necesarias para transportar adjetivamente una causa desde sus albores hasta su resolución o finalización.

En ese orden de ideas, la mora del proceso se comprende dentro del análisis de las posibles irregularidades que se pueden presentar al interior de un trámite determinado, e implica, en últimas, que la administración de justicia desatiende los términos previstos, más exactamente, el plazo razonable, noción que, como se verá, exige un examen contextualizado de las circunstancias propias de cada caso.

De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen por cuanto pueden existir factores que justifiquen por qué las decisiones en el plazo ocurrido, que en este caso se señalan como de 12 meses, aun cuando este no es posible, como se verá más adelante.

Para poder predicar la existencia de una dilación injustificada es importante establecer múltiples factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, "ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla"[1]

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "B", sentencia del 29 de febrero de 2016, exp.39.524, C. P. Danilo Rojas Betancourth. En dicha providencia igualmente se cita de la misma Corporación,

En esa línea de pensamiento, no existió falla en el servicio judicial, por el decomiso del dinero, ni cuando se colocó a disposición de la Fiscalía General de la Nación¸ ni cuando en un "término más o menos prolongado" se trató de establecer la veracidad de la propiedad alegada por los ahora demandantes y mucho menos cuando la FGN decidió agotar todo el procedimiento administrativo con el fin de obtener certeza respecto a la declaratoria de preclusión y la orden de la Fiscalía de entregar los dineros.

Los demandantes configuran la imputación del daño en la tardanza excesiva de la Fiscalía General de la Nación para resolver sobre la entrega definitiva del dinero.

En relación con la mora injustificada en el adelantamiento de la investigación penal y en la decisión de devolver el dinero, se advierte que aun cuando el dinero fue decomisado y que en la demanda se señala como fecha el 30 de mayo del año 2017 fecha en la cual se acepta el preacuerdo se ordena la devolución con sentencia del 29 de mayo de 2018 se hace efectiva la orden de devolución el 28 de agosto de 2018 no se puede desconocer que, en el interregno de esas fechas, la Fiscalía General de la Nación a través de su Delegada previamente a las fecha señaladas adelantó las acciones necesarias y razonables para la investigación del posible delito que se investigaba y logro demostrar la licitud del dinero.

En efecto, con las pruebas allegadas se demuestra que desde el momento en que se decomisó el dinero y hasta la fecha en que se ordenó su devolución, la Fiscalía General de la Nación profirió varias decisiones, recaudó pruebas y especialmente, resolvió las solicitudes presentadas por los ahora demandantes relacionadas con el dinero que alegaban era de su propiedad.

Así las cosas, observa que las acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación obedecieron a circunstancias que la obligaban a actuar como lo hizo y aun cuando se podría afirmar que entre la fecha en que se decomisó el dinero y el momento en que se impartió la orden de devolución del mismo transcurrió un tiempo considerable, es indiscutible que en ese lapso el aparato investigador estuvo en constante movimiento y en ningún momento se estableció una pasividad o negligencia que demostrara que el paso del tiempo fue injustificado.

Es necesario insistir que el término que se tomó la Fiscalía General de la Nación para ordenar la devolución del bien de propiedad de los ahora demandantes, no fue producto de una actuación irregular o negligente de los funcionarios a cargo, es más, encuentra su justificación en el adelantamiento exhaustivo de una investigación penal que sólo culminó cuando se acreditó adecuadamente que no se

---

Sección y Subsección, sentencia de 30 de octubre de 2013, Exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo

había cometido delito alguno, lo cual ocurrió en 30 de mayo de 2017 y, quiere decir que la FGN en tiempos razonables decidió el proceso penal, con lo cual los términos no fueron desconocidos de forma irracional e injustificada, y por lo tanto, no se vulneró un plazo razonable para decidir lo relacionado con al demandante. Y que no existe ninguna prueba aportada por la parte demandante que pruebe la omisión de mi representada en la investigación.

En todo caso, se advierte que en el asunto sub examine el daño no está debidamente acreditado, pues se demostró que el dinero de la demandante les fue devuelto, sin que se logre demostrar el impedimento de su uso y disfrute.

- CULPA DE LA VICTIMA.

En voces de la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (art. 2.357 Código Civil) si aquel contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño2.

Se tiene demostrado que el día 20 de septiembre del año 2016 la policía Nacional en la vía que conduce a Junín al Pedregal más exactamente en el Municipio de Mallama kilómetro 51 más 800 en operativo realizado por la Policía se incautó una maleta de niña que en su interior contenía una arma de fuego y 5 paquetes con dinero concretamente 9.380 billetes de $50.000 de para una suma de 469.000.000 millones de pesos, cuyo contenido que fue remitido por la vía al mar hasta el Municipio de Tumaco Nariño, zona de público conocimiento del alto grado de delincuencial y en principio no se sabía quién era el propietaria.

Dentro de ese contexto, se considera que la conducta de la parte actora contribuyó en la causación del daño. Pues el demandante voluntariamente decidió guardar silencio frente a la incautación del dinero allí contenido–, y ocultar claramente el contenido de las mismas, sentido en el cual se estima que la parte actora actuó de manera negligente porque prácticamente se desentendió del envío a su nombre, de tan considerable suma de dinero, dado que envió a un tercero en este caso el conductor del vehículo ocultando el verdadero contenido, lo cual claramente permitió que las autoridades, en este caso la policía de carretera, al percatarse del contenido del bolso de niña y ante la inexistencia en ese momento de su titular, confiscara la cantidad de dinero, todo ello, se itera, ante una evidente desatención de la parte

[2] Sentencias de 13 de septiembre de 1999, exp. 14.859 y de 10 de agosto de 2005, exp. 14.678. M.P. María Elena Giraldo Gómez; de septiembre 2 de 2009, exp. 18.011, entre otras decisiones.

actora en su condición de propietaria de ese valor y que a raíz de la investigación decide ponerse a disposición después de la incautación.

Así las cosas, se estima que la víctima directa del daño concurrió, con su actuar en la producción del daño, pues se precisa que en modo alguno resulta ajena a la manera cómo ocurrieron los hechos, o mejor, a la forma –nada inusual, ni ortodoxa– en la que se transportaba una suma de dinero tan cuantiosa, y en ese sentido se hace responsable de las acciones investigativas iniciadas aun cuando la investigación haya terminado con preclusión

INNOMINDA O GENERICA.

Solicito respetuosamente a su Señoría, se declare cualquier otra excepción de fondo y a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación que se encuentre probada de conformidad con el inciso 2 del artículo 187 de C.P.A.C.A.,

De otra parte, recordemos que nuestra Carta Política en su artículo 28 da autonomía, libertad e independencia al funcionario para interpretar los hechos sometidos a su conocimiento y así mismo aplicar las normas constitucionales y legales que juzgue apropiadas para resolver el conflicto, haciendo prevalecer el derecho sustancial.

Sean las anteriores razones suficientes por las que respetuosamente me permito solicitar a la Honorable Juez, se procure un fallo donde se señale que LA INCAUTACION DEL DINERO DEL SEÑOR GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, SE REALIZÓ POR LA EXISTENCIA DE PRUEBAS QUE EN SU MOMENTO JUSTIFICARON LA MEDIDA, Y QUE LA MORA EN LA ENTREGA NO ES UNA ACTUACION IRREGULARE EN CABEZA DE MI REPRESENTADA de igual forma se deniegue todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda.

PRUEBAS

- Documentales

Me permito anexar Pantallazo por medio del cual se solicita mediante derecho de petición informe Administrativo al por el Dr. HAMILTON LASSO MEDINA Fiscal 9 Especializada de Pasto. Con el fin de acreditar los argumentos de defensa en favor de mi representada, de las razones jurídicas de las decisiones tomadas en el caso bajo estudio y de la razonabilidad de los tiempos y el procedimiento adelantado.

Con dicho informe se pretende demostrar las excepciones propuestas por la entidad.

Por lo que solicito Honorable Magistrado por medio de oficio proferido por su Despacho se remita al señor Fiscal 9 Especializado de Pasto la consecución del recaudo del Informe Administrativo ya que he cumplido con la solicitud a través de derecho de petición.

ANEXOS

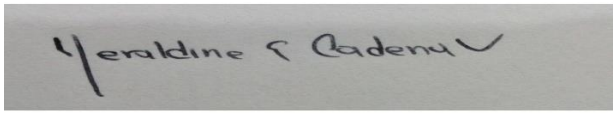
Acompaño al presente memorial los siguientes:

- Poder para actuar.
- copia de la Resolución No. 0 - 0303 de 20 de marzo de 2018 (Por medio de la cual se organiza administrativamente la Dirección Jurídica y se dictan otras disposiciones).
- Pantallazo derecho de petición Fiscal 9 Especializado de Pasto.

NOTIFICACIONES

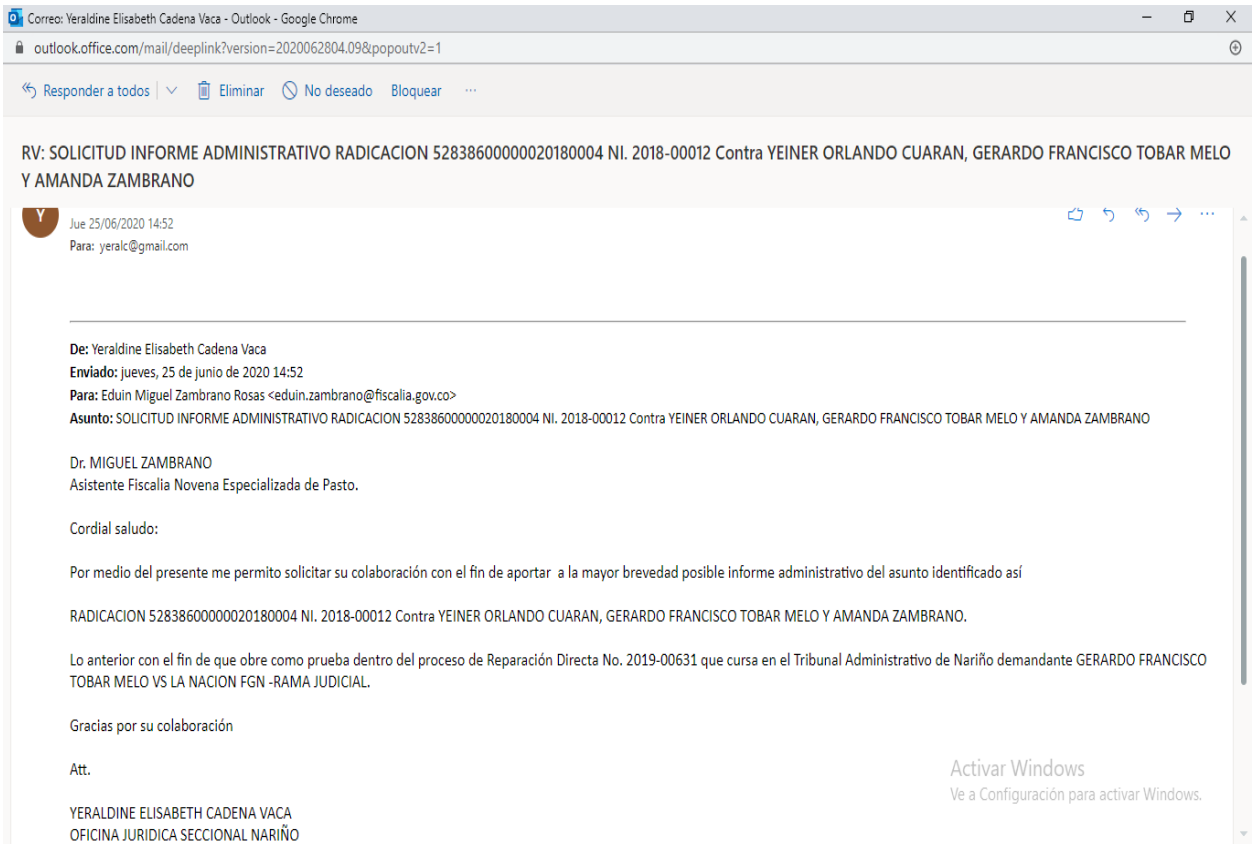
Las recibiré en la Carrera 22 No. 19-47, Piso 4 Torre B del Edificio Milán, de esta ciudad, oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación Seccional Nariño o en la Secretaría del despacho. Correos para notificaciones judiciales: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y en el yeraldine.cadena@fiscalia.gov.co

Del Señor Juez.



Escaneado con CamScanner

YERALDINE ELISABETH CADENA VACA
C. C. 37.008.883 de Ipiales
T. P. No. 120.261 C. S. de la J.


Correo: Yeraldine Elisabeth Cadena Vaca - Outlook - Google Chrome
outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020062804.09&popoutv2=1
Responder a todos
Eliminar
No deseado
Bloquear
RV: SOLICITUD INFORME ADMINISTRATIVO RADICACION 52838600000020180004 NI. 2018-00012 Contra YEINER ORLANDO CUARAN, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y AMANDA ZAMBRANO
Y
Jue 25/06/2020 14:52
Para: yeralc@gmail.com
De: Yeraldine Elisabeth Cadena Vaca
Enviado: jueves, 25 de junio de 2020 14:52
Para: Eduin Miguel Zambrano Rosas <eduin.zambrano@fiscalia.gov.co>
Asunto: SOLICITUD INFORME ADMINISTRATIVO RADICACION 52838600000020180004 NI. 2018-00012 Contra YEINER ORLANDO CUARAN, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y AMANDA ZAMBRANO
Dr. MIGUEL ZAMBRANO
Asistente Fiscalia Novena Especializada de Pasto.
Cordial saludo:
Por medio del presente me permito solicitar su colaboración con el fin de aportar a la mayor brevedad posible informe administrativo del asunto identificado así
RADICACION 52838600000020180004 NI. 2018-00012 Contra YEINER ORLANDO CUARAN, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y AMANDA ZAMBRANO.
Lo anterior con el fin de que obre como prueba dentro del proceso de Reparación Directa No. 2019-00631 que cursa en el Tribunal Administrativo de Nariño demandante GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO VS LA NACION FGN -RAMA JUDICIAL.
Gracias por su colaboración
Att.
YERALDINE ELISABETH CADENA VACA
OFICINA JURIDICA SECCIONAL NARIÑO
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Honorable Magistrado
TRIBUNAL CONTENCIOSO AMDINISTRATIVO DE NARIÑO
E.S.D.

MEDIO DE CONTROL: **REPARACION DIRECTA**
DEMANDANTE: **GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y OTROS**
RADICADO: **52001233300020190063100**

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO, domiciliada en la Ciudad de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.881.383 de Arjona – Bolívar, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, debidamente designada mediante Oficio 20181500002733 del 04 de abril de 2018, en los términos de la delegación efectuada por el Señor **FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN**, mediante el artículo octavo de la Resolución N° 0-0303 del 20 de marzo de 2018, documentos que anexo al presente escrito, atentamente manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctora **YERALDINE ELISABETH CADENA VACA**, abogada identificada con la C.C. No. 37.008.883, Tarjeta Profesional No. 120.261 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, en el proceso de la referencia.

La Doctora **YERALDINE ELISABETH CADENA VACA** queda investida de las facultades consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso y en especial para, sustituir, conciliar total o parcialmente, recibir, presentar recursos ordinarios y extraordinarios y en general para adelantar las diligencias tendientes al cabal desarrollo del presente mandato.

Solicito respetuosamente se reconozca personería a la Doctora **YERALDINE ELISABETH CADENA VACA** en los términos y para los fines que confiere el presente poder.

De Usted,

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Coordinadora Unidad de Defensa Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos

Acepto:

Yeraldine E Cadena V

YERALDINE ELISABETH CADENA VACA
C. C. No. 37.008.883
T. P. No. 120.261 del C. S. de la J.

SECRETARIA NACIONAL DE FISCALIA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA. Bogotá. D.C.,

17 DE FEBRERO DE 2020 En la fecha se deja constancia que el anterior escrito fue presentado personalmente por su signataria Doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, Coordinadora Unidad de Defensa Jurídica, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación para tal efecto exhibe la C.C. 30.881.383 de Arjona – Bolívar. **Conste...**

SECRETARIO

Elaboró Rocio Rojas R.-

EK 2110462

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

RESOLUCIÓN No. 0- 0863

18 MAR. 2016

"Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad"

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN,

En uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 251, numeral 2°, de la Constitución Política y en los artículos 4°, numeral 22, del Decreto Ley 016 de 2014 y 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

CONSIDERANDO

Que el Fiscal General de la Nación tiene competencia constitucional y legal para nombrar y remover a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el numeral 22 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014 faculta al Fiscal General de la Nación para nombrar y remover al Vicefiscal General de la Nación y demás servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el Decreto Ley 017 de 2014 define los niveles jerárquicos, modifica la nomenclatura y establece las equivalencias y requisitos generales para los empleos de la Entidad.

Que la resolución 0-0470 del 2 de abril de 2014, modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los Empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y establece otras disposiciones.

Que el parágrafo 1 del artículo 2° del Decreto Ley 018 de 2014 establece que el Fiscal General de la Nación distribuirá los cargos de las plantas en cada una de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la entidad.

Que el artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014, señala las clases de nombramientos al interior de la entidad, disponiendo en el numeral 3 como uno de ellos la provisionalidad *"Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal cuando el titular no este percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa. // Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección".*

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la resolución 0-0787 del 9 de abril de 2014, el Despacho del Fiscal General de la Nación, verificó que la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO,** cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que de acuerdo con el Decreto Ley 018 de 2014, el empleo en el que se nombra a la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO,** pertenece a la planta global del área Administrativa y será ubicado en la Dirección Jurídica, por necesidades del servicio.

Que en mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Nombrar en provisionalidad en el cargo de **PROFESIONAL EXPERTO** en **la Dirección Jurídica** a la doctora ****SONIA MILENA TORRES CASTAÑO,** con cédula de ciudadanía No. **30.881.383.**

ARTÍCULO 2°. El nombramiento deberá ser comunicado a la interesada por el Departamento de Administración de Personal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo, para que, dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la comunicación, manifieste su decisión, y deberá tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aceptación.

ARTÍCULO 3°. La nombrada tomará posesión del cargo ante el **Subdirector de Talento Humano o el Jefe del Departamento de Administración de Personal,** acreditando que reúne los requisitos exigidos para tal efecto.

ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 18 MAR. 2016

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Angela Viviana Mendoza Barbosa		16 de marzo de 2016
Revisó	Shelly Alexandra Duarte Rojas		16 de marzo de 2016
Aprobó	Rocio del Pilar Forero Garzón		16 de marzo de 2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

000542

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 5 de Abril de 2016, se presentó en el Departamento de Administración de Personal de la Subdirección Nacional de Talento Humano, la señora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 30.881.383,** con el fin de tomar posesión del cargo de **PROFESIONAL EXPERTO,** en la Dirección Jurídica, nombramiento efectuado mediante Resolución **No. 0-0863** del 18 de marzo de 2016.

Prestó el juramento de rigor conforme a los preceptos legales, por cuya gravedad se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes que el cargo le impone. Igualmente, se le enteró del artículo 6o. de la Ley 190 de 1995.

Para esta posesión se presentó la siguiente documentación:

- Carta de Aceptación
- Certificado Antecedentes de Policía Nacional
- Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Procuraduría
- Certificado de Deudores Morosos
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados
- Copia de la Tarjeta Profesional

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

NELBI YOLANDA ARENAS HERREÑO
Jefe Departamento Administración de Personal (E)

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Posesionada

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE LA COPIA QUE REPOSA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

DRL/ Leticia Beltrán R.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No. 0 0303
20 MAR. 2018

"Por medio de la cual se establece la organización interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos y se dictan otras disposiciones"

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de las facultades otorgadas por el Decreto Ley 016 del 9 de enero de 2014, en especial de las conferidas en los numerales 2, 19, 25 y el parágrafo del artículo 4°, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 19 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, otorgó al Fiscal General de la Nación la facultad de "[e]xpedir reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación".

Que el numeral 25 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, facultó al Fiscal General de la Nación para "[c]rear, conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités, unidades y grupos internos de trabajo que se requieran para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación".

Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, expedido en desarrollo de las facultades otorgadas al Presidente de la República por medio del Acto Legislativo 001 de 2016, se reformó la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos derivados del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Que el artículo 30 del Decreto Ley 898 de 2017 modificó el artículo 9° del Decreto Ley 016 de 2014 y definió las funciones a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación.

Que en virtud de lo anterior es necesario establecer la organización interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos, conforme a los principios que rigen la Administración Pública, a efectos de cumplir con el objeto para el cual fue creada y permitir que su gestión sea ágil, eficiente y oportuna.

Que el artículo 45 del Decreto Ley 016 de 2014 establece que el Fiscal General de la Nación tiene competencia para organizar Departamentos, Unidades y Secciones, así como señalarle sus funciones, atendiendo entre otros principios al de racionalización del gasto, eficiencia, fortalecimiento de la gestión administrativa y mejoramiento de la prestación del servicio. Las jefaturas de Unidades y Secciones serán ejercidas por el servidor de la Fiscalía General de la Nación a quien se le asigne la función.

Que por lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

ARTÍCULO PRIMERO. La Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá la siguiente organización interna:

1. Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos.
   1.1.Secretaría Común y Apoyo a la Gestión

2. Unidad de Defensa Jurídica.
   2.1. Sección de lo Contencioso Administrativo.
   2.2. Sección de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios.
   2.3. Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.

3. Departamento de Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual.
   3.1. Sección de Jurisdicción Coactiva.
   3.2. Sección de Competencia Residual.

4. Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales.
   4.1. Sección de Conceptos y Control de Legalidad.
   4.2. Sección Asuntos Constitucionales y Relatoría.

PARÁGRAFO. Las funciones asignadas a la Dirección de Asuntos Jurídicos por el artículo 9° del Decreto Ley 016 de 2014 modificado por el artículo 30 del Decreto Ley 898 de 2017, desarrolladas en la presente Resolución, serán distribuidas por el Director(a) de esta dependencia en el Departamento, Unidades y Secciones determinados en este artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos. Al Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos le corresponde dirigir, articular, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones establecidas para la dependencia en el artículo 9° del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 30 del Decreto Ley 898 de 2017.

ARTÍCULO TERCERO. Unidad de Defensa Jurídica. La Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos cumplirá las siguientes funciones:

1. Proponer para la aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos acciones y políticas de estrategia para la adecuada defensa jurídica de la Entidad en los procesos en los que la Fiscalía General de la Nación sea parte o interviniente.
2. Ejercer la representación jurídica y la defensa técnica de la Fiscalía General de la Nación en los procesos extrajudiciales, judiciales y administrativos en los que la Entidad sea parte o interviniente procesal, de acuerdo con la delegación contenida en este acto administrativo.
3. Coordinar la labor de defensa técnica de la Entidad que cumplen los servidores de la Dirección de Asuntos Jurídicos con ubicación laboral en las Direcciones Seccionales conforme a las directrices impartidas por el Director(a) de Asuntos Jurídicos.
4. Proponer y sustentar para aprobación del Comité de Conciliación de la Entidad, las políticas de prevención del daño antijurídico, con fundamento en los procesos en que es parte la Entidad.
5. Adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Comité de Conciliación de la Entidad.
6. Revisar las actas del Comité de Conciliación las cuales serán suscritas por el Presidente, el Director (a) de Asuntos Jurídicos y el Secretario (a) Técnico que hayan asistido a la respectiva sesión.
7. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las sentencias judiciales en las que la Fiscalía General de la Nación tiene la calidad de parte o interviniente.
8. Coordinar y tramitar los reintegros ordenados por autoridades judiciales y elaborar el proyecto de acto administrativo para aprobación del Director (a) de Asuntos Jurídicos y posterior firma del Fiscal General de la Nación. Para el efecto, la Subdirección de Talento Humano será encargada de remitir la información de su competencia, necesaria para el cabal cumplimiento de este trámite.
9. Coordinar para la aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos, la elaboración del protocolo de reparto de expedientes, asignación de turno y seguimiento al rubro de pago de sentencias y conciliaciones, con estricto cumplimiento de los requisitos legales en aras de garantizar el derecho de turno de los peticionarios, así como de los principios de objetividad y transparencia.
10. Adelantar el trámite correspondiente para la expedición del acto administrativo de reconocimiento y pago de sentencias y conciliaciones, previa liquidación por parte de la Subdirección Financiera y someter a la aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos las resoluciones que materializan el cumplimiento de la obligación para la posterior firma del Director Ejecutivo.
11. Elaborar para firma del Director (a) de Asuntos Jurídicos, el proyecto de respuesta a las solicitudes de extensión de jurisprudencia.
12. Presentar para aprobación y suscripción del Director(a) de Asuntos Jurídicos los informes contables correspondientes a esta Unidad.
13. Rendir informes periódicos de las funciones a cargo al Director(a) de Asuntos Jurídicos, con destino al Despacho del Fiscal General de la Nación.

14. Las demás que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y el Director(a) de Asuntos Jurídicos.

ARTÍCULO CUARTO. Defensa Jurídica a Nivel Departamental y Municipal. La Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación en los procesos en los que es parte o interviniente ante los despachos administrativos y judiciales distintos a los ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., estará apoyada por los servidores de la Dirección de Asuntos Jurídicos con ubicación laboral en las Direcciones Seccionales, quienes cumplirán las siguientes funciones:

1. Asumir la representación de la Entidad dentro de los procesos prejudiciales, judiciales y administrativos en los que tenga la calidad de parte o interviniente, en los eventos en que el Director(a) de Asuntos Jurídicos o el Coordinador de la Unidad de Defensa Jurídica así lo dispongan mediante poder.
2. Realizar seguimiento a las actuaciones y reportar a la Secretaría Común de la Dirección de Asuntos Jurídicos las novedades dentro de los procesos prejudiciales, judiciales y administrativos en los que la Entidad tenga la calidad de parte o interviniente y que se adelanten en la ciudad o municipios comprendidos por la correspondiente Dirección Seccional.
3. Remitir oportunamente a la Secretaría Común de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en físico y/o en medio magnético, los documentos correspondientes a todas las actuaciones surtidas o pendientes por atender dentro de los procesos prejudiciales, judiciales y administrativos en los que la Entidad tenga la calidad de parte o interviniente.
4. Elaborar y remitir, dentro de los términos establecidos por el Comité de Conciliación de la Entidad, a la Secretaría Técnica del Comité, los estudios jurídicos a que haya lugar, en los procesos judiciales, prejudiciales y administrativos en los que la Entidad ostente la calidad de parte o interviniente.
5. Atender con carácter prioritario los requerimientos de información que se les formulen desde el Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos o de la Unidad de Defensa Jurídica para la adecuada defensa de los intereses de la Entidad en los procesos en los que es parte o interviniente.
6. Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General de la Nación, el Director(a) de Asuntos Jurídicos y/o el Coordinador(a) de la Unidad de Defensa Jurídica.

PARÁGRAFO PRIMERO. En las ciudades o municipios en donde la Dirección de Asuntos Jurídicos no cuente con servidores para el desarrollo de las funciones de defensa asignadas, las Direcciones Seccionales designarán los servidores que se requieran.

ARTÍCULO QUINTO. La expedición de los actos administrativos que definen las situaciones administrativas de los servidores adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos con ubicación laboral en las Direcciones Seccionales, corresponderá al servidor competente para el efecto previa aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos.

ARTÍCULO SEXTO. Departamento de Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual. El Departamento de Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual de la Dirección de Asuntos Jurídicos cumplirá las siguientes funciones:

1. Adelantar el procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, conforme a la regulación propia de la materia, a la reglamentación interna y a las directrices que imparta el Director(a) de Asuntos Jurídicos. En desarrollo de esta función, el Coordinador del Departamento ejercerá en nombre de la Fiscalía General de la Nación la facultad ejecutora de las obligaciones creadas a su favor y podrá declarar de oficio o a solicitud de parte, la prescripción de las obligaciones ejecutadas a través del procedimiento de cobro coactivo.
2. Adelantar la defensa judicial de la Entidad, en los procesos iniciados con ocasión al ejercicio del procedimiento de cobro coactivo.
3. Representar judicialmente a la Entidad en los procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria y/o en las acciones ejecutivas que se promueven en la jurisdicción contencioso administrativa, en los que es parte o interviniente procesal.
4. Elaborar y sustentar ante el Comité de Conciliación de la Entidad, los estudios jurídicos en los que se analice la procedencia de la acción de repetición.
5. Representar judicialmente a la Entidad en los procesos que se adelanten por el medio de control de repetición cuya procedencia determine el Comité de Conciliación de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de recuperar los valores pagados por la Entidad como consecuencia de sentencias condenatorias o acuerdos conciliatorios aprobados.
6. Constituirse como víctima dentro de los procesos penales, previo estudio de la pertinencia de hacer a la Entidad parte en el proceso conforme a los antecedentes del mismo, para participar en el incidente de reparación integral a efecto de obtener una indemnización económica a favor de la Fiscalía General de la Nación.
7. Rendir informes periódicos de las funciones a cargo al Director(a) de Asuntos Jurídicos, con destino al Despacho del Fiscal General de la Nación.
8. Las demás que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y/o el Director (a) de Asuntos Jurídicos.

PARÁGRAFO. La Dirección de Asuntos Jurídicos podrá requerir la colaboración de las dependencias de la Entidad en el desarrollo de las actividades propias de los procesos asignados a este Departamento, la cual deberá ser prestada de manera prioritaria por el servidor requerido.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales. La Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos cumplirá las siguientes funciones:

1. Proyectar los conceptos que sean requeridos por las distintas dependencias sobre temas institucionales para mantener la unidad de criterio jurídico en la Fiscalía General de la Nación para posterior firma del Director(a) de Asuntos Jurídicos.
2. El servidor (a) que se designe como coordinador de esta Unidad podrá emitir conceptos y responder peticiones ciudadanas en los asuntos que determine el Director (a) de Asuntos Jurídicos.
3. Apoyar el estudio, análisis de constitucionalidad y seguimiento al trámite de los proyectos de ley y actos legislativos que cursen ante el Congreso de la República, sobre materias que tengan incidencia en la Entidad, en aquellos eventos que determine el Despacho del Fiscal General de la Nación.
4. Elaborar los proyectos de actuaciones ante la Corte Constitucional de interés para la Entidad cuando el Fiscal General de la Nación así lo disponga.
5. Efectuar la revisión de anteproyectos, proyectos de ley y demás documentos solicitados por el Despacho del Fiscal General de la Nación.
6. Ejercer la representación de la Entidad, en los procesos constitucionales en los que la Entidad sea parte o interviniente procesal que no sean competencia de otra dependencia.
7. Preparar para la firma del Director (a) de Asuntos Jurídicos los informes requeridos por la Corte Constitucional en autos de seguimiento, asignados por el Despacho del Fiscal General de la Nación.
8. Realizar el control de legalidad de los actos administrativos requeridos por las dependencias de la Entidad.
9. Revisar para consideración y aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos, los documentos, estudios y directivas que solicite el Despacho del Fiscal General de la Nación para la definición y formulación de políticas, lineamientos y directrices de interpretación en los temas constitucionales y legales que afecten o involucren los objetivos misionales de la Fiscalía General de la Nación.
10. Elaborar los boletines de relatoría de jurisprudencia relevante para las labores de la Entidad y casos exitosos sobre buenas prácticas en el ejercicio de la función de investigación y acusación de la Entidad, y organizar su publicación.
11. Rendir informes periódicos de las funciones a cargo al Director(a) de Asuntos Jurídicos, con destino al Despacho del Fiscal General de la Nación.
12. Las demás que le sean asignadas por el Director (a) de Asuntos Jurídicos y/o el Fiscal General de la Nación.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

"Por medio de la cual se establece la organización interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos y se dictan otras disposiciones"

CAPÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO OCTAVO. Delegaciones Especiales. Delegar en el Director(a) de Asuntos Jurídicos y en el Coordinador (a) de la Unidad Defensa Jurídica, la facultad de otorgar poder para ejercer la representación de la Fiscalía General de la Nación en los procesos judiciales, extrajudiciales, prejudiciales, administrativos en los que sea parte la Entidad conforme a lo previsto en el artículo 77 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.

ARTÍCULO NOVENO. Los procesos que cursen en los despachos judiciales y administrativos del país, podrán ser atendidos por funcionarios distintos a los servidores adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos con ubicación laboral en las Direcciones Seccionales, cuando el Director(a) de Asuntos Jurídicos, por necesidades del servicio, así lo determine mediante poder.

ARTÍCULO DECIMO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente la Resolución No. 0-2570 de 2017 y deroga las Resoluciones Nos. 0-0582 de 2014, 0-0257 de 2015 y 0-4117 de 2016, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 MAR. 2018

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

CONTESTACION DEMANDA 2019-00631 DEMANDANTE GERARDO FRANCISCO TOBAR Y OTROS VS NACION FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO

Y

Yeraldine Elisabeth Cadena Vaca <yeraldine.cadena@fiscalia.gov.co>
Vie 10/07/2020 8:36 AM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

y 2 más

contesta demanda GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO 2019-631 MORA ENTREGA DINERO-convertido.pdf
400 KB

DERECHO DE PETICION FISCALIA 9 ESPECIALIZADA PASTO-convertido.pdf
66 KB

PODER 2019-631.pdf
111 KB

NOMBRAMIENTO-SONIA TORRES.pdf
108 KB

POSESION-EXPERTO SONIA.pdf
84 KB

RES-0303.pdf
644 KB

6 archivos adjuntos (1 MB)Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Honorable Magistrado.
EDGAR GUILLERMO CABRERA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NARIÑO.
E. S. D.

REF:
RADICADO: 2019 - 00631
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y OTROS
DEMANDADO: NACION – RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

CONTESTACION DEMANDA

Atentamente

YERALDINE ELISABETH CADENA VACA
SECCIONAL NARIÑO

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la

Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

DESAJPAO20-612
Pasto, julio 7 de 2020

Doctor:
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
Magistrado Tribunal Administrativo de Nariño
E. S. D.

Ref. Acción o Medio de Control: Reparación Directa
Proceso No. **2019-00631-**00
Demandante: GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

HÉCTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.958.663 expedida en Yacuanquer (N) y con Tarjeta Profesional de abogado No. 199.955 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL en el proceso de la referencia, de conformidad con memorial poder otorgado al suscrito por el señor Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, como representante judicial de la Nación Rama Judicial, en concordancia con el numeral 7º del artículo 103 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia –Ley 270 de 1996- y dentro de la oportunidad procesal de que tratan los artículos 175, 197, 199 y 200 de la Ley 1437 de 2011, me permito presentar escrito de contestación de la demanda.

La defensa de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se sustenta desde los siguientes argumentos:

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

La defensa de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial **debe oponerse a todas y cada una de las pretensiones de la demanda**, por cuanto **no** existe responsabilidad administrativa o patrimonial de la Entidad que represento, ni de ninguno de sus agentes, que se derive de los hechos descritos por la parte demandante y que constituyen el fundamento fáctico de la reclamación ejercida por la parte actora.

Tampoco para el presente caso, resulta válido edificar una condena por perjuicios materiales (lucro cesante) basado en meras conjeturas, más cuando el demandante para la época de los hechos, según se evidencia en los certificados de matrícula mercantil anteriores al 2018 no ejercía como actividad comercial la denominada transporte de carga por carretera, actividad que se presume era la que realizaría con la supuesta adquisición de las volquetas. De las que tampoco existe prueba, o por lo menos en el traslado entregado a ésta entidad, no consta contrato de compraventa o documento equivalente que dé cuenta de la realización de dicho negocio.

Lo que en el sub judice salta a simple vista es la existencia de una eximente de responsabilidad, denominada culpa exclusiva de la

víctima, en tanto, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, fue negligente en el cuidado y transporte del dinero incautado por parte de las autoridades, pues él mismo confió a una tercera persona que no contaba con la experiencia necesaria ni se dedicaba a la labor de transporte y custodia de divisas, por lo que fue capturado en situación de flagrancia portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad correspondiente y sin contar con documentación idónea que dejara vislumbrar la proveniencia legal del dinero.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA

En consideración a que los hechos que se narran como fundamento de la demanda de reparación directa, aducen el trámite de la investigación de un proceso penal donde se ven involucrados diferentes instancias judiciales; por lo que a la defensa de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial **no** le corresponde negar o afirmar la veracidad de tales consideraciones fácticas, sino que éstas deberán probarse en el curso del presente proceso.

Ahora bien, como previsto está en el artículo 175 numeral 2° del C.P.A.C.A., que en la contestación de la demanda, deberá efectuarse un *pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda*, es lo pertinente indicar a su Señoría que la defensa de ésta Entidad comprende el marco fáctico por el cual se fundamenta la presente reclamación contenciosa administrativa y en todos los hechos referidos se esgrime posiciones y puntos de vista propios del actor, los cuales deberá probar en el trascurso del *sub judice* con la suficiencia debida, para ser considerados como verdaderos.

Así entonces, como pronunciamiento sobre las pretensiones y hechos de la demanda, la defensa de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá oponerse a que en sede judicial se acceda a la reclamación contenciosa ejercida en su contra, puesto que esta Entidad, a través de sus agentes judiciales (Jueces de la República) desempeñó un deber funcional jurisdiccional de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de 1991 y el ordenamiento jurídico vigente para el momento de los hechos que fundamentan la presente acción judicial.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA

La responsabilidad del Estado por daños ocasionados por sus agentes judiciales en el ejercicio de la administración judicial, está regulada en la Ley 270 de 1996, ley estatutaria de la administración de justicia, en cuyo artículo 65 establece: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales"*. La misma disposición establece que los títulos de imputación por los cuales se podrá estudiar la responsabilidad del Estado en estos casos son: i) privación injusta de la libertad, ii) error jurisdiccional y iii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Respecto al título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, señala que quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. El Consejo de Estado ha indicado que la responsabilidad por el

defectuoso funcionamiento de la justicia se enmarca en la teoría general de la falla del servicio. Por lo tanto, es necesario probar esta última y acreditar la existencia del daño antijurídico, para deducir la responsabilidad patrimonial de la administración,

La falla del servicio es un título jurídico de imputación para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es esta el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) así, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado entonces, la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad. Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.

Con fundamento en lo anterior, se debe establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos para que se pueda declarar la responsabilidad de la Administración por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a la demora en la devolución de los dineros que fueron incautados a YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO el 20 de septiembre de 2016 y que eran de propiedad de GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO.

Es necesario recalcar que la génesis del proceso penal que involucró al ahora demandante y que llevó a la incautación del dinero ocurrió a raíz del hallazgo que perpetraron los funcionarios de la Policía Nacional, quienes el 20 de septiembre de 2016, en puesto de control y vigilancia apostado en el municipio de Mallamá (N), detuvieron un automotor de placas CXP985 conducido por YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, y tras la inspección y/o verificación del mismo, encontraron un arma de fuego tipo revolver, así como 9.380 billetes de denominación de $ 50.000 para un total de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS. Que YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, al no presentar un salvoconducto que acreditara el porte del arma, como tampoco documentación que acreditara la proveniencia legal del dinero, la autoridad policiva procedió a darle captura, así como incautar el dinero y el arma de fuego. En ese sentido, encontramos que los presupuestos legales del artículo 83 de la Ley 906 de 2004, se cumplieron, por ello, en audiencias preliminares celebradas el 21 de septiembre de 2016 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Túquerres (N), se decretó la legalidad del procedimiento de incautación.

Por otro lado, encontramos que el ahora demandante FRANCISCO GERARDO TOBAR MELO, fue vinculado a la investigación penal, fruto de las declaraciones rendidas por YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, que lo situaban como propietario del dinero incautado, en ese sentido, la Fiscalía General de la Nación, estimó de forma razonada que TOBAR MELO, podría ser autor o participe de un delito de lavado de activos, lo mismo ocurrió con la señora AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ.

Tras la aceptación de cargos vía preacuerdo por parte de YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, la Fiscalía, el 21 de febrero de 2018 optó por peticionar la preclusión de la investigación por el punible de lavado de activos en contra de FRANCISCO TOBAR MELO, AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ y YEINER ORLANDO CAUARAN ZAMBRANO, ya que logró recaudar elementos materiales probatorios que explicaban el origen lícito del dinero incautado, así como también logró, explicar la razón del transporte del peculio por parte de CUARAN ZAMBRANO, lo anterior debido a que FRANCISCO TOBAR MELO, **estimaba** realizar la compra de dos (2) volquetas, cuya entrega se había pactado en el corregimiento de la Espriella del Municipio de Tumaco, y donde el vendedor supuestamente le exigió que el pago se hiciera en efectivo en la cuantía incautada. Así, TOBAR MELO, recurrió a AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ quien accedió a transportar el dinero hasta el lugar indicado por el precio de $ 600.000, valiéndose para ello de su familiar YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, quien en la fecha indicada salió desde la ciudad de Pasto y para seguridad suya, así como la de la encomienda, decidió llevar consigo un arma de fuego.

Tras radicación de escrito de preclusión por parte del delegado Fiscal, el 21 de febrero de 2018, el Juzgado Primero Penal Especializado de Pasto, programó en tres ocasiones la realización de la respectiva audiencia, esto es, para el 30 de abril, 21 de mayo y para el 29 de mayo de 2018, data en la cual se efectivizó la dista pública, emitiéndose la correspondiente sentencia, en la que resolvió, entre otras, la devolución definitiva del dinero incautado. Orden que se efectivizó por el delegado fiscal el 28 de agosto de 2018.

En ese entendido, encontramos que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, mediante proveído del 29 de mayo de 2016, dentro del radicado No. 41727600000020180004 emitió sentencia de preclusión a favor de YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO y AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ, por el delito de lavado de activos. Así mismo, ordenó a la Fiscalía General de la Nación, la entrega definitiva del dinero incautado equivalente a $ 469.000.000 a GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO. Es así que, a folio 35 del expediente obra oficio CSA-SPA-J1 2.234 del 22 de junio de 2018, suscrito por el Secretario del Centro de Servicios administrativos de los Juzgados Penales Especializados de Pasto, dirigido al Fiscal Noveno Especializado, donde le remite copia de la sentencia de preclusión dictada dentro del radicado 52838600000201800004 y solicita se dé cumplimento a lo ordenado por la judicatura en lo atinente a la devolución del dinero incautado y de propiedad de Gerardo Francisco Tobar Melo.

Ahora bien, aclarado el caso, resulta relevante constatar si efectivamente se cumplen los requisitos para que el Tribunal Administrativo pueda emitir una condena en contra de la Rama Judicial-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto-Mocoa,

por FALLA EN EL SERVICIO, aclarando que, para este defensor, no le asiste responsabilidad a mi defendida, en tanto, la demora en la devolución debe ser calculada, desde el momento en que quedó en firme la decisión de devolución y no antes, en ese sentido:

1. FRENTE AL RETARDO:

1.1. En el procedimiento de Incautación y emisión de la orden de devolución del dinero.

El proceso de incautación u ocupación de bienes se encuentra enmarcado en los artículos 83 y 84 del CPP, vinculando a dicho trámite en un inició, a la Policía Judicial y a la FGN, ente que tiene el deber de legalizar el procedimiento surtido hasta antes de 36 horas de efectuado ante un Juez de Control de Garantías. La función de la Rama Judicial a través del Juez de control de garantías, en audiencias de legalización de incautación se limita a establecer si el procedimiento realizado por la autoridad policiva estuvo acorde con los lineamientos constitucionales y si sobre los bienes puestos a su consideración existen inferencia de que provengan de la comisión de delitos dolosos.

Así también, al Juez le corresponde emitir decisión sobre la SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, bajo el tenor de que en audiencia de la formulación de imputación el fiscal solicite el decreto de dicha suspensión con fines de comiso, la cual, según la normatividad legal se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución (Art. 85 CPP).

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que en el caso bajo estudio, las audiencias de control de garantías de legalización de captura e incautación, imputación y medida de aseguramiento, se llevaron a cabo el 21 de septiembre de 2016, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Túquerres, diligencias en las cuales, se legalizó la incautación con fines de comiso y se suspendió el poder dispositivo sobre los bienes incautados a YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO. Por otro lado, ya en etapa de Juzgamiento, obra dentro de las copias trasladadas, documentos que dan cuenta que la FGN, radicó solicitud de preclusión de la investigación el 21 de febrero de 2018 ante el Juzgado Primero Penal Especializado, despacho que programó en tres (3) ocasiones la respectiva audiencia, emitiendo el 29 de mayo de 2018, la orden definitiva de devolución del dinero, así como la preclusión de la investigación por el delito de lavado de activos.

Como se aprecia no se puede endilgar retardo en las actuaciones de la Rama Judicial, puesto que los términos son prudentes y se apegan a la duración máxima expuesta en el artículo 317 del CPP y demás normas concordantes.

1.2. En la devolución del dinero incautado. -

El 29 de mayo de 2018, el Juzgado Primero Penal Especializado de Pasto, emitió orden directa a la Fiscalía General de la Nación de la entrega definitiva de $469.000.000 a GERARDO TOBAR MELO, esto es, a partir de la ejecutoria de dicha providencia, que entre otras, ocurrió en esa misma data. Por lo que la materialización de la orden de entrega le correspondía exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, orden judicial que fue recordada a la Entidad Investigadora a través del oficio CSA-SPA-J1 2.234 del 22 de junio de 2018, suscrito por el Secretario del Centro de Servicios administrativos de los Juzgados

Penales Especializados de Pasto, donde se remitió copia de la sentencia de preclusión dictada dentro del radicado 52838600000201800004 y se solicitó se dé cumplimento a lo ordenado por la judicatura en lo atinente a la devolución del dinero incautado y de propiedad de Gerardo Francisco Tobar Melo.

Ahora, de encontrarse retardo en este trámite, corresponderá al Ente Fiscal rendir las explicaciones del caso.

2. FRENTE A LA IRREGULARIDAD: Dicho elemento debe ser descartado, en el entendido que las actuaciones de la Rama Judicial, se apegaron a los lineamientos normativos, bajo el entendido de que la decisión de legalizar la incautación de los bienes, así como suspender el poder dispositivo sobre los mismos, se motivaron acorde con lineamientos legales y EMP aportados por la ente acusador, amén de que YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, al momento de ser requerido por la autoridad no portaba salvoconducto del arma de fuego, ni documentación alguna que justificará la proveniencia lícita del dinero. Así mismo la sentencia de preclusión se emitió con el lleno de los requisitos legales y donde se aceptó la postura del delegado Fiscal, que requería la terminación de la investigación por el delito de lavado de activos que había imputado a YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO y AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ, ordenándose a la Fiscalía la devolución del dinero incautado.

3. FRENTE A LA INEFICIENCIA: Elemento que también puede ser descartado, puesto que las actuaciones realizadas por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Túquerres, así como las del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, denotan diligencia, que se traduce en haber fijado en varias oportunidades las audiencias judiciales a su cargo, sin que se pueda alegar ineficacia en su realización.

4. FRENTE A LA OMISIÓN.- No se puede endilgar este requisito como falla en el servicio, merced que las actuaciones de la Rama Judicial, se apegaron a sus deberes legales, ya que por un lado el Juzgado que legalizó la incautación y suspendió el poder dispositivo sobre el dinero, lo hizo amparado en aspectos fácticos debidamente acreditados y soportados en elementos materiales probatorios y evidencia física oportunamente aportada, puesto que al momento de la captura de YEINER ORLANDO CUARAN, este no logró probar la proveniencia legal del peculio y resultaba razonable y legitimo estimar que el dinero encontrado provenía de algún ilícito de carácter doloso.

Así mismo, por parte del Juzgado de conocimiento, no existió omisión alguna dentro del trámite efectuado, en razón de que, inmediatamente recibió el escrito de preclusión de la investigación, fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia respectiva y dentro de la decisión adoptada, encontró justificada la petición de la Fiscalía de no continuar la persecución penal en disfavor de YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO y AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ por el delito de lavado de activos, impartiendo en el mismo acto, la orden definitiva de devolución del dinero incautado.

De ahí que resulta razonable y jurídicamente válido afirmar que no es procedente un reproche contra la actuación funcional de la Rama Judicial, en la medida que obró dentro del marco constitucional, así como legal vigente al momento de los hechos y su actuación

denotó diligencia, empero por circunstancias adversas y que se salen de la órbita de acción del mismo las diligencias a su cargo no pudieron efectuarse dentro de los términos, lo que conllevó a que se prolongue la devolución del dinero incautado.

Lo que sale a flote en este caso es que también existió la eximente de responsabilidad denominada CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA, en tanto, el señor GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, no actuó de forma diligente y responsable en la custodia de su patrimonio, al confiar en manos de particulares el transporte de una gruesa cantidad de dinero, es más, la persona capturada, en este caso YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO, para efectos de seguridad, procedió a llevar consigo un arma de fuego tipo revolver, de ahí que se justificara su aprehensión así como la incautación de los bienes. Es por ello, que a voces del artículo 63 del Código Civil, el señor TOBAR MELO, debió prever que transportar el dinero con particulares que no tienen la experiencia ni experticia requerida para este tipo de actividades representaba un riesgo jurídico legal, en el sentido de que al ser detectados por las autoridades, en el mejor de los casos, irremediablemente esta dispondrá que se pruebe la proveniencia legal del mismo, ahora, el dinero al estar encubierto o encaletado y por demás encontrar un arma de fuego sin salvoconducto, resulta una conducta a todas luces delictiva de ahí el proceder de la autoridad.

En conclusión, no puede predicarse ese deber indemnizatorio por parte de la Rama Judicial por las actuaciones o decisiones realizadas por los operadores judiciales con ocasión del proceso de incautación y entrega definitiva del dinero a FRANCISCO GERARDO TOBAR MELO, por ello, las decisiones tomadas dentro de la investigación penal con radicado 528386000543201680380 con ruptura No. 5283860000020180004, no pueden tildarse como tardías en la prestación del servicio, tampoco de irregulares, ineficaces u omisivas. Por lo que no es posible alegar o probar un NEXO CAUSAL entre el presunto daño irrogado y las actuaciones de la Rama Judicial. Lo que se evidencia es que el convocante contribuyó o fue un factor decisivo en la captura de YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO a quien le fue incautado los $ 469.000.000 de propiedad del convocante además de un arma de fuego tipo revolver, lo anterior, debido a un negocio de transporte de divisas entre particulares, configurándose la excepción de CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

EXCEPCIONES

- **FALTA DE OBJETO PARA DEMANDAR.**

  Como se expresó en precedencia, el actor carece de causa para demandar a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues el ejercicio funcional jurisdiccional desempeñado por los operadores judiciales, estuvo acorde, al mandato constitucional que prevé la forma cómo se desarrolla la función pública. En el trámite judicial reprochado por la parte actora, se mantuvo indemne el debido proceso judicial y se cumplió con la función jurisdiccional encomendada al operador judicial, además en ningún momento se afectó de manera exclusiva, directa, ilegal o ilegítimamente las garantías fundamentales de GERADO TOBAR MELO, por parte de las autoridades judiciales. Además, la supuesta tardanza en la devolución del dinero incautado, tras la emisión de la orden judicial, le correspondía de forma exclusiva de la Fiscalía General de la Nación.

De la jurisprudencia del Consejo de Estado por la cual se soporta los argumentos de defensa de esta Entidad, también podrá corroborarse que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, **no** puede ser llamada a responder administrativa y/o patrimonialmente por los hechos y el sustento jurídico que soportan la presente reclamación contenciosa, a través, del medio de control de reparación directa, pues los operadores judiciales, atendieron y acataron un deber establecido en la ley vigente, y de su ejercicio funcional **no** se puede sostener que se generaron los presuntos perjuicios que reclama el demandante, fruto de ello es la decisión de libertad inmediata dada por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Ipiales, al probar la existencia de una pena cumplida.

Así las cosas, a la Entidad por mi representada, **no** le asiste responsabilidad administrativa ni mucho menos patrimonial en los hechos que fundamentan el presente litigio.

- **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA DE HECHO O ACTUACIÓN DAÑOSA QUE PUEDA CONSTITUIRSE EN FALLA EN EL SERVICIO Y FALTA DE TÍTULO DE IMPUTACIÓN CONTRA LA RAMA JUDICIAL.**

Conforme lo ha orientado el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de acuerdo a los argumentos de defensa antes expuestos, **no** existe uno de los elementos esenciales para que se configure la responsabilidad administrativa de la Entidad que represento, esto es, el hecho o la actuación dañosa constitutivo de falla en el servicio atribuible a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, toda vez que **no** se encuentra demostrado que las actuaciones adelantadas por los operadores judiciales, dentro del proceso penal, hayan sido irregulares, ineficaces u omisivas. En ningún momento se observa de la documentación que soporta el presente asunto, **ni** la parte demandante lo aduce y tampoco ha acreditado que se haya dado un ejercicio funcional que se repute como una actuación con retardo, irregular o ineficaz.

Si la actuación procesal penal ha sido legítima en atención a la legalidad que le reviste y si han primado las garantías constitucionales, así como los límites temporales para cada actuación procesal que debe ser garantizada por parte de la Rama Judicial, como de hecho ocurrió, **no** es dable predicar la acusación de un daño. Por ello, la parte actora carece de título de imputación de responsabilidad administrativa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y por consiguiente, **no** puede atribuirse responsabilidad administrativa ni patrimonial a la Entidad que represento.

- **INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO ALEGADO Y EL EJERCICIO FUNCIONAL JURISDICCIONAL DESEMPEÑADO POR LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.**

Tal como puede constatarse de la documentación obrante en el presente asunto, y conforme las razones de defensa de esta Entidad, las decisiones y actuaciones jurisdiccionales de los Jueces de la República adscritos a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ningún momento causaron un perjuicio antijurídico a GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO. En consecuencia, **no** es posible establecer un nexo causal entre ese ejercicio funcional desempeñado y los presuntos perjuicios que reclaman los demandantes, pues las pretensiones contra esta Entidad se han endilgado como si la tardanza en la devolución del dinero incautado fuese propia de la Rama Judicial, cuando es lo cierto y así mismo lo afirma el demandante y queda demostrado con las pruebas documentales aportadas, que dicho trámite de devolución era competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través, de sus delegados Fiscales, en este preciso caso, del Fiscal Noveno Especializado de Pasto.

Por consiguiente, **sin** nexo causal entre el daño que se alega y el ejercicio funcional desempeñado, **no** puede atribuirse una responsabilidad estatal a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, situación fáctica y jurídica que la parte demandante **no** puede controvertir.

- **CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA**

En este punto es menester aclarar que a la luz de la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, el análisis de la culpa civil de quien alega haber soportado un daño que no le correspondía a causa de la acción u omisión del Estado, se convierte en obligatorio por parte del Juez contencioso administrativo.

En ese sentido, el análisis de la culpa no implica un reproche de culpabilidad como un elemento del tipo penal, sino un estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la óptica de la responsabilidad civil, ello a fin de determinar que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en dicha privación.

A partir de ello, el artículo 63 del Código Civil, establece que la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Al descender estas consideraciones al caso en concreto, se reitera que el hoy demandante GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, en definitiva, encausó su propio daño, pues no actuó de forma diligente y responsable en la custodia de su patrimonio, al confiar en manos de particulares el transporte de una gruesa cantidad de dinero. Pues a la persona que contrató para ello (AMANDA ZAMBRANO NARVAEZ) se valió de un tercero (YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO), quien efectos de seguridad, llevó consigo un arma de fuego tipo revolver sin salvoconducto, de ahí que se justificara su aprehensión, así como la incautación de

los bienes. Es por ello, que a voces del artículo 63 del Código Civil, el señor TOBAR MELO, debió prever que transportar el dinero con particulares que no tienen la experiencia ni experticia requerida para este tipo de actividades representaba un riesgo jurídico legal, en el sentido de que al ser detectados por las autoridades, en el mejor de los casos, irremediablemente esta dispondrá que se pruebe la proveniencia legal del mismo, ahora, el dinero al estar encubierto o encaletado y por demás encontrar un arma de fuego sin salvoconducto, resulta una conducta a todas luces delictiva de ahí el proceder de la autoridad.

En conclusión, no puede predicarse ese deber indemnizatorio por parte de la Rama Judicial por las actuaciones o decisiones realizadas por los operadores judiciales con ocasión del proceso de incautación y entrega definitiva del dinero a FRANCISCO GERARDO TOBAR MELO, por ello, las decisiones tomadas dentro de la investigación penal con radicado 528386000543201680380 con ruptura No. 528386000020180004, no pueden tildarse como tardías en la prestación del servicio, tampoco de irregulares, ineficaces u omisivas. Por lo que no es posible alegar o probar un NEXO CAUSAL entre el presunto daño irrogado y las actuaciones de la Rama Judicial. Lo que se evidencia es que el convocante contribuyó o fue un factor decisivo en la captura de YEINER ORLANDO CUARAN ZAMBRANO a quien le fue incautado los $ 469.000.000 de propiedad del convocante además de un arma de fuego tipo revolver, por lo que tal situación, da pie a que se edifique la excepción de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, misma que exonera de toda responsabilidad a ésta Entidad.

- **LA IMPOSIBILIDAD DE SOLICITAR PERJUICIOS POR UNA ACTIVIDAD COMERCIAL JAMAS EJERCIDA O REGISTRADA**

Las pretensiones por perjuicios materiales dentro del presente asunto, se cimentaron en el hecho de que por la pérdida de oportunidad de efectuar la compra dos (2) volquetas, no se logró reforzar o robustecer la actividad económica a la que se encaminarían dichos muebles, esto es, de acuerdo a lo plasmado en la demanda: el transporte de carga por carretera, actividad que según el propio dicho del actor, venía siendo desarrollado y de la cual se lucraba.

Sin embargo, al indagar ante la respectiva Cámara de Comercio de Pasto, sobre la veracidad de los documentos aportados, en específico el certificado de matrícula mercantil, dicha entidad fue enfática en establecer que GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, con cédula de ciudadanía No. 5213981 y NIT. 521981-3, matrícula mercantil No. 144482, respecto al servicio público de transporte de carga **no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar este servicio público terrestre en la modalidad de carga**.

Lo anterior, significa que GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, ha ejercido al menos una actividad que no cumple con los estándares legales y la costumbre mercantil. Actividad comercial en la cual, fundamenta los presuntos perjuicios de índole material ocasionados por el Estado, circunstancia que refleja y apoya las excepciones interpuestas de forma antecedente, especialmente la denominada inexistencia de nexo causal, en tanto, si el señor TOBAR MELO, no tenía potestad para ejercer una actividad comercial, tampoco la tenía para lucrase de ella, es decir,

que de haberse consolidado la presunta compraventa de las dos (2) volquetas, los réditos generados jamás podrían verse reflejados dentro de su patrimonio o en sus estados financieros, o si estos se incluían definitivamente legalmente no pueden provenir del ejercicio de la actividad de transporte de carga por carretera.

Por ello, resulta valido afirmar que el demandante, en la presente actuación, ha trasladado documentos que al parecer no corresponden a la realidad, me refiero concretamente al registro de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Pasto anexo a folios 658 y 659, presente en el cuaderno principal, en tanto, busca dar apariencia de legalidad a una actividad que no estaba facultado para ejercer y dicho error también es reproducido por en el informe base de la opinión pericial, en donde se da por reales diversos aspectos de una actividad presuntamente ejercida por el demandante y en la que además se soporta la proyección de ganancias dejadas de percibir por el demandante.

- **INNOMINADA O GENÉRICA.**

Solicito respetuosamente a su Señoría, se declare cualquier otra excepción de fondo y a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que se encuentre probada de conformidad con el inciso 2 del artículo 187 de C.P.A.C.A.

Por otra parte, debe señalarse que las afectaciones frente a la cercanía familiar alegadas no son de recibo en tanto al condenado se le otorgó la prisión domiciliaria, circunstancia que implicaba el cumplimiento de la sanción empero en el lugar de residencia del condenado, con lo que en efecto podía compartir con sus allegados.

PETICIÓN

PRINCIPAL: De manera respetuosa, la defensa de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicita a su Señoría, se declaren probadas las excepciones propuestas y en consecuencia se hagan los pronunciamientos de fondo sobre las pretensiones de la demanda, denegándolas por las razones de hecho y de Derecho expuestas en este escrito y, por consiguiente, se declare que mi representada **no** tiene responsabilidad administrativa ni patrimonial en los hechos que dieron origen a este proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, Ley 1437 de 2011, y demás normas pertinentes, así como el fundamento jurídico del precedente jurisprudencial invocado.

PRUEBAS

Honorable Magistrado, solicito se decreten las allegadas con el escrito de demanda y así mismo requiero que se dé el valor probatorio a las siguientes:

DOCUMENTALES:

1.- Certificado de matrícula mercantil de persona natural del 26 de junio de 2020 expedido por la Cámara de Comercio de Pasto, donde entre otros, menciona que GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.213.981 y NIT 5213981-3, no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

DE OFICIO:

2.- Se solicite de oficio a GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5213981 allegue los libros de inventarios y balances (principales y auxiliares) de los años 2015 a 2018 respecto de la empresa identificada con matricula mercantil No.144482, Nit..- 5213981-3 o cualquier otro ejemplar que contenga por lo menos los mismos datos que exigen los artículos 52 del Código de Comercio, 733 del Estatuto Tributario y 31 del Decreto 187 de 1975.

La anterior prueba se estima necesaria para efectos de respaldar la defensa planteada por la Nación Rama Judicial, especialmente las excepciones denominadas: inexistencia de nexo causal entre el daño alegado y el ejercicio funcional jurisdiccional desempeñado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial e imposibilidad de solicitar perjuicios por una actividad comercial jamás ejercida o registrada.

ANEXOS

Se adjunta al presente escrito los siguientes documentos:

- Memorial poder otorgado al suscrito, por parte del doctor JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO, en su condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto (N).

- Copia de la Resolución No. 1539 de 8 de Marzo de 2002, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

- Copia del acta de posesión en el cargo de fecha 1° de Abril de 2002, del señor Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto.

- Derecho de petición del 25 de junio de 2020, remitido a la Cámara de comercio de Pasto, donde se solicitó la expedición de certificado especial de matrícula mercantil No. 144482 a favor de GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, o los establecimientos de comercio que aparezcan a su nombre.

- Comprobante de envío mediante correo electrónico registrado del presente documento y sus anexos al apoderado de la parte demandante, conforme lo ordena el Decreto Ley 806 de 2020

NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado, las recibirá, a través de la dirección electrónica: dsajpsonotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, misma que podrá ser usada para realización de las audiencias virtuales.

A los demandantes y su apoderado en las direcciones que obran en el proceso.

Respetuosamente,

HÉCTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ
C.C. N° 1.087.958.663 de Yacuanquer (N)
T.P. No. 199.955 del C.S. de la J.
Abogado DESAJ Pasto Apoderado Nación – Rama Judicial.

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

RESOLUCION NUMERO 1539 DE 19 8 MAR 2002

Por la cual se hace un nombramiento.

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL.
en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al doctor **JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.966.026, en el cargo de Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto (Nariño).

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a 8 MAR 2002

CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ

RAMA JUDICIAL
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DISTRITO PASTO
SECRETARIA GENERAL
Que la presente fotocopia está en todo su contenido, conforme al documento que reposa en los archivos de esta Seccional.
San Juan de Pasto,

Lcy./

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ACTA DE POSESION

En la ciudad de Bogotá, D.C., al 1° día del mes de abril del año 2.002, se presentó al Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, el doctor **JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.966.026, con el fin de tomar posesión del cargo de Director Ejecutivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, para el cual fue nombrado mediante resolución No.1539 del 8 de marzo de 2.002. Prestó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

LA DIRECTORA EJECUTIVA,

CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ

EL POSESIONADO,

JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO

RAMA JUDICIAL
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DISTRITO PASTO
SECRETARIA GENERAL
Que la presente fotocopia está en todo su contenido, conforme al documento que reposa en los archivos de esta Seccional.
San Juan de Pasto,

Doctor:
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
Magistrado Tribunal Administrativo de Nariño
E. S. D.

Ref. Acción o Medio de Control: Reparación Directa
Proceso No. **2019-00631-**00
Demandante: GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.966.026 expedida en Pasto, en mi condición de Director Seccional de Administración Judicial de Pasto, nombrado mediante Resolución No. 1539 de 8 de Marzo de 2002, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y posesionado en el cargo según consta en acta de fecha 1° de Abril de 2002, según lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente al Abogado **HÉCTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.087.958.663 de Yacuanquer y portador de la Tarjeta Profesional No. 199.955 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial dentro del asunto de la referencia.

El apoderado queda facultado para contestar, proponer excepciones, notificarse, sustituir, desistir, especialmente conciliar o no conciliar, interponer recursos en primera y segunda instancia, solicitar nulidades absolutas o relativas, y las demás establecidas en el artículo 77 del CGP y hacer todo cuanto en derecho se requiera para cumplir debidamente este mandato.

Se adjunta a la presente copia de Resolución de nombramiento y acta de posesión que me acreditan como Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto-Mocoa

Por lo anterior, le solicito respetuosamente, reconocerle personería adjetiva en los términos y para los fines aquí señalados.

Atentamente,

Firmado Por:
JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO
DIRECTOR SECCIONAL ADMON JUDICIAL D.S.A.J. DIRECCION Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación: 5702627582fe9125b265ed66d2a180a70759a91dfe0ce2eb49a6e4906e
Documento generado en 07/07/2020 11:10:51 AM

Acepto: HÉCTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ
C.C. 1.087.958.663 de Yacuanquer (N)
T.P. 199.955 del Consejo Superior de la Judicatura
Email: dsajpsonotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

130-41.1

Al contestar este oficio, cite el número radicado.

San Juan de Pasto, 26 de junio del 2020

Señor
HECTOR DAVID INSUASTY SUAREZ
Coordinador Área DE Asistencia Legal DESAJ
Consejo Superior de La Judicatura.
Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial
Calle 19 No. 23 -00 Palacio De Justicia Bloque B Piso 2
Ciudad.

Asunto: Respuesta Petición
Oficio No. DESAJPAO20-603

Cordial Saludo,

En nombre de la Cámara de Comercio de Pasto y en respuesta a su solicitud, nos permitimos informar que una vez realizada la consulta por nombre y número de identificación en la base de datos del Sistema Único Empresarial y Social - RUES, se determinó, que el señor, GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.213.981 figura inscrito en el Registro Mercantil de esta Entidad, bajo la matrícula No. 144482, del cual enviamos certificado.

En los anteriores términos, dejo atendida su solicitud reiterando la disponibilidad de esta Entidad en atender cualquier solicitud subsiguiente.

Atentamente,

DANIEL ERASO CANAL
Director Departamento Jurídico y
De Registros Públicos.

Anexo: Certificado No. 144482

Proyecto: Janeth Benavides V.

DESAJPAO20-603
Pasto, junio 26, 2020

Señores:
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO
Departamento Jurídico y de Registro Público
Email: notificaciones@ccpasto.org.co; djuridico@ccpasto.org.co

Saludo Cordial,

HECTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.958.663 de Yacuanquer (N), y T.P. de abogado No. 199.955 del C.S. de la J., actuando en mi condición de Coordinador del Área de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, acudo a su instancia a efectos de realizar la siguiente petición de documentos:

> 1.- Se expida Certificado Especial de la matricula No. 144482 registrada a nombre de TOBAR MELO GERARDO FRANCISCO C.C. No. 5.213.981 o del o los establecimientos de comercio que se registren a su nombre donde se incluya las actualizaciones o modificaciones a las actividades económicas desde la fecha de su inscripción a la presente data.

Lo anterior se requiere con el objeto de ejercer la defensa de la Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, dentro del proceso contencioso administrativo con radicado No. 2019-00631 que cursa en el Tribunal Administrativo de Nariño.

La información o documentación solicitada podrá ser remitida, a través, de correo electrónico a las direcciones:

- dsajpsonotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
- coorjuridicapasto@cendoj.ramajudicial.gov.co

Agradezco mucho la atención prestada y confió en que la presente petición se resuelva de conformidad a lo requerido.

Atentamente,

HECTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ
Coordinador Área de Asistencia Legal DESAJ Pasto

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: TOBAR MELO GERARDO FRANCISCO EN REESTRUCTURACION
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CéDULA DE CIUDADANíA - 5213981
NIT : 5213981-3
DOMICILIO : PASTO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 144482
FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 14 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 43,864,817.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : MANZANA 20 CASA 7 BARRIO CORAZON DE JESUS
BARRIO : Corazon de Jesus
MUNICIPIO / DOMICILIO: 52001 - PASTO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7200258
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : multityres0209@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : MANZANA 20 CASA 7 BARRIO CORAZON DE JESUS
MUNICIPIO : 52001 - PASTO
BARRIO : Corazon de Jesus
TELÉFONO 1 : 7200258
CORREO ELECTRÓNICO : multityres0209@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD PRINCIPAL : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE

FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : G4649 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMESTICOS N.C.P.

CERTIFICA - REORGANIZACION, ADJUDICIACION O LIQUIDACION JUDICIAL

POR OFICIO NÚMERO 1384 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO DE PASTO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 162 DEL LIBRO XIX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE FEBRERO DE 2018, SE INSCRIBE : INSCRIPCION AUTO DE INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACION EN EL REGISTRO MERCANTIL

POR OFICIO NÚMERO 825 DEL 02 DE AGOSTO DE 2019 DE LA JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 210 DEL LIBRO XIX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE INSCRIBE : CONFIRMA ACUERDO DE REORGANIZACIÓN ENTRE TOBAR MELO GERARDO FRANCISCO Y SUS ACREEDORES

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** COMERCIALIZADORA MULTI TYRES
MATRICULA : 160128
FECHA DE MATRICULA : 20150415
FECHA DE RENOVACION : 20190401
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : MANZANA 20 CASA 7 BARRIO CORAZON DE JESUS
BARRIO : Corazon de Jesus
MUNICIPIO : 52001 - PASTO
TELEFONO 1 : 7200258
CORREO ELECTRONICO : multityres0209@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : G4649 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMESTICOS N.C.P.
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 31,000,000

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** BODEGA BELLASUIZA
MATRICULA : 166869
FECHA DE MATRICULA : 20160527
FECHA DE RENOVACION : 20190401
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : KM 8 CORREGIMIENTO CATAMBUCO
MUNICIPIO : 52001 - PASTO
TELEFONO 1 : 3148020326
CORREO ELECTRONICO : gerardotobar01@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : G4732 - COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

OTRAS ACTIVIDADES : G4530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,050,000

CERTIFICA

QUE TOBAR MELO GERARDO FRANCISCO, NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siipasto.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 4hZybJgejG

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CONTESTACIÓN 2019-00631

N

Notificaciones Direccion - Seccional Pasto
Mar 7/07/2020 12:10 PM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

y 3 más
CC:

- Oficina Juridica - Seccional Pasto

Anexos Poder DESAJ.PDF
123 KB

CERTIFICADO- CAMARA DE COMERCIOTOBAR MELO GERARDO FRANCISCO.pdf
237 KB

Contestacion 2019-00631.pdf
650 KB

poder especial edgar cabrera Ramos (003).pdf
700 KB

RESPUESTA-Oficio No. DESAJPAO20-603-.pdf
119 KB

SOLICITUD DE DOCUMENTOS CAMARA DE COMERCIO PASTO_4e45 (1).pdf
411 KB

6 archivos adjuntos (2 MB)Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Doctor:
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
Magistrado Tribunal Administrativo de Nariño
E. S. D.

Ref. Acción o Medio de Control: Reparación Directa
Proceso No. **2019-00631-**00
Demandante: GERARDO FRANCISCO TOBAR MELO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

Por medio del presente, me permito remitir contestación de demanda de la Nación-Rama Judicial-DESAJ Pasto, dentro del radicado 2019-00631. Adjunto se encuentran los siguientes archivos:

1.- Contestación demanda 2019-00631
2.- Pruebas
    2.1certificado cámara de comercio
    2.2. respuesta oficio DESAJPAO20-603
    2.3 solicitud cámara de comercio Pasto)
3.- Poder para actuar.
4.- Anexos al poder

Saludo Cordial,

HECTOR DAVID INSUASTY SUÁREZ
Coordinador Área de Asistencia Legal DESAJ Pasto

Doctor
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
MAGISTRADO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO.
E S D

REF: MEDIO DE CONTROL: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No 2018-00613**
DTE: **DELFINA QUIÑONES QUIÑONES**
DDO: **NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
VINCULADO: **MUNICIPIO DE TUMACO**

JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA, identificado con C.C No 12.746.552 de Pasto y Tarjeta Profesional de Abogado No 127.568 del C.S.J, actuando en la calidad de apoderado de la doctora **MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.314.513 expedida en Pasto, representante legal del Municipio de Tumaco (N), en su calidad de alcalde, mediante el presente escrito me permito contestar la demanda de la referencia en los siguientes términos:

1. A LOS HECHOS.

1. El primer (1) hecho es cierto de acuerdo a los documentos aportados por la parte demandante.
2. El segundo (2) hecho no nos consta.
3. El tercer (3) hecho, no nos consta.
4. El cuarto (4) hecho es cierto de acuerdo a los documentos aportados por la parte demandante.
5. El quinto (5) hecho no nos consta, por cuanto el pago de la prestación solicitada era competencia de la Nación Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio.

2. A LAS PRETENSIONES

Me opongo a cada una de ellas por ser totalmente improcedentes**.**

3. EXCEPCIONES PREVIAS

3.1 FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA.

La ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en su artículo 5 estipuló:
Artículo 5º.- *El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:*
1.- ***Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado****….*

La ley 962 de 2005, por medio de la cual se dictaron disposiciones sobre **racionalización de trámites y procedimientos administrativos** de los organismos y entidades del Estado, dispuso:
*ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO****. Las prestaciones sociales que pagará*** *el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio* ***serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente****, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento* ***se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial****.*

Siguiendo esta línea, el Ministerio de Educación Nacional expidió el decreto 2831 de 2005, para reglamentar el mandato de la norma transcrita anteriormente, en el cual plasmó:

> Ar**tículo 2°.** *Radicación de solicitudes.* Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
>
> La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. *Gestión a cargo de las secretarías de educación.* De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

> 1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. *Trámite de solicitudes.* El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.

Artículo 5°. *Reconocimiento.* Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley."

De lo anterior se puede concluir, que los entes territoriales actúan como unos meros facilitadores para que los Docentes tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues si bien, estos elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de pensión de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos de Fonpremag, los suscriben, es en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida, no obligan al ente territorial, ni se comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

La legitimación en la causa lo ha definido el Consejo de Estado al pronunciarse en una acción constitucional, como la calidad que tiene la persona para formular o contradecir las pretensiones del libelo demandatorio siendo sujeto procesal de la relación jurídica procesal, de manera textual dicha Corporación ha expuesto:

> *"Pues bien, la legitimación en la causa, corresponde a la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial. En otros términos, consiste en la posibilidad que tiene la parte demandante de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- y de hacerlo frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-, por haber sido parte de la relación material que dio lugar al litigio. Corresponde a un presupuesto procesal de la sentencia de fondo favorable a las pretensiones, toda vez que constituye una excepción de fondo, entendida ésta como un hecho nuevo alegado por la parte demandada para enervar la pretensión, puesto que tiende a destruir, total o parcialmente, el derecho alegado por el demandante…"*[1]

[1] Consejo de Estado sentencia del 06 de agosto de 2012, Magistrado Ponente, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado 11001-03-15-000-2012-01063-00(AC)

En pronunciamiento anterior el Consejo de Estado sobre la legitimación en la causa ha manifestado**:**

> ***"LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Clases. De hecho y material / LEGITIMACIÓN DE HECHO - Concepto / LEGITIMACIÓN MATERIAL - Concepto / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL***
>
> *En reciente jurisprudencia, esta Corporación ha manifestado en cuanto a la legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Así mismo, ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, siendo la legitimación en la causa de hecho la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma quien asumirá la posición de demandado; dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la*
>
> *legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra"*[2]

4. EXCEPCIONES DE MERITO

EXCEPCION GENERICA.

Solicito de manera respetuosa a la señora Juez, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del C.G.P, se sirva reconocer las excepciones que se llegaren a encontrar probadas.

[2] Consejo de Estado sentencia del 25 de marzo de 2010, Magistrado Ponente, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado 1275-08

5. PETICION

DECLARAR probadas las excepciones propuestas, en consecuencia NEGAR las pretensiones de la demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO incoada por la Señora DELFINA QUIÑONES.

6. PRUEBAS Y ANEXOS

- Poder debidamente conferido.
- Acta de elección y posesión de la Señora Alcaldesa del Municipio de Tumaco.

7. NOTIFICACIONES

A las partes las indicadas en el libelo de la demanda inicial, al suscrito en la carrera 25 No. 15-62 oficina 206 zaguán del lago. Pasto (N) correo electrónico george.guancha@hotmail.com

El Municipio de Tumaco recibirá notificaciones electrónicas en el correo electrónico **notificacionesjudiciales@tumaco-narino.gov.co**

Atentamente,

JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA.
C.C No 12.746.552 de Pasto.
T.P No 127.568 del C.S.J

Distrito Especial de San Andrés de Tumaco, marzo 2020.

Señor Magistrado
EDGAR GUILLERMO CABRERA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
ESD

REF: PODER ESPECIAL
PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 2018-0613
Demandante: DELFINA QUIÑONES
Demandado: NACIÓN-MIN.EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Tumaco (N), identificada con cédula de ciudadanía No. 59.314.513 expedida en Pasto, en mi condición de alcalde del Municipio de Tumaco (N) y en representación del mismo Municipio manifiesto por medio del presente escrito que confiero poder especial amplio y suficiente al **Dr. JORGE WILLINTON GUANCHA MEJÍA**, abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.746.552 expedida en Pasto Nariño y Tarjeta Profesional No.127.568 del Consejo Superior de la Judicatura, para que ejerza el derecho de defensa dentro del proceso de la referencia, haciendo valer los derechos e intereses del Municipio.

Mi apoderado queda facultado y revestido para, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar, renunciar, transigir, notificarse, solicitar copias de las diferentes piezas procesales, interponer excepciones, recursos y efectuar todas las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de su mandato, además de las establecidas en el Art. 77 del C.G.P

Sírvase, reconocer personería al Dr. GUANCHA MEJÍA, en los términos y para los efectos del presente mandato.

Del señor Juez

Atentamente,

MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA
C.C. No 59.314.513 de Pasto.

Acepto,

JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA
C.C. N° 12.746.552 de Pasto (N)
T.P. N° 127.568 del C. S. de la Judicatura

PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO
LA NOTARIA UNICA DE TUMACO-NARIÑO
CERTIFICA

Este documento dirigido a [illegible]
Fué presentado personalmente por María Emilsen Angulo
quien se identificó con la cédula de ciudadanía # 59314.513
y con la tarjeta profesional #
y manifestó que reconoce expresamente su contenido y que la firma
que en él aparece es la suya.
En constancia, firma nuevamente y estampa la huella de su dedo
índice derecho, en Tumaco el día 04 MAR 2020
[illegible] de hecho para dar derechos notariales según tarifa)

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA UNICA DE TUMACO
Elisa Mileya Salazar Rodriguez
Notaria

Elisa Mileya Salazar Rodriguez
Notaria

Notaría Única Tumaco

ACTA DE POSESIÓN

01-2019 DE LA DOCTORA MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA COMO ALCALDESA DISTRITAL DE TUMACO PERIODO 2020-2023

En San Andrés de Tumaco, Departamento de Nariño, República de Colombia, el treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 4:00 pm compareció a la Notaría Única del Circulo de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, a fin de tomar Posesión del Cargo de Alcaldesa del Distrito Especial de Tumaco – Nariño, la Doctora **MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA**, identificada con cedula de ciudadanía No. **59.314.513 de Pasto**, elegida por voto popular para el periodo constitucional 2020-2023, comprendido del primero (1°) de enero de 2020 al treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y declarada como tal por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal de Tumaco – Nariño. A continuación, la Señora Notaria Única del Circulo de San Andrés de Tumaco – Nariño, Dra. **ELSA MIREYA SALAZAR RODRIGUEZ**, procedió a juramentarla de conformidad con el artículo 94 de la Ley 136 de 1994, bajo gravedad de Juramento y Penas, manifestó: **"JURO ANTE DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS".**

La posesionada para efectos de su identificación y Posesión, presentó los siguientes documentos:

- Solicitud de Posesión
- Cedula de ciudadanía No 59'314.513 de Pasto – Nariño.
- Antecedentes y requerimiento Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia de fecha 30 de diciembre de 2019.
- Certificado del Seminario de Inducción a la Administración pública para Alcaldes y Gobernadores Electos 2020-2023, expedido por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
- Declaración Extrajudicial del monto de bienes y Rentas (inciso 2° del articulo 94 de la ley 136 de 1994).

- Credencial que la acredita como ALCALDESA DE TUMACO, expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil.
- Certificado de Antecedentes y manejo Fiscal Expedido por la Contraloría General de la República.
- Certificado Especial de Antecedente Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
- Formato Único de Hoja de Vida de la Función pública.
- Constancia de Afiliación E.P.S.
- Certificado Paz y Salvo Oficina de Rentas Municipal.
- Declaración No Impedimento y No Embargo por alimentos.
- Certificado Médico de aptitudes física y mental.
- Certificado médico de salud ocupacional.

Reunidos los requisitos legales y formales, exigidos, la Dra **MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA**, queda en esta forma legalmente Posesionada como Alcaldesa Distrital de Tumaco.

Se deja constancia que la posesión como Alcaldesa Distrital de Tumaco, surte efectos Fiscales y Administrativos a partir del primero (1°) de enero de dos mil veinte (2020).

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada como aparece.

MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA
POSESIONADA

ELSA MIREYA SALAZAR RODRIGUEZ
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TUMACO

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

1116

En la ciudad de Tumaco, Departamento de Nariño, República de Colombia, el treinta (30) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Única del Círculo de Tumaco, compareció:

MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0059314513, presentó el documento dirigido a NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TUMACO - ACTA DE POSESION y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

-------- Firma autógrafa --------

830z3eogpjin
30/12/2019 - 17:04:46:320

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA UNICA DE TUMACO Notaria Unica Tumaco Elsa Mireya Salazar Rodriguez Notaria

ELSA MIREYA SALAZAR RODRÍGUEZ
Notaria Única del Círculo de Tumaco

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 830z3eogpjin

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LOS MIEMBROS DE LA COMISION ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que, MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA con C.C. 59314513 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de TUMACO (NARIÑO) para el periodo de 2020 al 2023, por el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL en TUMACO (NARIÑO), el domingo 03 de noviembre del 2019

ANDRES HUMBERTO ENRIQUEZ MARTINEZ

ANGELA MARIA RUBIO ZAMBRANO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

NIRIA MERCEDES SOLARTE MARTINEZ

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

NRD 2018-613: DTE DELFINA QUIÑONES. DDO FOMAG. VINCULADO MUNICIPIO DE TUMACO. CONTESTACIÓN DEMANDA

JG

JORGE GUANCHA <george.guancha@hotmail.com>
Mié 15/07/2020 10:06 AM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

y 6 más

Contestacion demanda - DELFINA QUIÑONES 2018-0613 TRIBUNAL ADM. M.P EDGAR CABRERA.pdf
4 MB

Doctor
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
MAGISTRADO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO.
E S D

REF: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No 2018-00613
DTE: DELFINA QUIÑONES QUIÑONES DDO: NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO VINCULADO: MUNICIPIO DE TUMACO

Mediante el presente escrito me permito allegar escrito de contestación de demanda por parte del Distrito de Tumaco.

Atentamente,

JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA.
Asesor Jurídico Externo Distrito de Tumaco

ARCHIVO COMPRIMIDO CONTESTACION DEMANDA 2019-00661 MP DR EDGAR GUILLERMO CABRERA

DM

dfma mm <dfma1712@gmail.com>
Mié 12/08/2020 9:41 AM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

2019-00661 CONTESTACION DEMANDA_compressed.pdf
19 MB

Buenos días.

Por el presente me permito remitir a su Honorable Despacho y dentro del término procesal parta ello, contestación de demanda que cursa en su Oficina dentro del asunto que a continuación relaciono:

ADICACION: 520012333000 2019 00661 00
DEMANDANTE: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MARIA ANGELITA LEITON Y ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.

Cordialmente,

ALVARO IVAN ESTRADA SANCHEZ
APODERADO DEMANDANTE
CEL 3222394655

(CORREO DE NOTIFICACIONES ivan.230706@hotmail.com SE ENVIA NUEVAMENTE POR ESTE CORREO CONTESTACION EN PDF COMPRIMIDO)

FAVOR CONFIRMAR ACUSE, PUES EL TRASLADO DE LA DEMANDA VENCE HOY MISMO Y ES URGENTE CONOCER SI SE RECIBIO CONFORME EN 141 FOLIOS (PESO DEL ARCHIVO 19.4MB)

1

Honorable Magistrado
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑÓ
Ciudad.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

RADICACION: 520012333000 **2019 00661** 00
DEMANDANTE: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MARIA ANGELITA LEITON Y ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.

Asunto: Contestación de demanda

ALVARO IVAN ESTRADA SANCHEZ persona mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.072.590 de Pasto portador de la tarjeta profesional de abogado número 185.345 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado sustituto de las demandadas **MARIA ANGELITA LEITON y ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** según consta en poder adjunto, debidamente otorgado, respetuosamente me dirijo a su Despacho, para dar contestación a la demanda instaurada por el señor **JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO,** en un solo escrito y en los siguientes términos .

A LAS PRETENSIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRIMERA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio.

SEGUNDA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio, lo anterior, más allá de que esta pretensión va dirigida a un sujeto procesal ajeno al poder conferido por mis mandantes, pero que afecta directamente los intereses de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.

A LAS PRETENSIONES

PRIMERA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio, lo anterior, más allá de que esta pretensión va dirigida a un sujeto procesal ajeno al poder conferido por mis mandantes, pero que afecta directamente los intereses de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien es la única persona que demostró en sede administrativa depender económicamente del causante, al ser una persona incapacitada desde su nacimiento.

2

SEGUNDA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio, lo anterior, más allá de que esta pretensión va dirigida a un sujeto procesal ajeno al poder conferido por mis mandantes, pero que afecta directamente los intereses de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien es la única persona que demostró en sede administrativa depender económicamente del causante, al ser una persona incapacitada desde su nacimiento.

TERCERA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio, lo anterior, más allá de que esta pretensión va dirigida a un sujeto procesal ajeno al poder conferido por mis mandantes, pero que afecta directamente los intereses de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien es la única persona que demostró en sede administrativa depender económicamente del causante, al ser una persona incapacitada desde su nacimiento.

CUARTA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio, lo anterior, más allá de que esta pretensión va dirigida a un sujeto procesal ajeno al poder conferido por mis mandantes, pero que afecta directamente los intereses de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien es la única persona que demostró en sede administrativa depender económicamente del causante, al ser una persona incapacitada desde su nacimiento.

QUINTA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto la entidad demandada al momento de emitir las resoluciones que el demandante pretende sean anuladas actuó de conformidad con la ley, por tanto, se presumen válidas y carentes de cualquier vicio, lo anterior, más allá de que esta pretensión va dirigida a un sujeto procesal ajeno al poder conferido por mis mandantes, pero que afecta directamente los intereses de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien es la única persona que demostró en sede administrativa depender económicamente del causante, al ser una persona incapacitada desde su nacimiento.

A LOS HECHOS

1. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

2. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

3. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

4. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

5. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

3

6. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

7. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

8. **No es cierto.** Respecto a la afirmación de que el demandante dependía económicamente del causante, como quiera que las ayudas que el Señor **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO** brindaba al demandante, las hacía de manera libre, espontánea y voluntaria, pues sus sentimientos de padre lo impulsaban a apoyar a todos sus hijos de manera igualitaria y sin discriminación de cada uno de ellos, respecto a la afirmación de que dependía económicamente de la señora INES AIDA ARTURO MORA, no me consta o no es cierto, pues es un hecho que debe probarse en el transcurso del proceso.

9. **Se admite como cierto.** Tal y como se narra en la contestación al hecho inmediatamente anterior, las ayudas económicas que el causante le daba al demandante las hacía por el simple hecho de colaborar con su manutención, dados los sentimientos de parentesco y cariño que lógicamente tenia para con sus hijos, sin mediar orden o mandato judicial que así lo ordene.

10. **Se admite como cierto.** Tal y como se ha venido narrando en la contestación a los hechos inmediatamente anteriores, las ayudas económicas que el causante entregaba al demandante las hacía por el simple hecho de colaborar con su manutención y cuidados, dados los sentimientos de parentesco y cariño que lógicamente tenia para con sus hijos

11. **Se admite como cierto**

12. **Se admite como cierto.** Tal y como se ha venido narrando en la contestación a los hechos inmediatamente anteriores, las ayudas económicas que el causante entregaba al demandante las hacía por el simple hecho de colaborar con su manutención, dados los sentimientos de parentesco y cariño que lógicamente tenia para con sus hijos, anotando además que jamás existió sentencia u orden judicial que ordenara al causante pagar una mesada alimenticia al demandante.

13. **Se admite como cierto.**

14. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

15. **Se admite como cierto.** Según prueba documental que obra en el expediente.

16. **No es cierto.** Los dineros entregados al demandante por parte de mi mandante MARIA ANGELITA LEITON, los hacia por la simple voluntad de colaborar con la ayuda que su difunto esposo lo hacía, en ningún momento el causante JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO dejó voluntad expresa de continuar entregando cuotas alimentarias a ninguno de sus hijos, dicha afirmación es falsa y debe probarse.

17. **No me consta.** El hecho no es claro en mencionar o redactar respecto de quien dejó alguna nota expresa, de que las cuotas reconocidas serian exclusivamente para la

4

manutención del demandante, por tanto, no puedo aceptar, negar o allanarme a este hecho, en todo caso de referirse al causante, dicha afirmación no es cierta, como quiera que JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, NO dejó voluntad expresa de continuar entregando cuotas alimentarias a ninguno de sus hijos, dicha afirmación es falsa y debe probarse.

18. **Se admite como cierto.** Pues no existiendo obligación legal ni de parentesco, mi mandante MARIA ANGELITA LEITON, dejó de entregar los dineros que su difunto esposo daba a su hijo de manera voluntaria.

19. **No me consta.** No me constan los motivos por los cuales el demandante inicio los tramites tendientes a la calificación de su PCL, por tanto, son hechos que deben probarse.

20. **Se admite como cierto.** Si bien es cierto existe un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, el mismo no basta para concluir que el demandante dependía económicamente del causante.

21. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

22. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

23. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

24. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

25. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

26. **No es cierto o no me consta.** Como quiera que deben probarse los motivos por los cuales el demandante afirma que no cuenta con recursos propios para aportar al sistema de seguridad social en salud, aunado a que el demandante pudo optar por verse beneficiado del régimen subsidiado de salud al verse desprovisto de la capacidad económica que le permitiese sufragar dichos aportes.

27. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

28. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

29. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

30. **No me consta.** Por cuanto es un hecho ajeno al obrar y actuar de mis representadas.

31. **No es cierto.** Como quiera que mi mandante la señora **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** siempre dependió económicamente de su difunto padre, situación que se corroborará con las pruebas documentales y testimoniales que se ventilaran en el transcurso del proceso, pues es una persona que jamás se ha podido valer por sí sola, diagnosticada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño

5

mediante dictamen No. 0129-2018 de 15 de febrero de 2019 en un porcentaje del 66.44%, de origen común y con fecha de estructuración 26 de abril de 1977, es decir desde su nacimiento, con enfermedades congénitas como son:

- SINDRIME DE TURNER
- HIPO GONADISMO HIPERGONADOTROFICO
- HIPOTIROIDISMO
- BAJA TALLA DEFINITIVA
- HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL DE GRADO MODERADO A SEVERO.

Patologías que sirvieron de base para decretar la PCL de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, siendo una persona que jamás ha ejercido actividades laborales de ningún tipo, pues ha cotizado de manera particular al sistema de seguridad social en pensiones y salud con los dineros recibidos de su padre y el posterior reconocimiento de la sustitución pensional por hija invalida, ya que ni siquiera ha realizado estudios profesionales, alcanzando un nivel de estudios solamente hasta el bachillerato, por tanto la afirmación que realiza el demandante en este hecho carece de fundamentos facticos, como quiera que mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON siempre dependió económicamente del causante, al verse desprovista de su capacidad laboral y al padecer de enfermedades congénitas que le han impedido sobrellevar una vida independiente.

32. **No es cierto.** Como quiera que, si bien la Gobernación de Nariño tuvo en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño y junto con otros medios probatorios para conocer el carácter de persona invalida y dependiente de su padre, mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON fue declarada invalida incluso desde su nacimiento 26 de abril de 1977, situación que indica que mi mandante es quien goza de mejor derecho.

33. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

34. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

35. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

36. **Se admite como cierto.** según prueba documental que obra en el expediente.

37. **No es cierto.** Como quiera que mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON es quien ha demostrado en sede administrativa ser la única beneficiaria del derecho legalmente obtenido, al ser una persona discapacitada y dependiente de su padre, desde el día de su nacimiento.

6

EXCEPCIONES

PREVIAS

FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa, sea por activa o por pasiva, es un presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que le asiste a una persona, sea natural o jurídica, para ostentar dicha calidad y, por ende, formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse a ellas.

El artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión expresa consagrada en el artículo 306 del C.P.A.C.A., prevé las excepciones previas como medios de defensa del accionado encaminados a dilatar la entrada a juicio. Su condición de previas o dilatorias resulta de la falta de capacidad para enervar por completo la pretensión principal del actor; por lo tanto, su constitución no aniquila el derecho subjetivo sustancial que se pretende hacer valer en el proceso, pero sí obliga a que el demandante subsane las inconsistencias presentadas, pues de otro modo impedirán la continuación del trámite del asunto. Entre las mencionadas excepciones se encuentra la de falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual se configura por la falta de conexión entre la parte demandada y la situación fáctica constitutiva del litigio; así, quienes están obligados a concurrir a un proceso en calidad de demandados son aquellas personas que participaron realmente en los hechos que dieron lugar a la demanda.

Para el caso de marras, interpongo esta excepción solo respecto a mi **mandante MARIA ANGELITA LEITON**, como quiera que la prestación reconocida a su favor debe permanecer incólume, pues las pretensiones del demandante van encaminadas exclusivamente a que se le reconozca el porcentaje que cree le corresponde, sin aludir al porcentaje legalmente ya reconocido a favor de MARIA ANGELITA LEITON, esposa del causante, con quien convivió y compartió techo, lecho y mesa por un lapso superior a los 40 años y hasta su deceso.

DE FONDO

1. COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN:

No existe obligación a cargo de la Gobernación de Nariño de reconocer y pagar al demandante las pretensiones contenidas en su libelo genitor por carecer éstas de fundamentos fácticos y jurídicos que las soporten como se desprende de las razones fácticas y jurídicas de la defensa que obran en el acápite correspondiente, pues mis mandantes han sido beneficiarias de una pensión de sobrevivientes conforme requisitos legalmente obtenidos.

2. AUSENCIA DE VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS:

El acto administrativo demandado, conserva incólume su presunción de validez y surte plenamente sus efectos en el mundo jurídico, puesto que esta no ha sido desvirtuado por el demandante, toda vez que el mismo no contiene vicio alguno que conlleve a su anulación,

7

ya que fue expedido por la autoridad competente, observando la ritualidad exigida para su creación y ejecutoria, tanto los motivos en los que se funda como la motivación que en él se lee son consistentes y congruentes con las normas superiores en las que se fundan, razón por la cual los vicios que se le imputan carecen de fundamento de acuerdo a los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las pensiones reconocidas a favor de mis mandantes se ajustan a los preceptos legales y requerimientos que la entidad solicitó para el posterior reconocimiento de las mismas.

3. BUENA FE

Al respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

"Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana especialmente desde 1935, citándose la jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el art 1603 del código civil colombiano: "los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella". Norma que tiene su correspondencia en numerosos artículos del código civil y que en la década del treinta también tendrá en Colombia importante tratamiento doctrinal: "de ahí que se hable de la buena fe de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones, gracias al cual el juez puede sacar triunfante la equidad sobre los rigores del formalismo".

"El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el código sustantivo del trabajo, art 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del tribunal supremo del trabajo: "El principio de la buena fe, que no es nuevo, sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos, incluido el de trabajo". Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe en los siguientes términos"

"La mala fe ha dicho la Corte Suprema de Justicia, debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la bona fide, como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un aprovechamiento inhonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de cada caso".

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional de la Gobernación de Nariño al otorgar la pensión de invalidez a mi prohijada ANA CRSITINA QUINTANA LEYTON, surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe el

8

reconocimiento o negación pensional, la celebración de contratos, entre otros, por lo que es de carga exclusiva del demandante controvertir tanto la presunción legal del acto como la buena fe en la decisión y actuar.

4. AUSENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR.

Conforme el artículo 1524 del CC, no puede existir obligación sin una causa real y lícita, entendida la causa como el motivo que induce al acto o contrato.

Así, en el tema pensional la causa del derecho a adquirir una sustitución pensional se basa principalmente en el cumplimiento cierto de los requisitos de dependencia e invalidez en el caso de los hijos.

5. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIONES:

Señor Magistrado, le solicito atentamente si en el transcurso del proceso encuentra probados hechos que constituyan una excepción de fondo, la reconozca oficiosamente en la sentencia.

RAZONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS DE LA DEFENSA

El literal C del artículo 74 de la ley 100 de 1933, conforme fue modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 expone quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

De lo anterior se concluye que:

- El hijo invalido debe acreditar el parentesco.
- Debe existir dependencia económica.
- El estado de invalidez debe corresponder a una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.
- El estado de invalidez debe estructuraras antes del fallecimiento del causante.
- La pensión se reconoce mientras subsista la invalidez.
- La edad del hijo invalido no se considera.

Por su parte el articulo 38 ib. estipula:

ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

9

A contrariu sensu la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-577 de 2010 afirmó:

«En síntesis, la única razón válida que encuentra la Corte para que se niegue el reconocimiento o se extinga la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios que consagra la última parte del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es la independencia económica del hijo inválido o que haya cesado frente a éste la discapacidad.»

En este caso la sustitución pensional se reconoce de forma excepcional cuando existen dos causales que pueden no ser vitalicias, como es la invalidez y la dependencia económica, y cualquiera de ellas eventualmente puede desaparecer en el futuro.

Lo que se entiende por dependencia económica.

La dependencia económica es fundamental para adquirir el derecho y para perderlo, por lo tanto, es relevante definir lo que se debe entender por dependencia económica.

La Corte constitucional ha sentenciado que la dependencia económica no debe ser absoluta, por lo tanto, el hecho de que se obtengan ingresos propios no necesariamente conlleva a la pérdida de la dependencia económica.

En la sentencia antes referida señala la Corte:

1. *Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.*
2. *El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.*
3. *No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.*
4. *La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.*
5. *Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.*
6. *Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.*

Lo anterior nos permite concluir que la dependencia económica desaparece cuando la persona obtiene ingresos suficientes y permanentes, entendiendo suficientes como aquellos que normalmente requiere para mantener su nivel de vida.

10

Jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en hijos discapacitados que dependen económicamente de sus padres, específicamente, la incidencia sobre la misma de la fecha de estructuración de la invalidez

En la sentencia T-789 de 2003 la Corte reiteró que el objeto de la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes consiste en proteger a la familia, *"puesto que a través de ella se garantiza a los beneficiarios –quienes compartían de manera más cercana su vida con el causante- el acceso a los recursos necesarios para subsistir en condiciones dignas, con un nivel de vida similar al que gozaban con anterioridad al fallecimiento del(la) pensionado(a); en ese mismo sentido, ha precisado que "la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria".* (Subrayado fuera del texto).

En efecto, la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes tiene como propósito fundamental proteger a la familia que por causa del fallecimiento de la persona que proveía el sustento del hogar queda en situación de indefensión, ya sea por razones de tipo económico, físico o mental, respecto a quien debe pagar la mesada. Lo anterior con la finalidad de que vivan en condiciones dignas y con un nivel de existencia similar al que disfrutaban antes del fenecimiento del pensionado.

En las sentencias T-941 de 2005 y T-595 de 2006 la Corte se refirió a los requisitos establecidos en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes términos: "*De lo anterior se infiere, y en especial para el caso de los hijos inválidos, que para poder obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) el parentesco, (ii) el estado de invalidez del solicitante y iii) la dependencia económica respecto del causante*." En definitiva, esta Corporación ha manifestado que "*las condiciones de dependencia que establece la ley deben estar presentes a la muerte del causante y la continuidad de su pago requiere que tales condiciones persistan a lo largo del tiempo. Si desaparece la condición de invalidez, o si el beneficiario deja de ser estudiante o cumple más de 25 años, se extingue su derecho a la pensión de sobrevivientes.*"

El procedimiento que rige la forma como deben adoptarse las decisiones de las Juntas de Calificación de Invalidez, respecto de pensiones de invalidez o de pensiones de sobrevivientes de hijos inválidos que dependían económicamente de sus padres se encuentra regulado en los artículos 38 a 43 de la Ley 100 de 1993, desarrollados por el Decreto 917 de 1999 -que corresponde al Manual Único para la Calificación de la Invalidez- y por el Decreto 2463 de 2001 -por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. El aspecto central en el cual ha enfatizado esta Corporación sobre este tipo de dictámenes es que *"deben ser motivados, en el sentido de manifestar las razones que justifican en forma técnico-científica la decisión"*, lo que guarda coherencia con el artículo 31 del Decreto 2463 de 2001 que prescribe que éstos *"deben contener las decisiones expresas y claras sobre el origen, fecha de estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral".*

11

En la sentencia T-773 de 2009 se sistematizaron las reglas básicas que la Corte ha destacado sobre los enunciados normativos referenciados en el numeral anterior:

> *"i) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. Al efecto, a tal solicitud se debe allegar el certificado correspondiente (art. 9° del Decreto 917 de 1999 y arts. 23 y 25-3 del Decreto 2463 de 2001).*
>
> *ii) Valoración completa del estado de salud de la persona cuya invalidez se dictamina o se revisa, para lo cual las juntas deben proceder a realizar el examen físico correspondiente antes de elaborar y sustanciar la respectiva ponencia (art. 28 ibid.)".*
>
> (iii) *"Los dictámenes que emitan las juntas de calificación, deben contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión* [según el artículo 9° del decreto 2463 de 2001 que] *(…) indica que los fundamentos de hechos son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia, lo cual incluye historias clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos; y en general, los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal, tales como certificado de cargos y labores, comisiones, realización de actividades, subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, que se relacionen con la patología, lesión o condición en estudio y que los fundamentos de derecho son todas las normas que se aplican al caso de que se trate".*
>
> (iv) *"A las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez les corresponde* [de conformidad con el artículo 14 Decreto 2463 de 2001]**.** *(…) emitir los dictámenes, previo estudio de los antecedentes clínicos y/o laborales; Ordenar la presentación personal del afiliado, del pensionado por invalidez o del aspirante a beneficiario por discapacidad o invalidez, para la evaluación correspondiente o delegar en uno de sus miembros la práctica de la evaluación o examen físico, cuando sea necesario; Solicitar a las entidades promotoras de salud, a las administradoras de riesgos profesionales y a las administradoras de fondos de pensiones vinculados con el caso objeto de estudio, así como a los empleadores y a las instituciones prestadoras de los servicios de salud que hayan atendido al afiliado, al pensionado o al beneficiario, los antecedentes e informes que consideren necesarios para la adecuada calificación".*

Específicamente sobre la fecha de estructuración de invalidez se encuentra el artículo 3 del Decreto 917 de 1999 que se denomina el Manual Único para la Calificación de la Invalidez: "*el momento de estructuración de la invalidez de una persona es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación.*"

12

PARA EL CASO CONCRETO

Mediante resolución No. 990 de 04 de noviembre de 2015, mi mandante MARIA ANGELITA LEITON fue beneficiaria de una sustitución pensional a raíz de la muerte de su esposo JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.

El reconocimiento de esta prestación se realizó a su favor en un 100%, como quiera que, por la ignorancia y desconocimiento de la ley, solo hasta la expedición de la Resolución No. 073 de 27 de agosto de 2019, se reconoció en favor de su hija invalida ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON el 50% de la prestación, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Gobernación de Nariño.

Respecto al reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de mi mandante MARIA ANGELITA LEITON, no hay discusión, pues es evidente que ella convivió con el causante mucho más de los 5 años anteriores al deceso del Señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, cumpliendo de lleno los requisitos del literal a del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003:

"a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;"

De la unión entre MARIA ANGELITA LEITON y JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, procrearon 3 hijos:

- **MARIA HORTENSIA QUINTANA LEYTON,** identificada con cédula de ciudadanía No. 36.759.056 de Tumaco (N).
- **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.836.850 de Pasto (N).
- **JORGE JHONSON QUINTANA LEYTON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.380.947 de Pasto (N).

Para el caso que nos ocupa, mediante Resolución No. 0731 de 27 de agosto de 2019, la cual modificó la resolución No. 990 de 04 de noviembre de 2015, se le reconoció a favor de mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON el 50% del total de la prestación dejada por el causante JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, pues en calidad de hija invalida, decretada mediante dictamen No. 0129-2018 de 15 de febrero de 2019 en un porcentaje del 66.44%, de origen común y con fecha de estructuración 26 de abril de 1977 (día de su nacimiento) y la dependencia económica para con el causante, reunió los requisitos legales y jurisprudenciales para que la Gobernación de Nariño lo otorgue el derecho pretendido.

Es conocido por su Despacho las circunstancias de hecho que llevaron a otorgar el 25% de la prestación a favor de JORGE ROLANDO QIUINTANA ARTURO sobre total reconocido a mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien mediante fallo de tutela logró obtener el reconocimiento y pago de su mesada por hijo invalido.

13

Ahora bien, no se riñe la calidad de hijo invalido del demandante, sin embargo, si hay discusión respecto a la dependencia existente para con el causante, por cuanto existe certeza de su formación profesional, capacidad económica e independencia respecto del fallecido, prueba de ello son los constantes estudios profesionales y diversas actividades laborales ejercidas por el demandante a lo largo de su vida, que dan fe de que jamás dependió económicamente de su padre, como quiera que los dineros que el causante entregaba a los hijos de su primer matrimonio los hacia conjuntamente, es decir para ser repartidos entre todos sin distinción, dinero que se les otorgaba como una ayuda adicional insistiendo, en que esos recursos NO sufragaban en su totalidad la manutención del demandante, pues son ayudas que apenas alcanzaban a sufragar gastos básicos del demandante y de la totalidad de hijos del Señor QUINTANA BURBANO.

El demandante siempre ha sido una persona independiente y capaz de ejercer actividades en el ámbito laboral, conforme se demuestra con la documental arrimada a la presente contestación, en consecuencia, de contera se inhibe uno de los requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del demandante, esto es la DEPENDENCIA.

Contrario a lo que sucede con mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, quien jamás ha ejercido actividades laborales para solventar sus gastos y propia manutención, pues aparte de las patologías que sirvieron de base para ser dictaminada una persona invalida ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, posee varias enfermedades físicas, incluso psicológicas que le impiden llevar una vida normal y de manera independiente, pues los recursos obtenidos en razón de la sustitución pensional legalmente obtenida son la única entrada económica que le permiten sobrellevar una vida en condiciones dignas; quitarle el porcentaje legalmente obtenido vulneraria sus Derechos Fundamentales, más aun siendo una persona de especial protección del Estado al encontrarse en manifiesta incapacidad y dependencia de la prestación dejada por su padre, aunado a que cuenta también con Dictamen de merma de capacidad laboral emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en el que supera el 50% de su PCL, cuya invalidez es estructurada igualmente al día de su nacimiento y el cual servirá como soporte probatorio anexo a la presente contestación, en el cual se le diagnosticaron las siguientes patologías:

- Síndrome de Turner.
- Hipotiroidismo.
- Disfunción ovárica con infertilidad.
- Hipertensión arterial.
- Vasculopatía aortica.
- Hipoacusia neurosensorial.
- Baja densidad ósea (osteoporosis).
- Baja estatura por trastorno endocrino.

Por todo lo expuesto, deben dejarse incólume las resoluciones atacadas en la presente demanda, sin menoscabo del 50% reconocido inicialmente a mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.

14

MEDIOS DE PRUEBA

Para demostrar los hechos expuestos en la contestación de la demanda y en las razones de la defensa, solicito a su Señoría, decrete y practique las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

Sírvase tener como pruebas las siguientes:

- Copia cedula de ciudadanía de ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.
- Copia registro civil de nacimiento de ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.
- Partida de bautismo de MARIA ANGELITA LEYTON con nota marginal de matrimonio con JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.
- Copia cedula de ciudadanía de MARIA ANGELITA LEITON.
- Registro civil de nacimiento de MARIA ANGELITA LEITON.
- Registro civil de matrimonio de MARIA ANGELITA LEITON con JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.
- Registro civil de defunción de JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.
- Copia formato requisitos para tramite de sustitución pensional emitido por la subsecretaria de talento humano de la Gobernación de Nariño.
- Copia acuse de recibo de entrega de documentación para reclamo de sustitución pensional firmado por ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON de 05 de abril de 2019 radicado ante la subsecretaria de talento humano de la Gobernación de Nariño.
- Copia constancia emitida por Dr. JULIAN ZUÑIGA RAMOS.
- Copia declaración extra juicio de JAIME ALFREDO PAZMIÑO BURBANO.
- Copia declaración extra juicio de BERTHA ALICIA CORDOBA DE GUERRERO.
- Copia declaración extra juicio de MARLENY ALEXANDRA ROMO VARGAS.
- Copia declaración extra juicio de MARIA ANGELITA LEITON Y JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.
- Copia declaración extra juicio de MARIA ANGELITA LEYTON.
- Copia declaración extra juicio de MARIA HORTENSIA QUINTANA LEYTON.
- Copia declaración extra juicio de MARIA ANGELITA LEYTON.
- Copia declaración extra juicio de OLGA LEONELDA CANCIMANCE DIAZ.
- Copia historia laboral de ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON actualizada a 11 de abril de 2018.
- Copia dictamen No. 0129-2018 de 15 de febrero de 2019 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño.
- Acta de notificación de dictamen anterior.
- Constancia de ejecutoria del dictamen anteriormente citado.
- Copia resolución No. 990 de 2015 emitida por la Gobernación de Nariño.
- Copia resolución No. 141 de 14 de junio de 2019 emitida por la Gobernación de Nariño

15

- Copia resolución No. 0731 de 27 de agosto de 2019 emitida por la Gobernación de Nariño.
- Copia de algunos recibos de pago de ayudas económicas entregadas a JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO y hermanos por parte de MARIA ANGELITA LEYTON. De los meses que a continuación relaciono: diciembre 2015, abril 2016, julio 2016, mayo 2017, junio 2017, diciembre 2017, prima diciembre 2017.
- Examen de optometría de ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.
- Evaluación psicológica de ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.
- Hoja de vida de JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO actualizada hasta donde se tiene conocimiento de sus actividades laborales sin incluir la realidad actual.
- Certificación vigencia tarjeta profesional de abogado No. 322245 de JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO emitida por la dirección de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura.
- Dictamen de merma de capacidad laboral emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia hacia mi mandante ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.

OBJETO DE LAS PRUEBAS:

- Demostrar la dependencia económica de mi mandante ANA CRISITINA QUINTANA LEYTON para con su padre como uno de los requisitos para ser legalmente beneficiaria de la sustitución pensional a su favor.
- Demostrar el estado de invalidez de mi mandante ANA CRISITINA QUINTANA LEYTON como uno de los requisitos para ser legalmente beneficiaria de la sustitución pensional a su favor.
- Demostrar la convivencia y dependencia de mi mandante MARIA ANGELITA LEYTON con JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO como uno de los requisitos para ser legalmente beneficiaria de la sustitución pensional a su favor.
- Demostrar la independencia económica del demandante JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, es decir el no cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiario de una sustitución pensional.

INTERROGATORIO DE PARTE

OBJETO DE LA PRUEBA: Demostrar que el demandante no cumple con el requisito de dependencia económica del causante Señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.

Para el cumplimiento de la anterior, ruego a Ud. su Señoría, citar y hacer comparecer al demandante en las direcciones aportada con la demanda.

16

TESTIMONIALES:

Ruego se cite y se haga comparecer a:

- SONIA MARTHA GUERRERO QUINTANA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 30737825, celular 3145141330, correo electrónico guerrerosquinta@hotmail.com
- LILIANA GUERRERO QUINTANA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 59823418, celular 3155209492, correo electrónico guerrerosli@hotmail.com.

OBJETO DE LA PRUEBA:

- Demostrar la dependencia económica de mi mandante ANA CRISITINA QUINTANA LEYTON para con su padre como uno de los requisitos para ser legalmente beneficiaria de la sustitución pensional a su favor.
- Demostrar el estado de invalidez de mi mandante ANA CRISITINA QUINTANA LEYTON como uno de los requisitos para ser legalmente beneficiaria de la sustitución pensional a su favor.
- Demostrar la convivencia y dependencia de mi mandante MARIA ANGELITA LEYTON con JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO como uno de los requisitos para ser legalmente beneficiaria de la sustitución pensional a su favor.
- Demostrar la independencia económica del demandante JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, es decir el no cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiario de una sustitución pensional.
- Demostrar que el demandante no cumple con el requisito de dependencia económica del causante Señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como normas aplicables a la presente contestación el artículo 38, 46, 47, 74 de la ley 100 de 1993, ley 100 de 1993, con las modificaciones de la ley 797 de 2003,

ANEXOS

Me permito adjuntar:

*Los señalados en el acápite de Pruebas como documentales
*El poder otorgado al suscrito.

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

Las de la parte actora se encuentran en el libelo genitor.

- El suscrito las recibiré en la Calle 20 No. 29-24 Oficina las Cuadras en Pasto, celular 3222394655 correo electrónico ivan.230706@hotmail.com.

17

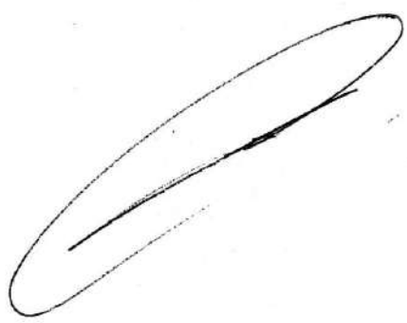
- Las demandadas:

  ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON en la Av. 37B No. 45-71 3 piso en Bello - Antioquia, celular 3164244309, correo electrónico anitaquintana1@hotmail.com

  MARIA ANGELITA LEITON en la Av. 37B No. 45-71 3 piso en Bello - Antioquia, celular 3007710424, correo electrónico alexin23@hotmail.com

Del Señor Magistrado.

Cordialmente,



ALVARO IVAN ESTRADA SANCHEZ
CC. 13.072.590
T.P. 185.345 del C. S. de la J.

Doctor:
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
Magistrado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
E. S. D.

REF.: PODER ESPECIAL

Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Rad.	**2019-00661**
Demandante:	**JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO**
Demandado:	**DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y OTROS**

MARIA ANGELITA LEYTON y ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, mayores de edad, vecinas de Medellín (A), identificadas con las cédulas de ciudadanía No. 30.703.142 y 59.836.850 respectivamente, en calidad de demandadas dentro del proceso de la referencia, a Usted con el debido respeto manifestamos que:

Conferimos **PODER ESPECIAL,** amplio y suficiente al abogado **ALVARO IVAN ESTRADA SANCHEZ,** identificado como aparece al pie de su correspondiente firma, portador de la Tarjeta Profesional No. 185.345 del C. S. de la J., para que me asista y ejerza mi Derecho de Defensa en pro de nuestros intereses, conteste la demanda de la referencia, asista a las audiencias de rigor en primera y segunda instancia, presente los recursos que en Derecho correspondan, de conformidad con los hechos y demás elementos de juicio que le suministraremos a nuestro apoderado oportunamente

Nuestro apoderado queda especial y ampliamente facultado conforme lo establece el artículo 77 del C. G. del P., para oponerse al decreto y ejecución de las medidas cautelares solicitadas por el demandante, así mismo para que participe en la evacuación del material probatorio, interponga recursos, y las facultades de proponer excepciones, conciliar, transar, transigir, sustituir, reasumir, desistir, recibir, renunciar y en general para adelantar cada gestión que estime necesaria en defensa de los intereses que se le confían.

Sírvase Señor Magistrado reconocerle personería para actuar a mi apoderado en los términos y para los fines del presente memorial poder.

Atentamente,

MARIA ANGELITA LEYTON
Cédula de ciudadanía No. 30.703.142

ANA CRISTINA LEYTON
Cédula de ciudadanía No. 59.836.850

Acepto,

ALVARO IVAN ESTRADA SANCHEZ
Cédula de ciudadanía No.13.072.590 de Pasto
T.P. 185.345 del C. S. de la J.

SE AUTENTICA POR SOLICITUD Y RUEGO DEL INTERESADO

Escaneado con Cam

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

31972

En la ciudad de Bello, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Bello, compareció:

MARIA ANGELITA LEITON , identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0030703142, presentó el documento dirigido a MAGISTRADO - TRIBUNAL ADMISTRATIVO DE NARIÑO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



8a8lq3vmz6jp
24/02/2020 - 14:59:43:510

-------- Firma autógrafa --------

ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0059836850, presentó el documento dirigido a MAGISTRADO - TRIBUNAL ADMISTRATIVO DE NARIÑO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



8r09gy40ejmm
24/02/2020 - 15:01:07:208

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

LILIANA MARÍA GUTIÉRREZ CASTAÑO
NOTARIA ENCARGADA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE BELLO

Notaria Primera de Bello - Antioquia

LILIANA MARÍA GUTIÉRREZ CASTAÑO
Notaria primera (1) del Círculo de Bello - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 8a8lq3vmz6jp

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **59.836.850**
QUINTANA LEYTON
APELLIDOS
ANA CRISTINA
NOMBRES

Ana Cristina Quintana Leyton
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-1977**
TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-AGO-1995 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2300100-00212244-F-0059836850-20100202 **0020543932A 1** 33654647

Escaneado con Cam

...LOS MESES | SEPTIEMBRE. 09 | OCTUBRE. 10 | NOV... | DIC... 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL
Superintendencia de Notariado y Registro

REGISTRO DE NACIMIENTO

16516547

IDENTIFICACION No.

(1) Parte básica	(2) Parte compl.
770426	

OFICINA REGISTRO CIVIL

(3) Clase (Notaría, Alcaldía, Corregiduría, etc.): NOTARIA UNICA

(4) Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaría: TUMACO NARIÑO

(5) Código: 4605

SECCION GENERICA

INSCRITO

(6) Primer apellido: QUINTANA

(7) Segundo apellido: LEYTON

(8) Nombres: ANA CRISTINA

SEXO

(9) Masculino o Femenino: FEM.-

(10) Masculino ☐ Femenino ☒

FECHA DE NACIMIENTO

(11) Día: 26

(12) Mes: ABRIL

(13) Año: 1.977.-

LUGAR DE NACIMIENTO

(14) País: COLOMBIA

(15) Departamento, Int., o Com.: NARIÑO

(16) Municipio: TUMACO

SECCION ESPECIFICA

DATOS DEL NACIMIENTO

(17) Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento: SIN DATOS - TUMACO

(18) Hora:

(19) Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.): PARTIDA PARROQUIAL

(20) Nombre del profesional que certificó el nacimiento: SIN CERTIFICAR

(21) No. licencia:

MADRE

(22) Apellidos (de soltera): LEYTON

(23) Nombres: MARIA ANGELITA

(24) Edad actual:

(25) Identificación (clase y número): C.C.No. SIN IDENTIFICAR

(26) Nacionalidad: COLOMBIANA

(27) Profesión u oficio: HOGAR

PADRE

(28) Apellidos: QUINTANA

(29) Nombres: JORGE RAFAEL

(30) Edad actual:

(31) Identificación (clase y número): C.C.No. 1.793.180 Pasto

(32) Nacionalidad: COLOMBIANO

(33) Profesión u oficio: ABOGADO

DENUNCIANTE

(34) Identificación (clase y número): C.C.No. 1.793.180 Pasto

(35) Firma (autógrafa):

(36) Dirección postal y municipio: REGISTRO CIVIL - NACIMIENTO TUMACO

(37) Nombre: C.C. 1.793.180 Pasto

TESTIGO

(38) Identificación (clase y número): El suscrito Notario, hace constar

(39) Firma (autógrafa): JORGE RAFAEL QUINTANA

(40) Domicilio (Municipio): Que la presente fotocopia es reproducción de su original que reposa en nuestros archivos, e inscrito en el

(41) Nombre:

TESTIGO

(42) Identificación (clase y número): respondiente registro Civil de Naci.

(43) Firma (autógrafa):

(44) Domicilio (Municipio): Tumaco 18 MAY 1994

(45) Nombre:

FECHA DE INSCRIPCION

(FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO)

(46) Día: 12

(47) Mes: JUNIO

(48) Año: 1.991

(49) Firma (autógrafa) y sello del funcionario ante quien se hace el registro

NOTARIA UNICA ENCARGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA ... Antonio ... TUMACO - NARIÑO

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Forma DANE IP10 – 0 VI/77

Escaneado con Cam

TIMBRE ECLESIÁSTICO

PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ANCUYA NARIÑO
CEL: 3163647265

PARTIDA DE BAUTISMO

MARIA ANGELITA LEITON

LIBRO 19
FOLIO 383
NUMERO 142

SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE PARTIDA QUE A LA LETRA DICE:

En la iglesia parroquial de Ancuya, a veintinueve de Julio de mil novecientos cincuenta y uno, bautice solemnemente a MARIA ANGELITA, de diez días de nacida, hija de ORTENSIA LEITON. Abuelos maternos, ANGELITA LEITON. Madrina, CARMELA ORTIZ

Doy Fe. Floresmilo Flores. Pbro

Notas marginales: Contrajo matrimonio con JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO. en la parroquia San Felipe Neri de Pasto, el día 7 de Diciembre de 2011.

ESTA PARTIDA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. DADA EN EL DESPACHO PARROQUIAL DE ANCUYA A 21 DE MARZO DE 2019

LEONARDO CASTRO. Pbro
Doy Fe:

DIOCESIS DE IPIALES
PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL DE ANCUYA

Escaneado con Cam

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **30.703.142**

LEITON

APELLIDOS

MARIA ANGELITA

NOMBRES

FIRMA



30703142

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1951**

ANCUYA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

25-SEP-1973 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2300100-00872212-F-0030703142-20161216 0052602672A 2 6034199169

Escaneado con Cam

Nombre y apellidos del registrado

Adhesivo Copia Registro Civil
REGISTRADURIA 23736824-5

María Angelita Leiton

En la República de Colombia Departamento de Nariño

Municipio de Ancuya (Corregimiento, Vereda, etc.)

a los 29 días del mes de Julio de mil novecientos cincuenta y uno

se presentó el señor Efraín Perez (nombre del declarante) mayor de edad, de nacionalidad Col.

natural de Ancuya domiciliado en Ancuya Lomas y declaró: que el

18 del mes de Julio de mil novecientos 51 siendo

1 de la mañana nació en casa de Egenias Leiton Las Lomas (dirección de la casa, hospital, barrio, vereda, corregimiento, etc.)

del municipio de Ancuya República de Col. un niño de

femenino a quien se le ha dado el nombre de María Angelita hijo natural (legítimo o

del señor de (Con Cédula No.) de años de edad, na

de República de de profesión y la se

Ortensia Leiton de 22 años de edad, natural de Ancuya

República de Col. de profesión hombres siendo abuelos paternos

y abuelos maternos

Natural de Angelita Leiton

Fueron testig

Maceris Zambrano y Nirko Perez

En fé de lo cual se firma la presente a

El declarante, J. Efraín Perez B. (Cdla. No.) 2296522

El testigo, Macario Zambrano (Cdla. No.) 1994454

El testigo, Nirko Perez B (Cdla. No.) 1062457

(Firma y sello del funcionario ante quien se hace el registro)

COLOMBIA

Para los efectos del artículo segundo (2°) de la Ley 45 de 1936, reconozco al ni

Richard A. Realpe Betancourth
REGISTRADOR MPAL. DEL ESTADO CIVIL
SIN SELLO ART. 11 DEL 2150 DE 1995

EL SUSCRITO REGISTRADOR MUNICIPAL
DE ANCUYA - NARIÑO
CERTIFICA
EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADA
CONFORME A SU ORIGINAL DEL LIBRO 07 Nacimiento
FOLIO 609 SERIAL (29-Julio-1951)
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA REGISTRADURIA
SE FIRMA EN ANCUYA - NARIÑO
HOY 21 DE Marzo DE 2019
Válido para Documentación

NIP - 5107 18 - 31098
Serial No. - 09822550 88
21-Mar-19

Escaneado con Cam

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nota al respaldo

Indicativo Serial 5956603

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Datos de la oficina de registro – Clase de oficina

Clase de Oficina: Registraduría [ ] Notaría [X] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Insp. de Policía [ ] Código 1 1 3 W

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

NOTARIA 3 PASTO - COLOMBIA - NARIÑO - PASTO**********

Datos del matrimonio

Lugar de celebración: País - Departamento - Municipio

COLOMBIA NARIÑO PASTO**********

Fecha de celebración: Año 2011 Mes DIC Día 07

Clase de matrimonio: Civil [ ] Religioso [X]

Documento que acredita el matrimonio: Tipo de documento: Acta religiosa [X] Escritura de protocolización [ ]

Número: 1032 F516 LSAN FELIPE NERI********

Notaría, juzgado, parroquia, otra.

Datos del contrayente

Apellidos y nombres completos

QUINTANA BURBANO JORGE RAFAEL**********

Documento de identificación (Clase y número)

CC 1.793.180**********

Datos de la contrayente

Apellidos y nombres completos

LEITON MARIA ANGELITA**********

Documento de identificación (Clase y número)

CC 30.703.142**********

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos

LEITON MARIA ANGELITA**********

Documento de identificación (Clase y número)

CC 30.703.142**********

Firma

Fecha de Inscripción

Año 2011 Mes DIC Día 16

Nombre y firma del funcionario que autoriza

DIEGO ANDRES MONTENEGRO ESPINDOLA

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Lugar otorgamiento de la escritura	No. Notaría	No. Escritura	Fecha de otorgamiento de la escritura
**********	****	******	Año **** Mes *** Día **

HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO

Nombres y apellidos completos	Identificación (Clase y Número)	Indicativo serial de nacimiento
QUINTANA LEYTON JORGE JHONSON**********	CC 0098380947*	**********
QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA**********	CC 0059836850*	**********
QUINTANA LEYTON MARIA HORTENSTA********	CC 0036759056*	**********
**********	**********	**********
**********	**********	**********

PROVIDENCIAS

Tipo providencia	No. escritura o	Notaría o juzgado	Lugar y fecha	Firma funcionario
*******	*******	**********	**********	**********
*******	*******	**********	**********	**********
*******	*******	**********	**********	**********
*******	*******	**********	**********	**********
*******	*******	**********	**********	**********

16-DIC-2011 - TIPO DE DOCUMENTO CONTRAYENTE - ACTA RELIGIOSA Y********** CERTIFICACION DE COMPETENCIA. **********

****

Escaneado con Cam

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Diego Andrés Montenegro Espindola
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE PASTO

0885381 1*

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo Serial 08853811

Datos de la oficina de registro

Clase de oficina: Registraduría [ ] Notaría [ ] Consulado [X] Corregimiento [ ] Insp. de Policía [ ] Código [ ]

Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA - NARIÑO - PASTO

Datos del inscrito

Apellidos y nombres completos

QUINTANA BURBANO JORGE RAFAEL

Documento de identificación (Clase y número) | Sexo (en letras)

CC 1.793.180 | MASCULINO

Datos de la defunción

Lugar de la defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA NARIÑO PASTO

Fecha de la defunción: Año 2015 Mes SEP Día 18 | Hora 14:30 | Número de certificado de defunción 711594244

Presunción de muerte

Juzgado que profiere la sentencia | Fecha de la sentencia: Año Mes Día

Documento presentado: Sin Judicial [ ] Certificado Médico [X] | Nombre y cargo del funcionario

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos

ROJAS HIDALGO WILLIAM HERNEY

Documento de identificación (Clase y número) | Firma

CC 12.998.274 | Wilham Rojas

Primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número) | Firma

Segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número) | Firma

Fecha de inscripción

Año 2015 Mes SEP Día 21 | **Nombre y firma del funcionario que autoriza**

DIEGO ANDRES MONTENEGRO ESPINDOLA

ESPACIO PARA NOTAS

21-SEP-2015 - TIPO DE DOCUMENTO ANTECEDENTE - CERTIFICADO MEDICO D[illegible]E DEFUNCION.

Escaneado con Cam

REQUISITOS PARA TRAMITAR SUSTITUCION PENSIONAL ANTE LA SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACION DE NARIÑO

1. Solicitud dirigida a la Dra: **DIANA MARÍA ORTIZ JULIAO** - Subsecretaria de Talento Humano, con indicación de dirección y teléfono de residencia del solicitante.
2. Original del Registro Civil de Defunción y fotocopia de cédula del pensionado fallecido.
3. Fotocopia de cédula del o los solicitantes
4. Registro Civil de Nacimiento del o los solicitantes.
5. Registro Civil de Matrimonio y/o Declaración extra juicio de la compañero(a) permanente en el que se indique la convivencia por un tiempo
6. Certificación de la EPS, que demuestre su condición de beneficiaria(o) del pensionado fallecido.
7. Auto-declaración de la esposa(o) o compañera(o), según el caso, rendida ante Notario público, indicando tiempo de convivencia y dependencia económica con el pensionado fallecido.
8. Los hijos del pensionado fallecido, deberán acreditar:

8.1. Si es menor de 18 años: Registro Civil de Nacimiento y Constancia de Estudios.

8.2 Si es mayor de 18 años: Registro Civil de Nacimiento y Constancia de estudios.

8.3 Si es Discapacitado: Registro Civil de Nacimiento y Certificación actualizada (no inferior a 2 años), expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en la que se indique el porcentaje de invalidez del solicitante. **(JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ. DIAGONAL A LA PISCINA DE JESUS DEL RIO. Calle 12 No.27 - 112 Barrio San Felipe. T.7312758.)CALLE 22 A No.15 – 96 PISO 2 TEL: 7233692**

8.4 Si la discapacidad impide el auto cuidado, el manejo y la administración de bienes, se debe adjuntar sentencia judicial que declare interdicto y designación de curador ad. Ítem.

9. Dos declaraciones extra juicio de testigos (diferentes a familiares), a quien les conste la convivencia y la dependencia económica entre el solicitante y el pensionado fallecido.

Nota: Este trámite NO requiere de abogado.

Escaneado con Cam

05 ABR 2019
CORRESPONDENCIA
GOBERNACION DE NARIÑO
Mayerly Guerrero
59818376 21 folios

San Juan de Pasto, abril de 2019

SEÑORA

DIANA MARIA ORTIZ JULIAO
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO
GOBERNACION DE NARIÑO
E.S.O

REF.: SUSTITUCION PENSIONAL

ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificada con cedula de ciudadanía No. 59.836.850 de Pasto (N), en calidad de hija, de mi difunto padre JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO Q.E.P.D, quien se identificaba con cedula de ciudadanía No. 1.793.180 de Pasto (N), por medio del presente escrito me permito, adjuntar todos los requisitos necesarios para tramitar sustitución pensional, con el fin de que se me otorgue el 50% de la pensión, ya que el otro 50% será de mi señora madre, quien en este momento está gozando de la totalidad de la pensión.

Para efectos de notificaciones las recibiré en la CALLE 22 A NO.20-36 en Pasto. (N) y/o con número de teléfono 3023702077- 3155513951- 3157667356.

Anexos

- Todos los papeles requeridos por ustedes

Ana Cristina Quintana Leyton
ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON
C.C. No. 59.836.850 de Pasto.

Escaneado con Cam

JZR
Julián Zuñiga Ramos

Abogado Titulado
U. Autónoma de Colombia, Bogotá D.C
Especialista en Derecho Administrativo
U. de Nariño, San Juan de Pasto

A QUIEN PUEDA INTERESAR.

EL SUSCRITO A PETICION VERBAL DE LA INTERESADA,

H A C E – C O N S T A R:

Que por más de treinta (30) años conocí al Doctor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, El cual fue un abogado prestigioso en el municipio de Tumaco- Nariño, y tenía su hogar Formado con su señora esposa ANGELICA LEYTON DE QUINTANA, entre ellos su hija ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, la que se identifica con la cédula de ciudadanía No. 59.836.850 expedida en Pasto, de la cual sus familiares me han informado que hace 20 años la operaron de los oídos, y en la actualidad sufre de las enfermedad síndrome de turne, tiroides, fue operada dos veces de los oídos, y a consecuencia de las enfermedades que sufre le impide procrear familia y trabajar, y siempre dependió económicamente de su padre Dr. JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, y después de muerto sigue dependiendo de su señora madre ANGELICA LEYTON DE QUINTANA. Conozco a ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON desde que nació, la cual se crío en el hogar formado en la familia QUINTANA LEYTON.

Además, por informaciones de la familia QUINTANA LEYTON me he enterado que los hijos del anterior matrimonio del Dr. QUINTANA nunca le visitaron, incluido el señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 12.985.137, el cual no dependió de su padre JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.

En igual forma debo manifestar que el Dr. JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO era un excelente padre, persona caritativa, colaboradora, sincero y buen amigo, ayudaba a todos sus hijos, amigos y a muchas personas les sirvió en forma desinteresada buen padre y responsable en el hogar formado con la señora ANGELICA LEYTON DE QUINTANA.

San Andrés de Tumaco, 28 de febrero de 2020

Dr. JULIAN ZUÑIGA RAMOS
C.C. No. 12.902.623 de Tumaco
Abogado

, Calle 7B No. 9–33, segundo piso, Barrio 7 de agosto, Telefax 7271704, Tumaco – Nariño.
Email: julitza48@yahoo.es

Escaneado con Cam

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE PASTO

No. 690

AUTODECLARACION JURAMENTADA RENDIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1557 DE 1989 Y ARTICULO 188 DEL C.G. DEL P.

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, a (los) **DIECINUEVE (19)** día(s) del mes de **MARZO** del dos mil Diecinueve (2.019), ante mí **MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA**, Notaria Segunda del Círculo de Pasto, compareció: **JAIME ALFREDO PAZMIÑO BURBANO**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número: **12.970.157** expedida en: **PASTO (NARIÑO),** de 62 años de edad, de estado civil: **CASADO,** de profesión u oficio: **MECANICO - INDEPENDIENTE,** Domiciliado(a) y residente en: **PASTO (NARIÑO), BARRIO SAN JOSE, CARRERA 20 B No. 22 A -80- CELULAR 3116221702,** con el fin de rendir la presente declaración bajo la gravedad del juramento conforme a lo previsto en los artículos 33 de la Constitución Nacional, 442 del C.P. y 389 del C. de P. P., por cuya gravedad prometió decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en todo cuanto le conste y al efecto **MANIFESTO:**

1°.- Mis generales de ley son las ya expresadas.

2°.- A sabiendas de la responsabilidad legal que implica el jurar en falso, sin tener ninguna clase de impedimento, en forma libre y espontánea y sin ningún apremio **DECLARO:** Que conozco de vista, trato y comunicación por más de treinta y cinco años, a la señora **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON**, identificada con la C.C. No. 59.836.850 Expedida en Pasto – Nariño y a la Señora **MARIA ANGELITA LEYTON**, identificada 30.703.142 expedida en Pasto – Nariño, quien la primera es hija y la segunda esposa del Señor **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO,** quien se identificaba con la C.C. No. 1.793.180 expedida en Pasto – Nariño, quien falleció el 19 de Septiembre del 2015 y era quien en vida suministraba la totalidad de todos los recursos necesarios para la manutención de las personas antes mencionadas. Además doy fe que la Señora **MARIA ANGELITA LEYTON** después del fallecimiento de su esposo con la pensión reconocida en calidad de Cónyuge Supérstite es quien suministra los recursos económicos a su hija **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** en razón de que no puede trabajar debido a su enfermedad que padece desde su nacimiento.----------

Manifiesta el(la) declarante, que esta Autodeclaración es para actividades licitas. En caso de utilizarla para fines ilícitos responderá conforme a la ley, exonerando de toda responsabilidad a quienes intervienen de buena fe y a la notaria.----------

EL(LA) NOTARIO(A) ENTERA AL OTORGANTE QUE UNA VEZ FIRMADA Y AUTORIZADA LA PRESENTE DECLARACIÓN, CUALQUIER MODIFICACIÓN REQUIERE DE UNA NUEVA DECLARACIÓN EXTRA JUICIO QUE CAUSARA LOS DERECHOS NOTARIALES DE LEY.

La presente a solicitud del (la) interesado(a).

Derechos Notariales: 13.100, Iva: $ 2.489 Res.0691 /24/01/ 2019.

Biometría: $3.100, Iva: $589. Sellos: $190 Iva: $36

Leída la presente declaración por el (la) compareciente, la ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad y nada más que la verdad en todo su contenido. Para constancia la aprueba y la firma por ante mí la Notaria que da fe.

EL(LA)DECLARANTE: _____

JAIME ALFREDO PAZMIÑO BURBANO

C.C. 12'970.157 Pasto

Ind. Der.

Dirección: Cra. 23 No. 18-59 -Centro – Edificio AMA PASTO Tel: 7223948
San Juan de Pasto – Nariño
E-mail: segundapasto@supernotariado.gov.co

Escaneado con Cam

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO

75566

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Pasto, compareció:
JAIME ALFREDO PANTOJA BURBANO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0012970157.



-------- Firma autógrafa --------

7pm71y4i1u1h
19/03/2019 - 09:45:28:631

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, forma parte de la declaración extra-proceso AUTODECLARACION JURAMENTADA, rendida por el compareciente con destino a AL INTERESADO .

MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA
Notaria dos (2) del Círculo de Pasto

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 7pm71y4i1u1h

Escaneado con Cam

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE PASTO

No. 691

AUTODECLARACION JURAMENTADA RENDIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1557 DE 1989 Y ARTICULO 188 DEL C.G. DEL P.

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, a (los) **DIECINUEVE** (19) día(s) del mes de **MARZO** del dos mil Diecinueve (2.019), ante mí **MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA**, Notaria Segunda del Círculo de Pasto, compareció: **BERTHA ALICIA CORDOBA DE GUERRERO**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número: **27.060.491** expedida en: **PASTO (NARIÑO),** de 81 años de edad, de estado civil: **CASADA,** de profesión u oficio: **AMA DE CASA,** Domiciliado(a) y residente en: **PASTO (NARIÑO), BARRIO SAN JOSE, CALLE 22 BIS B No. 20 -56 – TELEFONO 7219195,** con el fin de rendir la presente declaración bajo la gravedad del juramento conforme a lo previsto en los artículos 33 de la Constitución Nacional, 442 del C.P. y 389 del C. de P. P., por cuya gravedad prometió decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en todo cuanto le conste y al efecto **MANIFESTO:**

1º.- Mis generales de ley son las ya expresadas.
2º.- A sabiendas de la responsabilidad legal que implica el jurar en falso, sin tener ninguna clase de impedimento, en forma libre y espontánea y sin ningún apremio **DECLARO:** Que conozco de vista, trato y comunicación hace más de treinta y cinco años a la señora: **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** identificada con la C.C. No. 59.836.850 Expedida en Pasto – Nariño y es verdad y me consta que ella compartía el mismo techo y mesa con su padre **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO (q.e.p.d.),** quien se identificaba con la C.C. No. 1.793.180 expedida en Pasto – Nariño y su madre: **MARIA ANGELITA LEYTON,** identificada 30.703.142 expedida en Pasto – Nariño. Doy fé que su padre q.e.p.d. era quien suministraba los recursos económicos para su manutención ya que **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** padece desde su nacimiento una enfermedad congénita y por ende no trabaja y depende totalmente de los cuidados y recursos de su madre ya que su padre falleció el 19 de Septiembre del 2015.----------

Manifiesta el(la) declarante, que esta Autodeclaración es para actividades licitas. En caso de utilizarla para fines ilícitos responderá conforme a la ley, exonerando de toda responsabilidad a quienes intervienen de buena fe y a la notaria.----------
EL(LA) NOTARIO(A) ENTERA AL OTORGANTE QUE UNA VEZ FIRMADA Y AUTORIZADA LA PRESENTE DECLARACIÓN, CUALQUIER MODIFICACIÓN REQUIERE DE UNA NUEVA DECLARACIÓN EXTRA JUICIO QUE CAUSARA LOS DERECHOS NOTARIALES DE LEY.
La presente a solicitud del (la) interesado(a).
Derechos Notariales: 13.100, Iva: $ 2.489 Res.0691 /24/01/ 2019.
Biometría: $3.100, Iva: $589. Sellos: $190 Iva: $36
Leída la presente declaración por el (la) compareciente, la ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad y nada más que la verdad en todo su contenido. Para constancia la aprueba y la firma por ante mí la Notaria que da fe.

EL(LA)DECLARANTE: _____
BERTHA ALICIA CORDOBA DE GUERRERO
C.C. 27.060.491 Pasto

Ind. Der.

Dirección: Cra. 23 No. 18-59 -Centro – Edificio AMA PASTO Tel: 7223948
San Juan de Pasto – Nariño
E-mail: segundapasto@supernotariado.gov.co

Escaneado con Cam

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO

75567

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Pasto, compareció:
BERTHA ALICIA CORDOBA DE GUERRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0027060491.



2krx5htiwm0q
19/03/2019 - 09:53:27:203

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, forma parte de la declaración extra-proceso AUTODECLARACION JURAMENTADA, rendida por el compareciente con destino a AL INTERESADO .

MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA
Notaria dos (2) del Círculo de Pasto

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 2krx5htiwm0q

Escaneado con Cam

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE PASTO

MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE PASTO

No. 692

AUTODECLARACION JURAMENTADA RENDIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1557 DE 1989 Y ARTICULO 188 DEL C.G. DEL P.

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, a (los) **DIECINUEVE (19)** día(s) del mes de **MARZO** del dos mil Diecinueve (2.019), ante mí **MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA**, Notaria Segunda del Círculo de Pasto, compareció: **MARLENY ALEXANDRA ROMO VARGAS**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número: **59.795.280** expedida en: **SAMANIEGO (NARIÑO),** de 44 años de edad, de estado civil: **SOLTERA CON UNION LIBRE**, de profesión u oficio: **AMA DE CASA,** Domiciliado(a) y residente en: **PASTO (NARIÑO), BARRIO SAN JOSE, CALLE 22 A No. 20 -36 – CELULAR 3167619281,** con el fin de rendir la presente declaración bajo la gravedad del juramento conforme a lo previsto en los artículos 33 de la Constitución Nacional, 442 del C.P. y 389 del C. de P. P., por cuya gravedad prometió decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en todo cuanto le conste y al efecto **MANIFESTO:**

1º.- Mis generales de ley son las ya expresadas.
2º.- A sabiendas de la responsabilidad legal que implica el jurar en falso, sin tener ninguna clase de impedimento, en forma libre y espontánea y sin ningún apremio **DECLARO:** Que conozco de vista, trato y comunicación hace más de veinte años a la señora: **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON**, identificada con la C.C. No. 59.836.850 Expedida en Pasto – Nariño y a la Señora **MARIA ANGELITA LEYTON,** identificada 30.703.142 expedida en Pasto – Nariño, la primera en calidad de hija y la segunda esposa, **DEPENDÍAN ECONOMICA, AFECTIVA Y SOCIALMENTE** del Señor **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO,** quien se identificaba con la C.C. No. 1.793.180 expedida en Pasto – Nariño. Resaltando que hace 3 años después del fallecimiento del Señor QUINTANA BURBANO, su hija pasa a depender de los cuidados y de la sustitución pensional que recibe su madre; toda vez que su hija ANA CRISTINA sufre de una enfermedad congénita desde su nacimiento, por lo tanto no es apta para trabajar.----------

Manifiesta el(la) declarante, que esta Autodeclaración es para actividades licitas. En caso de utilizarla para fines ilícitos responderá conforme a la ley, exonerando de toda responsabilidad a quienes intervienen de buena fe y a la notaria.----------
EL(LA) NOTARIO(A) ENTERA AL OTORGANTE QUE UNA VEZ FIRMADA Y AUTORIZADA LA PRESENTE DECLARACIÓN, CUALQUIER MODIFICACIÓN REQUIERE DE UNA NUEVA DECLARACIÓN EXTRA JUICIO QUE CAUSARA LOS DERECHOS NOTARIALES DE LEY.
La presente a solicitud del (la) interesado(a).
Derechos Notariales: 13.100, Iva: $ 2.489 Res.0691 /24/01/ 2019.
Biometría: $3.100, Iva: $589. Sellos: $190 Iva: $36
Leída la presente declaración por el (la). compareciente, la ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad y nada más que la verdad en todo su contenido. Para constancia la aprueba y la firma por ante mí la Notaria que da fe.

EL(LA)DECLARANTE: _____
MARLENY ALEXANDRA ROMO VARGAS
C.C. 59795286

Ind. Der.

Dirección: Cra. 23 No. 18-59 -Centro – Edificio AMA PASTO Tel: 7223948
San Juan de Pasto – Nariño
E-mail: segundapasto@supernotariado.gov.co

Escaneado con Cam

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO

75570

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Pasto, compareció:

MARLENY ALEXANDRA ROMO VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0059795280.



-------- Firma autógrafa --------

8amrodeu50e0
19/03/2019 - 10:00:23:303

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, forma parte de la declaración extra-proceso AUTODECLARACION JURAMENTADA, rendida por el compareciente con destino a AL INTERESADO .

MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA
Notaria dos (2) del Círculo de Pasto

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 8amrodeu50e0

Escaneado con Cam

NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE PASTO

Dr. Jaime René Zambrano Cabrera
NOTARIO

DECLARACION EXTRAPROCESO ANTE NOTARIO

A PETICION DEL INTERESADO
ARTICULO 442 CODIGO PENAL. "El que en actuación Judicial y Administrativa bajo la Gravedad de Juramento ante la autoridad competente falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho años (08) años.- En San Juan de Pasto Departamento de Nariño a Los TRECE – 13 días del Mes de MAYO del año DOS MIL OCHO (2008).- Ante el despacho del NOTARIO CUARTO DE CIRCULO DE PASTO.
COMPARECIO MARIA ANGELITA LEYTON y JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO cédula de ciudadanía No. 30.703.142 y 1.793.180 expedida en PASTO NARIÑO Quien Manifestó va a declarar bajo la Gravedad de Juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que se generan el Jurar en falso.

No teniendo ninguna clase de impedimento y libre de todo apremio y de conformidad con el inicio 3° del Art. 1 Decreto 1557 del 14 de julio de 1.989 DECLARO me llamo como queda escrito identificado como aparece al pie de mi firma Mayor de edad.
RESIDENTE CALLE 22 A No. 20-36 Av-SANTANDER .BARRIO SAN JOSE – PASTO NARIÑO
DE PROFESION U OFICIO AMA DE CASA -ABOGADO ESTADO CIVIL UNION LIBRE JUBILADO

2.- Esta Declaración la hago bajo la Gravedad de Juramento, y explico las razones de mi testimonio Asi:

DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO y en honor a la verdad, sobre los siguientes hechos : A) que desde el año mil novecientos setenta y dos 1.972 venimos conviviendo permanentemente en UNION MARITAL DE HECHO, a la luz de – todo el vecindario que nos conoce, formalizando un hogar ejemplar, cumpliendo con los deberes y obligaciones inherentes a nuestro estado, viviendo bajo el – mismo techo, estado que lo conservaremos hasta el final de nuestros dias. B) que dentro de esta unión marital permanente hemos procreado tres 3 hijos, reconocidos legalmente por el suscrito declarante, a la presente todos mayores de edad y que responde a los nombres de : JORGE JHONSON, ANA CRISTINA y MARIA HORTENSIA QUINTANA LEYTON, a quienes hemos educado y aportado económicamente para que adquieran una profesión, formados dentro de nuestras creencias religiosas, cumpliendo en consecuencias, con los deberes de padre y madre .

No siendo otro el fin de esta declaración, se termina y firma como aparece, una vez leida y aprobada por los declarantes .

DECLARANTE :

JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO
C.C.No. 1.793.180 de Pasto

DECLARANTE :

MARIA ANGELITA LEYTON
C.C.No. 30703142 de Pasto

JAIME RENE ZAMBRANO CABRERA
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PASTO

Escaneado con Cam

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PASTO

Calle 20 Nº 24-13 Frente al Templo del Cristo Rey – Teléfono 7 225258

ACTA DE DECLARACION DE: MARIA ANGELITA LEYTON identificada con C.C No 30.703.142 de Pasto –Nariño.

En Pasto, hoy a los 22 días del mes de febrero del año 2019, ante la NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE PASTO, se hizo presente: **MARIA ANGELITA LEYTON,** con el fin de declarar sobre los siguientes hechos y bajo la gravedad del juramento de conformidad con el inciso 3° del artículo 1°, Decreto 1557 del 14 de Julio de 1.989, expresó:

PRIMERO: Me llamo como queda dicho, soy mayor de edad, resido en la ciudad de Bello Antioquia, Estado Civil: soltera por viudez, de profesión u oficio ama de casa y sin más generales.

SEGUNDO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad declaro que mi hija **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** identificada con C.C No 59.836.850 de Pasto, es fruto del matrimonio que tuve con quien en vida respondía al nombre de **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO**, identificado con C.C No. 1.793.180 **Q.E.P.D.**

Doy fe que mi difunto esposo **Q.E.P.D** era quien suministraba los recursos económicos para su manutención ya que **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** padece de un diagnóstico de **SINDROME DE TURNER, ENFERMEDAD AUDITIVA, VISUAL, ENTRE OTRAS**, por ende no trabaja y desde el día 19 de septiembre de 2015 que falleció mi esposo, depende totalmente de los cuidados y los recursos que yo le suministro para su manutención.

No siendo otro el fin de esta declaración, se termina y firma como aparece una vez leída y aprobada por el declarante.

DERECHOS: $ 13.100.oo – IVA. $ 2.489.oo – Total $ 15.589.oo

EL Declarante:

MARIA ANGELITA LEYTON

La Notaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MABEL MARTINEZ VARGAS
NOTARIA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PASTO N.

MABEL MARTÍNEZ VARGAS
Notaria Primera del Círculo de Pasto

Escaneado con Cam

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PASTO

Calle 20 Nº 24-13 Frente al Templo del Cristo Rey – Teléfono 7 225258

ACTA DE DECLARACION DE: MARIA HORTENSIA QUINTANA LEYTON, Con C.C. No. 36759056 de Pasto –Nariño.

En Pasto, hoy a los 22 días del mes de febrero del año 2019, ante la NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE PASTO, se hizo presente: **MARIA HORTENSIA QUINTANA LEYTON,** con el fin de declarar sobre los siguientes hechos y bajo la gravedad del juramento de conformidad con el inciso 3° del artículo 1°, Decreto 1557 del 14 de Julio de 1.989, expresó:

PRIMERO: Me llamo como queda dicho, soy mayor de edad, resido en la ciudad de Bello Antioquia, Estado Civil: casada, de profesión u oficio independiente y sin más generales.

SEGUNDO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad declaro que mi hermana **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** identificada con C.C No 59.836.850 de Pasto, Compartía el mismo techo y mesa con mi padre **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO,** identificado con C.C No. 1.793.180 **Q.E.P.D** y mi madre **MARIA ANGELITA LEYTON** identificada con C.C No 30.703.142.

Doy fe que mi padre **Q.E.P.D** era quien suministraba los recursos económicos para su manutención ya que **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** padece de un diagnóstico de **SINDROME DE TURNER, ENFERMEDAD AUDITIVA, ENTRE OTRAS**, por ende no trabaja y depende totalmente de los cuidados y los recursos de mi madre ya que mi padre falleció.

No siendo otro el fin de esta declaración, se termina y firma como aparece una vez leída y aprobada por el declarante.

DERECHOS: $ 13.100.00 – IVA. $ 2.489.00 – Total $ 15.589.00

EL Declarante:

MARIA HORTENSIA QUINTANA LEYTON
36'759056.

La Notaria

MABEL MARTÍNEZ VARGAS
Notaria Primera del Círculo de Pasto

Escaneado con Cam

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PASTO

Calle 20 N° 24-13 Frente al Templo del Cristo Rey – Teléfono 7 225258

ACTA DE DECLARÁCION DE: MARIA ANGELITA LEYTON identificada con C.C No 30.703.142 de Pasto –Nariño.

En Pasto, hoy a los 22 días del mes de febrero del año 2019, ante la NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE PASTO, se hizo presente: **MARIA ANGELITA LEYTON,** con el fin de declarar sobre los siguientes hechos y bajo la gravedad del juramento de conformidad con el inciso 3° del artículo 1°, Decreto 1557 del 14 de Julio de 1.989, expresó:

PRIMERO: Me llamo como queda dicho, soy mayor de edad, resido en la ciudad de Bello Antioquia, Estado Civil: soltera por viudez, de profesión u oficio ama de casa y sin más generales.

SEGUNDO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad declaro que mi hija **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** identificada con C.C No 59.836.850 de Pasto, es fruto del matrimonio que tuve con quien en vida respondía al nombre de **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO,** identificado con C.C No. 1.793.180 **Q.E.P.D.**

Doy fe que mi difunto esposo **Q.E.P.D** era quien suministraba los recursos económicos para su manutención ya que **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** padece de un diagnóstico de **SINDROME DE TURNER, ENFERMEDAD AUDITIVA, VISUAL, ENTRE OTRAS**, por ende no trabaja y desde el día 19 de septiembre de 2015 que falleció mi esposo, depende totalmente de los cuidados y los recursos que yo le suministro para su manutención.

No siendo otro el fin de esta declaración, se termina y firma como aparece una vez leída y aprobada por el declarante.

DERECHOS: $ 13.100.oo – IVA. $ 2.489.oo – Total $ 15.589.oo

EL Declarante:



MARIA ANGELITA LEYTON

La Notaria



MABEL MARTÍNEZ VARGAS
Notaria Primera del Círculo de Pasto

Escaneado con Cam

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PASTO

Calle 20 Nº 24-13 Frente al Templo del Cristo Rey – Teléfono 7 225258

ACTA DE DECLARACION DE: OLGA LEONELDA CANCIMANCE DIAZ, Con C.C. No. 27.197.732 de Pasto –Nariño.

En Pasto, hoy a los 22 días del mes de febrero del año 2019, ante la NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE PASTO, se hizo presente: **OLGA LEONELDA CANCIMANCE DIAZ,** con el fin de declarar sobre los siguientes hechos y bajo la gravedad del juramento de conformidad con el inciso 3° del artículo 1°, Decreto 1557 del 14 de Julio de 1.989, expresó:

PRIMERO: Me llamo como queda dicho, soy mayor de edad, resido en la ciudad de Pasto Nariño, Estado Civil: casada, de profesión u oficio ama de casa y sin más generales.

SEGUNDO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad declaro que conozco de vista, trato y comunicación hace 11 años a la señora **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON,** identificada con C.C No 59.836.850 de Pasto, y es verdad y me consta que ella compartía el mismo techo y mesa con su padre **JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO,** identificado con C.C No. 1.793.180 **Q.E.P.D** y su madre **MARIA ANGELITA LEYTON** identificada con C.C No 30.703.142.

Doy fe que su padre **Q.E.P.D** era quien suministraba los recursos económicos para su manutención ya que **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** padece de un diagnóstico de **SINDROME DE TURNER, ENFERMEDAD AUDITIVA Y VISUAL ENTRE OTRAS**, por ende no trabaja y depende totalmente de los cuidados y los recursos de su madre ya que su padre falleció hace 03 años.

No siendo otro el fin de esta declaración, se termina y firma como aparece una vez leída y aprobada por el declarante.

DERECHOS: $ 13.100.oo – IVA. $ 2.489.oo – Total $ 15.589.oo

EL Declarante:

Olga Cancimance

OLGA LEONELDA CANCIMANCE DIAZ

27197732

La Notaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
MABEL MARTINEZ VARGAS
NOTARIA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PASTO

MABEL MARTÍNEZ VARGAS
Notaria Primera del Círculo de Pasto

Escaneado con Cam

Pensión
S.M.L.V.
salud.
calificación 50% 4.
50%.

Colpensiones

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 abril/2018
ACTUALIZADO A: 11 abril 2018

INFORMACIÓN DEL AFILIADO

Tipo de Documento:	Cédula de Ciudadanía	Fecha de Nacimiento:	26/04/1977
Número de Documento:	59836850	Fecha Afiliación:	13/03/2012
Nombre:	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	Correo Electrónico:	
Dirección:	CLL 22A 20 36 SAN JOSE	Ubicación:	Urbana
Estado Afiliación:	Activo Cotizante		

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
59836850	ANA CRISTINA QUINTAN	01/03/2012	31/12/2012	$567.000	42,86	0,00	0,00	42,86
59836850	QUINTANA LEITON ANA	01/01/2013	31/03/2013	$589.000	12,71	0,00	0,00	12,71
59836850	QUINTANA LEITON ANA	01/04/2013	31/05/2013	$589.500	8,57	0,00	0,00	8,57
59836850	QUINTANA LEITON ANA	01/06/2013	31/12/2013	$589.000	30,00	0,00	0,00	30,00
59836850	QUINTANA LEITON ANA	01/01/2014	31/12/2014	$616.000	51,29	0,00	0,00	51,29
59836850	QUINTANA LEYTON ANA	01/01/2015	31/12/2015	$644.000	51,29	0,00	0,00	51,29
59836850	QUINTANA LEYTON ANA	01/01/2016	31/12/2016	$689.000	51,14	0,00	0,00	51,14
59836850	QUINTANA LEYTON ANA	01/01/2017	31/03/2017	$738.000	12,57	0,00	0,00	12,57
59836850	QUINTANA LEYTON ANA	01/04/2017	31/01/2018	$737.717	42,86	0,00	0,00	42,86
					[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:			303,29
					[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 * "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"):			0,00

RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
					[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:			

RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
	[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:	

[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25])	303,29

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral, sin embargo usted ya puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos, a través del trámite denominado "Actualización de Historia Laboral Tiempos Públicos", adjuntando los formatos diseñados por el Ministerio de Hacienda, los cuales expide el correspondiente empleador.

* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 18/11/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Escaneado con Cam

Colpensiones

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 abril/2018
ACTUALIZADO A: 11 abril 2018

C 59836850 ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, sólo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995

Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

[27] Identificación Empleador	[28]Nombre o Razón Social	[29]Ciclo Desde	[30]Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN						

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995

En el siguiente reporte encontrará el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Periodo	[38]Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40]IBC Reportado	[41]Cotización Pagada	[42]Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46]Observación
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201203	14/03/2012	82P28211562982	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201204	04/04/2012	82P28211923547	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201205	02/05/2012	82P28212354212	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201206	04/06/2012	82P21927650475	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201207	03/07/2012	82P28213207571	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201208	02/08/2012	82P28213733254	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201209	04/09/2012	82P28214361315	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201210	03/10/2012	82P28214661801	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201211	02/11/2012	82P28215460504	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201212	03/12/2012	82P28215907540	$ 567.000	$ 90.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201301	02/01/2013	82C20001774448	$ 567.000	$ 90.700	-$ 3.600		30	29	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON	SI	201302	04/02/2013	82C20002331468	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201303	04/03/2013	82C20002892845	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201304	03/04/2013	82C20003515718	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201305	02/05/2013	82C20003965287	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201306	04/06/2013	82C20004574917	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201307	04/07/2013	82C20005224890	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201308	05/08/2013	82C20005790099	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201309	03/09/2013	82C20006356746	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201310	02/10/2013	82C20006920598	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201311	05/11/2013	82C20007517690	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201312	04/12/2013	82C20008173653	$ 589.500	$ 94.320	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201401	07/01/2014	82C20008818012	$ 589.500	$ 94.320	-$ 4.280		30	29	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201402	04/02/2014	82C20009333794	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201403	03/03/2014	82C20009896396	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201404	03/04/2014	82C20010832934	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201405	05/05/2014	82C20011182777	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201406	03/06/2014	82C20011764734	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201407	03/07/2014	82C20012518441	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201408	04/08/2014	82C20013106253	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201409	02/09/2014	82C20013744040	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente

Impreso Por Internet el : 11-Apr-2018 [illegible]

Escaneado con Cam

F.E. desde el nacimiento. x enfermedad

Colpensiones

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 abril/2018
ACTUALIZADO A: 11 abril 2018

C 59836850 ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Periodo	[38]Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40]IBC Reportado	[41]Cotización Pagada	[42]Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46]Observación
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201410	03/10/2014	82C20014481048	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201411	04/11/2014	82C20015026094	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201412	02/12/2014	82C20015710085	$ 616.000	$ 98.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201501	07/01/2015	82C20016575365	$ 616.000	$ 98.600	-$ 4.500		30	29	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201502	04/02/2015	82C20017122138	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201503	04/03/2015	82C20017775106	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201504	06/04/2015	82C20018423918	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201505	05/05/2015	82C20019139974	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201506	03/06/2015	82C20019833480	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201507	03/07/2015	82C20020536710	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201508	05/08/2015	82C20021321130	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEITON ANA CRISTINA	SI	201509	04/09/2015	82C20022029682	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201510	06/10/2015	82C20022834077	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201511	05/11/2015	82C20023482429	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201512	07/12/2015	82C20024338270	$ 644.350	$ 103.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201601	05/01/2016	82C20024931309	$ 644.350	$ 103.100	-$ 7.200		30	28	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201602	09/02/2016	82C20025850095	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201603	07/03/2016	82C20026504328	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201604	05/04/2016	82C20027109180	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201605	03/05/2016	82C20027761934	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201606	03/06/2016	82C20028553162	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201607	05/07/2016	82C20029262164	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201608	03/08/2016	82C20030041740	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201609	05/09/2016	82C20030857532	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201610	05/10/2016	82C20031648434	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201611	03/11/2016	82C20032374221	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201612	02/12/2016	82C20033117209	$ 689.455	$ 110.313	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201701	04/01/2017	82C20033978435	$ 689.455	$ 110.313	-$ 7.687		30	28	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201702	03/02/2017	82C20034743238	$ 738.000	$ 118.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201703	03/03/2017	82C20035458563	$ 738.000	$ 118.100	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201704	03/04/2017	52N02172834211	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201705	03/05/2017	52N02172834212	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201706	05/06/2017	52N02172834213	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201707	04/07/2017	52N02172834214	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201708	04/08/2017	52N02172834215	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201709	04/09/2017	52N02172834216	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201710	04/10/2017	52N02172834217	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201711	07/11/2017	52N02172834218	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201712	04/12/2017	52N02172834219	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201801	09/01/2018	52N02172834220	$ 737.717	$ 118.035	$ 0		30	30	Pagó como Régimen Subsidiado
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201802	05/02/2018	52N02180825518	$ 781.242	$ 0	$ 0		0	0	*** Pago en Proceso de Verificación ***
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201803	05/03/2018	52N02180825521	$ 781.242	$ 0	$ 0		0	0	*** Pago en Proceso de Verificación ***
59836850	QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA	SI	201804	04/04/2018	52N02180825539	$ 781.242	$ 0	$ 0		0	0	*** Pago en Proceso de Verificación ***

Escaneado con Cam

Colpensiones

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 abril/2018
ACTUALIZADO A: 11 abril 2018

C 59836850. ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON

DETALLE DE PERIODOS REPORTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO COTIZARON AL ISS HOY COLPENSIONES

En el siguiente resumen encontrará el detalle por días, de los ciclos laborados en entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones.

[47] Identificación Empleador	[48] Nombre o Razón Social	[49] RA	[50]Ciclo	[51] Fecha de Pago	[52] Referencia de Pago	[53]Asignación Básica Mensual	[54]Cotización Pagada	[55]Cotización Mora Sin Intereses	[56] Nov.	[57] Días Rep.	[58] Días Cot.	[59]Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

Escaneado con Cam

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE NARIÑO

Nit. 900.587.628-9

FORMULARIO DE DICTAMEN PARA LA CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y DETERMINACION DE LA INVALIDEZ

Calificación basada en el Manual Unico para la calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional Decreto 1507 12-08-2014

INFORMACION GENERAL

ENTIDAD RECEPTORA			
Nombre Entidad:	JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ REG.NARIÑO	Tipo Entidad:	
Ciudad y Departamento:	PASTO - NARIÑO		
Direccion y Teléfono:	Calle 10 No 30 A 14 B/ La Aurora Tel: 7377261		
Correo electrònico:	jurecanar@ yahoo.com juntacalificacionregionalnar@gmail.com		

Nombre del Solicitante:	ANA CRISTINA QUINTERO LEYTON - SUSTITUCION PENSIONAL

Fecha de recepción para calificación:	Dia	Mes	Año
	15	8	2018

Fecha de valoración:	Día	Mes	Año
	N	-	A

Motivo de calificación:	PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL

DICTAMEN NUMERO	0129-2018	DE FECHA :	15/02/2019

DATOS GENERALES DE LA PERSONA CALIFICADA

Apellidos:	QUINTANA LEYTON			Nombres:	ANA CRISTINA		
Documento de identidad:	C.C.	Número: 59.836.850		Género:	FEMENINO	Estado civil	SOLTERA
Fecha de nacimiento:	Día: 26	Mes: 4	Año: 1977	Edad años cumplidos	41 AÑOS	Escolaridad(alcanzada):	BACHILLER
Lugar de nacimiento:		Municipio	PASTO	Departamento:	NARIÑO		
Dirección:	CALLE 22 A No. 20-36			Municipio:	PASTO	Departamento:	NARIÑO
Celular	3155513951			Teléfono			

Régimen de afiliación al SGSSS			
A.F.P.	N/A		
E.P.S.	MEDIMAS		
A.R.L.	N/A		
Profesión u oficio:	SIN OCUPACION	Tipo vinculación:	N/A
Empresa donde trabaja:	N/A		

Actividad económica de la empresa:	N/A			Ubicación:	N/A	
Ultimo cargo desempeñado:	-			Contrato vigente?	SI: -	NO: -
Fecha de ingreso:	-	Fecha de retiro:	-	TIEMPO (meses):	-	

Descripción general del cargo:

N/A

-

Exposición a factores de riesgo ocupacional (referidos por el trabajador)

Otros antecedentes laborales (Referidos por el trabajador)

Empresa	Cargo	Riesgo principal	Tiempo
-	-	-	-

Escaneado con Cam

SUSTENTACION TECNICA DEL DICTAMEN

Resumen de historia clínica aportada.

REFIERE QUE CONSULTÓ POR PRIMERA VEZ EL 26/03/1991 POR BAJA TALLA Y RETARDO EN EL DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS - HIPOACUSIA BILATERAL - CANSANCIO - AUMENTO DE PESO - SUEÑO - MAREOS - PIROSIS - ERUPTOS - EPIGASTRALGIA - METEORISMO - FLATULENCIAS - DISTENCION ABDOMINAL - DOLOR LUMBOSACRO SE ACOMPAÑA DE INCAPACIDAD FUNCIONAL.

Conceptos de especialistas relacionados con la calificación:

Fecha:	Especialidad	Concepto
3-26-1991	ENDOCRINOLOGIA	.- HIPOGONADISMO HIPERGONADOTROFICO
		.-HIPOTIROIDISMO
		.- BAJÁ TALLA DEFINITIVA

Resultados de exámenes paraclínicos

Fecha	Exámen	Resultado
3/01/2000	CARIOTIPO	SINDROME DE TURNER
2-13-2018	AUDIOMETRIA	HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL DE GRADO MODERADO A SEVERO
-	-	-

CONCEPTO FINAL DE REHABILITACION:

N/A

EXAMEN FISICO (EVALUACION DEL CALIFICADOR)

E.F: PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES. T.A: 130/80 TALLA: 1.50 PESO: 65 Kg OJOS: PUPILAS T.R.R OTR: HIPOACUSIA BILATERAL - MASA PEQUEÑA DE TIROIDES - CARDIOPULMONAR: MV NORMAL-TONOS CARDIACOS RITMICOS - NO SOPLOS. ABDOMEN: DOLOR EN EPIGASTRIO. EXTREMIDADES: NORMALES. OSTEOMUSCULAR: DOLOR EN PROCESO ESPINOSO L4 L5 S1

SECUELAS O PATOLOGIAS A CALIFICAR

1. HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL DE GRADO MODERADO A SEVERO.
2. HIPOTIROIDISMO MAS BOCIOCOLOIDE
3. OSTEOPOROSIS
4. SINDROME DE TURNER + HIPOGONADISMO HIPERGONADOTROPICO
5. LUMBALGIA MAS RADICULOPATIA SACRA S1 BILATERAL
6. SINDROME VERTIGINOSO
7. DISPLASIA DE VALVULA AORTICA
8. GASTRITIS CRONICA

CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL
VALORACION DE LAS DEFICIENCIAS

DEFICIENCIA Descripción	Numeral/Tabla	CLASE D	Grado Severidad
DEFICIENCIA POR DETERIORO BINAURAL	CAP 9 T: 9.4-9.4.1-9.1.9.3		24.00%
DEFICIENCIA POR ENFERMEDAD DE TIROIDES	CAP 8 T: 8.5-8.5.2-8.6	II	23.00%
DEFICIENCIA POR OSTEOPOROSIS	CAP 14 T: 14.6.2-14.6.2.3		20.00%
DEFICIENCIA POR ENFERMEDAD DE TIROIDES	CAP 5 T: 5.6 - 5.6.3-5.12	II	17.00%
DEFICIENCIA DE COLUMNA LUMBAR	CAP 15 T: 15.4 - 15.3	II	15.50%
DEFICIENCIA POR ENFERMEDAD VESTIBULAR	CAP 2 T: 2.5 - 2.5.3 - 2.1	II	8.00%
DEFICIENCIA POR DESORDEN DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR	CAP 4 T: 4.4-4.4.2-4.6	I	
	Grado Severidad % para la deficiencia		73.88%

Descripción	Grado Severidad %
DEFICIENCIA COMBINADA (DC) = A + (100 - A) x B / 100	73.88%

CALCULO VALOR FINAL DE LA DEFICIENCIA = DC *50% :	36.94

Escaneado con Cam

CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL:
VALOPACIOIN DEL ROL LABORAL, ROL OCUPACIONAL Y OTRAS AREAS OCUPACIONALES

Criterio	Categoria	%	Valor Máximo	Valor Asignado
Rol Laboral	Activo sin limitaciones para la actividad laboral	0.0	25	0.0
	Rol laboral recortado: limitaciones leves para la actividad laboral.	5.0	25	0.0
	Rol laboral o puesto de trabajo adaptado.	10.0	25	0.0
	Cambio de rol laboral o de puesto de trabajo	15.0	25	0.0
	Cambio de rol laboral o de puesto de trabajo con actividades recortadas	20.0	25	20.00
	Rol laboral en condiciones especiales o sin posibilidad de rol laboral-restricciones completas.	25.0	25	0.0
Autosuficiencia Económica	Autosuficiencia	0.0	2.5	0.0
	Autosuficiencia reajustada	1.0	2.5	1.00
	Precariamente autosuficiente	1.5	2.5	0.0
	Económicamente débiles	2.0	2.5	0.0
	Económicamente dependientes	2.5	2.5	0.0
Edad cronológica (edad cumplida al momento de calificación)	Menor de 18 años	2.5	2.5	0.0
	Mayor o igual a 18 años, menor de 30 años	0.5	2.5	0.0
	Mayor o igual a 30 años, menor de 40 años	1.0	2.5	0.0
	Mayor o igual a 40 años, menor de 50 años	1.5	2.5	1.50
	Mayor o igual a 50 años, menor de 60 años	2.0	2.5	0.0
	Mayor o igual a 60 años	2.5	2.5	0.0
Otras áreas ocupacionales	Aprendizaje y aplicación del conocimiento (Tabla 6)	4.0	20.0	2.00
	Comunicación (tabla /7)	4.0	20.0	2.00
	Movilidad (tabla 8)	4.0	20.0	1.00
	Cuidado personal (tabla 9)	4.0	20.0	1.00
	Vida doméstica (tabla 10)	4.0	20.0	1.00
TOTAL VALORACION DEL ROL LABORAL, ROL OCUPACIONAL Y OTROS AREAS OCUPACIONALES				29.50%

VALOR TOTAL CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL

Cálculo valor final de la deficiencia:	36.94
Total valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales	29.50
Valor total calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional	66.44

Calificación de origen:	COMUN
Requiere de ayuda de terceros:	N/A
Requiere curador:	N/A

Escaneado con Cam

	Día	Mes	Año
Fecha de declaratoria de la pérdida de capacidad laboral:	15	2	2019

SEGUNDO MORAN MONTEZUMA
Lic. S.O. Res. 1381
Médico ponente

ORFA LEILA CANTE CASAS
Fsioterapeuta

	Día	Mes	Año
Fecha de estructuracion de la pérdida de capacidad.	26	4	1977

SIGIFREDO SUAREZ A.
Lic. S.O. Res. 1373
Médico

Escaneado con Cam

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
DE NARIÑO

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha 07 de Marzo de 2019, le hace notificación personal del dictamen **Nro. 0129-2018 del**(a) señor(a) **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON** identificada con cedula **N.º 59.836.850** emitido en audiencia privada del día **15 DE FEBRERO DE 2019**, al señor: **JAIRO ANDRES CASSETTA DORADO** identificado con cedula Nro. **98.393.257 y T.P Nro. 232720** quien actúa como apoderado, para lo cual le hago entrega del original y se le da a conocer el que, por actuar en esta junta como perito, de conformidad con el decreto 1072 del 2015 no proceden recursos contra el dictamen emitido

Se firma la presente acta como constancia de que se le hizo la notificación hoy 07 de Marzo de 2019.

Notificado:

C.C. 98.393.257 Pasto

Notificador:

DORA INES GAÑAN GUAPACHA
Directora Administrativa y Financiera

Escaneado con Cam

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE NARIÑO

HACE CONSTAR QUE:

La Junta emitió dictamen **No. 0129-2018**, del 15 de febrero de 2019, donde se califica Pérdida de Capacidad laboral: 66.44%, con calificación de origen: COMÚN, y con fecha de estructuración del: 26 de abril de 1977. Correspondiente a la señora **ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON**, identificada con cédula de ciudadanía No 59.836.850. Quien realizó la solicitud en forma particular, y, por lo tanto, el dictamen se encuentra en **FIRME Y EJECUTORIADO** a partir del día 22 de marzo del 2018.

Esta certificación se expide en ORIGINAL y es válida para todas las entidades de la seguridad social y para las que son partes interesadas en el proceso de calificación, la cual tiene plena validez legal.

Dada en San Juan de Pasto, el uno (01) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

DORA INES GAÑAN GUAPACHA
Directora Administrativa Y Financiera

Rdo
Fol
2-abr-1-2019
H. 10:50am
1 folio

c.c. Expediente

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE NARIÑO

Gobernación de Nariño
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO

Resolución No. 990 De 2015

( )

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de sobrevivientes

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO

En uso de sus atribuciones legales, y

C O N S I D E R A N D O

Que el señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO identificado con cédula de ciudadanía No 1.793.180 de Pasto (N), pensionado por la Caja de Previsión Social de Nariño mediante resolución No 840 de 30 de Noviembre de 1994, falleció el día 19 de Septiembre de 2015, tal como se desprende del Registro Civil de Defunción No 08853811 de 19 de Septiembre de 2015.

Que el día 24 de Septiembre de 2015 la señora MARIA ANGELITA LEITON identificada con cédula de ciudadanía No 30.703.142 de Pasto, en calidad de esposa del extinto pensionado solicita la pensión de sobreviviente, para lo que anexa la siguiente documentación: Registro civil de defunción, Copia cédula de ciudadanía de la peticionaria, Registro Civil de matrimonio, certificado de afiliación a SALUDCOOP EPS, Declaraciones extra juicio rendidas por los señores HECTOR BUENAVENTURA BENAVIDES, ARMANDO GUTIERREZ CORDOBA, BARTOLOME PAREDES y MARTHA EUNICE CORDOBA, declaración extra juicio de la peticionaria.

Que en la declaración extra juicio rendidas por los señores HECTOR BUENAVENTURA BENAVIDES, ARMANDO GUTIERREZ CORDOBA, BARTOLOME PAREDES y MARTHA EUNICE CORDOBA, afirman que conocieron al señor JORGE RAFAEL QUINTANA y que éste convivió con la señora MARIA ANGELITA LEITON desde el año de 1972 como compañera permanente, luego contrajeron matrimonio el 7 de Diciembre de 2011 y hasta la fecha de su fallecimiento en 2015, unión de la cual tuvieron Tres hijos.

Que en declaración rendida por la señora MARIA ANGELITA LEITON manifiesta que convivió con el señor QUINTANA desde el año de 1972, confirmando de esta forma lo dicho en las declaraciones extra juicio ya mencionadas.

Que en el registro civil de matrimonio queda constancia del matrimonio realizado el 7 de Diciembre de 2011.

Que revisado el expediente del pensionado se verifica la existencia de las siguientes declaraciones donde él mismo manifiesta que en caso de fallecimiento su pensión debe ser concedida a la señora MARIA ANGELITA LEITON quien es su compañera permanente desde el año de 1972. Las declaraciones datan de 16 de agosto de 1995, 13 de mayo de 2008, 2 de junio de 2010 y 13 de mayo de 2015.

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE NARIÑO

Gobernación de Nariño
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO

Que mediante aviso publicado el día 30 de septiembre de 2015, en el Diario La República, se informó del fallecimiento del señor JORGE RAFAEL QUINTANA y de la petición presentada por la señora MARIA ANGELITA LEITON sin que dentro de los treinta días siguientes a su publicación se presentase alguien con igual o mejor derecho a reclamar la pensión de su extinto esposo.

Que la pensión de sobrevivientes es un derecho que le permite a una persona designada por la ley, entrar a gozar de los beneficios de la prestación económica antes percibida por otra. De esta manera las leyes reguladoras de la hoy denominada pensión de sobrevivientes son las que señalan quienes tienen derecho a sustituirse en la pensión del fallecido.

Que la ley 100 de 1993, el Decreto 1889 de 1994 y demás normas concordantes, señalan los beneficios de la pensión de sobrevivientes y los requisitos que deben cumplir para acceder a este derecho.

Que el artículo 47 de la ley 100/93 Modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 señala los Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes, así:

a) "en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 años o más de edad. En caso de que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte".
b)...

Que por lo anteriormente expuesto, queda claro que la señora MARIA ANGELITA LEITON cumple a cabalidad con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la sustitución pensional de su difunto esposo JORGE RAFAEL QUINTANA.

Que la liquidación de las mesadas pensionales adeudadas, sería de la siguiente manera:

Año 2015: Valor mesada $ 8.985.183
Mesadas adeudadas: 1
Total: $ 8.985.183

Que por lo anteriormente expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a favor de la señora MARIA ANGELITA LEITON identificada con cédula de ciudadanía No 30.703.142 de Pasto, en calidad de esposa del extinto pensionado, una pensión mensual de sobrevivientes del 100% de la pensión que disfrutaba su extinto esposo equivalente a la suma de $ 8.985.183. Incluir en nómina a partir del mes de noviembre de 2015.

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE NARIÑO

Gobernación de Nariño
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar pagar a favor de la señora MARIA ANGELITA LEITON identificada con cédula de ciudadanía No 30.703.142, en calidad de esposa del extinto pensionado, las mesadas adeudadas equivalente a $ 8.985.183. Incluir en nómina del mes de Noviembre de 2015.

ARTICULO TERCERO: Descontar para aportar en Salud del valor de cada mesada pensional de la señora MARIA ANGELITA LEITON, el porcentaje que determine la ley (12%), el cual estará en su totalidad a cargo de la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes (Inciso 2º Artículo 143 de la ley 100 de 1993).

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante el Gobernador del Departamento.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto a los_____ días del mes de _____ del dos mil quince (2015).

PLINIO PEREZ MORA
Secretario de Hacienda

Vo. Bo. JANNETH ROJAS JARAMILLO
Subsecretario de Talento Humano

Vo Bo. NUBIA DEL SOCORRO BASTIDAS S.
Profesional Universitaria – Secretaria de Hacienda

Proyectó: María F. Arcos
Profesional Universitaria

Escaneado con Cam

916

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño | Oficina Jurídica

Resolución No. 141

(14 JUN 2019

Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 0204 de Marzo 27 de 2019

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (E)

En uso de sus atribuciones legales,

CONSIDERANDO

1.- OPORTUNIDAD Y COMPETENCIA

La actuación que desata la presente decisión fue promovida dentro del término legal, según lo preceptuado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Se establece además la competencia funcional en este caso, derivada del Decreto 1222 de 1986 según el cual, el Gobernador del Departamento es competente para conocer de los actos administrativos proferidos por sus subalternos, a menos que dichos actos sean de carácter definitivo.

Los artículos 74 y 76 de la ley 1437 de 2011, confieren atribución al Gobernador del Departamento para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Dra. MARIA EGUGENIA QUINTANA en calidad de apoderada judicial del señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, en contra de la Resolución No. 0204 de marzo 27 de 2019, el cual fue concedido por el Secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, en el artículo segundo de la Resolución No. 0323 de mayo 10 de 2019.

2.- ANTECEDENTES

Previa revisión del expediente administrativo que reposa en la entidad, -contenido en 915 folios- se tiene que mediante Resolución No. 0840 de diciembre 30 de 1994, la Caja de Previsión Social de Nariño reconoció y ordenó el pago de una Pensión de Jubilación a favor del señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, identificado con C.C. No. 1.793.180.

Ante el fallecimiento del señor QUINTANA ocurrida el 19 de septiembre de 2015, el Secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, mediante Resolución No. 990 de noviembre 4 de 2015 reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARIA ANGELITA LEITON, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.703.142 de Pasto, dada su condición de cónyuge supérstite.

Posteriormente, el señor JORGE QUINTANA ARTURO identificado con cédula de ciudadanía No 12.985.137 de Pasto, mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2019, solicita ante la Subsecretaria de Talento Humano de la Gobernación de Nariño, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aduciendo que es hijo invalido del señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO.

El Secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, mediante Resolución No. 0204 de marzo 27 de 2019 negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del señor JORGE QUINTANA ARTURO, habida consideración que dicha prestación ya fue reconocida a la señora MARIA ANGELITA LEITON en su condición de cónyuge supérstite, quien mediante declaración rendida ante el Dr. JAIME ROSERO TOBAR – Profesional Universitario de la Subsecretaria de Talento Humano de la Gobernación de Nariño, manifestó claramente su oposición a la

Escaneado con Cam

modificación del acto que reconoció su derecho, asegurando que ella fue la cónyuge supérstite del fallecido y que no existían otras personas que hayan dependido económicamente de su esposo.

Ante esta decisión, el interesado interpuso ante la Administración Departamental recurso de reposición y en subsidio apelación. El recurso de reposición fue decidido mediante Resolución No. 0323 de mayo 10 de 2019 emitida por el Secretario de Hacienda del Departamento, la cual dispuso no reponer en absoluto la decisión contenida en el acto impugnado y concedió el recurso de apelación, enviando el expediente con todos los documentos y actos administrativos ante este Despacho.

3.- MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Los argumentos esgrimidos por la parte recurrente se condensan así:

- Manifiesta que existió una falta de valoración probatoria de la documentación y los testimonios allegados, al momento de resolver de fondo la petición del señor QUINTANA ARTURO.
- Sostiene que el parentesco se demostró plenamente con el registro civil de nacimiento del solicitante, al igual que su estado de invalidez, conforme al dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez.
- Respecto a la dependencia económica en relación al pensionado, considera que fue acreditada con dos declaraciones extrajudiciales de personas que les consta los hechos en forma directa, las cuales no se tuvieron en cuenta.
- Considera que se violó el derecho de defensa al no permitir ejercer el derecho de contradicción con respecto a la declaración rendida por la señora LEITON, dado que el artículo mencionado, indica que el interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo; que no se tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción por cuanto nada se informó sobre la declaración de la señora MARIA ANGELITA LEITON.
- Por otra parte, considera que la administración no corroboro la declaración de la señora MARIA ANGELITA LEITON, con los documentos anexos al expediente del pensionado, por cuanto en ellos se plasma la voluntad del pensionado desde 1995 hasta el 19 de diciembre de 2011, ordenando a la señora MARIA ANGELITA LEITON entregue parte de la pensión a sus tres hijos habidos en su anterior relación.
- Finalmente solicita reponer la decisión emitida teniendo en cuenta que se han aportado nuevos elementos probatorios y en caso de no reponer, se conceda el recurso de apelación y se reconozca la pensión en un 50% del monto que viene disfrutando la señora LEITON.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. - MATERIAL PROBATORIO

Para la decisión del asunto objeto de estudio, se tendrán en cuenta todos los documentos que obran en el expediente administrativo No. ID-1411 del señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, como los aportados por el interesado, por lo cual se tiene un total de 912 folios.

4.2.- TEMA JURIDICO DE CONTROVERSIA

Escaneado con Cam

El problema jurídico a resolver, se contrae a determinar si el señor JORGE QUINTANA ARTURO quien alega ser hijo inválido, puede acceder a la pensión de sobrevivientes, en virtud del fallecimiento de su padre, habida cuenta que dicha pensión ya fue reconocida a la señora MARIA ANGELITA LEITON en su condición de cónyuge supérstite del señor JORGE QUINTANA BURBANO, acto que se encuentra en firme.

4.3.- LA PENSION DE SOBREVIVIENTES

El artículo 48 constitucional le atribuye a la seguridad social una doble naturaleza; la primera, como servicio público de obligatoria prestación por el Estado y de los particulares autorizados y, la segunda, como un derecho garantizado a todos los ciudadanos. Adicionalmente, se consagró como un derecho irrenunciable de especial protección constitucional.

Ahora bien, el legislador, mediante la Ley 100 de 1993, organizó el Sistema General de Seguridad Social como un *"conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad".*[1]

En el sistema integral de protección del derecho a la seguridad social en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales; cuyo objeto no es otro que el de amparar a los beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que, la ocurrencia de su muerte no implique, además, la pérdida de los recursos con los que su grupo familiar se sostenía en condiciones dignas.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 5 de febrero de 2009, C. P. Dra. Berta Lucía Ramírez de Páez, manifestó[2]:

> *"La finalidad de la sustitución pensional, es precisamente garantizarle a los beneficiarios del pensionado la posibilidad de su congrua subsistencia, en otras palabras, que la esposa o esposo o compañero permanente, y los hijos menores de edad o que continúen sus estudios hasta los 25 años, tengan la seguridad, al menos económica, que recibían del pensionado fallecido quien aportaba al sostenimiento del hogar."*

La Corte Constitucional por su parte, desde sus inicios ha sostenido que la finalidad de la sustitución pensional es:

> *"(...) evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez*

[1] Ley 100 de 1993 – Preámbulo.
[2] Radicado interno No. 3084-01, actor: Regina Isabel Martelo de Vargas y otros.

Escaneado con Cam

y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido." [3]

4.4.- DEL ASUNTO BAJO ESTUDIO

Se tiene que en virtud del fallecimiento del señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, el Secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, emitió la Resolución No. 990 de noviembre 4 de 2015 por la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARIA ANGELITA LEITON, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.703.142 de Pasto, en su condición de cónyuge supérstite.

Dicho reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora LEITON, fue declarado por el Departamento de Nariño, mediante acto administrativo debidamente motivado, el cual se encuentra en firme y goza de su presunción de legalidad tal como lo consagran los artículos 87 y 88 de la ley 1437 de 2011[4].

Se tiene que al momento de la muerte del señor QUINTANA BURBANO - ocurrida el 19 de septiembre de 2015- únicamente se presentó a reclamar la sustitución pensional, su esposa, la señora MARIA ANGELITA LEITON quien cumplió rigurosamente con los requisitos legales consagrados para el efecto.

El acto administrativo que reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora LEITON, se fundamentó en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

> *"**Artículo 13.** Los artículos 47 y 74 quedarán así:*
>
> ***Artículo 47.** Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*
>
> *a) En forma vitalicia, **el cónyuge o la compañera o compañero permanente** supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o **la compañera o compañero permanente** supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (...)"*

El acervo probatorio allegado, más que suficiente, fue conducente y pertinente para establecer que efectivamente la señora LEITON fue la cónyuge del pensionado y convivió con él hasta su muerte, compartiendo, techo, lecho y mesa por espacio de 44 años.

---

[3] T-193 de 1993, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[4] "Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo."
"Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar."

Escaneado con Cam

918

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño

Oficina Jurídica

Cabe considerar que en el expediente administrativo, reposan escritos -calendados en Agosto 16 de 1995, septiembre 17 de 2008- radicados en la Administración Departamental y suscritos por el señor JORGE QUINTANA BURBANO, en los cuales designa como beneficiarias de su pensión a las señoras INES ARTURO DE QUINTANA y MARIA ANGELITA LEITON, en condición de cónyuge y compañera respectivamente. Sin embargo, a partir de la muerte de la señora INES ARTURO DE QUINTANA (2011) el señor QUINTANA mediante oficio radicado en la entidad de diciembre 19 de 2011, designa como beneficiaria exclusiva de su pensión a la señora MARIA ANGELITA LEITON, en calidad de cónyuge. También reposa una declaración extraproceso rendida ante la Notaría Tercera del Círculo de Pasto, por el señor QUINTANA BURBANO de fecha mayo 13 de 2015 reiterando que su esposa es la única beneficiaria de la pensión. Cabe mencionar que no existe escrito alguno en el expediente del pensionado fallecido, en el que hiciera alusión a un hijo inválido y que dependiera de él.

De igual manera, obran en la actuación administrativa, declaraciones extra juicio rendidas ante la Notaria Tercera del Círculo de Pasto de Septiembre 23 de 2015 por los señores HECTOR BUENAVENTURA BENAVIDES CALVACHE y ARMANDO GUTIERREZ CORDOBA; al igual que en Octubre 6 de 2015 rendidas por MARTHA EUNICE CORDOBA GUERRERO y BARTOLOME PAREDES QUIÑONES, donde manifiestan que les consta que el Señor JORGE QUINTANA BURBANO convivió en unión marital de hecho con la señora MARIA ANGELITA LEITON durante 40 años, y después contrajeron matrimonio el 7 de diciembre de 2011 y convivieron hasta el día 19 de septiembre del año 2015 compartiendo techo, lecho y mesa; agregaron que MARIA ANGELITA LEITON dependía económicamente del señor QUINTANA, igualmente informaron que no existían más personas con igual o mejor derecho.

Reposa además una certificación de la E.P.S. SALUDCOOP de septiembre 22 de 2015, en la cual consta que la señora MARIA ANGELITA LEITON, estaba registrada como única beneficiaria en el régimen de salud de su esposo señor JORGE QUINTANA BURBANO, desde Abril 1° de 2003.

De igual manera, previo al reconocimiento del derecho pensional, se publicó el aviso emplazatorio, en un periódico de amplia circulación -La República-, dirigido a quienes se crean con derecho a la sustitución de la pensión del fallecido, a fin de que dentro de los treinta (30) días siguientes se presenten a reclamarla aportando las pruebas en que se funden, sin embargo, ninguna otra persona se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes, por lo cual se procedió a emitir el acto mencionado.

En tal estado de cosas y frente a la petición elevada por el señor QUINTANA ARTURO, es necesario observar que tanto la Constitución Política como el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, protegen el derecho conferido a un particular conforme a la ley, y la administración no puede revocar dicho acto sin el consentimiento expreso y escrito del titular. Por lo tanto y en aplicación de los artículos 37 y 38 ibídem, el día 21 de febrero de 2019 la señora MARIA ANGELITA LEITON, concurrió ante la Subsecretaria de Talento Humano de la Gobernación de Nariño, para ser informada de la reclamación impetrada por el señor JORGE QUINTANA ARTURO, por lo cual se procedió a recibir su declaración por parte del Profesional Universitario de dicha dependencia Dr. JAIME ROSERO TOBAR; en dicha oportunidad la mencionada señora manifestó su oposición a las pretensiones del señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, argumentando haber sido la cónyuge supérstite del fallecido y afirmando que no existían otras personas que hayan dependido económicamente de su esposo. Agregó que no da su consentimiento para modificar el acto administrativo por el cual se le reconoció la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su esposo.

De otra parte y conforme a los documentos allegados, se considera que no existe certeza de la dependencia económica del señor QUINTANA ARTURO respecto de su padre, por cuanto reposan documentos que dan cuenta sobre su formación profesional, capacidad económica e independencia respecto del fallecido; además, no existe prueba alguna en la cual el señor

Escaneado con Cam

QUINTANA BURBANO hubiere hecho referencia a la invalidez de su hijo y mucho menos a su dependencia económica. En igual sentido, llama la atención al despacho, que efectuada la consulta respectiva en el RUAF (Registro Unico de Aafiliados)[5] el día 10 de junio de 2019, este Sistema indica que el señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.985.137, registra afiliación a MEDIMAS E.P.S. en el régimen contributivo en calidad de cotizante desde el 05/10/2017, también está afiliado a riesgos laborales a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde 2017-12-11 y a la Caja de Compensación Familiar de Nariño desde 2008-10-17 como trabajador dependiente.

Con fundamento en las condiciones de hecho y las normas aplicables al presente asunto, se colige que no es procedente aplicar la revocatoria directa al acto administrativo de contenido especial y prestacional por el cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora MARIA NGELITA LEITON, ni modificarlo, pues tales atribuciones no tienen fundamento fáctico ni legal, por cuanto en primer lugar, no existe consentimiento previo de la titular del derecho y de otra parte, es posible establecer con grado suficiente de objetividad, la ostensible legalidad del acto que reconoció el derecho, mismo que encuentra sustento en motivos reales, trascendentes y sobre todo verificables, sin que exista asomo de duda sobre el cumplimiento de requisitos y mucho menos vestigios de pruebas falsas. Así las cosas, se reitera que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ya se efectuó hace 3 años y 7 meses a la persona que demostró el derecho, mediante un acto administrativo que se encuentra vigente y amparado por la presunción de legalidad, el cual solo puede ser anulado o suspendido por la jurisdicción Contencioso Administrativa[6].

En este orden de ideas, se considera inviable el pedimento y sustentación del recurrente, encontrando por ello ajustada la decisión de primera instancia en el sentido de negar la pensión de sobrevivientes solicitada y por lo tanto se procederá a su confirmatoria con fundamento en la parte motiva del presente.

Por lo anteriormente expuesto este despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- **NO REVOCAR** la Resolución No. 0204 de marzo 27 de 2019, proferida por el Secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por el señor JORGE QUINTANA ARTURO, identificado con cédula de ciudadanía No 12.985.137 de Pasto.

ARTICULO SEGUNDO.- **CONFIRMAR** la Resolución No. 0204 de marzo 27 de 2019, proferida por el Secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por el señor JORGE QUINTANA ARTURO, de notas civiles conocidas en este asunto, conforme a la parte considerativa del presente acto.

[5] El RUAF es un sistema de información que consolida las afiliaciones que reportan las entidades y administradoras del Sistema de Protección Social, de acuerdo con lo establecido en la norma vigente.
[6] Artículo 88 de la ley 1437 de 2011

Escaneado con Cam

919.

Gobernación de Nariño

Oficina Jurídica

ARTICULO TERCERO.- **NOTIFICAR** esta decisión a la Dra. MARIA EUGENIA QUINTANA ARTURO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.736.561 de Pasto, en su calidad de apoderada, o al interesado, informando que contra la presente no procede recurso alguno, por cuanto los mismos se declaran agotados.

ARTICULO CUARTO.- **DEVOLVER** el expediente a su Despacho de origen, es decir a la Secretaría de Hacienda Departamental para lo de su competencia y fines legales pertinentes.

Dada en San Juan de Pasto, a los 14 JUN 2019

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

DANILO HERNANDEZ FOLLECO
Gobernador de Nariño(E)

Revisó:
HUGO ARMANDO GRANJA ARCE
Jefe Oficina Asesora Jurídica

S.M.M.

Escaneado con Cam

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño

Secretaría de Hacienda

Resolución No. 0731 **de 2019**

(27 AGO 2019)

Por medio de la cual modifica la resolución No. 990 del 4 de noviembre de 2015, mediante la cual se ordena el pago de una pensión de sobrevivientes

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO

En uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que el señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, quien ostentaba la calidad de pensionado del Departamento de Nariño, según resolución No. 840 del 30 de noviembre de 1994, falleció el día 19 de septiembre de 2015.

Que ante el fallecimiento del mencionado pensionado y una vez publicado el edicto emplazatorio el día 30 de septiembre de 2015 en el diario La República, sólo la señora MARIA ANGELITA LEITON, se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes.

Que la solicitante demostró ser la esposa del extinto, para lo cual anexó el registro civil de matrimonio expedido por la Notaria Tercera del Círculo de Pasto, en el cual se hace constar que contrajeron nupcias religiosas el 7 de diciembre de 2011.

Que en la manifestación de la peticionaria ante la Notaria Tercera del Círculo de Pasto y en las declaraciones de terceras personas ante la misma Notaría, se señaló que ésta inicialmente convivio con el señor Quintana durante 40 años en unión libre y luego contrajo matrimonio el 7 de diciembre de 2011, conviviendo en forma continua hasta el día 19 de septiembre del año 2015, día su fallecimiento, compartiendo techo, lecho y mesa, y dependiendo económicamente de él.

Que de acuerdo a lo anterior, con la resolución No. 990 del 4 de noviembre de 2015, se reconoció y ordenó pagar dicha pensión de sobrevivientes en favor de la señora MARIA ANGELITA LEITON, acto que fue notificado el 10 de noviembre de 2015 y contra el mismo no se interpuso recurso alguno.

Que la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificada con C.C. No. 59.836.850, con oficio fechado el 5 de abril de 2019, solicitó ante la Subsecretaria de Talento Humano el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su padre el señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, identificado con C.C. No. 1.793.180, dada su condición de hija invalida.

Que la solicitante para demostrar su derecho anexó la siguiente documentación:

Copia de su cédula de ciudadanía.

Copia de su registro civil de nacimiento, en el cual consta que nació el día 26 de abril de 1977 y es hija del señor JORGE RAFAEL QUINTANA, identificado con C.C. No. 1.793.180 y de la señora MARIA ANGELITA LEITON.

Registro civil de matrimonio de sus padres expedido por la Notaria Tercera del Círculo de Pasto, donde consta que el señor JORGE RAFAEL QUINTANA y la señora MARIA ANGELITA LEYTON, contrajeron matrimonio católico el 7 de diciembre de 2011 y que los hijos legitimados por dicho matrimonio son: JORGE JHONSON, MARIA HORTENSIA y ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON.

Certificación del 11 de marzo de 2019, expedida por la E.P.S. MEDIMAS, donde consta que la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, fue afiliada a dicha E.P.S, el día 1 de agosto de 2017 como cotizante y reside en la calle 22 A No. 20 – 36 del Barrio San José de la Ciudad de Pasto.

Copia del dictamen No. 0129 - 2018 del 15 de febrero de 2019, proferido por la Junta Regional de Calificación de Nariño, en el que se calificó a la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificada con C.C. No.59.836.850, con un porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del

Escaneado con Cam

HOJA NUMERO 2 DE LA RESOLUCION

66.44 % y cuya estructuración se dio el 26 de abril de 1977, es decir, se lo consideró como invalida desde su nacimiento.

Copia de la declaración extrajucio rendida ante la Notaria Primera del Circulo de Pasto el día 22 de febrero de 2019 por la señora MARIA ANGELITA LEITON, en la que afirma que su hija ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON es fruto del matrimonio que tuvo con el señor JORGE RAFAEL QUINTANA, manifestando que era su esposo quien suministraba los recursos económicos para su manutención ya que ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON padece de un diagnóstico de síndrome de turner, enfermedad auditiva, visual entre otras, por ende no trabaja y desde el 19 de septiembre de 2015, siguió dependiendo de ella.

Declaraciones extrajucios rendidas ante la Notaria Primera del Circulo de Pasto, el día 19 de marzo de 2019 por los señores JAIME ALFREDO PAZMIÑO identificado con C.C. No. 12.970.157, BERTHA ALICIA CORDOBA DE GUERRERO, identificada con C.C. No. 27.060.491 y MARLENY ALEXANDRA ROMO VARGAS, identificada con C.C. No. 59795.280, en las manifiestan conocer tanto a la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON como a la señora MARIA ANGELITA LEITON, siendo las primera la hija y la segunda la esposa del señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, fallecido el 19 de septiembre de 2015 y era él quien en vida suministraba la totalidad de los recursos para la manutención de las mencionadas señoras; además afirman que la señora ANGELITA LEITON, después de fallecido su esposo, con la pensión que le fue reconocida, ha sido quien le suministra los recursos económicos a su hija ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON para su sostenimiento, ya que no puede trabajar debido a su enfermedad y desde el 19 de septiembre de 2015, ha dependiendo totalmente de los cuidados y de los recursos que su madre le suministra.

Que en el oficio presentado en forma personal por la señora MARIA ANGELITA LEITON ante la Notaria Cuarta del Circulo de Pasto el día 2 de mayo de 2019 y posteriormente entregado ante la Subsecretaria de Talento Humano de la Gobernación de Nariño, la mencionada señora manifiesto ante este despacho que estando en pleno conocimiento de sus capacidades autoriza modificar la resolución No. 990 del 4 de noviembre de 2015, por medio de la cual se le reconoció el 100 % de la pensión de sobrevivientes de su esposo JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, identificado con C.C. No. 1.793.180, para que el 50 % de la pensión de la referencia, sea reconocida a su hija ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificada con C.C. No. 59.836.850, quien tiene una discapacidad congénita del 66, 44 %, cuya fecha de estructuración fue el 25 de abril de 1977, según el dictamen No. 0129- 2018 emitido por la Junta Regional de Invalidez de Nariño; lo anterior en vista de que su hija también dependió económicamente de su esposo y actualmente de ella.

Que el literal b) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, dispone que son beneficiarios de la pensión de sobreviviente. " Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 y hasta 25 años, incapacitados o para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y o hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez".

Que adecuando el caso sub-exámine con el precepto legal, encontramos que en las declaraciones rendidas ante la Notaria Primera del Circulo de Pasto por JAIME ALFREDO PAZMIÑO identificado con C.C. No. 12.970.157, BERTHA ALICIA CORDOBA DE GUERRERO, identificada con C.C. No. 27.060.491 y MARLENY ALEXANDRA ROMO VARGAS, identificada con C.C. No. 59795.280, se señala que la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON LEITON, es una persona discapacitada que no puede valerse por sí misma, ya que siempre dependió de los recursos económicos que su padre el señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, le suministraba para su manutención.

Que en consideración a lo anterior, se ha demostrado el derecho de la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificada con C.C. No. 59.836.850 a recibir el 50% de la pensión que recibía su padre y mientras subsistan las condiciones de invalidez.

Que según los hechos fácticos y jurídicos que anteceden y al consentimiento otorgado por la señora MARIA ANGELITA LEITON, mediante el oficio del 2 de mayo de 2019, es viable modificar la resolución No. 990 del 4 de noviembre de 2011.

Escaneado con Cam

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño | Secretaría de Hacienda

HOJA NUMERO 3 DE LA RESOLUCION

Por lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el artículo primero de la resolución No. 990 del 4 de noviembre de 2015, el cual quedará de la siguiente forma: " Reconocer y ordenar pagar a partir del mes de septiembre de 2019 y a favor de la señora MARIA ANGELITA LEITON, identificada con C.C. No. 30.703.142, en su condición de cónyuge supérstite del señor JORGE RAFAEL QUINTANA BURBANO, el 50 % de la pensión de sobrevivientes y el restante 50 % a favor de la señora ANA CRISTINA QUINTANA LEYTON, identificada con C.C. No. 59.836.850, dada su condición de hija invalida del causante y dependiente económicamente del mismo.

ARTICULO SEGUNDO.- Descontar para aportar en Salud del valor de cada mesada pensional el porcentaje que determine la ley, el cual estará en su totalidad a cargo de los beneficiarios de la sustitución pensional.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución proceden los recursos legales dentro de los diez días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 27 AGO 2019

Dada en San Juan de Pasto, a los_____ días del mes de _____ del dos mil diez y nueve (2019).

ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda

Pyo. Jaime H. Rosero T.
Profesional Universitario S.T.H

Vo. Bo. Diana María Ortiz Juliao
Subsecretaria de Talento Humano

Revisó: Nubia Bastidas Santander
Profesional Universitario Secretaria de Hacienda

Escaneado con Cam

82

• MES DE DICIEMBRE DEL 2015 MÁS PRIMA. 2 12 15

Yo, María Angelita Leyton entrego a Jorge Rolando Quintana Arturo con C.C. 12.985.137 de Pasto la suma de $ 1'000.000 de pesos por el mes de diciembre del 2015, más 500.000 pesos por prima del mismo mes y del mismo año, los cuales serán repartidos de la siguiente manera:

- 300.000 Jorge Rolando
- 300.000 María Eugenia
- 300.000 Oscar Alexander
- 100.000 Sofía Valentina

lo que suma un total de 1'000.000 del mes de diciembre, el dinero de la prima será Repartido a conciencia por ustedes mismos.

Jorge Rolando Quintana Arturo.
C.C. 12.985.137 de. pasto.

Escaneado con Cam

83

.MES DE ABRIL 2016. 4 04 2016

Yo, Maria Angelita leyton entrego a Jorge Rolando Quintana Arturo Con C.C. 12.985.137 de pasto la suma de 1'000.000 de pesos por el mes de abril del 2016.

los cuales seran repartidos de la siguiente Manera:

- 300.000 Jorge Rolando
- 300.000 Maria Eugenia
- 300.000 oscar alexander
- 100.000 sofia Valentina.

suma total de 1'000.000 de Pesos Correspondiente al mes de abril.

Jorge Rolando Quintana Arturo.
C.C. 12.985.137 de Pasto.

Escaneado con Cam

Mes de julio del 2016. 12 07 16

Yo, maria Angelita leiton entrego a Jorge Rolando Quintana Arturo Con C.C. 12.985.137 de Pasto la Suma de $ 500.000 pesos por Concepto de la Prima del mes de julio del 2016.

Jorge Rolando QUINTANA ARTURO.
12.985.137 de Pasto

Escaneado con Cam

95

.MES DE MAYO 2017.

Yo, Maria Angelita Leyton Entrego a Jorge Rolando Quintana Arturo con C.C. 12.985.137 de Pasto la suma de $ 1'000.000 de Pesos por el mes de Mayo del 2017. Por concepto de apoyo Mensual.

Entregados el dia 3 de Mayo del 2017.

Jorge Quintana
Jorge Rolando Quintana Arturo.
C.C. 12. 985. 137 de Pasto.

Jorge Rolando Quintana Arturo
C.C. 12. 985. 137 de Pasto.

Escaneado con Cam

8b

• MES DE JUNIO 2017.

Yo, Maria Angelita Leyton ENTREGO A Jorge Rolando Quintana Arturo con C.C. 12.985.137 de Pasto la suma de $ 1'000.000 de pesos, del mes de junio del 2017. por concepto de apoyo mensual, para ser repartido entre él y sus dos hermanos (Maria Eugenia, Oscar Alexander).

ENTREGADOS el dia ( ) JUNIO 2017.

Jorge R Quintana Arturo

Jorge Rolando Quintana Arturo
C.C. 12.985.137 Pasto.

Escaneado con Cam

Yo, Maria Angelita Jeyton entrego a Jorge Rolando Quintana Arturo con C.C 12 985 137 de Pasto la suma de $ 1'000.000 de pesos, del mes de Diciembre del 2017 por concepto del apoyo mensual, para ser repartidos entre él y sus dos hermanos (Maria Eugenia Quintana Arturo y Oscar Alexander Quintana Arturo)

Entregados el dia (4) diciembre 2017

Jorge Arturo
Jorge Rolando Quintana Arturo
C.C 12 985 137 Pasto

Escaneado con Cam

.MES DE DICIEMBRE PRIMA 2017.

DD MM AA
15 12 2017.

Recibi de Doña Maria Angelita Jeqton la suma de $500 000 pesos por concepto de apoyo, de la prima del mes de diciembre del 2017. Entregadas a mi Jorge Rodolfo Quintana Arturo con C.C 12.985.137 de Pasto, para ser repartidos entre mis dos Hermanos y yo.

Jorge Arturo

Jorge Rodolfo Quintana Arturo
CC 12'985.137 de Pasto

Escaneado con Cam



EXÁMEN DE OPTOMETRÍA

No: 408

DATOS PERSONALES

Fecha: 20/04/2018 **CC:** 59836850 **Nombre:** QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA **Edad:** 41 AÑOS
Genero: FEMENINO **Ocupación:** AMA DE CASA **Empresa:** ELIS CONSULTORES
Eps: MEDIMAS **Tipo Evaluación Medica:** LABORATORIO CLINICO
Fecha Último Examen: 20/04/2018 **Motivo Consulta:** EXAMEN OCUPACIONAL

ANTECENDENTES VISUALES

ANTECEDENTES FAMILIARES	NIEGA
ANTECEDENTES PERSONALES	NIEGA
ANTECENDENTES OCUPACIONALES	NIEGA
EXPOSICIÓN LABORAL VISUAL	
LENTES DE CONTACTO	NO USA
MULTIFOCAL	NO
TIPO DE USO	NO APLICA
TRAE RX	NO
ÚLTIMO DIAGNÓSTICO	
USA ANTEOJOS	NO USA

AGUDEZA VISUAL SIN CORRECCIÓN		AV/VL	AV/VP	PH	AGUDEZA VISUAL CON CORRECCIÓN	AV/VL	AV/VP
A.O:	NO APLICA	20/20/200	0.50 M	N/A	NO APLICA	N/A	N/A
O.D:	NO APLICA	20/ 20/400	0.50 M	N/A	NO APLICA	N/A	N/A
O.I:	NO APLICA	20/ 20/200	0.50 M	N/A	NO APLICA	N/A	N/A

RX FINAL		AV/VL	AV/VP	ADICIONAL
O.D:	-1.50-2.00X15	20/ 30	20/ NO	20/ NO
O.I:	-3.00-1.25X170	30	NO	20/ NO

AGUDEZA VISUAL CON CORRECCIÓN

AMBOS OJOSNO APLICA

COVER TEST

VISIÓN LEJANAORTHO
VISIÓN PROXIMAX

ESTEREOPSIS

OBSERVACIÓNNORMAL

MOTILIDAD OCULAR

OBSERVACIÓNNORMAL

REFLEJOS

OBSERVACIONNORMALES

SINTOMATOLOGÍA

ARDOR. USA RX PERMANENTE, UCAMBIO DE RX HACE 1 MES. OD. -1.50-2.00X14 OI. -3.00-2.00X162

CÓDIGO	DIAGNÓSTICO	ORIGEN	TIPO
H522	ASTIGMATISMO	COMÚN	1 - IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

CONDUCTA A SEGUIR

CONTROL EN 1 AÑO
CORRECCIÓN OPTICA PARA VL

OBSERVACIONES:

OPTOMETRA

Firma:
Nombre: UGARTE LIZARASO MARIA BEATRIZ

TRABAJADOR

Firma: Ana Cristina Quintana Leyton
Nombre: QUINTANA LEYTON ANA CRISTINA

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

EVALUACION PSICOLOGICA

I.DATOS DE IDENTIFICACION

Fecha de Informe	19 de Abril de 2018
Nombre	Ana Cristina Quintana Leiton
Documento	59.836.850 Pasto (N)
Lugar de Nacimiento	Tumaco Nariño
Fecha de Nacimiento	26 de Abril de 1977
Edad	40 Años
Ocupación	Desempleada
Estado civil	Soltera
Dirección	Calle 22 a No 20 – 36 Barrio San José
Teléfono	315 551 39 51 – 302 370 20 77

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

II.MOTIVO DE CONSULTA

Paciente que asiste evaluación psicológica de manera voluntaria, consiente, asiste acompañada por su madre quien es una persona de edad avanzada quien es la que responde todas las preguntas formuladas.

La paciente por su parte durante la entrevista y en ocasiones pierde la atención, fue por eso que se requería de un acompañante para la comprensión de su motivo de consulta y la razón por la cual manifiesta ser una candidata para adquirir su pensión.

Refiere su madre que desde niña sufre de un problema auditivo crónico el cual le imposibilito realizar diversas actividades propias de cada etapa de su vida.

Siempre ha dependido económicamente de sus padres, se ha dificultado adaptarse dentro de la sociedad debido al rechazo de la gente porque su problema de audición le genero aislamiento y rechazo por parte quienes la rodeaban.

De esta manera fue una gran dificultad la asistencia a la primaria y el bachillerato, manifiesta la paciente "mis compañeros fueron de gran ayuda ellos se daban cuenta que se me hacía muy difícil comprender lo que mis profesores decían, y por esta razón ellos me ayudaron para poder terminar mi bachillerato, a pesar del rechazo de algunos, otros si me ayudaban para no perder las materias".

Debido a todas estas manifestaciones de rechazo la madre refiere que la paciente constantemente entraba en depresión, expresados de manera inadecuada con episodios de agresividad y tristeza por la incapacidad de encajar de manera normal dentro de un círculo social.

Erika Andrea Galindo
PSICOLOGA
T.P. 113673 - I.D.S.N 52-1498

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

Dentro de todas las complicaciones que generaban su problema de audición, el que menciona la paciente y que le ha causado gran rechazo es el mal olor que resultaba de toda la infección auditiva que era una situación vergonzosa para ella y para cualquier persona con quien mantuviera relación.

Su madre debe acompañarla a toda parte debido a que teme que por su problema de audición sufra un accidente, la dificultad auditiva de la paciente le ha generado dificultades en su equilibrio, hace algún tiempo sufrió un accidente y se fracturó la clavícula esto debido a la falta de equilibrio.

Por el momento su madre quien heredo la pensión de su esposo es quien se encarga de todos los gastos de la paciente, pero su madre sufre acerca del futuro incierto de su hija cuando ella falte debido a su avanzada edad.

La paciente presenta una leve deficiencia de atención, se le dificulta en ocasiones ubicarse de manera adecuada en tiempo y en espacio, su atención dispersa le impide mantener contacto continuo con quien la entrevista y a esto sumado su dificultad para escuchar.

Erika Andrea Galindo
PSICOLOGA
T.P. 113673 - I.D.S.N 52-1498

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

III.FACTORES DESENCADENANTES

Como ya se mencionó antes su gran dificultad auditiva le genero una serie de eventos críticos en los cuales la paciente entraba en episodios de profunda depresión, días en los cuales se comportaba de manera inapropiada, alejándose de todo contacto social, ella manifiesta "me hubiera gustado formar una familia, tener hijos ser una persona normal pero nadie quería acercarse a mí, me rechazaban todo el tiempo y el único apoyo que tengo cerca es mi madre porque mi padre ya murió".

ESTADO EMOCIONAL

La paciente atraviesa un estado de minusvalía ella refiere que todo el tiempo se ha sentido una inútil, no ha podido conseguir un trabajo y valerse por si misma, nadie consideraba que estaba en capacidad para desarrollar cualquier actividad, cuando se enteraban de su problema de iodo la rechazaban y no le daban ningún trabajo.

Se evidencia una gran tristeza y preocupación frente a su futuro, ella refiere no tener herramientas para en un futuro solventar sus propios gastos.

ESTADO FISICO

Su estado físico es aparentemente normal, en el momento de la entrevista es claro evidenciar estados de atención dispersa e incapacidad para escuchar y por lo tanto responder a ciertas preguntas.

Erika Andrea Galindo
PSICOLOGA
T.P. 113673 - I.D.S.N 52-1498

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

IV.HISTORIA PERSONAL

Ana Cristina Quintana Leiton, mujer de 40 años de edad, toda su vida ha dependido de sus padres han sido ellos su más directo contacto, tiene tres hermanos, los cuales manifiestan gran preocupación por su futuro debido a que si la madre faltase su cuidado sería un gran inconveniente.

Termino su bachillerato a los 18 años con gran dificultad debido a su falta de comprensión, se considera aun así una persona privilegiad porque sus padres siempre estuvieron ahí para apoyarla y darle todo su cariño.

Cuando su padre muere ella se preocupa respecto a su estabilidad porque la madre ya es de avanzada edad y también se le dificulta acompañarla todo el tiempo.

Su niñez fue buena manifiesta la paciente a pesar de los rechazos de las demás persona sus padres se preocupaban por ella y hacían lo necesario para protegerla.

En su adolescencia ella intentaba encajar con personas de su edad pero el rechazo era continuo, esto llevo a la paciente sumergirse en estados de depresión cortos pero muy continuos, como ya se mencionó anteriormente ella manifiesta le hubiese gustado ser como un persona normal pero la gente a su alrededor le genero complejos.

En una ocasión intento tener una relación amorosa con una persona pero al final este hombre la rechazo, a partir de este momento ella considera que nunca podría realizar una vida normal, se encierra y experimenta fuertes dolores de cabeza los cuales se incrementan en el momento en que se aísla y se deprime.

Ella realiza muchas actividades en su casa se encarga de que todo esté en orden pero al parecer ella no establece objetivos y metas que le permitan realizarse como un ser humano integral y con capacidades de productividad, que este caso es lo que ella manifiesta necesita para sentirse útil.

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

V.AUTOVALORACION PERSONAL

La paciente se considera a sí misma como una persona activa, ordenada, y con muchas ganas de hacer las cosas, manifiesta que no depende de ella su incapacidad y teme que cuando se quede sola su situación empeore, ella teme que nadie quiera hacerse cargo de ella y como no es aceptada en ningún ámbito laboral no le será posible sostenerse económicamente.

Erika Andrea Galindo
PSICOLOGA
T.P. 113673 - I.D.S.N 52-1498

Escaneado con Cam

Erika Andrea Galindo Ch.
PSICOLOGA
T.P. 113673 – I.D.S.N. 52 – 1498

VI.DIAGNOSTICO

Es claro que la paciente evidencia un sentimiento de minusvalía frente a su situación actual, como ya se conoce las consecuencias de una patología generada a lo largo de toda su vida, complicaciones tanto físicas como psicológicas, los problemas de concentración, falta de atención, perdida de equilibrio, asilamiento social y problemas de comunicación, generaron una patología que influye de manera directa en la estabilidad integral de la paciente.

F33.2 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO ACTUAL MODERADO

DIAGNOSTICO REALIZADO POR

PROFESIONAL EN PSICOLOGIA

ERIKA ANDREA GALINDO CH.

Tarjeta Profesional No. 113673

Reg. I.D.S.N 52-1498

Erika Andrea Galindo
PSICOLOGA
T.P. 113673 - I.D.S.N 52-1498

Escaneado con Cam

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRES	JORGE ROLANDO
APELLIDOS	QUINTANA ARTURO
CEDULA DE CIUDADANIA	12.985.137 DE PASTO
LIBRETA MILITAR	12.985.137
ESTADO CIVIL	SOLTERO

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	NORMAL DE PASTO
SECUNDARIA	INEM DE PASTO
TITULO OBTENIDO	BACHILLER ACADEMICO
UNIVERSITARIOS	FILOSOFIA Y LETRAS. UNIVERSIDAD DE NARIÑO
TITULO OBTENIDO	LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS

CURSOS REALIZADOS

OPERADOR DE SISTEMAS EN COMPUTACION: EN LAS MATERIAS CONTABILIDAD GENERAL, REDACCION COMERCIAL, CASTELLANO Y ORTOGRAFIA, MECANOGRAFIA PROFESIONAL, SISTEMATIZACION

Escaneado con Cam

36

COMERCIAL. INSTITUTO DE COMERCIO SARASTY.

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL. SERVICIO DE APRENDIZAJE "SENA".

PREPARACION DE NOMINA. SERVICIO SECCIONAL DE APRENDIZAJE – "SENA".

ARCHIVISTA AUXILIAR. SERVICIO SECCIONAL DE APRENDIZAJE – "SENA".

ETICA Y DESARROLLO HUMANO. SERVICIO SECCIONAL DE APRENDIZAJE – "SENA".

TALLER BASICO DE RADIO. PROYECTO "CIRCULOS JUVENILES DE PREVENCION DE LA DROGADICCION". UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NARIÑO.

FORMACION BASICA PEDAGOGICA. SERVICIO SECCIONAL DE APRENDIZAJE – "SENA".

ACCION DE FORMACION. LEGISLACION LABORAL. SERVICIO DE APRENDIZAJE "SENA".

FORMACION EN INFORMATICA APLICADA INTERNET PARA EJECUTIVOS. SERVICIO DE APRENDIZAJE "SENA".

TALLER DE RADIO Y TELEVISION CESMAG

PROMOTOR E INVESTIGADOR TURISTICO. CAM.

CURSO BASICO DE PRODUCCIÓN RADIAL. UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

CAPACITACION EN RADIO DIFUSIÓN, CON ÉNFASIS EN HISTORIA REGIONAL, HISTORIA DEL CARNAVAL Y PROCESOS DE AUTOMOTIVACION. FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE NARIÑO – FIDEN Y RADIO UNIVERSIDAD DE NARIÑO 101.1 F.M.

FORMACIÓN DE VEEDORES CIUDADANOS. RED DEPARTAMENTAL DE PROMOCION AL CONTROL SOCIAL DE NARIÑO.

Escaneado con Cam

SEMINARIOS

IDENTIDAD Y TRANSCULTURACION EN AMERICA LATINA. FUNDACION AMIGOS DE LA LITERATURA.

VIII ENCUENTRO DE ETNOLITERATURA Y IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

ASAMBLEA NACIONAL ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ.

ESPACIO CONVIVENCIAL CARNAVAL ANDINO DE NEGROS Y BLANCOS: "CARNAVAL: LUDICA Y ARTE POPULAR". ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA.

IX ENCUENTRO DE ETNOLITERATURA "TRADUCCION ETNOLITERARIA ALTERNATIVAS POETICO = POLITICAS. UNIVERSIDAD DE NARIÑO – MAESTRIA EN ETNOLITERATURA.

PRIMER SEMINARIO DE DESARROLLO REGIONAL. UNIVERSIDAD DE NARIÑO. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS.

CATEDRA "ALBERTO QUIJANO GUERRERO". ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA.

PRIMER ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES ANDINAS. CATEDRA MULTIDISCIPLINARIA DE CULTURAS ANDINAS "ANDRES BELLO". UDENAR.

V ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIADORES. ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA.

ESCUELA DE GESTORES COMUNITARIOS. O.E.I. ALCALDIA DE PASTO.. SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

PROGRAMA DE CAPACITACION COMUNITARIA Y PARTICIPACION CIUDADANA. DIGIDEC.

PRIMER SEMINARIO SINDICAL. FERTRASUCCOL SECCIONAL NARIÑO.

Escaneado con Cam

38

PRIMER SEMINARIO TALLER SOBRE POLITICAS DE JUVENTUD. GOBERNACION DE NARIÑO.

II ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FILOSOFIA Y LETRAS. UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

CATEDRA ALBERTO QUIJANO GUERRERO. HISTORIA REGIONAL: FUENTES Y METODOS DE INVESTIGACION. ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA. FINCIC.

FOUCAULT – DELEUZE. FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS Y PSICOANALISIS. DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS Y DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA.

PRIMER ENCUENTRO CULTURAL POR LA VOCACION ARTESANAL Y LA IDENTIDAD. OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y ALCALDIA DE PASTO

CATEDRA ALBERTO QUIJANO GUERRERO. SAN JUAN DE PASTO: CIUDAD, MEMORIA Y CULTURA. ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA.

"CONSTRUCCION SOCIAL DE REGION, IDENTIDAD CULTURAL Y CULTURA POLITICA". ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NARIÑO – PUTUMAYO.

"LA GLOBALIZACION Y LAS IDENTIDADES REGIONALES. UNIVERSIDAD DE NARIÑO. IADAP. AREA CULTURAL BANCO DE LA REPUBLICA.

SEMINARIO TALLER "MUSEO Y EDUCACION". CENTRO CULTURAL BANCO DE LA REPUBLICA.

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES "MOVIMIENTOS COMUNEROS EN AMÉRICA". ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA.

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CULTURA. CASA DE LA CULTURA.

SEMINARIO – TALLER "LAS HUELLAS VISIBLES E INVISIBLES DE LA GUERRA". REDEPAZ.

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL: TERNURA Y CREATIVIDAD UNA PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Escaneado con Cam

EL ALCOHOL Y OTROS APEGOS. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. UNIVERSIDAD DE NARIÑO. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

PRIMER SEMINARIO PEDAGOGICO MUNICIPAL "EL NUEVO SISTEMA ESCOLAR: PROYECTOS DE AREA Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIA. CONOSFERA

DESARROLLO HUMANO Y MULTICULTURALIDAD: UN COMPROMISO DE LA REGION Y LA UNIVERSIDAD. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. IADAP. ASCUN. PNUD.

PRIMER ENCUENTRO POR LOS Y LAS JÓVENES DEL DEPARTAMENTO "SIN CAPACITACIÓN NI PIO". FONDO DE POBLACÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. GOBERNACIÓN DE NARIÑO. ALCALDÍA MUNICIPAL.

ESCUELA SALUDABLE. ALCALDÍA DE PASTO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

III CÁTEDRA EDUCATIVA: "EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA". GOBERNACIÓN DE NARIÑO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

EDUCACION Y DESPLAZAMIENTO. OPCIÓN LEGAL. ACNUR.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESPACIO PÚBLICO, CONVIVENCIA Y CLAIDAD DE VIDA. ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO.

SÉPTIMO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES, COLOMBIA: TERRITORIOS, REGIONES Y CULTURAS. ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA.

PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE VEEDORES. RED DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA DE NARIÑO.

CATEDRA IGNACIO RODRÍGUEZ GUERRERO. UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

Escaneado con Cam

DIPLOMADOS

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO. ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO YEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - P.N.U.D.

HISTORIA REGIONAL. ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA Y UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y GOBERNACIÓN DE NARIÑO. ARD. UNAD.

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALK DESDE LOS PROYECTOS DE ÁREA. CONOSFERA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, EL CRECIMIENTO HUMANO Y EL DESARROLLO SOCIAL.

TALLER EN LECTURA Y ESCRITURAS CREATIVAS. GOBERNACIÓN DE NARIÑO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO.

DISTINCIONES

"PREMIACION CORREO DEL SUR" AL TALLER DE ESCRITORES TINTA

"PREMIACION CORREO DEL SUR" A LA EMISORA CHAMBU DE MI VIDA.

EXPERIENCIA LABORAL

ENTIDAD	:	AEROENVIOS LTDA
CARGO	:	MENSAJERO
ENTIDAD	:	RESTAURANTE EMPERADOR II
CARGO	:	CAJERO
ENTIDAD	:	LASSER EXPRESS
CARGO	:	MENSAJERO

Escaneado con Cam

ENTIDAD	:	OFICINA ABOGADO BURBANO
CARGO	:	SECRETARIO
ENTIDAD	:	UNIVERSIDAD DE NARIÑO
		CARGO MONITOR DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS Y DEL TALLER AWASCA.
ENTIDAD	:	CALLE 20 Nª 3-99
CARGO	:	TRANSCRIPTOR DE TEXTOS YVARIOS
ENTIDAD	:	DIRECCIÓN SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CARGO	:	AUXILIAR DE JUSTICIA
ENTIDAD	:	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO
CARGO		PROMOTOR DE INVESTIGACION TURISTICA
ENTIDAD	:	COPY GARFIELD
CARGO		TRANSCRIPTOR
ENTIDAD	:	LASSO EXPRESS
CARGO		MENSAJERO
ENTIDAD	:	COLEGIO SANTA TERESITA DE CATAMBUCO
CARGO		DOCENTE
ENTIDAD	:	ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA
ENTIDAD	:	CARCEL JUDICIAL DE PASTO
CARGO		DOCENTE
ENTIDAD	:	ESCUELA URBANA INTEGRADA DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ
CARGO	:	DOCENTE

Escaneado con Cam

ENTIDAD	:	ESCUELA BAJO CASANARE
CARGO	:	DOCENTE
ENTIDAD	:	CONCENTRACIÓN ESCOLAR SANTA MATILDE
CARGO	:	DOCENTE
ENTIDAD	:	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CLUB DE LEONES – JORNADA TARDE
CARGO	:	DOCENTE
ENTIDAD	:	INSTITUTO EDUCATIVO MUNICIPAL AGUSTÍN AGUALONGO.
CARGO	:	DOCENTE

REFERENCIAS PERSONALES

JAIME FELIPE RODRIGUEZ. ABOGADO. CALLE 19 NO. 22-60 TEL 7232335

ORLANDO GUERRERO. ECONOMISTA. CALLE 16 NO. 24 – 16 TEL. 7230392 DANE.

JORGE R. QUINTANA ARTURO
TEL. 7303841
PASTO

Escaneado con Cam

LA REPUBLICA D COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE

EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM — PASTO

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. SEGUN DECRETO 1962 DE NOVIEMBRE 20 DE 1969

CONFIERE A

Jorge Rolando Quintana Arturo

IDENTIFICADO CON 12.985.137 DE Pasto

EL TITULO DE

BACHILLER ACADEMICO
MODALIDAD CIENCIAS

POR RAZON DE HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA, SEGUN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

ALFREDO PAZ MENESES
RECTOR

JULIO AREVALO CORTES
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El Suscrito Notario Primero del Circuito de Pasto hace constar que la anterior fotocopia es igual al original constatado
Pasto, 5 SET 1991

DADO EN ASTO A 3 DE JULIO DE 1982

ANOTADO AL FOLIO 31 LIBRO DE REGISTRO No 67

SECRETARIO DE EDUCACION

Guillermo Zoque

Nº 61650

EN ... A 26 DE Julio DE 1982

Escaneado con Cam

La República de Colombia

y en su nombre

La Universidad de Nariño

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional

Otorga el Título Profesional de

Licenciado en Filosofía y Letras

A

Jorge Rolando Quintana Arturo

C. C. No. 12985137 de Pasto

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto
a los 30 días del mes de septiembre del año 2000

Pedro Vicente Chando Ordóñez
Rector Universidad de Nariño

José Edmundo Calvache López
Decano Facultad de Ciencias Humanas

Luis Nava Rubio
Secretario General

Libro de Registro No. 959 Fol. 403
Libro de Registro No. 16999
Pasto - Juan de N., 30-IX-2000

Diploma No. 5.618

Escaneado con Cam

RESOLUCION No. 0160

[05 FEB. 2001]

Por la cual se INSCRIBE a un educador (a) en el Escalafón Nacional Docente.

LA JUNTA SECCIONAL DE ESCALAFON DOCENTE DE NARIÑO

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 15 del Decreto Extraordinario 2277, del 14 de septiembre de 1979, en concordancia con el Decreto 259 del 6 de Febrero de 1981, y

C O N S I D E R A N D O :

Que de conformidad con las normas, corresponde a la Junta Seccional de Escalafón Docente, el estudio, tramitación y decisión de las solicitudes para INSCRIPCION en el Escalafón Nacional Docente de los educadores oficiales y no oficiales del país.

Que el educador que a continuación se relaciona, presentó los documentos exigidos por el artículo 2o. del decreto 259 de 1981, con la certificación del TITULO de:

LICENCIADO.=

ESPECIALIDAD : FILOSOFIA Y LETRAS.=

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : INSCRIBIR en el grado SIETE (7)

del Escalafón Nacional Docente al educador (a):
QUINTANA ARTURO JORGE ROLANDO

C.C. No. 12.985.137 de PASTO, NARIÑO

ARTICULO SEGUNDO : Fecha en que se empieza a contar el tiempo de servicio docente para el ascenso:

ARTICULO TERCERO : La presente Resolución surte EFECTOS FISCALES, a partir de:
05 FEB. 2001

ARTICULO CUARTO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PARAGRAFO: Notifíquese, haciendo saber a la parte interesada que contra esta providencia procede por la vía gubernativa el RECURSO DE REPOSICION ante la Junta Seccional de Escalafón, del cual debe hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la Notificación personal o desfijación del Edicto correspondiente.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en San Juan de Pasto a los 05 FEB. 2001

HERNAN CAICEDO BUSTOS
PRESIDENTE:

MARIELA ENRIQUEZ DE BOLAÑOS
SECRETARIO EJECUTIVO:

01-01-15
Elaboró: Liliana T.=

Escaneado con Cam

40

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
SECRETARIA GENERAL

ACTA DE GRADO No. 57

En la ciudad de Pasto, el día 30 de Septiembre del 2000, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne de Graduación presidida por el señor Rector de la Universidad Doctor PEDRO VICENTE OBANDO.con la asistencia del Decano de la Facultad de CIENCIAS HUMANAS Doctor JOSE EDMUNDO CALVACHE LOPEZ y del Secretario General de la Universidad de Nariño, Doctor LUIS NAVAS RUBIO, en la cual se confirió el Título de

LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS

mediante Resolución Rectoral Número 3056 del 18 de septiembre del 2000, se hizo entrega de los respectivos diplomas y se tomó el juramento de rigor a:

QUINTANA ARTURO JORGE ROLANDO C.C. No 12985137 de PASTO

quien cumplió con todos los requisitos para optar a tal Título.

El Programa cuyo Título se otorgó, se encuentra registrado en el Servicio Nacional de Información bajo el número 12064100401520011400.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado.

(Fdo) PEDRO VICENTE OBANDO
RECTOR

(Fdo)LUIS NAVAS RUBIO
SECRETARIO GENERAL

Es fiel copia de su original.

LUIS NAVAS RUBIO
SECRETARIO GENERAL

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE COMERCIO "SARASTY"

PASTO - NARIÑO - COLOMBIA

EDUCACION NO FORMAL
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NUMEROS 4829 DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1960 Y 0583 DEL 7 DE MARZO DE 1961, DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL RECTOR Y LA SECRETARIA DE EDUCACION

CERTIFICAN

QUE:

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO

IDENTIFICADO CON C. C. No. 12'985.137 DE PASTO (N.)

ASISTIO Y TERMINO SATISFACTORIAMENTE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

Mecanografía Profesional, Redacción Comercial, Castellano y Ortografía, Contabilidad General, Sistematización Comercial,

POR LO QUE CONFIEREN LA APTITUD PROFESIONAL DE:

OPERADOR DE SISTEMAS EN COMPUTACION

EN CONSTANCIA SE FIRMA EN PASTO, A LOS 15 DIAS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

RECTOR.

LUIS HUMBERTO SARASTY MARTINEZ

INSTITUTO DE COMERCIO "SARASTY" RECTORIA

SECRETARIA DE EDUCACION.

COORDINADOR DE EDUCACION DE ADULTOS

Escaneado con Cam

48

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

RESOLUCION NUMERO - 2229 -

(10 DE NOVIEMBRE DE 1995)

Por la cual se aclara la Resolución No. 2159 de 31 de octubre de 1995.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

en uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias,

C O N S I D E R A N D O :

Que mediante Resolución 2159 de 31 de octubre de 1995, se nombró como Monitor Técnico adscrito al Taller de Escritores Awasca al estudiante JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO;

Que la Decana de Estudiantes solicita se aclare la citada Resolución en el sentido que la monitoria que desempeñará el estudiante JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, es de Cátedra;

Que es necesario aclarar la mencionada providencia;

R E S U E L V E :

ARTICULO 1o.- Aclarar la Resolución No. 2159 de 31 de octubre de 1995, en el sentido que el nombramiento del señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, es Monitor de Cátedra adscrito al Taller de Escritores Awasca, a partir del 2 de octubre de 1995, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

ARTICULO 2o.- Vicerrectoría Administrativa, División de Recursos Humanos, Contabilidad, Decanatura de Estudiantes, Auditoría Interna, anotarán lo de su cargo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-
Dada en Pasto, el 10 de noviembre de 1995.

Pedro Obando

PEDRO VICENTE OBANDO OLDENBURG
Rector

MIGUEL GOMEZ CORDOBA
Secretario General

Amparo M.

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

LA SUSCRITA JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO

CERTIFICA:

Que el Señor **JORGE QUINTANA ARTURO**, identificado con cedula de ciudadania 12.985.137 de Pasto, ha colaborado con este despacho judicial como auxiliar de la justicia en calidad de perito avaluador y secuestre desde el año 1998, con ocasión de las diversas designaciones que durante el curso de los procesos, el Juzgado lo ha requerido hasta la fecha.

En constancia de lo anterior se firma en Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil dos (2002)

ALBA ROMO SANTACRUZ

Escaneado con Cam

50

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

CERTIFICA

Que el Señor Jorge Quintana identificado con cédula No. 12.985.137 No. de Pasto, desempeño el cargo de PROMOTOR DE INVESTIGACION TURISTICA en el proyecto sistema de informacion turistica en el Municipio de Pasto, del 26 de octubre al 26 de noviembre de 1.998.

Cumpliendo su labor en forma responsable, destacandose por su creatividad y cumplimiento.

En constancia se firma a los 17 días del mes de diciembre de 1.998

PATRICIA NARVAEZ MORENO
Secretaria de Desarrollo Comunitario

Escaneado con Cam

ACADEMIA NARIÑENSE
DE HISTORIA
VITAM IMPENDERE VERO
"Consagrar la vida a la verdad"

San Juan de Pasto
Calle 19 No. 22-63
Teléfono: 7234538
Fax: 7235807
Sur de Colombia

CONSTANCIA

La suscrita funcionaria HACE CONSTAR que: conoce al Licenciado JORGE QUINTANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 12.985.137 expedida en Pasto, y reconoce en él a una persona trabajadora, responsable de las tareas que se le encomiendan y honorable.

Para constancia de lo anterior se firma en San Juan de Pasto a los veintiseis días del mes de Enero del año dos mil uno.

LYDIA INES MUÑOZ CORDERO
Academia Nariñense de Historia

Escaneado con Cam

COLEGIO MUNICIPAL SANTA TERESITA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓNES No 408 Noviembre 22 de 1996 y No. 367 Julio 12 de 1999 de Secretaria de Educación Departamental.

V°B° 11-23-7.000

EL SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO MUNICIPAL SANTA TERESITA DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO

HACE CONSTAR

Que El Señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, identificado con C.C. No 12.985.137 de Pasto. Laboró como Educadora de Adultos en este establecimiento desde el Primero (1) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1.999) hasta el 30 de diciembre, cumpliendo con el horario establecido y los dias asignados.

Se firma en el Corregimiento de Catambuco a los treinta (30) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. (1.999)

LUIS HERIBERTO LEGARDA
Rector

Visto Bueno: Alicia Erazo de Muñoz
Directora de Núcleo

Escaneado con Cam

COLEGIO MUNICIPAL SANTA TERESITA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓNES No 408 Noviembre 22 de 1996 y No. 367 Julio 12 de 1999 de Secretaria de Educación Departamental.

EL SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO MUNICIPAL SANTA TERESITA DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO

HACE CONSTAR

Que el Señòr JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO Identificada con C.C.Nº 12.985.137 expedida en Pasto, laboró como Educador Popular de Adultos (Alfabetizador), a partir del primero (1º) de Febrero hasta el Treinta (30) de Junio del presente, en esta Institución.

Para constancia se firma de el Corregimiento de Catambuco a los Diez (10) días del mes de Octubre del Dos Mil (2.000).

LUIS HERIBERTO LEGARDA T.
Rector

Escaneado con Cam

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"
CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO
SECCION EDUCATIVA

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EDUCATIVA DE LA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO

H A C E C O N S T A R

QUE el señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO identificado con Cédula de ciudadanía Nº 12.985.137 de PASTO cumplió a cabalidad con sus labores de ALFABETIZADOR en el Centro Educativo "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" ubicado en la cárcel del Distrito Judicial. Actividad que desempeñó desde el 15 de Septiembre hasta el 15 de Diciembre del presente año.

SE FIRMA EN PASTO A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL.

Atentamente ,

Ilia del C. Escobar.
ILIA DEL CARMEN ESCOBAR
Coordinadora Educativa

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESCUELA URBANA INTEGRADA EL TABLON
MUNICIPIO DE EL TABLON
NIT. Nº. 814-001-359

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA URBANA INTEGRADA EL TABLON

HACE CONSTAR

Lic: JORGE ROLANDO QUINTANA Identificada con cédula de ciudadania Nº 12.985.137 de Pasto, presta sus servicios al Magisterio del Departamento de Nariño, laborando en la Actualidad en el cargo de Docente *en la Escuela Urbana Integrada El Tablón desde el 22 de febrero de 2001 hasta el 5 de mayo del mismo.*

Para constancia se firma en la Escuela Urbana Integrada El Tablón de Gómez Nar. a los (5) días del mes de mayo del 2.001

Graciela Gonzalez N.
Graciela González Navia
Directora.

Escaneado con Cam

GOBERNACION DE NARIÑO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCENTES

Nº 072

San Juan de Pasto. 22 de febrero de 2001

Nombre del contratista : JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO

Cédula de ciudadanía Nº 12'985.137 DE PASTO

Resolución y Grado en el Escalafón : 0160 DE FEBRERO 5 DE 2001. GRADO SEPTIMO.

Especialidad : FILOSOFIA Y LETRAS

Por medio del presente contrato, el contratista se obliga con el Departamento de Nariño, a prestar sus servicios como Docente de la Escuela Urbana Integrada del Municipio de El Tablón de Gómez, en reemplazo de ONEIDA HERRERA ERAZO a quién se le concede licencia de maternidad.

VALOR : El contratista devengará la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($895.544.oo) los cuáles serán cancelados de acuerdo al grado de escalafón docente que acredite en el momento de la firma del contrato, previa certificación de prestación de servicios suscrita por el inmediato superior.

Fecha de Iniciación : 22 de febrero de 2001

Fecha de terminación : 6 de abril de 2001

Imputación Presupuestal. Upidad 03 Educación Básica Primaria, 1 Gastos de Personal, 1.3.2 Servicios Personales Indirectos, 1.3.2.3 Honorarios del presupuesto de la Secretaría de Educación y Cultura de Nariño, para la vigencia fiscal de 2001.

Dicho contrato se suspenderá automáticamente en el momento de incorporación de un docente departamental.

El presente contrato no genera ninguna relación laboral ni prestaciones sociales de conformidad con la ley 80 de 1993 y el Decreto 47 de 1998.

HENRY BARCO MELO
Secretario de Educación
y Cultura de Nariño

12'985'137 Pasto
JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Carmen H.
23/02/01

Escaneado con Cam

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCENTES

San Juan de Pasto, 16 de abril de 2001

Nombre del contratista : JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO

Cédula de ciudadanía Nº 12'985.137 DE PASTO

Resolución y Grado en el Escalafón : 0160 DE FEBRERO 5 DE 2001. GRADO SEPTIMO.

Especialidad : LICENCIADA EN FILOSOFIA Y LETRAS

Por medio del presente contrato, el contratista se obliga con el Departamento de Nariño a prestar sus servicios como Docente de la Escuela Urbana Integrada El Tablón del Municipio de El Tablón de Gómez, en reemplazo ONEYDA HERRERA ERAZO a quién se le concede licencia de maternidad.

VALOR : El contratista devengará la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS($378.119.oo) los cuáles serán cancelados de acuerdo al grado de escalafón docente que acredite en el momento de la firma del contrato, previa certificación de prestación de servicios suscrita por el inmediato superior.

Fecha de Iniciación : 16 de abril de 2001

Fecha de terminación : 4 de mayo de 2001

Imputación Presupuestal. Unidad 03 Educación Básica Primaria, 1 Gastos de Personal, 1.3.2 Servicios Personales Indirectos, 1.3.2.3 Honorarios del presupuesto de la Secretaria de Educación y Cultura de Nariño, para la vigencia fiscal de 2001.

Dicho contrato se suspenderá automáticamente en el momento de incorporación de un docente departamental.

El presente contrato no genera ninguna relación laboral ni prestaciones sociales de conformidad con la ley 80 de 1993 y el Decreto 47 de 1998.

HENRY BARCO MELO
Secretario de Educación
y Cultura de Nariño

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Carmen, H.
06/04/01

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

AUTORIZACION DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS No. 165 DE ACUERDO AL DECRETO PRESIDENCIAL 1465 DEL 19 DE JULIO DE 2001.

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 2 de octubre de 2001

AUTORIZADA POR: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

AUTORIZADO (a): JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.985.137 de Pasto
Licenciado en Filosofia y Letras
Grado en Escalafón No. 7

PARA: Prestar los servicios como docente en la Escuela Normal Nacional Nocturno en comisión a la Escuela Rural Mixta Bajo Casanare, de este Municipio, en reemplazo de NARCO TULIO GOYES ESTRADA, a quien se le aceptó la renuncia al cargo mediante Decreto No. 0539 de octubre 1 de 2001.

DESDE: 2 DE OCTUBRE DE 2001. HASTA:30 DE NOVIEMBRE DE 2001.

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: Los honorarios se cancelarán en mensualidades vencidas de acuerdo con el Grado de Escalafón acreditado por el docente y por el tiempo de sus servicios, acorde al término de la duración de la novedad administrativa o hasta que se surta la vacante por concurso, previa presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el Rector/Director del establecimiento o por el Director de Núcleo respectivo.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 770 de octubre 2 de 2001, expedido por el Secretario de Educación y Cultura de Nariño.

FUNDAMENTO LEGAL: (a)Las atribuciones legales de los Alcaldes y en especial las conferidas por los articulos 314 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 60 de 1993, b) El Articulo 22 del Decreto Presidencial No. 1465 del 19 de julio de 2001 que dispone: " queda prohibido todo tipo de contratación de docentes. Sin embargo, la autoridad nominadora podrá autorizar la prestación del servicio por parte de docentes no vinculados al servicio educativo estatal para atender las funciones propias de los docentes que se encuentren en situaciones administrativas tales como incapacidad superior a treinta (30) días, licencias, comisión, suspensión en el empleo, traslado por amenaza o en el caso de vacancia del cargo, mientras se realice el concurso para proveerlo en forma definitiva..."c) que mediante Decreto No. 0037 de enero 12 de 2001, el Alcalde Municipal de Pasto, delegó funciones administrativas al Secretario Municipal de Educación y Cultura.

LA PRESENTE AUTORIZACION NO GENERA NINGUNA RELACION LABORAL Y POR ENDE NINGUNA PRESTACION SOCIAL DE CONFORMIDAD A LA LEY 80 DE 1993 Y DECRETO DE SALARIOS No. 1465 DEL 19 DE JULIO DE 2001.

JORGE ENRIQUE IDROBO BURBANO
Secretario Municipal de Educación y Cultura

LUIS ALFONSO RUIZ PARA
Subsecretario Administrativo

C.C. 12985137 Pasto
JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Docente Autorizado(a)

Escaneado con Cam

59

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Subsecretaria Administrativa y Financiera

CERTIFICADO DE VACANCIA DEL CARGO

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTUIA

CERTIFICA: No.157

Que en la nómina de: PRIMARIA se encuentra relacionado(a) el señor(a) MARCO TULIO GOYES ESTRADA C.C. 5.195.985 de ____

En el cargo de: Directivo Docente ____ Docente X Administrativo ____

Código: 01-710-26580 Grado: 14

En el Establecimiento Educativo: ESCUELA NORMAL NACIONAL-NOCTURNO

En comisión al : ____

La presente vacancia del cargo es valida para:

A. Contratar por Orden de Prestación de Servicio (X)

B. Nombrar Provisionalmente ( )

C. Nombrar en Propiedad ( )

D. Encargo ( )

Al señor(a) JORGE ROLANDO QUINTANA ARTUSO

Identificado con cédula de ciudadania número 12.985.137 de PASTO

Al establecimiento : ESCUELA RURAL MIXTA BAJO CASANARE

Pago del servicio a partir del: 1 DE ABRIL DE 2002 HASTA EL 12 DE JULIO DE 2002

En el cargo de: DOCENTE

Dentro de la vacancia: Definitiva X Temporal ____

Novedad: RENUNCIA AL CARGO MEDIANTE DECRETO No. 0539 DE OCTUBRE 1 DE 2001

Dada en San Juan de Pasto, a los 21 DE MARZO DE 2002.

LUIS ALFONSO RUIZ PAIBA
Subsecretario Administrativo y Financiero

Recio II

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

...T... DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS No. 222 DE ACUERDO AL DECRETO PRESIDENCIAL 1465 DEL 19 DE JULIO DE 2001.

...Pasto: San Juan de Pasto, 3 de diciembre de 2001

...VISOR: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

...RIZADO (a): JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.975.137 de Pasto
Licenciado en Filosofía y Letras
Grado en Escalafón No. 7

...: Prestar los servicios ... docente en la Escuela Normal Nacional Nocturno en ... de Educación para ... de este Municipio, en reemplazo de ... QUILA LOPEZ ESTRADA, a quien se le concedió la renuncia al cargo mediante ... de fecha 1 de 2001.

...: DESDE: 3 DE DICIEMBRE DE 2001. HASTA: 14 DE DICIEMBRE DE 2001.

...: ...ARIOS Y FORMA DE PAGO: Los honorarios se cancelarán en mensualidades vencidas ... y el visto de Bueno expedido por el docente y por el tiempo de ... ...ción de la novedad administrativa o ... ...ción y recepción del empleo, previa presentación de la constancia de ... ...ad expedida por el Señor Director del establecimiento o por ... ...os respectivos.

...IFICACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de ... ...ilidad presupuestal No. 980 de noviembre 26 de 2001, expedido por el ...rio de Educación y Cultura de Nariño.

...: AMPARO LEGAL: Dadas ... legales de los Alcaldes y en especial los ...idos por ... nacional ...211 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 60 de 1993, ... Artículo ... del Decreto Presidencial No. 1465 del 19 de Julio de 2001 que ... ...rá ... de contratación de docentes. Sin embargo, la ...idad nombradora podrá autorizar la prestación del servicio por parte de ... ...nales al servicio educativo estatal para atender las funciones ... de los docentes que se encuentren en situaciones administrativas tales como ...idad superior a quince (15) días, licencias, comisión, suspensión en el ..., ...ando ... ...pago o en el caso de vacancia del cargo, mientras se ... el empleo para ... quede en forma definitiva..." Por medio Decreto ... de ... ..., el Alcalde Municipal de Pasto, delegó funciones ...istrativas al Secretario Municipal de Educación y Cultura.

...: ...ICIO: ...ORIZACION PARA OBTENER DIFERENTE RELACION LABORAL Y POR ENDE DIFERENTE ...ACION ...AL DE CONFORMIDAD A LA LEY 60 DE 1993 Y DECRETO DE SALARIOS No. 1465 ... ... pago de ...

...
...

LUIS ALFONSO RUIZ PARA
Subsecretario Administrativo

...
JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Docente Aspirante

Escaneado con Cam

842

REPUBLICA DE COLOMBIA 020043

ALCALDIA DE PASTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 049 DE 2002.

CONSIDERACIONES: El Municipio de Pasto se encuentra certificado de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 715/01, correspondiéndole dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad: por lo tanto le compete administrar las instituciones y centros educativos, así como el personal docente y administrativo existente en ellos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715/01. Toda vez que se encuentra una planta vacante dentro de la plaza de personal docente se hace necesario surtirla a través de una O.P.S a fin de proteger el derecho a la educación y de prestar un servicio educativo de manera oportuna, eficiente y eficaz.

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, JAN. 18 2002

CONTRATANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

CONTRATISTA: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.985.137 de Pasto
Licenciado en Filosofía y Letras
Grado 7 en el Escalafón Nacional Docente.

VALOR TOTAL: $ 1.397.049

OBJETO: Prestar en forma eficiente y oportuna los servicios como docente en la Escuela Rural Mixta Lago Casanare, de este Municipio, dentro de la vacante temporal ( ) o definitiva(x) dejada por el (la) profesor(a) MARCO TULIO QUYES ESTRADA, a quien se le aceptó la renuncia al cargo mediante Decreto No. 0539 de octubre 1 de 2001.

DURACION DE LA O.P.S DESDE: 10 DE ENERO DE 2002. HASTA: 22 DE MARZO DE 2002.

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: Los honorarios se cancelarán a la terminación del objeto del contrato, de acuerdo con el Grado de Escalafón acreditado por el docente al momento de suscripción del mismo y por el tiempo de sus servicios, acorde al término de la duración de la novedad administrativa, previa presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el Rector/Director del establecimiento o por el Director de Red respectivo.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 2002000105 de enero 18 de 2002, expedido por la Asesora de la Unidad de Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Pasto.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 314 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Decreto Presidencial No. 2313 de diciembre 17 de 2001, y Decretos Municipales Nos. 0017 y 0031 de enero 02 y 0102 de marzo 30 de 2001.

LA PRESENTE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NO GENERA NINGUNA RELACION LABORAL ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL CONTRATISTA Y POR ENDE NINGUNA PRESTACION SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 80 DE 1993 Y DECRETO No. 2313 DE DICIEMBRE 17 DE 2001

JORGE ENRIQUE IBARRA BURBANO
Secretario Municipal de Educación y Cultura

LUIS ALFONSO RUIZ PARRA
Subsecretario Administrativo y Financiero

CONTROL INTERNO
RECIBIDO
FECHA: 18 ENE. 2002.

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 145 DE 2002.

CONSIDERACIONES: El Municipio de Pasto se encuentra certificado de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 715/01, correspondiéndole dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad: por lo tanto le compete administrar las instituciones y centros educativos, así como el personal docente y administrativo existente en ellos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715/01. Toda vez que se encuentra una planta vacante dentro de la plaza de personal docente se hace necesario surtirla a través de una O.P.S a fin de proteger el derecho a la educación y de prestar un servicio educativo de manera oportuna, eficiente y eficaz.

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 01 ABR 2002

CONTRATANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

CONTRATISTA: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.985.137 de Pasto
Licenciado en Filosofía y Letras
Grado 7 en el Escalafón Nacional Docente.

VALOR TOTAL: $ 2.323.832

OBJETO: Prestar en forma eficiente y oportuna los servicios como docente en la Escuela Rural Mixta Bajo Casanare, de este Municipio, dentro de la vacante temporal ( ) o definitiva(x) dejada por el (la) profesor(a) MARCO TULIO GOYES ESTRADA, a quien se le aceptó la renuncia al cargo mediante Decreto No. 0539 de octubre 1 de 2001.

DURACION DE LA O.P.S DESDE: 1 DE ABRIL DE 2002. HASTA: 12 DE JULIO DE 2002.

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: Los honorarios se cancelarán a la terminación del objeto del contrato, de acuerdo con el Grado de Escalafón acreditado por el docente al momento de suscripción del mismo y por el tiempo de sus servicios, acorde al término de la duración de la novedad administrativa, previa presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el Rector/Director del establecimiento o por el Director de Red respectivo.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20020000942 de abril 1 de 2002 y Rubro 2102120301010201, expedido por la Asesora de la Unidad de Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Pasto.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 314 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Decreto Presidencial No. 680 DE ABRIL 10 DE 2002, y Decretos Municipales Nos. 0037 y 0038 de enero 12 y 0142 de marzo 30 de 2001.

LA PRESENTE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NO GENERA NINGUNA RELACION LABORAL ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL CONTRATISTA Y POR ENDE NINGUNA PRESTACION SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 80 DE 1993 Y DECRETO No. 680 DE ABRIL 10 DE 2002.

JORGE ENRIQUE IDROBO BURBANO
Secretario Municipal de Educación y Cultura

LUIS ALFONSO RUIZ PARRA
Subsecretario Administrativo y Financiero

RECIBIDO
FECHA: 09 ABR 2002

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Escaneado con Cam

63

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 320 DE 2002.

CONSIDERACIONES: El municipio de Pasto se encuentra certificado de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 715/01, correspondiéndole dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad; por lo tanto le compete administrar las Instituciones y centros educativos, así como el personal docente y administrativo existente en ellos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715/01. Toda vez que se encuentra una planta vacante dentro de la plaza de personal docente se hace necesario surtirla a través de una O.P.S. a fin de proteger el derecho a la educación y de prestar el servicio educativo de manera oportuna, eficiente y eficaz.

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 1o DE NOVIEMBRE DE 2002

CONTRATANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA

CONTRATISTA: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.985.157 DE PASTO
Licenciado en Filosofía y Letras
Grado 7 en el Escalafon Nacional Docente.

VALOR TOTAL: $ 862.050

OBJETO: prestar en forma eficiente y oportuna los servicios como docente en la escuela Santa Matilde, de este Municipio, dentro de la vacante temporal ( ) o definitiva(x) dejada por el (la) profesor(a) JANETH DEL SOCIO MARTINEZ CEBALLOS, a quien se declaró vacante el cargo por fallecimiento mediante Decreto No. 0069 de Febrero 12 de 2002.

DURACION DE LA O.P.S DESDE:13 DE NOVIEMBRE DE 2002. HASTA:20 DE DICIEMBRE DE 2002.

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: Los honorarios se cancelarán a la terminación del objeto del contrato, de acuerdo con el Grado de Escalafón acreditado por el docente al momento de suscripción del mismo y por el tiempo de sus servicios, acorde al término de la duración de la novedad administrativa, previa presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el Rector/Director del establecimiento o por el Director de Núcleo respectivo.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 200200100 de enero 10 y 200200111G7 de abril 1 de 2002, expedido por la Jefatura de la Unidad de Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Pasto.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 41 y 123 de la Constitución Nacional, Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Decreto Presidencial No. 0092 de abril 10 de 2002, y Decreto Municipal No. 0076 de febrero 21 de 2002.

La presente orden de prestación de servicios no genera ninguna relación laboral entre el Municipio de Pasto y su contratista Y POR ENDE NINGUNA prestación social de conformidad con la ley ni lo dispuesto en el Decreto No. 0092 De Abril 10 de 2002.

EDUARDO ALVARADO SANTACRUZ
Alcalde Municipal de Pasto

JORGE ENRIQUE IBARRA BURBANO
Secretario Municipal de Educacion y Cultura

LUIS ALFONSO RUIZ PARRA
Subsecretario Administrativo y Financiero

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

DECRETO No. 0059 DE 2002

Por el cual se declara vacante un cargo docente por fallecimiento del titular.

EL SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA.

En uso de la delegación de funciones concedidas mediante Decreto No. 0037 de enero 12 y 0142 de marzo 30 de 2001.

CONSIDERANDO:

Que el 22 de enero de 2002, falleció la señora JANETH DEL ROCIO MARTINEZ CEBALLOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.737.025 de Pasto, profesora de tiempo completo del Colegio María Goretti, tal como consta en el Registro de Defunción No. 04721553 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que el Decreto 1950 de 1973 en su artículo 22, numeral 11 establece que un empleo está vacante cuando se produce la muerte del empleado.

Que el Municipio de Pasto, se encuentra certificado de conformidad con lo establecido por el Artículo 72 de la Ley 715 de diciembre 21 de 200 ..

Que el Artículo 72 de la Ley 715 fija las competencias de los Distritos y Municipios certificados, correspondiéndoles dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.

Que el citado artículo expone que le corresponde a los Municipios certificados administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el Artículo 153 de la Ley 115 de 1974, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715 de 2001.

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Declarar vacante por fallecimiento, a partir del 22 de enero de 2002, el cargo de docente jornadas adicionales que ocupaba la señora JANETH DEL ROCIO MARTINEZ CEBALLOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.737.025 de Pasto, profesora de tiempo completo del Colegio María Goretti, de este Municipio, según consta en el Registro de Defunción No. 04721553 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTICULO 2º.- Para los fines legales y presupuestales pertinentes, envíese copias del presente acto al grupo de tesorería de la Secretaría Municipal de Educación y Cultura.

ARTICULO 3.- Regístrese la anterior novedad en la tarjeta de servicios y adjúntese copia en la hoja de vida del docente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto, a los 12 FEB 2002 días del mes del dos mil dos(2002).

JORGE ENRIQUE IDROBO BURBANO
Secretario Municipal de Educación y Cultura

LUIS ALFONSO RUIZ PARRA
Subsecretario Administrativo y Financiero

01-122-0059.NA.DT

Escaneado con Cam

65

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Subsecretaría Administrativa

EL DIRECTOR (A) DEL COLEGIO - ESCUELA
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SANTA MATILDE, MPIO. PASTO

HACE CONSTAR:

Que, el (la) señor (a): JORGE RONALDO QUINTANA ARTURO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.985.137 Pasto,
expedida en Pasto, labró como docente bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios (O.P.S.), en este establecimiento educativo, durante el período comprendido entre el 13 de Noviembre y el 20 de Diciembre del presente año.

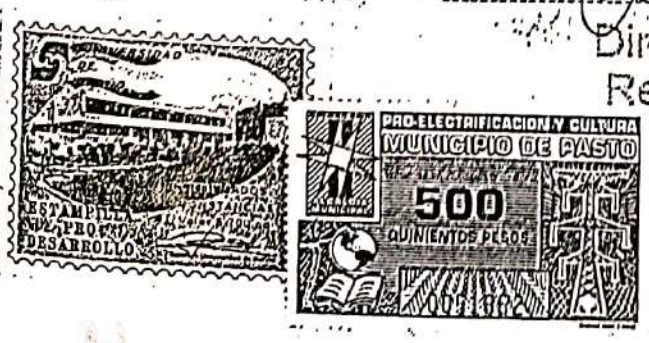
Se expide a petición del (la) interesado (a) para efectos del pago de honorarios.

Se adhieren y anulan estampillas Pro-Electrificación Rural del Municipio de Pasto, por valor de $ 500.oo de la Universidad de Nariño por valor de $ 700.oo.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 20 días del mes de Diciembre de Dos Mil Dos (2.002).

Concentración Escolar Santa Matilde
DIRECTOR
PASTO

Director (a)
Rector (a)



Escaneado con Cam

46

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

F

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (O.P.S) No. 071 DE 2003.

CONSIDERACIONES: El Municipio de Pasto se encuentra certificado de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 715/01, correspondiéndole dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, por lo tanto le compete administrar las instituciones y centros educativos, así como el personal directivo docente docente y administrativo existente en ellos, sujetándose a las directrices y ordenamientos de la citada mencionada ley y a sus decretos reglamentarios. Con el fin de proteger el derecho a la educación y de prestar un servicio educativo de manera oportuna, eficiente y eficaz y toda vez que se encuentra una plaza vacante dentro de la planta de personal docente se hace necesario cubrirla a través de una orden de prestación de servicios (O.P.S).

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 8 DE ENERO DE 2003

CONTRATANTE: ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO

CONTRATISTA: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTUDO
C.C. 12.985.137 DE PASTO
Licenciado en Filosofía y Letras
Grado 7 en el Escalafón Nacional Docente.

VALOR TOTAL: $ 2.164.153

OBJETO: Prestar en forma eficiente y oportuna los servicios como docente en la Escuela Santa Matilde de este Municipio, dentro de la vacante temporal ( ) o definitiva(x) dejada por el (la) profesor(a) LAURA INES REALPE DE ERASO, quien se le aceptó la renuncia al cargo, mediante Decreto No. 0034 de enero 31 de 2002

DURACION DE LA O.P.S DESDE: 10 DE ENERO DE 2003 HASTA 11 DE ABRIL DE 2003

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: Los honorarios se cancelarán al docente de acuerdo a su grado en el escalafón acreditado al momento de suscripción del contrato, en mensualidades vencidas, previa certificación de la prestación del servicio expedida por el superior inmediato y siempre y cuando se encuentre legalizada la orden de prestación de servicios.

NOTA: El 2% de estas cuotas del valor total del contrato se descontarán por la Administración al momento de efectuar el pago del primer mes de honorarios.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2003000010 de 7 de enero de 2003 y Rubro Presupuestal No. 22101052121- Preescolar, expedido por la Asesora de la Unidad de Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Pasto.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 314 y 315 de la Constitución Nacional, Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Decreto Presidencial No. 688 de abril 10 de 2002, y Decreto Municipal No. 0077 de febrero 22 de 2002.

0159

Escaneado con Cam

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 071 DE 2003

LA PRESENTE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NO GENERA NINGUNA RELACION LABORAL ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL CONTRATISTA Y POR ENDE NINGUNA PRESTACION SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 80 DE 1993 Y DECRETO No. 688 DE ABRIL 10 DE 2002

EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Alcalde Municipal de Pasto

JORGE ENRIQUE IDROPO BURBANO
Secretario Municipal de Educación y Cultura

LUIS ALFONSO RUIZ PARRA
Subsecretario Administrativo y Financiero

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Rocio B.

0159

Escaneado con Cam

Concentración Escolar Santa Matilde
Registro Dane 15200103308
Núcleo de Desarrollo Educativo y Cultural No. 9
Barrio Santa Matilde
San Juan de Pasto

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA CONCENTRACION ESCOLAR SANTA MATILDE, DEL MPIO. PASTO,

H A C E C O N S T A R:

Que el señor JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, identificado con C.C.N. ----- 12.985.137 de Pasto, viene prestando sus servicios como docente de tiempo completo en este Plamtel de Educación Básica desde el diaocho (8) de Enero del 2003, hastael día 11 de Abril del mismo año sin interrupción alguna.

Nombramiento omanado de SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL mediante el procedimiento de ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS (OPS). ----------

En constancia se firma y expide el presente en San Juan de Pasto, a los dos días del mes de mayo del dos mil tres.

CARLOS HAROLD DELGADO DELGADO
Director
C.C.N. 5.232.339 Consacá

Concentración Escolar Santa Matilde
DIRECTOR
PASTO

Escaneado con Cam

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 295 DE 2003.

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto. 21 DE ABRIL DE 2003

CONTRATANTE: EDUARDO ALVARADO SANTANDER – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO

CONTRATISTA: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.985.137
FILOSOFIA Y LETRAS
Grado 7 en el Escalafón Nacional Docente.

OBJETO: Prestar en forma eficiente y oportuna los servicios como docente en la Escuela Santa Matilde, de este Municipio, dentro de la vacante temporal (.....) o definitiva(x) dejada por el (la) profesor(a) LAURA INES REALPE DE ERASO, a quien se le aceptó la renuncia al cargo, mediante Decreto No. 0034 de enero 31 de 2002.

VALOR TOTAL: Para todos los efectos fiscales, la presente orden tiene un valor de $ 2.164.353 a titulo de honorarios.

FORMA DE PAGO: El pago de esta orden se hara al vencimiento del termino de ejecución, previa certificación suscrita por el rector o director del establecimiento educativo o el coordinador del proyecto correspondiente, en la cual se señalara que el contratista cumplio a satisfaccion con sus obligaciones durante dicho término.

DURACION DE LA O.P.S DESDE: 21 DE ABRIL DE 2003. HASTA:25 DE JULIO DE 2003.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20030000090 de enero 22 y 20030000922 de abril 21 de 2003 y Rubro Presupuestal No. 2Z10105Z121- PREESCOLAR, expedido por la Asesora de la Unidad de Presupuesto de la Alcaldia Municipal de Pasto.

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 32 de la ley 80 de 1993, articulo 38 de la Ley 715 de diciembre 21 de 2.001, articulo 1° del Decreto Presidencial No. 805 de abril 4 de 2002, y Decreto Municipal No. 046 de Febrero 22 de 2002.

EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: La presente orden de prestacion de servicios no genera relacion laboral alguna entre el Municipio de Pasto y el CONTRATISTA y en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales. Ningun tipo de emolumento diferente al valor aqui acordado: ni derechos de permanencia en el servicio publico educativo, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2. Numeral 3 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 y el inciso 1 del articulo 2 del Decreto 855 de 1994.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptacion de la presente orden, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad previstas en los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.

Escaneado con Cam

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 295 DE 2003.

DOCUMENTOS DE LA ORDEN: Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente orden:

- Fotocopia de la cedula (autenticada)
- Resolución de Escalafón o fotocopia del diploma o acta de grado (autenticados)
- Disponibilidad Presupuestal
- Registro de Compromiso
- Paz y Salvo Municipal vigente.
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente
- Fotocopia Pasado Judicial (autenticado)
- Constancia de Cumplimiento con estampillas
- Fotocopia Afiliación a Salud y Pensión (autenticados)
-

Se firma en San Juan de Pasto, por quienes intervinieron, a los 21 días del mes de abril de 2003.

EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Alcalde Municipal de Pasto

JORGE ENRIQUE DIAZOBO BURBANO
Secretario Municipal de Educacion

LUIS ALFONSO RUIZ PARRA
Subsecretario Administrativo y Financiero

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Anexo B.

Escaneado con Cam

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

SE SA 731

San Juan de Pasto,
18 de septiembre de 2003

Señor(a)

Rector
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL " ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL
San Juan de Pasto

Me permito comunicarle que el (la) señor(a)JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, con cédula de ciudadanía No. 12.985.137, será vinculada mediante el procedimiento de Orden de Prestación de Servicios (OPS) para desempeñar el cargo de docente en la Concentración Escolar Club de Leones, a partir del 18 de septiembre al 19 de diciembre de 2003, sus servicios se reconocerán desde el día de radicación de la Disponibilidad Presupuestal.

Sírvase inducir al (la) señor(a) en sus funciones, metas, planes y objetivos.

Atentamente,

ALICIA YEPES RECALDE
Asesora de Personal

Nombre: Jorge R. Quintana
No. CC: 12985137
Especialidad: Filosofía y Letras
Grado en Escalafón: 7
Fecha de Recibido: Sept. 18/2003

Escaneado con Cam

x2

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Subsecretaria Administrativa

San Juan de Pasto,
13 de enero de 2004.

Señor(a)
JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Docente
Secretaria Municipal de Educación y Cultura
San Juan de Pasto.

COMUNICADO No. 097

Por medio del presente me permito comunicarle que la Administración Municipal de Pasto, expidió la Resolución No. 540 de diciembre 31 de 2003, por la cual se lo(la) nombra provisionalmente en el cargo de docente y mediante Resolución No. 1456 de diciembre 31 de 2003, se le asigna el lugar de desempeño laboral en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL AGUSTIN AGUALONGO con sede en el COLEGIO AGUSTIN AGUALONGO, de este Municipio.

Sírvase presentar en la institución antes designada para que cumpla con sus funciones, metas, planes y objetivos.

ALICIA YEPES RICALDE
Asesora de Personal

RECIBI: Jorge Rolando Quintana

Fecha de Recibido: 13 enero/2004
Calle 20 N° 3-99
Tel. 7303841

Rocio B.

Escaneado con Cam

x3

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE PASTO

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 694 DE 2003.

CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

CONTRATANTE: EDUARDO ALVARADO SANTANDER - ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO

CONTRATISTA: JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
C.C. 12.985.137
FILOSOFIA Y LETRAS
Grado 7 en el Escalafón Nacional Docente.

OBJETO: Prestar en forma eficiente y oportuna los servicios como docente en la INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL - Sede Concentración Escolar Club de Leones, de este Municipio, dentro de la vacante temporal (.....) o definitiva(x) dejada por el (la) profesor(a) LAURA INES REALPE DE ERASO, a quien se le aceptó la renuncia al cargo, mediante Decreto No. 0034 de enero 31 de 2002.

VALOR TOTAL: Para todos los efectos fiscales, la presente orden tiene un valor de $ 2.096.005 a titulo de honorarios.

FORMA DE PAGO: El pago de esta orden se hará al vencimiento del término de ejecución, previa certificación suscrita por el rector o director del establecimiento educativo o el coordinador del proyecto correspondiente, en la cual se señalará que el contratista cumplió a satisfacción con sus obligaciones durante dicho término.

DURACION DE LA O.P.S DESDE: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003. HASTA:19 DE DICIEMBRE DE 2003.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los honorarios se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2003002007 de agosto 6 de 2003 y Rubro Presupuestal No. 22101052121- PREESCOLAR, expedido por la Asesora de la Unidad de Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Pasto.

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 39 de la ley 80 de 1993, artículo 38 de la Ley 715 de diciembre 21 de 2001, artículo 2° del Decreto Presidencial No. 686 de abril 10 de 2002, y Decreto Municipal No. 0079 de febrero 22 de 2002.

EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: La presente orden de prestación de servicios no genera relación laboral alguna entre el Municipio de Pasto y el CONTRATISTA y, en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales, ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado ni derechos de permanencia en el servicio público educativo, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2, numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y el inciso 2 del artículo 2 del Decreto 688 de 2002.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo Juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación de la presente orden, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad previstas en los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.

Escaneado con Cam

34

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (OPS) No. 694 DE 2003.

DOCUMENTOS DE LA ORDEN: Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente orden:

- Fotocopia de la cédula (autenticada)
- Resolución de Escalafón o fotocopia del diploma o acta de grado (autenticados)
- Disponibilidad Presupuestal
- Registro de Compromiso
- Paz y Salvo Municipal vigente
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente
- Fotocopia Pasado Judicial (autenticado)
- Constancia de Cumplimiento con estampillas
- Fotocopia Afiliación a Salud y Pensión (autenticados)

Se firma en San Juan de Pasto, por quienes intervinieron, a los 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Alcalde Municipal de Pasto

JORGE ENRIQUE IDROBO BURBANO
Secretario Municipal de Educación

LUIS ALFONSO RUIZ PATIÑO
Subsecretario Administrativo y Financiero

JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO
Contratista

Rocio B.

Escaneado con Cam

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
AGUSTIN AGUALONGO LA LAGUNA
Dane: 252001002863 Nit: 891201759-7
Decreto No. 0359 del 26 de agosto de 2003.
Teléfono: 723 26 98.

061

San Juan de Pasto. 17 de junio del 2005

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL AGUSTIN AGUALONGO LA LAGUNA.

HACE CONSTAR:

Que, JORGE ROLANDO QUINTANA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.985.137 de Pasto, labora en esta Institución como docente provisional en la Básica Primaria, se Barbero, desde el 13 de enero del 2004 hasta la fecha sin ninguna interrupción.

Que el docente en mención es responsable, comprometido con la Institución, con los estudiantes y con la comunidad, es director de Quinto de Primaria.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005).-

Esp. JORGE GUERRERO CADENA
Rector.

Clímaco J.

Escaneado con Cam

ALCALDIA DE PASTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EL ASESOR DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION

H A C E C O N S T A R:

Que el (la) señor (a) JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, identificado (a) con cedula de ciudadania número 12.985.137, laboró con la Secretaria de Educación Municipal como docente provisional en varias instituciones en el nivel Basica Primaria en el Municipio de Pasto.

Es Licenciado en el area de FILOSOFIA Y LETRAS, laboro por espacio de 6 años, distinguiendose por su trabajo, dedicación y compromiso con los niños y niñas.

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) dias del mes de agosto de dos mil cinco (2005)

Se adhiere y se anula estampillas de Proelectrificación Rural del Municipio de Pasto por valor de $500.oo y de la Universidad de Nariño por valor de $700.oo.

CARLOS HUMBERTO GONZALEZ

Rda G.

Escaneado con Cam

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
AGUSTIN AGUALONGO LA LAGUNA
Dane: 252001002863 Nit: 891201759-7
Decreto No. 0359 del 26 de agosto de 2003.
Teléfono: 723 26 98.

106

061

San Juan de Pasto. 17 de junio del 2005

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL AGUSTIN AGUALONGO LA LAGUNA.

HACE CONSTAR:

Que, JORGE ROLANDO QUINTANA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.985.137 de Pasto, labora en esta Institución como docente provisional c la Básica Primaria, se Barbero, desde el 13 de enero del 2004 hasta la fecha s ninguna interrupción.

Que el docente en mención es responsable, comprometido con la Institución, con los estudiantes y con la comunidad, es director de Quinto de Primaria.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005).-

Esp. JORGE GUERRERO CADENA
Rector.

Clímaco J.

Escaneado con Cam

ALCALDIA DE PASTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EL ASESOR DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION

H A C E C O N S T A R:

Que el (la) señor (a) JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, identificado (a) con cedula de ciudadania número 12.985.137, laboró con la Secretaria de Educación Municipal como docente provisional en varias instituciones en el nivel Basica Primaria en el Municipio de Pasto.

Es Licenciado en el area de FILOSOFIA Y LETRAS, laboro por espacio de 6 años, distinguiendose por su trabajo, dedicación y compromiso con los niños y niñas.

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) dias del mes de agosto de dos mil cinco (2005)

Se adhiere y se anula estampillas de Proelectrificación Rural del Municipio de Pasto por valor de $500.oo y de la Universidad de Nariño por valor de $700.oo.

CARLOS HUMBERTO GONZALEZ

Vida G.

Escaneado con Cam

28

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARÍA GORETTI CESMAG

Hombres Nuevos para Tiempos Nuevos
Nit.800.109.387 - 7

36 AÑOS DE SERVICIO

230.05.05-578

EL SECRETARIO GENERAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG, CON PERSONERÍA JURÍDICA OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 10735 DE JUNIO 23 DE 1982, EMANADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CON AUTORIZACIÓN PARA OFRECER EL PROGRAMA DE DERECHO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 401 DE ENERO 14 DE 2014, EMANADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

A solicitud del interesado

HACE CONSTAR:

Que el señor **JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO** identificado con cédula de ciudadanía número 12.985.137, expedida en Pasto (N), en el periodo comprendido entre agosto de 2007 y junio de 2013, cursó y aprobó en forma satisfactoria, todos y cada uno de los créditos y espacios académicos del plan de estudios del programa de Derecho, incluida la práctica profesional correspondiente a Consultorios Jurídicos.

Que por tanto el prenombrado es egresado del programa de Derecho desde el día 15 de junio de 2013.

Que el programa de Derecho es profesional, código SNIES es el número 52939 y cuenta con registro calificado según Resolución número 401 de enero 14 de 2014, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Se expide en San Juan de Pasto, a los 19 días del mes de febrero del año 2019.

MAURICIO SALAZAR ANDRADE
Secretario General

INSTITUCION UNIVERSITARIA SECRETARIA GENERAL CESMAG - PASTO

Proyecto. **VANESSA MONTUFAR PANTOJA**
Coordinadora Registro y Control Académico

Escaneado con Cam

108

CENTRO EDUCATIVO CUCHILLA PEÑAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION (Nar).

LA SUSCRITA DIRECTORA (E) DEL CENTRO EDUCATIVO CUCHILLA PEÑAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION (NAR).

HACE CONSTAR:

Que JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.985.137 de Pasto, laboro en esta institución, como docente en provisionalidad, mediante Resolución No. 1104 del 27 de abril de 2006 de la Secretaria de Educación Departamental de Nariño, desde el 27 de abril hasta el 25 de julio de 2006. Bajo la subordinación del señor RODRIGO BASTIDAS, en calidad de Jefe de Núcleo de la institución educativa.

Dada en La Unión (Nar), a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil seis (2006).

Blanca Nelly Bolaños A.
BLANCA NELLY BOLAÑOS
Directora (E).
C.C. 27.298.850 de Unión.

Escaneado con Cam

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

C E R T I F I C A

Certificado de Vigencia N.: 358953

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley.

En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestra base de datos se constató que el (la) señor(a) **JORGE ROLANDO QUINTANA ARTURO**, identificado(a) con la **Cédula de ciudadanía**. No. **12985137**., registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado	322245	06/02/2019	Vigente
Observaciones: -			

Se expide la presente certificación, a los **11** días del mes de **agosto** de **2020**.

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del número de certificado y fecha expedición.
3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración

SC5780-4 CO-SA-CER551308

La salud es de todos | Minsalud

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2019-09-27

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 12985137	JORGE	ROLANDO	QUINTANA	ARTURO	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2019-09-30

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
MEDIMAS EPS S.A.S. CONTRIBUTIVO	Contributivo	05/10/2017	Activo	COTIZANTE	PASTO

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2019-09-27

No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2019-09-27

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2017-12-11	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL INCLUYE MINISTERIOS, ÓRGANOS, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS NIVELES CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL.	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2019-09-27

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ADMINISTRADORAS QUE REPORTAN LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER REPORTADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	2008-10-17	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2019-08-31

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2019-09-27

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2019-08-31

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ADMINISTRADORAS QUE REPORTAN LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER REPORTADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez	**DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL** FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	F-03-0022 VERSIÓN 02
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 ▪ Apartado: 1226 ▪ Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratoriosaludpublica@udea.edu.co Medellín, Colombia	PÁGINA 1 DE 14

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL DICTAMEN					
Fecha de Evaluación	**Remitente**			**Radicado**	
28/02/2020	Particular			---	
Nombre Médico Evaluador	MONICA SOTO	**Ciudad/País de Calificación**		Medellín/ Colombia	
MOTIVO DE CALIFICACIÓN					
Determinación PCL y Ocupacional	X	Determinación Origen	X	Fecha de Estructuración	X

2.DATOS DEL CALIFICADO											
Apellidos	QUINTANA LEYTON			**Nombres**	ANA CRISTINA						
Documento de identidad:	No. Cédula	59836850		No. Tarjeta de identidad							
No. Cédula Extranjería		Otro: (¿Cuál?)									
Fecha de Nacimiento:			**Lugar de Nacimiento:**				**EDAD**	**Género**			
DÍA	MES	AÑO	TUMACO-NARIÑO				43	Femenino	Masculino		
26	04	1977						X			
Estado Civil:	Casado(a)		Soltero(a)	X	Viudo(a)		Separado(a)		Unión Libre	X	
Escolaridad											
Analfabeta	Primaria	Secundaria		Técnico/ Tecnólogo		Universitario		Posgrado			
		11									

Hijos **Ejemplo:** Femenino: 3 Edad: 12-13-20/ Masculino: 1 Edad: 8				**EPS**	**AFP**	**ARL**
Femenino	**Edad**	**Masculino**	**Edad**			
0		0			NO COTIZA	NO APLICA POR NO SER TRABAJADOR

Dirección Residencia	**Municipio**	**Estrato**
AV 37B N 45-71		

Teléfonos:	**Celular:**	**3007710424-3023702077**	**Fijos:**	**ANITAQUINTANA1@HOTMAIL.COM**

Ocupación Habitual	**Ocupación Actual**
VIVIR	VIVIR

3.HISTORIAL LABORAL		
Empresa	**Oficio**	**Tiempo Laborado**
NO HA LABORADO	-----	-----

4.HISTORIA DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD RELATADA POR EL AFECTADO

MOTIVO DE LA CONSULTA

Paciente quien es acompañada por su hermana. Viene para calificación integral: porcentaje de pérdida de capacidad laboral, origen y fecha de estructuración.

ANTECEDENTES PERSONALES

Paciente de 43 años con los siguientes diagnósticos y tratamientos según historia clínica:
Síndrome de Turner (45X0) o Disgenesia gonadal el cual fue diagnosticado en el año 2000 mediante técnica FISH. El síndrome de Turner de acuerdo con la historia clínica se ha manifestado con:

Hipotiroidismo: última TSH enero de 2020: 25 µunidades	Levotiroxina sódica 275/dia
Problemas de dentición, hipoacusia neurosensorial, otitis media crónica supurada, alteraciones del habla	Timpanoplastia derecha en el año 2000. Evaluación audiométrica de 2020.
Válvula aórtica bicúspide con FEVI de 65%	No ha requerido tratamiento
Hipertensión arterial por MAPA: Estadío 1.	Nimodipino 30 mg - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Enalapril maleato x 20 mg (tab)- VO 1 tab cada 24 horas x 30 días
Retardo puberal e infertilidad por hipogonadismo hipogonadotrófico,	Estrogenos conjugados 0.625 mg (tab) - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Imipramina 25 mg (tab) - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Medroxiprogesterona acetato 5 mg (tab) - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días.
Baja densidad ósea: fractura de clavícula	Carbonato de calcio + vitamina D - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días.
Baja estatura	No se informa haber recibido tratamiento farmacológico.
Retraso en la escolaridad por dificultades en logros del aprendizaje esperado para su edad.	No se informa haber accedido a procesos de rehabilitación.

FUNCIONAMIENTO: Vive con su madre de la pensión que le dejó su padre ya fallecido. Es independiente para actividades de vida diaria: higiene, alimentación, vestido, movilización dentro de la vivienda. Requiere de la ayuda de su madre y hermana para movilizarse fuera del hogar, para relacionarse con personas externas a su circulo familiar.

ANTECEDENTES FAMILIARES NO REFIERE.

5.EXAMEN CLÍNICO									
5.1 Peso Kgrs	64	**5.2 Talla cms**	1.48	**5.3 IMC**	29	**5.4 Presión Arterial**	140/78	**5.5 Dominancia**	derecha

PACIENTE QUE INGRESA EN COMPAÑÍA DE SU HERMANA Y MADRE. MARCHA SIN AYUDAS, PRESENTACION ADECUADA PARA LA OCASIÓN. LA HERMANA SUMINSITRA LA INFORMACION Y LA PACIENTE PERMANECE COMO AUSENTE DURANTE TODA LA EVALUACIÓN CLINICA.

5.6 Cabeza y Cuello: Orejas de implantación baja, no se visualiza adecuadamente la membrana timpánica. No bocio.

5.7 Órganos de los Sentidos: Ojos se observan más separado de lo normal. NO evalúo agudeza visual.

5.8 Cardio Pulmonar: ruidos cardiacos rítmicos, no ausculto soplos. Pulmones sin ruidos agregados. ABD: Extremidades: simétricas, pulsos distales +, llenado capilar < de 3 seg.

5.9 Abdomen: blando depresible, visceromegalia negativa, peristaltismo +.

5.10 Neurológico: CONSCIENTE, ORIENTADO EN TODAS LAS ESFERAS. NO ENCUENTRO ALTERACIONES EN REFLEJOS, SENSIBILIDAD O TONO MUSCULAR.

5.11 Osteomuscular: braquimetatarsia bilateral (4 dedo)

5.12 Mental: Consciente, orientada en persona, conversa poco y no responde a todas las preguntas.

5.13 Otros sistemas valorados: piel con lesiónes acordonadas e hiperpigmentadas a nivel de clavícula derecha.

6.DATOS TOMADOS DEL EXPEDIENTE		
Fecha	**Folio**	**Resultados**
----	---	NO TIENE EXPEDIENTE

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
16/02/2000	Otorrinolaringología		Paciente de 23 años, Dx principal de ingreso: perforación timpánica oído derecho 30%. Paciente con antecedente de otorrea derecha de larga data. Con perforación timpánica bilateral, por lo cual le realizan timpanoplastia izquierda hace 1 1/2 años. Al examen físico perforación timpánica oído derecho 30%, mucosa seca, oído izquierdo con perforación. Se programa para timpanoplastia OD.
17/02/2000	Cirugía	Dr. Gustavo Riveros	Perforación timpánica oído derecho central 30%. Timpanoplastia oído derecho, duración: 1 Hr. Hallazgos operatorios: Perforación timpánica oído derecho 30% oído derecho. Integridad de cadena osicular. Movilidad de cadena. Procedimiento: Previa asepsia y antisepsia del campo y bajo anestesia general. Se infiltra xilocaina al 1% en CE en región retroauricular oído derecho. incisión retroauricular, disección por planos hasta visualizar fascia temporal. Se toma injerto. Se revisa hemostasia. Se sutura plano profundo con vicryl 4-0 puntos separados y piel con prolene 4-0. Incisión den CAE a las 12 y a las 6, unión de incisiones en medialuna pared posterior. Disección colgajo meatal, hasta visualizar anulus, el cual se desprende y se rechaza hacia anterior. Rechazo de colgajo timpanomeatal hacia anterior y sección cuidadosa del mango del martillo. Se reavivan bordes de la perforación. Se coloca injerto y se reposiciona anteriormente y sobre mango del martillo. Se coloca gelfoam en oído medio. Se reposiciona colgajo timpanomeatal, se coloca gelfoam sobre membrana timpánica. Se deja espnja en CAE. Se deja aposico cubriendo herida. Complicaciones: Ninguna.
01/03/2000	CARIOTIPO CON FISH	SERVICIOS MEDICOS YUNY TURBAY	45-XO
12/08/2004	Consulta: Medicina General	Dr. Jose Pantoja	Paciente de 25 años de edad que consulta por astenia, adinamia, ganancia de peso, cefalea persistente, refiere que se encontraba en manejo por endocrinología con estrógenos y progestágenos para que "le venga la menstruación". EF: Talla: 148 (baja) Peso: 60 kgs, desarrollo y caracteres secundarios no acordes para la edad. Trae resultado de estudio genético compatible con síndrome de Turner. TSH con reporte 14: 121 mUL/ cc T4: 6.84. AP: Historia endocrinológica Hipogonadismo/ Hipogonadotrofia/ Hipotiroidismo. Paciente recibía levotiroxina que suspendió hace 1 año. unicamente levotiroxina 100 mcg/ dia . Se envia para valoración y plantear manejo integral "¿debe recibir estrógenos y progestagenos?".

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
21/07/2006	Urgencias.	Dr. Harold Aristides Olmedo Solis	Paciente de 29 años. Motivo de consulta: "estoy afónica, tengo gripa, dolor de cabeza" Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Hace 2 días don cogestión nasal, dolor de garganta y fiebre. Signos vitales: FC: 81. Sístole: 100. Diástole: 60. T.A.M: 73.33. FR: 18. T°: 36 Talla: 156. Peso: 65. IMC: 26.71. Dx: Amigdalitis aguda, no especificada.
27/01/2007	Urgencias.	Dr. Jose Luis Betancourth Cordoba.	Paciente de 29 años. Motivo de consulta: Dolor de garganta. Estado de llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Hace 2 días presenta odinofagia, cefalea, escalofrío, rinorrea y malestar general. No ha recibido tto médico. Signos vitales: FC: 80 Sístole: 120 Diástole: 80. T.A.M: 93.33. FR: 16. T°:37. Talla: 165. Peso: 65. IMC: 23,88. Examen físico: cabeza y cráneo: Orofaringe congestiva eritematosa. Dx: Faringitis aguda, no especificada. Dx principal.
27/08/2007	Urgencias.	Dr. Ivan Hernan Santacruz Mier	Paciente de 30 años. Motivo de consulta: Supuración de oído. Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Cuadro clínico de 10 días de evolución consistente en supuración de oído izquierdo y salida de sangre por este, no dolor, varios episodios de enfermedad actual, refiere dolor leve de cabeza, refieren querer cita con ORL de urgencia. Recomendaciones: Valoración por otorrinolaringología. Perforación timpánica y OMA. Signos vitales: FC 80. Sístole 120. Diástole: 80. T.A.M: 93.33 FR: 18. T°: 36. Talla: 165. Peso: 65. IMC: 23.38. Examen físico: Lesión de Tímpano izquierdo con secreción blanquecina y sangrado escaso. Dx: Perforación central de la membrana timpánica. DX principal. Tipo Dx: Impresión diagnóstica. Observaciones: Otitis adicional.
15/08/2008	Urgencias.	Dr. Jesus Fabian Portilla Caicedo.	Paciente 31 años. Motivo de consulta: "Dolor de espalda" Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Cuadro clínico de 2 días de evolución, consistente en dolor dorso-lumbar no irradiado, dificultad para conciliar el sueño, no sintomatología urinaria. Recomendaciones: Cita de control pro consulta externa. Signos vitales: FC: 74 Sístole: 120. Diástole: 70. T.A.M: 86.67 FR: 16. Examen físico: Osteomuscular: Dolor a la palpación paravertebral dorso-lumbar, lassegue. Dx: Lumbago no especificado. Medicamentos: Diclofenaco sódico sol. iny x75mg/3ml. amp x 3ml, aplicar im. Ibuprofeno tab x400mg (tab), tomar 1 cada 8 horas. Amitriptilina clorhidrato tab. x25mg (tab), tomar 1 tableta en las noches.
25/11/2008	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Efren Esteban Cerón Muñoz	Paciente de 31 años. Motivo de consulta: Mareos. Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Clínica de una semana de evolución consistente mareo y adinamia, cefalea. Antecedente de timpanoplastia por hipoacusia en el momento uso de audífonos. Recomendaciones: Control en consulta externa. Signos vitales: FC: 72. Sístole: 120. Diástole: 70. T.A.M: 86.67. RF: 14. T°:36.5. GLASGOW: Apertura ocular: Espontanea. Respuesta motora: Obedece. Respuesta

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			Verbal: Orientada y conversa. Estado conciencia: Alerta. Resultado: 15. Dx: síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte. Dx principal. Hipoacusia, no especificada, Dx secundario, Tipo Dx: Impresión diagnóstica. Medicamentos: Acetaminofén tb. x500mg (tab), tomar 1 tableta cada 6 horas durante 3 días. Diclofenaco sódico sol.iny. x75mg/3ml.amp. x3ml, aplicar im.
26/02/2009	Medico General (Urgencias)	Dr. Carlos Fernando Dorado Coral	Paciente de 31 años. Motivo de consulta: Tos. Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Paciente que cursa cuadro de tos seca persistente que no ha mejorado al manejo, dolor de tórax posterior, ha sido manejado con inhaladores, dolor en región de tórax posterior. Signos vitales: FC: 80. Sístole: 110. Diástole: 70. T.A.M: 83.33 FR:20. T°:37. Talla: 156. Peso: 60. IMC: 24.65. Examen físico: Tórax: mv disminuido roncus. Dx: Bronconeumonía, no especificada. Dx principal. Medicamentos: Hidrocortisona succinato polci sol. iny. cial x 100mg (amp). aplicar iv lento, diluido jeringa. Incapacidades: Fecha inicial: 2009/02/26 Fecha Final: 2009/02/28. Duración: 3 días. Tipo: Ambulatoria no quirúrgica. Concepto: Enfermedad General. Diagnóstico: J180 Bronconeumonía, no especificada. Observaciones: Reposo en casa.
02/10/2009	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dra. Gloria Leydy Rosero Ruiz	Paciente de 32 años. Estado de llegada: Consciente. Motivo de consulta: Congestión nasal. Enfermedad actual: Cuadro 1 semana de evolución con congestión nasal, asociado a cefalea de predominio frontal, no tos, no fiebre. Recomendaciones: Control por consulta externa, evitar sitios concurridos o con polvo. Signos vitales: FC: 80. Sístole: 120. Diástole: 80. T.A.M: 93.33. FR: 20. T° 37. Examen físico: Cabeza y cráneo: Dolor al presionar región frontal y supraorbitaria. Nariz: Amarillenta. Torax: Simétrico, no agregados. GLASGOW Apertura ocular: espontáneamente. Respuesta motora: Obedece. Respuesta verbal: Orientada y conversa. Estado de conciencia: alerta. Dx: Sinusitis aguda, no especificada. Diclofenaco sódico sol. iny. x 75 mg/3ml amp. x 3ml, aplicar im. Loratadina tab. x 10mg, tomar 1 tableta cada 12 horas durante 3 días. Amoxicilina trihidrato cap. x500mg (tab), tomar 1 tableta cada 8 horas durante 7 días. Ibuprofeno tab. x 400 mg (tab), tomar 1 tableta cada 8 horas durante 3 días.
20/05/2010	Urgencias.	Dr. Andres Manuel Riascos Bernal	Paciente 33 años. Motivo de consulta: Dolor de cabeza, mareo, dolor de cuerpo. Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Cuadro de cefalea, mareos, osteoartralgias, astenia, adinamia hiporexia, rinorrea cristalina odinofagia. FUR: 28 de abril. Planificación: Negativos. quirúrgicos: Timanoplastia bilateral, con audífonos. Signos vitales: FC: 87. Sístole: 120. Diástole: 80. T.A.M: 93.33. FR: 16 T°:37 Saturación: 92. Talla: 156. Peso: 64: 64. IMC: 26,30. Examen físico: Boca: Faringe eritematosa con placas. Dx: Amigdalitis aguda, no especificada. Medicamentos: Penicilina g benzatínica polvo sol. iny. vial x 1.2mill.uii (amp)

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			intramuscular + jeringa de 10 ml y jeringa de 1ml. Diclofenaco sódico sol. iny. x75mg/3ml. amp x3ml, intramuscular. Naproxeno tableta x 250mg (tab), 1 tableta cada 8 horas. Loratadina tab. x 10mg (tab), 1 tableta cada 12 horas.
12/07/2010	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Luis Fernando Malua Toro.	Paciente 33 años. Motivo de consulta: Vomito y epigastralgia. Estado de llegada: Consciente. Forma llegada: propios medios. Enfermedad actual: Paciente con cuadro de diarrea no disentérica y nauseas con emesis, con dolor en epigastrio y mesogastrio, no fiebre, no otros síntomas. AP: Hipoacusia en tto. Signos vitales: FC: 78 Sístole: 120 Diástole: 70. T.A.M: 86.67. FR: 18 T°: 36.5. Examen físico: rs ir aumentados epigastrio sensible mesogastrio sensible Macburney y Muppjjhy negativos, no irritación peritoneal. Dx: Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. Medicamentos: Hioscina butilbromuro 20mg + dipirona 2.5 g sol. iny. amp. x 5ml (amp) aplicar iv diluida y lenta. Hioscina butilbromuro gragea x 10 mg (tab), tomar 1 tableta cada 8 horas durante 3 días. Acetaminofén tab. x500mg (tab), tomar 1 tableta cada 6 horas durante 3 días. Metoclopramida clorhidrato sol. iny. x10mg/2ml amp x 2ml (amp) aplicar im. Metoclopramida clorhidrato tab. x10mg (tab), tomar 1 tableta cada 8 horas durante 3 días.
08/11/2010	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Daniel Andres Castillo Castillo	Paciente de 33 años. Motivo de consulta: por dolor del cuerpo y mareo. Enfermedad actual: Paciente que asiste por presentar osteomialgias generalizadas hace 2 meses con vértigo por lo cual está siendo manejada por Neurología sin mejoría de sus síntomas. En el momento no fiebre ni otros síntomas asociados respiratorios, gastrointestinales, ni urinarios. Recomendaciones: Reconsulta ante: persistencia o empeoramiento de los síntomas. Plan terapéutico: Se inicia manejo sintomático. Control x c. ext de Neurología. Signos vitales: FC: 74 Sístole: 120 Diástole: 70 TAM: 86.67 FR: 18 T°: 37. Examen físico: Alerta, Consciente, orientada, sin déficits neurológicos. Dx: síndrome vertiginoso en enfermedades clasificadas en otra parte. Tipo Dx: Impresión diagnóstica. Medicamentos: Dexametasona fosfato sol. iny x 4 mg amp. x 1ml (amp) aplicar 1 ampolla im du. Dimenhidrinato tab. x 50 mg, tomar 1 tableta cada 8 horas.
09/03/2011	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Lusby Adriana Salas Gomez.	Paciente de 33 años. Motivo de consulta: Dolor de espalda. Estado de llegada: Consciente. Forma de llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Cuadro clínico de 1 sem de evolución consistente en dolor en region dorsal, dolor disestesia, dolor agudizado hace 1 dia. RXS: Dolos muscular, mareos, congestión, rinorrea hace dia. APP: Hipoacusia. Alerg: No. FCOS: No. AGO: G:0 P:0 , FUR: 28/02. Recomendaciones: Compresas tibias, Higiene postural. Control por consulta ext m. Plan terapéutico: Se indica tto med. Control por C. etx. Signos vitales: FC: 84 Sístole: 102. Diástole: 78. T.A.M: 86,00. FR 20. T°: 36,5. Examen físico: Osteomuscular: Contractura muscular dolor a la palpación. Boca: Orofaringe congestiva eritematosa. GLASGOW: Apertura

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			ocular: Espontanea. Respuesta motora: Obedece órdenes. Respuesta verbal: Orientada. Estado conciencia: Alerta. Resultado: 15. Dx: Rinofaringitis aguda (resfriado común), diagnóstico secundario, Tipo Dx: Impresión diagnóstica. Dorsalgia, no especificada, diagnóstico principal. Medicamentos: Dexametasona fosfato sol. ny. x 8mg amp. x 2ml (amp) aplicar 1 amp cada día. Diclofenaco sódico tab. x50mg (tab), tomar 1 tableta cada 12 horas durante 3 días. Naproxeno tableta x 250 mg (tab), tomar 1 tableta cada 8 horas durante 3 días. Metocarbamol tab. x 750 mg (tab), tomar 1 tableta cada 12 horas durante 3 días. Cita de control por consulta ext.
02/07/2011	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Andres Giovanny Tejada Pantoja	Paciente de 33 años. Motivo de consulta: Se abrió el pie al tropezarse. Estado de llegada: Consciente, forma de llegada: propios medios. Paciente con cuadro clínico de 2 horas de evolución consistente en trauma en pierna izquierda con posterior sangrado, dolor, edema y limitación funcional. AQX: Otoplastia funciona, alérgicos negados, familiares: Madre DM tipo 2. Padre: Hipertenso. FUM: 25 enero 2011 G:0 P:0 A:0. Recomendaciones: Naproxeno 250mg cada 12 horas. Bajo anestesia local, previa sepsia antisepsia se sutura herida en pie sin complicaciones. Plan terapéutico: Paciente con herida en pie de 3 cm ahora con necesidad de sutura. Signos vitales: FC: 80. Sístole: 120. Diástole: 80. T.A.M: 93.33 FR: 16. T:36. Examen físico: conjuntas rosadas, ruidos cardiacos rítmicos, no soplos, pulmones bien ventilados. abdomen blando depresible no doloroso a la palpación. extremidades inferior: herida de 3 cm en dorso de pie derecho. Dx: contusión de otras partes y de las no especificadas del pie. Tipo Dx: Impresión diagnóstica. Observaciones: Herida de pie. Medicamentos: Naproxeno tableta x 250 mg, tomar 1 tableta cada 12 horas durante 3 días.
30/06/2016	Endocrinología	Dra. Doly Pantoja Gerrero	Medicamentos formulados para Ana Cristina Quintana Leyton - 39 años. estrógenos conjugados 0.625 mg, tomar 1 TAB VO cada 24 horas, 120 TAB o grajeas, tto para 4 meses. Medroxiprogesterona acetato 5 mg, tomas 1 TAB VO del día 10 al día 2o del ciclo menstrual, 1 TAB cada 48 horas. tto 40 TAB. Levotiroxina sódica 100 mcg, tomar 1 TAB 30 minutos antes del desayuno solo con agua, 1 tab cada 24 horas, 120 TAB - tto para 4 meses. Levotiroxina sodica 75 mcg, tomar 1 TAB 30 minutos antes del desayuno solo con agua, 1 tab cada 24 horas, 120 TAB - tto para 4 meses. Ácido ascórbico 500 mg Tableta masticable. Tomar 1 TAB VO luego del almuerzo, 1 TAB cada 24 horas, 30 TAB tto por 1 mes.
13/08/2016	Internista Endocrinologo	Dr. Diego Fernando Benitez España	Antecedentes: Sd de Turner, en manejo irregular con estrógenos conjugados + medroxiprogesterona, refiere dolor osteomuscular. EF: TA: 120/80, FC: 27 X ', FR: 20. Cuello: Tiroides: incrementado de tamaño, no nódulos. Genitales: A: 2, P: L, M:3. Resto de EF normal. IDx: 1) Hipogonadismo hipogonadotrofico 2) Riesgo de osteoporosis. Plan: 1) estrógenos conjugados + medroxiprogesterona. 2) SS/ TSH, TSL, Calcio, 3)

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			Glicemia, perfil lipídico completo. 4) SS/ Densiometria mineral osea.
05/12/2016	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Jesus Fabian Portilla Caicedo.	Paciente de 39 años. Motivo de consulta: "Me atracaron y tengo inflamado el hombro" Estado de llegada: Consciente. Forma de llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Refiere que el día de ayer es agredida físicamente por individuos en motocicleta al ser arrastrada de su bolso, ahora con dolor del hombro derecho y limitación funcional. Revisión por sistemas: Niega premórbidos. No sintomático respiratorio ni de piel, niega ser víctima de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Antecedentes personales: Hipotiroidismo. Quirúrgicos: CX de oídos (timpanoplastia en 2 ocasiones) alérgicos: no refiere. Farmacológicos: Levotiroxina 200 x . Familiares: Madre DBT. Recomendaciones: SS/RX de clavícula derecha. Se explica a la paciente sospecha diagnóstica y conducta a seguir. Plan terapéutico: Al egreso. Signos vitales: FC: 78. Sístole: 130. Diástole: 80. T.A.M: 96,67. FR: 18. T°: 36. Saturación 96. Talla: 145. Peso: 68. IMC: 32.34. Examen físico: PIRF, conjuntivas rosadas. Tórax: sin sobreagregados. Extremidades superiores: Deformidad en tercio medio de clavícula derecha. neurológico: Alerta, orientada, sin déficit motor o sensitivo. Piel y faneras: Equimosis a nivel de clavícula derecha. Otras partes: Normales. GLASGOW: Apertura ocular: Espontanea. Respuesta motora: Obedece órdenes. Respuesta Verbal: Orientada. Estado conciencia: Alerta. Resultado: 15. Dx: Fractura de la clavícula. Tipo Dx: Impresión diagnóstica.
20/04/2017	Endocrinología	Dra. Doly Pantoja Gerrero	Paciente de 39 años, motivo de consulta: control. Refiere cansancio, mareo ocasional, persi+D9:D10ste amenorrea, en el momento se encuentra con Synthoid 200 mcg/día. AP: patológicos: válvula aortica bivalva, síndrome de Turner, hipotiroidismo primario, migraña, baja densidad mineral osea. AQ: CX por perforación timpánica. Otros: Ecocardiograma octubre 2016: displasia de válvula aortica, apariencia no bien definida de aorta bivalva, pero con función preservada con apertura y cierre conservados, DXA: Baja densidad mineral osea con perdida osea significativa en columna del 11% y estable en cadera. EF: TA: 120/80 Pulso: 70 FR: 12 lpm Peso: 69. Evaluación paraclínicos: marzo 2017 TSH: elevado 8.1. Ecografía pélvica: normal. observaciones: Aorta bivalva, baja densidad mineral osea, paciente con hipotiroidismo de difícil manejo, al momento se decide desparasitar, dar ciclo de vitamina, se aumenta Syntrhoid a 225 mgd/día (tomar 2 tabletas de 100 mcg 30 minutos antes del desayuno, tomar solo con agua y 1 tableta de 25 mcg 30minutos antes del desayuno, tomar solo con agua). Síndrome de Turner con presencia de aorta bivalva se envía a control con cardiología, paciente con baja densidad mineral osea por patología de base al momento ya en TRH, pero se solicita paraclínicos adicionales por perdida osea significativa que tiene especialmente a nivel de columna. Se deja carbonato de calcio con vitamina D (1 tableta con el almuerzo), continuar por síndrome de Turner con TRH (estrógenos conjugados 0.625 mg - 1 tableta

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			cada 24 horas. Medroxiprogesterona acetato 5 mg- 1 tableta cada 24 horas, del día 10 al 20 de cada mes.). Control en 3 meses con TSH, PTH, vitamina D, calcio serico, fosforo sérico, albumina, calcio en orina de 24 horas.
20/04/2017	Endocrinología	Dra. Doly Pantoja Gerrero	Paciente de 39 años, motivo de consulta: control, en el momento refiere que no presenta sangrado vaginal. Hallazgos examen fisco: Normal. Evaluación paraclínicos: ecocardiograma: probable válvula aorta bivalva con funsion preservada. TSH elevada 23.3. Colesterol total: normal 200. Transaminasas normales. Glucosa 84. Dx principal: síndrome de Turner. tipo Dx: confirmado nuevo. Causa externa: enfermedad general. Relacionado: Hipotiroidismo primario. Observación: Aorta bivalva. Paciente con hipotiroidismo no controlado, se aumenta dosis y se cambia de marca a Syntroid 200 mcg/día (tomar 2 tabletas 1 hora antes del desayuno colo con agua). Continuar con TRH (estrógenos conjugados 0.625 mg - 1 tableta cada 24 horas. Medroxiprogesterona acetato 5 mg- 1 tableta cada 24 horas, del día 10 al 20 de cada mes.). Para próximo control se solicita ecografía pélvica. Control en 3 meses con TSH, DXA osea, ecografía pélvica.
29/10/2017	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Carlos Fernando Dorado Coral	Paciente 40 años. Motivo de consulta: Dolor de estómago. Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Paciente que desde ayer en la mañana ha presentado dolor en epigastrio moderado no de irradia, refiere además vomito en varias ocasiones, 3 ocasiones, adinamia, hiporexia, malestar general. APP: No de importancia Hipotiroidismo. Recomendaciones: Reposo. Plan terapéutico: Dx se da manejo. Signos vitales: FC: 78 Sístole: 110. Diástole: 67. T.A.M: 81.33. FR: 20 T°: 36. Talla: 156. Peso: 54. IMC: 22.19. Examen físico: Cardiovascular: RSCSRS no soplos. Abdomen: Dolor leve en epigastrio no Blumberg, no masas, no lesiones. neurológico: No déficit, Consciente orientado. GLASGOW: Apertura ocular: Espontánea. Respuesta motora: Obedece órdenes. respuesta verbal: Orientada. Estado conciencia: Alerta. Resultado: 15. Dx. Parasitosis intestinal, sin otra especificación. Dx secundario. Tipo Dx: Confirmado nuevo. Gastritis, no especificada.
21/11/2017	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dra. Sandra Gineth Benavides Castillo	Paciente de 40 años. Motivo de consulta: Materia por oído y dolor. Estado llegada: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Paciente con cuadro clínico de otalgia izquierda intensa, asociada a otorrea izquierda fétida, se hizo una autolimpieza del oído con un copito, traumatizando el CAE, refiere de le quedo parte del algodón, por lo cual consulta. Recomendaciones: No mojar oído izquierdo. Plan terapéutico: Nota realizada por Dra. Milena Pabón- ORL. Paciente con otorrea izquierda fétida y otalgia izquierda intensa, lesión de conducto auditivo externo, refiere un mes de evolución con exacerbación de síntomas hace 48 horas, ha recibido múltiples tratamientos con antibiótico oral y gotas óticas sin mejoría. EF: OI: Se extraen detritus de conducto auditivo izquierdo, se evidencia perforación timpánica subtotal y engrosamiento de mucosa en

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			caja timpánica. AP: Requiere Ceftriaxona EV durante 3 días consecutivos para aplicar en servicio de urgencias. Dx: Otitis media supurativa crónica aticoantral.Tipo Dx: Impresión diagnóstica.
22/11/2017	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dr. Victor Hugo Villareal Muñoz	Paciente 40 años. Motivo consulta: Otitis media crónica. No sintomático respiratorio, ni de piel. Enfermedad actual: Paciente valorada por especialidad otorrinolaringología-ORL por presentar otitis media crónica izquierda supurativa, quien ordena Ceftriaxona 2 gr EVL dia, ayer se hizo aplicar la primera dosis y hoy viene para la segunda dosis, No otra sintomatología. Recomendaciones: Signos de alarma. Plan terapéutico: Ceftriaxona 2 gr EVL día. Signos vitales: FC: 80 Sístole: 110. Diástole: 70. T.A.M 83.33. FR: 18. T° 36,5. Examen físico: Oído: Tímpano perforado con otorrea escasa. GLASGOW: Apertura ocular: Espontanea. Respuesta motora: Obedece órdenes. Respuesta Verbal: Orientada. Estado conciencia: Alerta. Resultado: 15. Dx: Otitis media supurativa crónica aticoantral. Tipo Dx: Impresión diagnóstica.
23/11/2017	Medicina General (Servicio de Urgencias)	Dra.Jazmin Jenny Araujo Yela	Paciente de 40 años. Motivo de consulta: Vengo para que me aplique el medicamento. Estado llegado: Consciente. Forma llegada: Propios medios. Enfermedad actual: Paciente valorada por especialidad otorrinolaringología por presentar otitis media crónica izquierda supurativa, quien ordena Ceftriaxona 2 GR EVL DIA, ayer se hizo aplicar primera dosis y hoy viene para la segunda dosis. No otra sintomatología. Plan terapéutico: Se ordena dosis de ceftriaxona. Signos vitales: FC: 78 Sístole: 120 Diástole: 70. T.A.M: 86.67 FR:18 T°: 36.5. Saturación: 95. Examen físico: Oído: Tímpano perforado con otorrea escasa. GLASGOW: Apertura ocular: Espontánea. Respuesta Motora: Obedece órdenes. Respuesta verbal: Orientada. Estado conciencia: Alerta. Resultado: 15. Dx: Otitis media supurativa crónica aticoantral.
07/09/2018	Certificado de discapacidad-MEDIMAS	Dr. Mario Peña	Certificado de discapacidad por hipoacusia congénita y Síndrome de Turner
06/02/2019		Dr.Julian Felipe Montoya escobar	Paciente de 40 años, vive en pasto, soltera, sin hijos, ama de casa. AP: síndrome de Turner, Hipotiroidismo primario, Hipoacusia bilateral por ruptura timpánica, con uso de audífonos, Válvula aortica bivalva, Baja masa ósea. AQ: pterigium ojo derecho dic/2018. Tratamiento: Synthroid 275 mcg/día. Provera 5 mg/día. estrógenos conjugados 0.625 mg/día. ASA 100 mg/día. No menstrua, refiere cefalea frecuente en región frontal diario. Exámenes: 2/02/2019: Eco pélvica: útero y ovario izquierdo hipoplásicos, mientras que el ovario derecho no se ve. 2/02/2019: Glucemia 106, Creat: 0.62, ALT: 43 (vr: 0-33), AST: 28, TG: 130, COL t: 195, HDL: 57, LDL: 112. 22/01/2019: TSH: 6.62. Revision por sistemas: Normal. Antecedentes médicos: no quirúrgicos, no patológicos, no alérgicos. Otros: No licor, no SPA. AGO: NA. AF: NA. EF: mucosas húmedas, oídos con audífonos, cuello

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
			alado, tiroides sin nudos, RsCsRs sin soplos, pulmones sin ruidos agregados, abdomen blando y depresible sin masas ni magalias. ext OK. Signos vitales PA: 120/80 mmHg. Peso: 67 kg Talla: 148 cm. IMC: 30.59 kg/m2. Temperatura: 37º. FC: 78 /min. Examen general: examen físico normal. Dx: Síndrome de Turner, no especificado. Hipotiroidismo, no especificado. Plan de manejo: Paciente en quien es fundamental evaluar válvula aortica bivalva con ecocardio TT, adicionalmente con TSH fuera de metas, en tal sentido se aumenta la dosis de Synthroid a 300 mcg vo al día. Debe seguir por ahora con estrógeno y progestágeno. Se evalúa en 3 meses con exámenes de control.
15/02/2019	JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE NARIÑO		PCL: 66.44% FECHA ESTRUCTURACION: 26/04/1977
30/04/2019	Reporte de presión sanguínea ambulatoria	Dr. Carlos A Blanco (cardiología)	Registro de presión arterial de 24 horas, técnicamente adecuado que mostró: Promedio de PA de 24 horas elevado por aumento de la carga sistólica y diastólica. Promedio de PA diurno elevado por aumento de la carga sistólica y diastólica. Promedio de PA nocturno elevado por aumento de carga sistólica y diastólica, con patrón Doppler atenuado. Cronotropismo normal. Presión de pulso normal. Conclusiones: HTA estadio 1 AHA2017
29/11/2019	Medicina General	Dr.Santiago Reyer Arango	Paciente de 42 años, motivo de consulta: "vengo a presentar exámenes", con antecedentes de 1) Hipertensión arterial de novo por mapa 30/04/2019. 2) Síndrome de Turner. 3) Válvula aortica bivalva. 4) Hipoparatiroidismo primario. 5) Baja densidad mineral osea. 6). Hipotiroidismo. 7) Hipoacusia bilateral por ruptura timpánica con uso de audífonos. Medicación actual: Levotiroxina 300 mcg (Synthoroid). Losartan 50 mg/día (no la está tomando). Nimodipino 30 mg/día. estrógenos conjugados 0.65 mg/día. Medroxiprogesterona 5 mg/dia. Calcio + vitamina D 1 tab/día. Asiste a cita de revisión de exámenes solicitados en la cita anterior, los cuales reportan: Ecocardiograma con VI: FEVI 65% con remodelación concéntrica de sus paredes. AI: normal. VD: TAPSE 33 MM con TDI 13 cm/seg. AD: normal. VM: Normal. VA: trivalva sin cambios. VT: insuficiencia leve. VP: normal. Resto del examen normal. Revisión por sistemas: NO REFIERE ANORMALIDADES. Se ordenan medicamentos, Carbonato de calcio + vitamina D - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Enalapril maleato x 20 mg (tab)- VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. estrógenos conjugados 0.625 mg (tab) - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Imipramina 25 mg (tab) - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Medroxiprogesterona acetato 5 mg (tab) - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días. Nimodipino 30 mg - VO 1 tab cada 24 horas x 30 días.
29/01/2020		Dr. John Jairo Reyes	Paciente femenina de 42 años de edad con AP de síndrome de Turner, hipotiroidismo +, Hipoacusia bilateral, válvula aortica bivalva +, HTA +, quien

7.DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS			
Fecha	Procedimiento/Médico firmante y/o entidad que reporta		Resultados
		Rodriguez.	asiste a cita de control, refiere cefalea intensa global, en escala análoga del dolor de 8/10, con náuseas y emesis +. Tratamiento ambulatorio: Syntrhoid 275 mcg/día. Provera 5mg/día. estrógenos conjugados. ASA. Subjetivo: en buen estado general. Objetivo: SV: TA: 140/74. FR: 20. T: 36. FC: 74. SO2:97%. CCC: normocéfalo ojos, pupilas no reactivas a luz, mucosas oral cuello sin adenopatías. tórax: ruidos cardiacos rítmicos, soplos negativo, pulmones normales. ABD: blando depresible, visceromegalia negativa, peristaltismo +. Extremidades: simétricas, pulsos distales +, llenado capilar < de 3 seg. GU: Diuresis +. SNC: paciente consciente, orientado en las 3 esferas Glasgow de 15/15. Paraclínicos: 23/01/2020: hemograma normal, CT 217, CR: 0.72, TGP: 25, TGO: 67, parcial de orina. Ecocardiograma tt, Doppler: normal FEVI: 65. TSH: 25,9. 30/04/2019: MAPA: HTA: Estadio 1. Análisis: Paciente femenina de la 5ta década de la vida con síndrome de Turner, Hipotiroidismo +, Hipoacusia bilateral, Válvula aortica bivalva +, HTA +, quien asiste de control, continua con cefalea, con cifras tensionales fuera de control, se solicitará nuevo MAPA con paraclínicos complementarios. Dx: 1. HTA. 2 hipotiroidismo no controlado. 3. síndrome de Turner. Plan: paraclínicos, Monitoreo de tensión arterial de 24 hr, cita de control con resultados.
05/03/2020	AUDIVEL: FONOAUDIOLOGA	Jaqueline Cuarta	HIPOACUSIA BILATERAL MIXTA SEVERA

8.DIAGNÓSTICOS MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN		
No.	**CÓDIGO CIE-10**	**Descripción**
1	Q96.0	Síndrome de Turner
2	E00	Hipotiroidismo
3	E28	Disfunción ovárica con infertilidad
4	I10	Hipertensión arterial
5	I35	Valvulopatía aórtica
6	H90.3	Hipoacusia neurosensorial
8	M80	Baja densidad ósea
9	E34.3	Baja estatura por trastorno endocrino

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez	**DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL** FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	F-03-0022 VERSIÓN 02
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 ▪ Apartado: 1226 ▪ Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratoriosaludpublica@udea.edu.co Medellín, Colombia	PÁGINA 13 DE 14

TÍTULO PRIMERO, VALORACIÓN DEFICIENCIAS

DEFICIENCIAS

Clase funcional / valor porcentual

No.	Nombre de la deficiencia	No. Tabla	Clase	CFP	CFM1	CFM2	CFM3	Valor Ajuste	Clase Final y Literal	CAT	Dominancia	*Ajuste total de deficiencia (sin ponderar)
1	Hipoacusia neurosensorial	9.3										25
2	Hipotiroidismo	8.6	2	23	0					0		15
3	Disfunción ovárica con infertilidad	8.12	3	13	3	2				2		13
4	Hipertensión arterial clase 1	2.6	1	8	1							8
5	Osteoporosis	8.14	1	5								5
6	Valvulopatía aórtica	2.1	0	0	0							0

***Fórmula ajuste total de deficiencia: (CM1-CFP) + (CM2-CFP) + (CM3-CFP)**

CFP: Clase factor principal **CFM1:** Clase factor modulador 1 **CFM2:** Clase factor modulador 2 **CFM3:** Clase factor modulador 3

DEFICIENCIA COMBINADA = A + $\frac{(100-A)*B}{100}$	52.64
VALOR TOTAL DE DEFICIENCIA = Valor deficiencia combinada * 0.5	26.32%

9.PORCENTAJE TOTAL DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL

	Descripción	% Porcentaje	Estado de la Pérdida de Capacidad Laboral
I	**Total Deficiencia**	26.32%	**PCO**
II	**Rol ocupacional: niños mayores de 3 años y adolescentes**	25%	
Total Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional		51.32%	
Fecha de estructuración de la PCLO o de Invalidez:		**26/04/1977**	
Requiere Curador		**SI**	**NO** **x**

10.CALIFICACIÓN DE ORIGEN

Descripción		Indique con una "x"	Observación
EVENTO COMÚN	Enfermedad	x	ENFERMEDAD DE ORIGEN GENETICO
	Accidente		
EVENTO LABORAL	Accidente de Trabajo		
	Enfermedad Laboral		

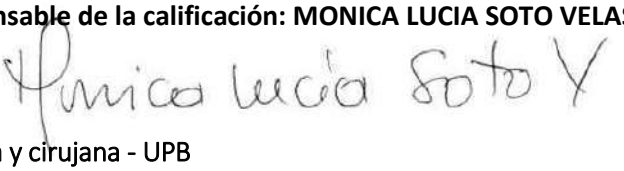
11.ELEMENTOS DE HECHO

8.1 Informe de accidente de trabajo		**8.7** Exámenes paraclínicos ¿Cuáles?	X
8.2 Historia Clínica	X	**8.8** Exámenes ocupacionales	
8.3 Examen Físico	X	**8.9** Concepto de salud ocupacional	
8.4 Acta de levantamiento del cadáver		**8.10** Otros, ¿Cuáles?	
8.5 Certificado de difusión			
8.6 Análisis de puesto de trabajo			

12.ELEMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 (Manual Único de Calificación de Invalidez en Colombia)

FECHA DE ENTREGA DEL DICTAMEN	10/08/2020

Responsable de la calificación: MONICA LUCIA SOTO VELASQUEZ

Firma: 

Médica y cirujana - UPB

Registro profesional: 1156/1991.

Especialista en Salud Ocupacional – UdeA, Licencia de salud ocupacional: 04539/27

{fiduprevisora)

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20201181162771**
Fecha: **08-04-2020**

Señores:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
M.P. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
CR 23 # 19 - 00 TR II PS 3 PALACIO DE JUSTICIA
Pasto - Nariño

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RAD.: 52001233300020190066700
DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTESTACION DE LA DEMANDA

SANDY JHOANNA LEAL RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.032.473.725 de Bogotá, y portadora de la Tarjeta profesional 319.028 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de la NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, como apoderada sustituta del Dr. **LUIS ALFREDO SANABRIA RIOS**, conforme al poder de sustitución que se adjunta, mediante el presente documento me permito dar contestación a la demanda del presente asunto en los siguientes términos:

A LAS PRETENSIONES

PRIMERA Y SEGUNDA: Me opongo a que se declare la nulidad pretendida, pues si bien se trata de un acto administrativo de aquellos denominados "ficto o presunto", este se ajusta a derecho, toda vez que no es la acá demandada la llamada a responder.

Aunado a lo anterior, debe decirse, que en el sistema interno de mi representada no obra ninguna solicitud con fecha de radicación el 27 de febrero de 2019, tampoco solicitando el reconocimiento y pago de una pensión, por ende, si mi representada no tuvo conocimiento de la misma, le es imposible dar una respuesta.

TERCERA: Me opongo a que se ordene a la NACION- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconocer y pagar a la parte demandante, la pensión ordinaria de jubilación que solicita por las razones que se expondrán más adelante.

CUARTA: Me opongo a que se condene a la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer alguna suma, toda vez que la pretensión principal no está llamada a prosperar.

QUINTA: Me opongo a que se condene a la NACION- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO al reconocimiento y pago de intereses moratorios toda vez que no existe una razón de hecho ni de derecho que los origine, es decir, dicha pretensión carece de fundamento.

SEXTA: Si se llegare a condenar a la entidad, ésta tiene un término para realizar el pago de la sentencia y las condenas impuestas.

SEPTIMA: Me opongo a que se condene a la NACION- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a las costas solicitadas por carecer de fundamento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A LOS HECHOS

PRIMERO: No me consta, por lo que deberá ser probado en el transcurso del proceso.

SEGUNDO: No es cierto, pues según las fechas que indica la parte demandada, la primera vinculación del docente con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue desde el 15 de septiembre de 1996 hasta 28 de junio de 1998, y manifiesta que entre esta fecha transcurrieron 1004 días, lo cual no es posible pues para efectos de liquidación de prestaciones sociales, el año tiene 360 días, de manera que en 21 meses y 13 días, no puede calcularse 1004 días.

TERCERO: No me consta, por lo que deberá ser probado en el transcurso del proceso.

CUARTO: Parcialmente cierto, pues como ya se ha mencionado, mi representada no recepcionó la solicitud mencionada por la parte demandante, por lo que no era posible emitir una respuesta al respecto.

FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

La Ley 91 de 1989 en su artículo tercero creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual reza textualmente:

> ***Artículo 3º.-*** *Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.*

Es importante, precisar que el correspondiente contrato de Fiducia Mercantil fue suscrito entre la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

DEL RÉGIMEN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN.

Sea lo primero señalar que, LA NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO debe sujetarse a lo determinado por la Ley para la expedición de actos administrativos que traten temas de reconocimiento pensional o prestacional, pues los mismos son expedidos bajo los parámetros de la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el precitado fondo y, señaló que los docentes en materia prestacional se regirían por las disposiciones ahí señaladas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

Los docentes nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989, mantendrían el régimen que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y los nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, se regularían por las disposiciones vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en dicha ley.

Por otra parte, la Ley 812 de 2003, mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 dispuso:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"(...) El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones".

Así pues, el Decreto 2341 de 2003, a través del cual se reglamentó de forma parcial el precitado artículo, estableció en su artículo 2º que, el ingreso base de cotización de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio correspondería al establecido en el Decreto 1158 de 1994 y las normas que lo modifiquen o adicionen, veamos:

"(...) El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados (...)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De esta misma manera, el Decreto 3752 de 2003, también reglamenta, entre otras normas, el artículo 81 de la Ley 812 del mismo año, e indica:

"Artículo 3o. Ingreso Base de Cotización y liquidación de prestaciones sociales. La base de liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, a cuyo pago se encuentre obligado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no podrá ser diferente a la base de cotización sobre la cual realiza aportes el docente.

(...)

Artículo 9°.Monto total de aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
El cálculo del valor de nómina proyectado, con el cual se establecen los aportes de ley, se obtendrá de acuerdo con el ingreso base de cotización de los docentes y según el grado en el escalafón en el que fueron reportados; los incrementos salariales decretados por el Gobierno Nacional y; un incremento por el impacto de los ascensos en el escalafón, según los criterios definidos en la Ley 715 de 2001. Dicha información será generada por la

sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo, discriminada por entidad territorial y por concepto..."

De conformidad con lo que disponen las Leyes 6ª de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989, así como los Decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003 para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación los docentes deben cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios, y de este modo adquieren el estatus de pensionados y en consecuencia el derecho a devengar una mesada pensional equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a la fecha de estatus.

DE LA PENSION POR CUOTAS PARTE

De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 71 de 1988, se da la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

"A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y los trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que corresponden a las entidades involucradas."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dicho artículo fue reglamento por el artículo 10 del Decreto 270 de 1994, que establece:

"ENTIDAD DE PREVISION PAGADORA. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas, haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.

Las anteriores disposiciones, deben estar armonizadas con lo dispuesto por la Ley 91 de 1989, de acuerdo con las previsiones de esta ley los docentes debían ser afiliados obligatoriamente por la entidad territorial, previo el cumplimiento de requisitos de naturaleza formal y económica, lo anterior con el fin de que al momento degenerarse la causación de sus prestaciones, el fondo pudiera efectuar el reconocimiento de las prestaciones.

En consecuencia, el Decreto 3752 de 2003, prevé en su artículo 2:

"PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS: Se entiende por causación de prestaciones el cumplimiento de los requisitos legales que determinen su exigibilidad.

Las prestaciones sociales de los docentes causadas con anterioridad a la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones estarán a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes.

Las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serán reconocidas de conformidad con lo que establezca la Ley y se pagarán por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales que se causen a favor de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se limitará al periodo de cotizaciones que haya efectivamente recibido el Fondo y al valor del pasivo actuarial que le haya sido efectivamente cancelado."

DE LA CONDENA EN COSTAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, el juzgador, al momento de estudiar la imposición de la condena en costas deberá remitirse a la normatividad procesal aplicable, entonces se tiene que:

> **ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS.** Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En atención a lo anterior, es así como el artículo citado remite de manera expresa al Estatuto Procesal que ha de aplicarse, el cual corresponde a la Ley 1564 de 2012.

> **ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS.** En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
>
> [...]
>
> **8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.** (Negrita y subrayado fuera del texto)
>
> [...]

{fiduprevisora)

EXCEPCIONES

Me permito proponer las siguientes:

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN.

Se propone como medio exceptivo, en consideración a que, la Entidad que represento no ha actuado con el fin de atentar en contra los derechos laborales de la demandante, por el contrario los mismos se encuentran debidamente satisfechos y así como tampoco se han violado las disposiciones incoadas por la parte actora, no puede alegarse error o inaplicación de la ley, por lo que no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación sin haber cumplido el lleno de los requisitos.

EXCEPCIÓN GENERICA

En virtud del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal en materia de excepciones, frente a los poderes oficiosos del juez es necesario afirmar que lo fundamental no es la relación de los hechos que configuran una determinada excepción, sino la prueba de los mismos, por ende, si el Juez encuentra probados los hechos que lo constituyen deberá reconocerla oficiosamente.

Por lo anterior, solicito a este Honorable despacho, ordenar de oficio la práctica de pruebas pertinentes, así como declarar oficiosamente, las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como normas aplicables a la presente contestación, la Ley 91 de 1989, Ley 71 de 1988, Decreto 2709 de 1994, Decreto 3752 de 2003.

V. PETICIONES.

Al tenor de las excepciones anteriormente planteadas, comedidamente solicito a este Honorable despacho, que previo el trámite correspondiente, se efectúen las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERO.- Declarar probadas las excepciones propuestas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUNDO.- En consecuencia dar por terminado el proceso.
TERCERO.- Si no ocurriere lo anterior, denegar las pretensiones de la demanda
CUARTO.- Abstenerse de condenar en costas a la entidad demandada.

A. NOTIFICACIONES

A la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. identificada con Nit. No. 860.525.148-5 en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a la calle 72 No. 10 - 03 y al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co o procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co y t sleal@fiduprevisora.com.co

SANDY JHOANNA LEAL RODRÍGUEZ
C.C. 1.032.473.725 de Bogotá D.C.
T.P. 319.028 del C. S de la J

Elaboró. SLEAL
Reviso: Alejandra Zapata

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

Señor(es):
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
SAN JUAN DE PASTO
E. S. D.

REFERENCIA: SUSTITUCIÓN DE PODER

Radicado:	**52001233300020190066700**
Demandante(s):	**CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO**
Demandado(s):	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.**

LUIS ALFREDO SANABRIA RIOS, identificado civil y profesionalmente como aparece junto a mi firma, actuando en calidad de apoderado de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, N.I.T.: 899.999.001-7,** conforme al **Poder General** otorgado por el Doctor **LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA,** mediante Escritura Pública **No. 522 de 28 de marzo de 2019,** protocolizada en la notaria 34 del circulo de Bogotá, modificada por la escritura pública **No. 0480 de 03 de mayo de 2019,** protocolizada en la notaria 28 del circulo de Bogotá, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de las facultades a él conferidas a través de la **Resolución No. 015068 del 28 de agosto de 2018 y 02029 del 04 de marzo de 2019**, expedida por la **MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,** lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes.

Manifiesto a su despacho que sustituyo poder al (la) abogado(a), SANDY JHOANNA LEAL RODRIGUEZ identificado(a) civil y profesionalmente como aparece junto a su firma, con las mismas facultades a mi conferidas, incluida la de sustituir y conciliar, no obstante lo anterior, se ceñirá a las disposiciones de la entidad plasmadas en Acta del Comité de Conciliación.

Me permito informar a su despacho que el presente apoderamiento no genera costo alguno por concepto de honorarios a favor del apoderado, toda vez que se encuentra dentro del ejercicio de sus funciones.

La presente sustitución se presume autentica de conformidad con el Inciso Segundo del Artículo 74 del Código General del Proceso

Por lo anterior, le solicito se sirva aceptar esta petición en los términos y para los fines descritos.

Cordialmente,

LUIS ALFREDO SANABRIA RIOS
C.C. No. 80.211.391 de Bogotá D.C.
T.P. No. 250.292 del C.S. de la J.

Acepto:

SANDY JHOANNA LEAL RODRIGUEZ
C.C. No. 1.032.473.725 de Bogotá D.C.
T.P. No 319.028 del C. S de la J.

Sírvase remitir las notificaciones a los correos electrónicos: notjudicial@fiduprevisora.com.co **y/o**
procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co

RADICACION - DOCUMENTOS FOMAG

S

Secretaria General Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto
Vie 3/07/2020 7:35 AM

Para:

- Despacho 05 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

y 3 más
JOSE SOLIS-07022020160700.pdf
355 KB

ANA FLOREZ-07022020160254.pdf
443 KB

MARDOQUEO ORTIZ-07022020160201.pdf
433 KB

FLOR ORTEGA-07022020155839.pdf
662 KB

JAIRO NABAL-07022020162223.pdf
671 KB

CARMEN INCA-07022020162634.pdf
859 KB

DELIA DAZA-07022020162259.pdf
443 KB

CARLOS REALPE-07022020161222.pdf
420 KB

ROSA CABEZAS-07022020161439.pdf
470 KB

NELLY BACCA-07022020162717.pdf
448 KB

MARIA BURBANO-07022020160528.pdf
337 KB

6. ESCRITURA 0480-20190608100540.pdf
4 MB

7. ESCRITURA PUBLICA 522.pdf
7 MB

8. ESCRITURA 1230.pdf
5 MB

Mostrar los 14 datos adjuntos (21 MB)Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Omar Bolaños Ordoñez

Secretario General
Tribunal Administrativo de Nariño

De: Leal Rodriguez Sandy Johanna <t_sleal@fiduprevisora.com.co>
Enviado: viernes, 3 de julio de 2020 0:23
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co>; Despacho 05 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <des05tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 06 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <des06tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 02 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 03 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <des03tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 04 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <des04tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICACION - DOCUMENTOS FOMAG

Buen día,

Con el acostumbrado respeto me permito remitir los escritos que relaciono a continuación, los cuales cursan en su despacho:

52001333300120170024000	JOSE FEDERICO SOLIS BATIOJA	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P.**
52001233300020190029400	ANA XIMENA FLOREZ LOPEZ	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P. RAM**
52001333300720180007201	MARDOQUEO ORTIZ ANGULO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P.**
52001333300720170030301	FLOR NELLY ORTEGA ORTEGA	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P. PABO**
52001233300020200002100	JAIRO NABAL QUIÑONES MUÑOZ	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P**
52001233300020190028800	CARMEN MARIA INCA GUERRERO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P. PABO**
52001233300020190056600	DELIA DAZA ROSALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P. PABO**
52001233300020190066700	CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P. RAM**
52001233300020190044200	ROSA MARIA CABEZAS MACUACE	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P.**
52001233300020190060400	NELLY FANNY BACCA MAVISOY	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P. RAM**
52001333300620160001101	MARIA ANGELA BURBANO SOLARTE	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	**M.P.**

De igual manera, los presentes se allegarán en físico, en cuanto sea posible y se supere las medidas de seguridad y restricciones por la emergencia sanitaria.

Cordialmente,

Sandy Jhoanna Leal Rodríguez
Profesional 4
Unidad Especial de Defensa Judicial FOMAG
Vicepresidencia Jurídica
Calle 72 No. 10-03
PBX 5945111 Ext. 2019
Bogotá, Colombia

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y/o privada. Solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Fiduprevisora S.A. y/o

elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. La respuesta a este correo con el envío de información personal, propia o de terceros, implica su aceptación inequívoca al eventual uso o tratamiento de datos personales que realice Fiduprevisora S.A conforme a las finalidades contenidas en la política de protección de datos personales publicada en www.fiduprevisora.com.co, en la cual se detallan entre otros aspectos, los derechos que le asisten como titular de información para realizar consultas, peticiones o reclamos relacionados con el tratamiento de información

Contestación 2019 - 0667 Carlos Alberto Realpe Erazo

A

Andrés Fernando Misnaza Burbano <andrewmisna1@gmail.com>
Vie 14/08/2020 3:05 PM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

y 1 usuarios más

Contestación 2019 - 0667 Carlos Realpe.pdf
453 KB

Poder 2019 - 0667 Carlos Realpe.pdf
159 KB

documentos soportes Alcalde Ipiales.pdf
4 MB

Comunicado-003-fomag.pdf
347 KB

Constancia Trámites prestaciones sociales.pdf
441 KB

Pensión CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO.pdf
344 KB

6 archivos adjuntos (6 MB)Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Señor Magistrado:
Dr. Edgar Guillermo Cabrera Ramos

Por medio del presente mensaje de datos, me permito manifestar que remito a su dirección electrónica contestación de demanda dentro de la causa de la referencia, para lo cual, en primera medida, informo que desde el correo de notificaciones judiciales del Municipio de Ipiales, se ha enviado el poder y los anexos del mismo, por lo que solicito sean tenidos en cuenta a fin de que me sea reconocida personeria para actuar dentro del asunto. Pese a lo anterior, en este correo replico los documentos a los que hago alusión.

Adicionalmente, envio los siguientes anexos:

- Antecedentes administrativos.
- Consulta de vinculacion del demandante al FOMAG.
- Prueba del trámite pensional impartido por la SEM.
- Constancia.
- Comunicado 003.

Atentamente

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
APODERADO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES.

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

Ipiales, Nariño, 13 de Agosto de 2020

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MP. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
E. S. D

REF: CONTESTACION DE DEMANDA
RAD: 2019 – 0667
DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE IPIALES

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado judicial del MUNICIPIO DE IPIALES, en el asunto de la referencia, con el debido respeto me dirijo a Ud., encontrándome en la debida oportunidad legal, con el fin de dar contestación de la demanda. Esta actuación encuentra sustento en los términos que se exponen a continuación.

RESPECTO DEL PODER

Señor Juez, previo a realizar las manifestaciones pertinentes para contestar la demanda, es necesario advertir que se me ha conferido poder para actuar dentro de la presente causa, haciendo uso del artículo 5 del Decreto 806 de 2020, emitido por el Presidente de la Republica de Colombia y con ocasión a la pandemia ocasionada por el covid-19. Con fundamento en lo anterior, manifiesto que desde la dirección electrónica de notificación judicial del Municipio de Ipiales, se emitió el correo que contiene el poder para la Litis de la referencia, cumpliendo con los protocolos establecidos en la norma que cito a continuación:

> *"Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser*

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

---

remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

Habiendo dicho lo anterior, es del caso manifestar que acepto el poder a mi conferido y solicito me sea reconocida personería para actuar, no sin antes manifestar que el poder mencionado proviene de la dirección electrónica notificacionesjudiciales@ipiales-narino.gov.co, con la antefirma de quien confiere poder, con todos los soportes que configuran su calidad, indicando mi dirección electrónica de notificación andrewmisna1@gmail.com.

i. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO

Se trata del Municipio de Ipiales – Nariño, entidad territorial, reconocida constitucional y legalmente, que goza de los siguientes atributos: personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, presupuestal y patrimonio propio, cuyo Alcalde y Representante Legal es el Dr. LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ, de quien he recibido poder para actuar dentro de la presente causa.

ii. POSICION FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

El Municipio de Ipiales – N., se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, pues al demandante no le asiste el derecho a reclamar los efectos derivados de un régimen pensional completamente diferente, es del caso manifestar que el docente demandante, se encuentra inmerso en el régimen del cual da cuenta la ley 100 de 1993 y no el decreto 71 de 1998, por cuanto su fecha de vinculación al FOMAG es 16 de enero de 2004. Por lo anterior, se solicita al operador judicial declare la improcedencia de las pretensiones esbozadas en la demanda.

iii. POSICION FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

Al hecho No. 1: Es cierto.

Al hecho No. 2: Es cierto.

Al hecho No. 3: Es cierto. Pero el régimen aplicable para el docente es el regulado por la ley 100 de 1993 en atención en primera medida a sus cotizaciones iniciales y de mayor tiempo de servicios a un régimen privado, sobre el cual, debe garantizarse el pronunciamiento judicial sobre el reconocimiento de ese tiempo, mismo suceso con los tiempos cotizados como OPS, toda vez que esta entidad territorial no tiene

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

la competencia para reconocer una pensión regulada por el régimen de transición, toda vez que en materia de educación, existe un régimen especial de pensión.

Al hecho No. 4: Es parcialmente cierto. En este punto es necesario aclarar que la competencia para el régimen pensional de los docentes, requiere de la integración de varias entidades, me explico. Inicialmente es la Secretaria de Educación Municipal, sobre quien recae la obligatoriedad de expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago de prestaciones sociales, pero no menos cierto, es que, es la Fiduprevisora S.A., quien se encarga de la revisión y aprobación del acto administrativo en mención. Así las cosas, tal y como se demuestra con los documentos que se allegan con esta actuación, el Municipio de Ipiales una vez recibe los documentos soportes y la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión del actor, remite los documentos hacia el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FIDUPREVISORA, con el fin de que se revise y apruebe el acto administrativo elaborado por la Secretaria de Educación Municipal, en el que se aprueba la prestación asciende a un valor equivalente al 75% del salario devengado durante el último año de servicio, en la fecha en que adquirió el status, condición que según el acto administrativo proyectado ocurrió el día 07/06/2014. De esta manera, el régimen pensional aplicado a la presente solicitud corresponde a la establecida en la ley 71 de 1998, pero a la espera de la revisión por parte de la entidad mencionada.

iv. EXCEPCIÓN PREVIA A LA DEMANDA

PRIMERA EXCEPCION: FALTA DE INTEGRACION DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

Resulta apenas evidente y necesario que el Juez de instancia, declare que dentro del proceso, también debe vincularse a COLPENSIONES, toda vez que es la entidad quien posee la mayor cantidad de cotización y aportes por parte del docente CARLOS ALBERTO REALPE, quien de acuerdo a la historia laboral, se certifica una cotización de 6143 días, frente a los 5340 efectuados en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, considerando que los tiempos cotizados para la Secretaria de Educación Departamental de Nariño como OPS requieren del pronunciamiento judicial para su construcción. Es así que la llamada a responder por la pensión del actor, es COLPENSIONES bajo el régimen reconocido por la ley 100 de 1993.

En ese entendido, el tiempo que el docente, requiere sumar a su tiempo global para el reconocimiento de la prestación social, proviene de un régimen completamente

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

diferente y así las cosas, es COLPENSIONES quien debe presentar las evidencias que lo eximan o confirmen el pago a través de aquella entidad.

Le recuerdo al Despacho que dentro de las pruebas allegadas en la demanda, se prevé una cotización de 6143 días a Colpensiones, mientras que al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tan solo 5340 y que los tiempos como OPS, el actor intenta sumarlos al FOMAG, pero sobre ellos no existe un pronunciamiento judicial para que estos sean reconocidos dentro de aquel tiempo de servicios.

Ahora bien, el demandante acude a una serie de pronunciamientos judiciales con el fin de saltarse el pronunciamiento judicial requerido, pero lo hace con sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional que no tienen que ver con el tema propuesto en el caso, como lo es la Pensión de Jubilación.

De esta forma manifiesto que la Sentencia del 30 de mayo de 2019 emitida por el Consejo de Estado dentro del proceso 2003 – 5801 (2615-15) versa sobre la pensión gracia, de aplicación completamente diferente al caso concreto.

Por otra parte, las otras sentencias aludidas dentro del precedente jurisprudencial, al menos las que se señala fueron emitidas por el Tribunal Administrativo de Nariño, hacen alusión no a la sumatoria de los tiempos requeridos para pensión, sino a una discusión de un contrato realidad con efectos pensionales, por lo que considero nuevamente el planteamiento que respecto de los tiempos certificados como OPS, no es válido su conteo dentro del trámite pensional del docente.

Adicionalmente, cabe mencionar que en virtud de lo estipulado en el artículo 10 del decreto 2709 de 1994, el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, estar a cargo de:

1. La última entidad de previsión a la que se pagaron los aportes y/o cotizaciones, siempre que estos se hayan efectuado al menos por seis años continuos o discontinuos.
2. La entidad a la que se haya sufragado el mayor tiempo de aportes y/o cotizaciones en caso que en la última entidad no se reúna un mínimo de seis años continuos o discontinuos de aportes y/o cotizaciones.

Y como quiera que en caso de que se declare procedente la pensión por aportes que reclama el demandante, la misma deberá especificar que la mayor participación la tiene COLPENSIONES, razón de fuerza para que se vincule dicha entidad, sobre la que se insiste, es la mayor responsable de la pensión del reclamante, bajo el régimen establecido en la ley 100 de 1993.

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

---

v. EXCEPCIÓN PERENTORIA A LA DEMANDA

PRIMERA EXCEPCION: INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN

La excepción va encaminada a edificar que el pronunciamiento frente al caso sub examine, no debe elaborarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que el Juez Contencioso tiene la facultad de enmarcar la acción presentada al medio de control adecuado para adoptar una decisión de fondo.

En el presente asunto, existe suficiente evidencia probatoria con el fin de demostrar la inexistencia de un acto ficto o presunto y que a pesar de existir el silencio administrativo negativo, por la falta de contestación, el acto administrativo no se encuentra decidido de fondo.

La Secretaria de Educación Municipal informó en dos oportunidades al actor y a su apoderado, que el ente territorial no tiene la competencia para decidir autónomamente las pretensiones incoadas, por el contrario, para que el acto administrativo de negativa o de reconocimiento tenga plena validez, debe contar con la integración de varias entidades, toda vez que para el trámite de las prestaciones sociales, por ley, es la Fiduprevisora, la encargada de la toma de decisiones de fondo, pero es el ente territorial quien debe proyectar todos los actos administrativos para efectos de la revisión de estos, entonces, el trámite depende de dos instituciones completamente diferentes a fin de adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Ahora bien, dentro del plenario se aportó un derecho de petición presentado desde el mes de Febrero de 2019 a la Secretaria de Educación Municipal de Ipiales, quien en efecto, elevo la petición frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A., sin que hasta el momento exista un pronunciamiento de fondo, todo por cuanto, frente a la expedición de la sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado de fecha 25 de abril de 2019, existió la necesidad de unificar criterios de aplicación de factores salariales, situación que al interior de la Fiduciaria se prolongó hasta febrero del año 2020. (Se anexa constancia de aquel trámite por parte de la Profesional Universitaria de la Secretaria de Educación Municipal de Ipiales)

Resulta que apenas en el mes de Febrero de 2020, se reinició el trámite para efectos del reconocimiento de prestaciones sociales (de acuerdo a certificación anexa) y por lo tanto, la acción a impetrar es la de protección de un derecho fundamental

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

como lo es la petición y en subsidio el del mínimo vital, considerando que la Secretaria de Educación informó al actor, que su petición de pensión ya se encontraba en trámite.

Así las cosas, y pese a considerar que la acción de tutela no tiene como finalidad el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, si lo es por vía del perjuicio irremediable y en aras de establecer la falta de contestación del derecho de petición, mal acusa el peticionario de encontrarnos frente a un acto ficto o presunto, lo que sucede es que la decisión de su caso, se debió al cambio jurisprudencial respecto del trámite a impartir.

SEGUNDA EXCEPCIÓN: FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA

En el mismo sentido, es aplicable en el presente asunto, la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la vinculación del docente al FOMAG se efectuó el 16 de enero de 2004, hasta la fecha, siendo el periodo de cotización más alta, el realizado frente a COLPENSIONES, quien en la actualidad es la administradora llamada a responder por las pretensiones del demandante.

Lo anterior se encuentra respaldado por el artículo 81 de la ley 812 de 2003, toda vez que en aquella norma, se encuentra que los docentes que fueron vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, (fecha de entrada en vigencia de la norma) y que hayan reunido los requisitos para su pensión, continuaran vinculados a aquel, pero aquellos que se vincularon al FOMAG con posterioridad, tendrán los derechos pensionales del régimen de prima media con establecido en la ley 100 de 1993.

En ese sentido, la aplicación del régimen pensional implica que se vincule a COLPENSIONES a la presente actuación y que sea esta quien responda por la prestación del docente demandante.

TERCERA EXCEPCIÓN: LA INNOMINADA

Cualquier causal que se presentare en el asunto procesal y que no se invocare por el suscrito y que tenga la virtud de enervar las suplicas de la demanda, la invoco en favor de la entidad que represento.

vi. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

Para el análisis del caso se presentan los siguientes argumentos:

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

1. El demandante nació el 6 de junio de 1954 en el Municipio de Arboleda – Berruecos en el Departamento de Nariño.
2. Empieza su cotización a COLPENSIONES desde un empleo privado el día 1 de septiembre de 1975, es decir, cuando contaba con 21 años de edad. El vínculo se mantuvo hasta el 31 de agosto de 1996, cuando el actor contaba con 42 años de edad y contaba con 877 semanas de cotización.
3. Se vinculó a la Secretaria de Educación Departamental de Nariño – Departamento de Nariño mediante contratos de prestación de servicios durante aproximadamente 5 años. Esta relación debe probarse mediante pronunciamiento judicial que reconozca que los tiempos establecidos sirven para el conteo de los términos pensionales.
4. El docente, se vinculó al FOMAG el 16 de enero de 2004, cuando asumió el cargo como docente en propiedad, fecha de la cual se derivan sus derechos. En la fecha de vinculación, el docente contaba con una edad de 50 años, por lo que no alcanza a contar con los requisitos exigidos por el régimen de transición y por consiguiente, le es aplicable el régimen de prima media del que trata la ley 100 de 1993.

Una vez previstos los antecedentes, es necesario esbozar que el docente tiene cotizaciones para su pensión a dos regímenes pensionales completamente diferentes.

Por una parte, reclama los efectos derivados de la ley 71 de 1988, mediante el cual se establece legalmente la pensión por aportes, mismo que en su artículo 7 requiere lo siguiente:

> ***"Artículo 7 .-*** *Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer".*

Ahora bien, a la expedición de la ley 100 de 1993, que establece el régimen general de pensiones, le sigue la expedición de la ley 812 de 2003, que en su artículo 81 prevé:

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

> ***ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES.*** *El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.*
>
> *Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.*
>
> *Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos.*
>
> *El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.*

En estricto sentido de aplicación de la norma, sin lugar a dudas el docente cumplía con el periodo de tiempo de servicios, pero no con la edad, toda vez que a la fecha de su expedición, contaba con 50 años, lo que inmediatamente lo ubica en el campo de aplicación del régimen regulado por la ley 100 de 1993, una vez cumpla el requisito de la edad.

Ahora bien, dentro del plenario, se encuentra acreditada la responsabilidad por parte de COLPENSIONES al momento de decidir sobre la procedencia y el monto de la mesada pensional, si es que aquella procede, toda vez que verificada la historia laboral y las certificaciones de tiempo de servicio y las de cotización, se encuentra con que aquella entidad recibió el mayor número de semanas de cotización, por lo que, por una parte, son los llamados a responder por tal acreencia y en segundo lugar y en caso de no ser procedente tal situación, deben responder por los aportes respectivos a la pensión a que tiene derecho el demandante.

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

Ahora bien, tal y como se mencionó con anterioridad, la Secretaria de Educación Municipal de Ipiales, es una entidad territorial certificada para la prestación del servicio educativo en el Municipio a partir del año 2010, entonces, a partir de esa fecha, la Secretaria de Educación Departamental de Nariño entrego las hojas de vida e historiales de los docentes, tal y como reposaban en esa Entidad.

Por otra parte, es de aclarar que la competencia de los entes territoriales no es absoluta, puesto que en el caso de análisis, la FIDUPREVISORA es la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y quien por disposición de la ley 962 de 2005, Decreto 2831 de 2005 y demás normas que complementan y son concordantes con tales normas.

Entonces, el panorama del trámite solicitado es el siguiente:

Le corresponde en primera medida a la Secretaria de Educación Municipal realizar el acto administrativo de trámite prestacional de los educadores que se encuentran vinculados.

El acto administrativo que expide la respectiva entidad territorial, se envía con todos los anexos a la fiduprevisora, entidad que se encarga de la revisión y posterior aprobación o negación del trámite solicitado por el docente y se señalan las observaciones y/o correcciones del proyecto de acto administrativo.

Es por lo anterior, que la pretensión solo podrá proceder de haberse cumplido con los requisitos que cada uno de los regímenes exige y por lo tanto, si bien es cierto, la administración municipal es quien expide el acto administrativo, es la FIDUPREVISORA quien se encarga de verificar la procedencia o no del derecho reclamado, verificando en cada caso concreto los factores requeridos.

En este caso, se insiste que el docente, apenas tuvo vinculación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a partir del 16 de enero de 2004, fecha en la que ya se encontraba vigente la ley 100 de 1993 y la ley 812 de 2003, razón por la cual, sin lugar a dudas, el régimen pensional aplicable es el de prima media con prestación definida al que se refiere la ley 100 mencionada.

Con respecto a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-402 de 2013, argumenta lo siguiente:

> *"la determinación legal del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es un tópico en el que, conforme a las disposiciones de la carta Política, concurre el ejercicio de las competencias del Congreso y el Gobierno*

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

Nacional. En efecto, el artículo 150-19 CP. Establece dentro de las funciones del legislativo, la de dictar normas generales – determinadas por la doctrina como leyes marco -, mediante las cuales se establezca los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, para, entre otras materias, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, a la vez que regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. En este último caso, la Carta Política es expresa en indicar que el ejercicio de las funciones legislativas, "en lo pertinente a prestaciones sociales, son indelegable en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogarselas" (Art. 150-19 literales e) y f). Las citadas normas generales fueron adoptadas por el Congreso mediante la ley 4 de 1992. A partir de estas previsiones, la jurisprudencia ha contemplado que corresponde a la cláusula general de competencia legislativa la fijación de esas pautas generales del régimen salarial de los servidores públicos. A su vez, existe un mandato constitucional expreso en el sentido que la determinación concreta de dichos regímenes, una vez fijado el marco general de regulación, es una potestad adscrita al Gobierno Nacional.
(…)

A este respecto debe resaltarse que el grado de autonomía que la constitución reconoce a las entidades territoriales no tiene carácter absoluto, *sino que, por expreso mandato superior, la gestión de sus intereses se ejerce dentro de los límites de la Constitución y la ley (Art. 287 C.P) En igual sentido, esa comprensión de la autonomía es corolario de lo previsto en el artículo 388 Superior, que establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley. En ese sentido, la presunta autonomía entre las disposiciones de la Carta Política que reconocen esa autonomía y aquellas que confieren al Congreso y al Ejecutivo la potestad de definir el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, es apenas aparente.*

(…)

Teniendo en cuenta que los regímenes de seguridad social son complejos e incluyen diversos tipos de prestaciones, en determinados aspectos uno de los regímenes puede ser más beneficioso que el otro y en otros puntos puede suceder todo lo contrario, por lo cual, en principio no es procedente un examen de aspectos aislados de una prestación entre dos regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda constatar en un

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

> *tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del mismo régimen. Por ello, las personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a estos, sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general. En efecto, no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial por ser este globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulación general sea más benéfica".*

A su vez, la Corte Constitucional en Sentencia T – 090 de 2018, explicó:

> *7.4 Estudio de la procedencia de la pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988)*
>
> *Entonces, procede la Corte a analizar el reconocimiento de pensión de jubilación por aportes determinada en la Ley 71 de 1988 en atención a que constituye la pretensión principal del actor en el presente trámite. Los requisitos exigidos bajo esta norma se sintetizan en i) 60 años de edad para hombres y 55 para mujeres y, ii) 20 años de servicio sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social y el Instituto de Seguros Sociales.*
>
> *Sin embargo, se advierte que las cotizaciones efectuadas por parte del demandante en el régimen docente no corresponde a ninguna entidad de previsión social, por lo que no es acreedor de la pensión de jubilación por aportes. De ahí que respecto a este punto, no se advierta transgresión de los derechos del actor por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla.*

Por lo anterior, si bien el docente actualmente cumple con los requisitos para acceder a una mesada pensional o bono, cual sea el caso, este reconocimiento debe ser limitado a la prosperidad de la misma pero con fundamento en el régimen general de pensiones establecido en la ley 100 de 1993, en concordancia con la ley 812 de 2003 y a su vez en consideración a lo establecido en la ley 797 de 2003, por lo que deben negarse las pretensiones de la demanda.

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

---

vii. PRUEBAS

DOCUMENTALES

1. Allego a la presente actuación, antecedentes administrativos del señor CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO.

   OBJETO: Acreditar en circunstancias de tiempo, modo y lugar, la época en la que el demandante cumplió los requisitos exigidos para la pensión de acuerdo a la ley 100 de 1993. De otra parte, cumplir con el aporte de los antecedentes administrativos.

2. Anexo como prueba dentro del presente trámite, carpeta de trámite de la pensión del señor CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO.

   OBJETO: Acreditar el cumplimiento por parte del Municipio de Ipiales, con el trámite de los documentos hacia la FIDUPREVISORA.

3. Consulta de vinculación del Docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

   OBJETO: Acreditar la fecha de vinculación del docente al FOMAG y en ese sentido, el régimen pensional aplicable al mismo.

4. Constancia expedida por la Profesional Universitaria de la Oficina de Prestaciones Sociales de la Secretaria de Educación Municipal de Ipiales, respecto de los trámites prestacionales efectuados durante el año 2019 y 2020 en la entidad territorial.

   OBJETO: Acreditar que la tardanza en la contestación del derecho de petición obedece al cambio de postura jurisprudencial para el reconocimiento de estas prestaciones y no a la voluntad de la administración municipal.

5. Comunicado 003 de febrero de 2020.

viii. ANEXOS

1. Poder para actuar con nota de presentación personal.
2. Credencial electoral del señor Alcalde en copia autentica.
3. Acta de posesión del señor Alcalde en copia autentica.

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
Abogado Especialista – Universidad Cooperativa de Colombia
Transversal 4 No. 24 B 07 Barrio Chambu
Cel. 3006206739, Dirección Electrónica: andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com
Ipiales – Nariño

4. Certificado de ejercicio de funciones del señor Alcalde, emitido por la Subsecretaria de Talento Humano del Municipio de Ipiales.
5. Los documentos que están relacionados en el acápite de pruebas como documentales que se aportan y/o aportarán.

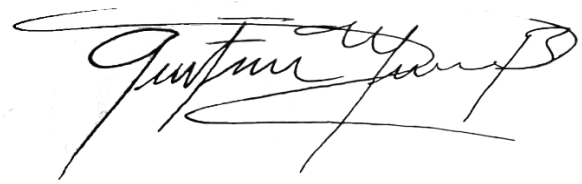
ix. NOTIFICACIONES

La parte demandante y su apoderada judicial las recibirán en la dirección indicada en la demanda.

La entidad demandada, Municipio de Ipiales, las recibirá en la sede de la entidad, en la Alcaldía Municipal de Ipiales, en el Despacho del Señor Alcalde, en el correo electrónico notificacionesjudiciales@ipiales-narino.gov.co

Las personales que me corresponden las recibiré a través de la secretaria de su Despacho y/o en la dirección Calle 24 B1 No. 3 – 36 Barrio Chambu en la ciudad de Ipiales, celular 300 6206739 y correo electrónico andresmisnaza1@hotmail.com – andrewmisna1@gmail.com

Del señor Juez, atentamente,



ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
CC No. 1.085.897.223 de Ipiales
TP No. 179.607 del C.S.J

Ipiales, Nariño, 13 de Agosto de 2020

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
MP. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
E. S. D

REF:	NYR
RAD:	2019 – 0667
DEMANDANTE:	CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE IPIALES

LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ, mayor de edad, residente y domiciliado en el Municipio de Ipiales, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Alcalde del Municipio de Ipiales y como tal, Representante legal del Municipio de Ipiales – Nariño, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al abogado ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 179.607 del C.S.J.,, para que asuma la defensa de esta Entidad en el asunto citado en la referencia y actúe como tal hasta la culminación del mismo.

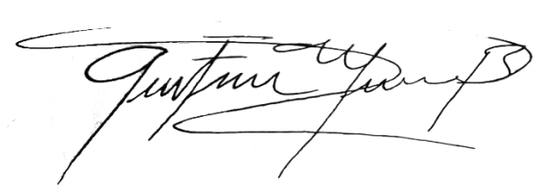
En ejercicio del poder conferido, mi apoderado queda facultado para presentar y proponer excepciones, recursos ordinarios y extraordinarios, aportar y controvertir pruebas, asistir a las audiencias en especial la de conciliación prejudicial y presentar acta de comité de conciliación, recibir, conciliar, transigir, renunciar, reasumir, sustituir el presente poder, notificarse de los actos y demás actuaciones procesales y en general para todas aquellas facultades necesarias para ejercer mi derecho de defensa.

Sírvase Sr. Magistrado reconocer personería para actuar a mi apoderado en los términos indicados para el presente poder, para lo cual expreso que el correo de notificación judicial de mi apoderado es andrewmisna1@gmail.com – andresmisnaza1@hotmail.com

Atentamente,

LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ
CC No. 13.007.847 de Ipiales
Alcalde del Municipio de Ipiales – Nariño

Acepto,



ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO
CC No. 1.085.897.223 de Ipiales
TP No. 179.607 del C.S.J

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE IPIALES

Nit. 800099095-7
SECRETARIA GENERAL
SUBSECRETARIA TALENTO HUMANO

1041-13-01 014

LA SUBSECRETARIA TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que una vez examinada la documentación existente en la Subsecretaria de Talento Humano del Municipio de Ipiales, se encontró documentos que dan fe de que el señor, **LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.007.847, labora en la Administración Municipal en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE IPIALES**, elegido mediante voto popular para el periodo constitucional comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, según Acta de posesión de la notaria primera del circuito Ipiales .

FUNCIONES ESENCIALES

CON CARÁCTER GENERAL:

1. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la Constitución, las Leyes, los Decretos, las Ordenanzas de la Asamblea Departamental y los Acuerdos del Concejo Municipal.
2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes del Presidente de la Republica y el Gobernador del Departamento de Nariño, en su calidad de primera autoridad de policía del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta por conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudiciaimente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su responsabilidad.
4. Ejercer la dirección y coordinación de las actividades jurídicas del Municipio y supervisar su efectividad y observancia de sus recomendaciones. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y observancia de sus recomendaciones.
5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y observancia de sus recomendaciones.

Con estricta sujeción a lo previsto por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del Alcalde las siguientes:

Escaneado con

A. EN RELACIÓN CON EL CONCEJO MUNICIPAL:

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.
3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos.
4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y los demás de carácter particular que el gobernador le solicite.
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el Concejo esté en receso.

B. EN RELACIÓN CON EL ORDEN PÚBLICO:

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del Gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
   a. Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
   b. Decretar el toque de queda;
   c. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
   d. Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la Ley,
   e. Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.

Escaneado con

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural.
6. Presentar proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, multas o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía, para controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.

Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los numerales a, b y c se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016.

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 52 de 1990, los alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Gobierno, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo.

C. EN RELACIÓN CON LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO Y LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES:

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación.
2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción.
4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e intervención.

D. EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Escaneado con

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos.
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.
6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Civil.
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración.
8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales.
9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedimiento sumario administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos correspondientes. La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se gobiernan por lo prescrito en la ley
10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia.
11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.
12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa.
13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio.
14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos administrativos y establecimientos públicos.
15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los Departamentos o municipios.
16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las autoridades sanitarias.

Escaneado con

3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial contribuir en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.
5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.
6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros electorales o del SISBEN, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal.

G. OTROS

Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.

Dada en Ipiales, a los (20) días el mes de enero de dos mil veinte (2020)

JUAN CARLOS BASTIDAS RAMIREZ
Subsecretario Talento Humano

Copia: Archivo Subsecretaria Talento Humano
Proyectó: Oscar Andrés Portilla Ramirez.

Escaneado con

Superior de la Administración Pública ESAP.

Paz y Salvo Municipal Expedido por la tesorería del Municipio de IPIALES (Nariño).

Formulario Único hoja de vida de la función pública con anexos.

Formulario Declaración de Bienes y Rentas Persona! natural.

Declaración de renta.

Fotocopia del RUT.

Declaración extraproceso rendida ante notario de que no se encuentra en situación de deudor moroso con el Estado o en su defecto haber suscrito acuerdo vigente.

Certificado Afiliación a Salud.

A continuación y una vez verificada la documentación exigida por la norma e identificado plenamente el alcalde electo por el Notario Primero del Circulo de Ipiales se procedió a posesionarlo, exhortándolo a que repita el juramento establecido en el artículo 24 de la ley 136 de 1994 en los siguientes términos: JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS DE... Na siendo otro el motivo de la presente diligencia, se firma el acto por los que intervinieron una vez leída y aprobada.

El Posesionado.

LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ

El Notario Primero del Circulo de Ipiales

Escaneado con

[illegible]

CERTIFICA:

Que el señor [illegible] identificado con C.C. No. [illegible]

Fue elegido ALCALDE por el Municipio de IPIALES (NARIÑO)

para el período constitucional 2020 - 2023

Por la COALICIÓN "HABLAMOS CON HECHOS"

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en IPIALES (NARIÑO),

a [illegible] (2) días del mes de noviembre de 2019

GERMAN EDUARDO CASTILLO CERON
Comisión Escrutadora Municipal

MARÍA VICTORIA CASCRDO CALDERON
Comisión Escrutadora Municipal

LUIS ALEJANDRO ALEMÁN PEÑARANDA
Secretario Comisión Escrutadora Municipal

Colombia se Respeta en Democracia
Registraduría del Estado Civil

ELECCIONES
2019

Escaneado con

fomag

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20200170687441**
Fecha: **18-02-2020**

COMUNICADO N° 003-2020

PARA: **SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS**

DE: **FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**

FECHA: **18 DE FEBRERO DE 2020**

ASUNTO: **APLICACIÓN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO SUJ-014-CE-S2-2019**

Debido a las solicitudes de concepto elevadas por las Secretarías de Educación en relación con la aplicación de la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, el FOMAG efectúa algunas precisiones y aclaraciones sobre los siguientes temas:

A. FACTORES PARA LIQUIDAR PENSIONES

La Sentencia de Unificación establece los factores con los que se deben liquidar las pensiones de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dependiendo de su fecha de vinculación, así:

> *"(…) 72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:*
>
> *a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
La educación es de todos Mineducación

orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. (...)".

En ese orden de ideas, para los docentes vinculados antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación del ingreso base de liquidación de pensión son los siguientes (Artículo 1° de la Ley 62 de 1985):

- asignación básica
- gastos de representación
- primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
- dominicales y feriados
- horas extras
- bonificación por servicios prestados
- trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio

Por otra parte, para los docentes vinculados después de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación del ingreso base de liquidación de pensión son los siguientes (Decreto 1158 de 1994):

- asignación básica mensual
- gastos de representación
- prima técnica, cuando sea factor de salario
- primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario
- remuneración por trabajo dominical o festivo
- bonificación por servicios prestados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna

Ahora bien, teniendo en cuenta las consultas elevadas por las Secretarías de Educación en relación con la inclusión de factores de sobresueldo, bonificación mensual y bonificación pedagógica, el Ministerio de Educación Nacional elevó consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, con el fin de determinar su obligatoriedad para efectos de la liquidación de las pensiones de los docentes.

Al respecto, la DAFP mediante concepto No. 20194000386161 del 12 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

"(...)

1. <u>La Asignación Adicional para Directivos Docentes:</u>

Las asignaciones Adicionales para directivos docentes, fueron creada en los Decreto 633 y 634 de 2007, para los directivos docentes regidos por los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002.

Las Asignaciones Adicionales consisten en 1) un reconocimiento adicional por desempeñar cargos de directivos docentes, ji) un reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única, y iii) un reconocimiento adicional por gestión.

Actualmente, estos beneficios adicionales están consagrados en el Decreto 1016 de 2019, para los docentes regulados por el Decreto ley 2277 de 1979, el cual, en artículo 50, establece las condiciones para el reconocimiento y pago de la asignación adicional, indicando que las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el Decreto 691 de 1994, modificado por el Decreto 1158 de 1994, para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por su parte, estos beneficios adicionales, para los docentes regulados por el Decreto ley 2277 de 1979, están consagrados actualmente en el Decreto 1017 de 2019, que contempla asignaciones adicionales para : i) educadores no escalonados, ii) asignación básica mensual de Instructor de INEM o ITA, iii) asignación adicional para directivos docentes, iv) reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única, v) reconocimiento adicional por gestión, vi) Asignación adicional para Supervisor o Inspector Nacional, Director de Núcleo Educativo y Vicerrector y vii) asignación adicional para docentes de preescolar.

Así mismo, el literal c) del artículo 9 del Decreto 1017 de 2019, dentro de las condiciones para el reconocimiento de la asignación adicional, consagra que las asignaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En igual sentido, el Decreto 1018 de 2019, para directivos docentes etnoeducadores, consagra una asignación adicional para i) directivos docentes, u) reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única y reconocimiento adicional por gestión.

El literal c) del artículo 6 del citado decreto, dentro de las condiciones para el reconocimiento de la asignación adicional, establece que las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por lo tanto, las asignaciones adicionales a que se refieren los Decretos 1016, 1017 y 1018 de 2019, constituyen factor salarial, para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2. ***Bonificación mensual:***

El Decreto 1566 de 2014, creó para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por los Decretos Ley 2277 de 1979, 1278 de 2002 o el Decreto 804 de 1995 y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del 10 de junio de 2014 y hasta 31 diciembre de 2014, mientras el servidor público permanezca en el servicio.

El inciso segundo del artículo 10del citado decretó, consagraba que la bonificación que se crea mediante el mencionado Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Así mismo, señalaba que el valor de la bonificación se tendrá en cuanta para liquidar el incremento salarial de 2015.

Para el año 2015, la bonificación mensual creada en el Decreto 1566 de 2014, se incorporó a la asignación básica mensual señalada en los decretos 1116, 1060 y 1092 de 2015 y se crea la bonificación mensual para el año 2015 en el Decreto 1272.

Para el año 2016, la bonificación mensual creada en el Decreto 1272 de 2015, se incorporó a las asignaciones básicas fijadas en los decretos 120, 122 y 121 de 2016 y se crea una bonificación mensual en el Decreto 123 de 2016.

Para el año 2017, la bonificación mensual creada en el Decreto 123 de 2016, se incorporó a las asignaciones básicas fijadas en los decretos 980, 981 y 982 de 2017 y se crea una bonificación mensual en el Decreto 983 de 2017.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para el año 2018, la bonificación mensual creada en el Decreto 983 de 2017, se incorporó a las asignaciones básicas fijadas en los decretos 316, 317 y 319 de 2018 y crea una bonificación mensual en el Decreto 322 de 2018.

Para el año 2019, la bonificación mensual creada en el Decreto 322 de 2018, se incorporó a las asignaciones básicas fijadas en los decretos 1016, 1017 y 1018 de 2019 y crea una bonificación mensual en el Decreto de 2019.

En todos los decretos antes señalados se reitera que la bonificación mensual constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Se precisa que esta bonificación se crea fruto de la concertación y para dar cumplimiento a una nivelación salarial acordada y que no resultaría lógico que el año que está creada por separado no constituya factor para liquidar la seguridad social y al año siguiente que hace parte de la asignación básica si lo constituya.

3. ***Bonificación Pedagógica:***

La Bonificación Pedagógica fue en el Decreto 2354 de 2018, para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación y constituye factor salarial para todos los efectos legales, entre ellos para liquidar los aportes patronales y del afiliado para la seguridad social.

Es de anotar que los anteriores beneficios fueron creados por Gobierno Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias; estas últimas previstas en la Ley 4a de 1992, que señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (incluido el personal docente), de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales.

Ahora bien, la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, a los cuales hace referencia la Sentencia de Unificación del Consejo de Estada SUJ-014-CE-52-2019, son anteriores a las normas salariales que crearon las "asignaciones adicionales", la "bonificación mensual" y la "bonificación pedagógica", como elemento o factor de salario para todos los efectos legales, incluido los pagos al sistema de seguridad social por concepto de aportes pensionales y de salud; lo cual explica que tales beneficios no hayan sido considerados ni incluidos expresamente en el texto de la anotada sentencia. (...)"

Con todo lo anterior, la DAFP concluyó que "*la pensión se debe liquidar, teniendo en cuenta únicamente los aportes sobre los cuales cotizó el beneficiario*".

En ese orden de ideas, en el evento en que los proyectos de acto administrativo contengan factores diferentes a los enunciados, FOMAG procederá a negar la aprobación del acto y lo devolverá para que sea ajustado conforme a lo ordenado por la Sentencia de Unificación y lo indicado en el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.

B. EFECTOS RETROSPECTIVOS DE LA SENTENCIA

En relación sobre los casos a los que se debe aplicar la Sentencia de Unificación citada, el mismo Consejo de Estado establece que tendrá efectos retrospectivos así:

> *"(...) 74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación, se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente, disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. (...)".*

Orden que fue reiterada en la parte resolutiva del fallo que dispuso:

> *"Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia."*

En ese orden de ideas, todas las solicitudes de reconocimiento de pensión que cuenten con acto administrativo expedido por la Secretaría de Educación que no haya sido notificado y ejecutoriado antes del 25 de abril de 2019 deben contener únicamente los factores enunciados en la Sentencia de Unificación por lo que en el evento en que se reciba un acto administrativo con factores adicionales será devuelto por el FOMAG para que sea ajustado conforme a lo ordenado por el Consejo de Estado.

Todos aquellos actos administrativos ejecutoriados con anterioridad al 25 de abril de 2019 serán tramitados en la medida que su contenido concuerde con lo incluido en la hoja de revisión proferida por el FOMAG.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

fomag

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20200170687441**
Fecha: **18-02-2020**

Por otra parte, todas las solicitudes de NVEZ deben tener en cuenta lo dispuesto por la Sentencia de Unificación, así se haya aprobado previamente por el FOMAG la inclusión de factores diferentes a los señalados en ella.

En cuanto a las consultas sobre la aplicación a quienes causaron el derecho con anterioridad a la fecha de la Sentencia de Unificación, el FOMAG aclara que conforme lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo, mientras no haya habido pronunciamiento administrativo o judicial en firme antes del 25 de abril de 2019 se debe liquidar con base en los factores señalados en la sentencia, así el derecho a la pensión se haya causado con anterioridad.

Adicionalmente, en el evento en que se solicite una reliquidación de pensión, la misma se revisará teniendo en cuenta los criterios de la Sentencia de Unificación.

En cuanto a los fallos judiciales, los ejecutoriados con anterioridad al 25 de abril de 2019 deben ser liquidados de acuerdo con lo expresado en su parte resolutiva. Sin embargo, si la Secretaría de Educación llegare a conocer de un fallo posterior a dicha fecha proferido por cualquier Juez o Tribunal Administrativo y habiendo liquidado el IBL con factores adicionales a los señalados en la Sentencia de Unificación, debe informarse de dicha situación al FOMAG con el fin de interponer los recursos ordinarios o extraordinarios procedentes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordial saludo,

SANDRA MARÍA DEL CASTILLO ABELLA
Directora de Prestaciones Económicas

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE IPIALES

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
Nit. 800099095-7

CONSTANCIA

La suscrita profesional Universitaria de la Oficina de Prestaciones Sociales SEM-Ipiales, hace constar que dentro de los trámites relacionados con reconocimiento y pago de pensión de jubilación, pensión de invalidez, reliquidación pensional, ajuste pensional y cumplimiento de fallos judiciales, que fueron radicados ante la Secretaría de Educación Municipal de Ipiales en la vigencia 2019, los cuales fueron remitidos para sustanciación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de Fiduciaria LA FIDUPREVISORA S.A., se dilató el trámite normal de estas prestaciones debido a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado de fecha 25 de abril de 2019, por lo cual existió la necesidad de unificar criterios de aplicación de factores salariales y por otra parte se presentó sitaución de cambio interno de personal de sustanciación en dicha entidad, según información conocida a través de los Comités Regionales de Prestaciones Sociales y Salud, efectuados por las 4 entidades territoriales certificadas como son: SED Nariño, SED Tumaco, SEM Pasto y SEM Ipiales.

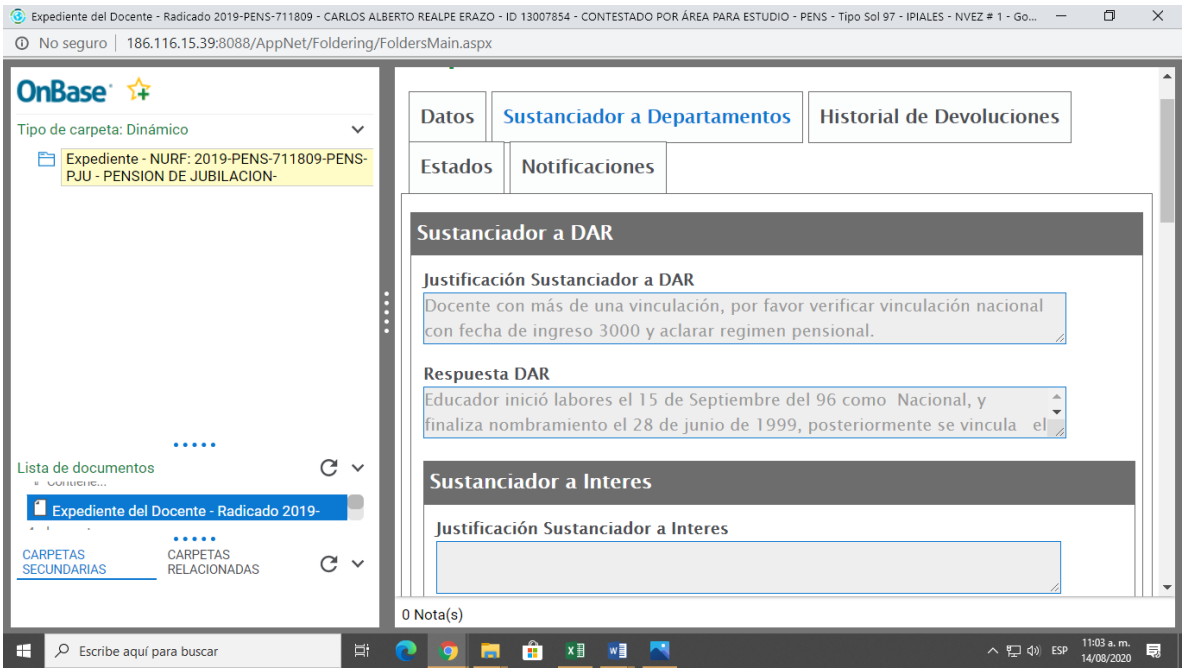
De lo antes expresado, una vez la entidad Fiduprevisora unificó los criterios para aplicación de la sentencia de unificación antes mencionada se emitió en el mes de febrero de 2020, el comunicado No.003 de 2020, en el cual el FOMAG efectúa la precisión y aclaración de los temas relacionados con la aplicación de factores salariales para reconocimiento de las prestaciones que tienen como fin el reconocimiento de pensión de jubilación ordinaria, reliquidación pensional y ajustes.

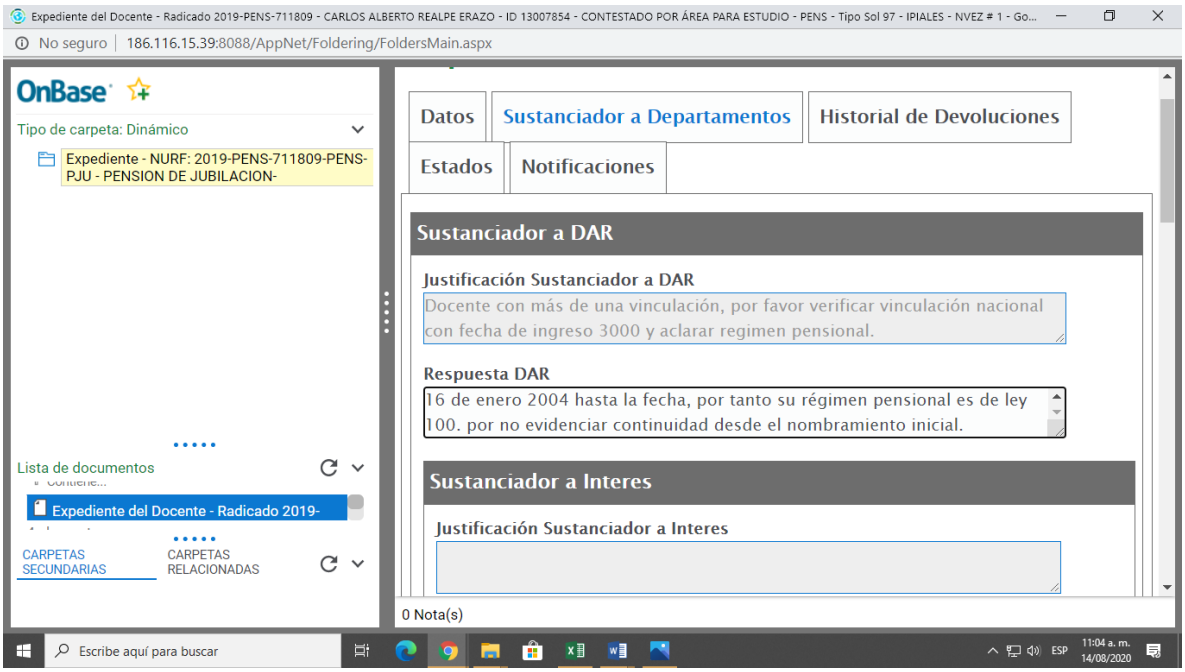
Por lo antes expresado, se inició con el normal trámite de sustanciación en FIDUPREVISORA a partir del mes de marzo y de manera gradual, se está recibiendo los estudios de aprobación o negación según sea el caso.

En constancia se firma en Ipiales, a los catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020).

JANETH PATRICIA TOVAR QUIROZ
Profesional Universitario Prestaciones Sociales SEM-Ipiales (E)

Elaboró y Revisó: Janeth Patricia Tovar Quiroz
Aprobó: Janeth Patricia Tovar Quiroz


Expediente del Docente - Radicado 2019-PENS-711809 - CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO - ID 13007854 - CONTESTADO POR ÁREA PARA ESTUDIO - PENS - Tipo Sol 97 - IPIALES - NVEZ # 1 - Go...
No seguro | 186.116.15.39:8088/AppNet/Foldering/FoldersMain.aspx
OnBase
Tipo de carpeta: Dinámico
Expediente - NURF: 2019-PENS-711809-PENS-PJU - PENSION DE JUBILACION-
Lista de documentos
Expediente del Docente - Radicado 2019-
CARPETAS SECUNDARIAS
CARPETAS RELACIONADAS
Datos
Sustanciador a Departamentos
Historial de Devoluciones
Estados
Notificaciones
Sustanciador a DAR
Justificación Sustanciador a DAR
Docente con más de una vinculación, por favor verificar vinculación nacional con fecha de ingreso 3000 y aclarar regimen pensional.
Respuesta DAR
Educador inició labores el 15 de Septiembre del 96 como Nacional, y finaliza nombramiento el 28 de junio de 1999, posteriormente se vincula el
Sustanciador a Interes
Justificación Sustanciador a Interes
0 Nota(s)
Escribe aquí para buscar
ESP
11:03 a. m.
14/08/2020


Expediente del Docente - Radicado 2019-PENS-711809 - CARLOS ALBERTO REALPE ERAZO - ID 13007854 - CONTESTADO POR ÁREA PARA ESTUDIO - PENS - Tipo Sol 97 - IPIALES - NVEZ # 1 - Go...
No seguro | 186.116.15.39:8088/AppNet/Foldering/FoldersMain.aspx
OnBase
Tipo de carpeta: Dinámico
Expediente - NURF: 2019-PENS-711809-PENS-PJU - PENSION DE JUBILACION-
Lista de documentos
Expediente del Docente - Radicado 2019-
CARPETAS SECUNDARIAS
CARPETAS RELACIONADAS
Datos
Sustanciador a Departamentos
Historial de Devoluciones
Estados
Notificaciones
Sustanciador a DAR
Justificación Sustanciador a DAR
Docente con más de una vinculación, por favor verificar vinculación nacional con fecha de ingreso 3000 y aclarar regimen pensional.
Respuesta DAR
16 de enero 2004 hasta la fecha, por tanto su régimen pensional es de ley 100. por no evidenciar continuidad desde el nombramiento inicial.
Sustanciador a Interes
Justificación Sustanciador a Interes
0 Nota(s)
Escribe aquí para buscar
ESP
11:04 a. m.
14/08/2020

RADICADO 2020-00042

CE

Carmen Amelia Escobar <caescobar@procuraduria.gov.co>
Jue 13/08/2020 5:59 PM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

y 1 usuarios más
CC:

- Carmen Amelia Escobar <caescobar@procuraduria.gov.co>

y 1 usuarios más
CARMEN AMELIA ESCOBAR compartió la carpeta _ANEXOS_ contigo..eml
34 KB

CARMEN AMELIA ESCOBAR compartió la carpeta _CUADERNOS_ contigo..eml
34 KB

CERTIFICACIÓN LIBARDO MARTINEZ GOMEZ.pdf
254 KB

Contestacion demanda. 2020-00042 (1).docx
584 KB

PODER.pdf
254 KB

5 archivos adjuntos (1 MB)Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Cordial saludo:

Adjunto remito respuesta a demanda

RADICADO: 2020-00042
PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: LIBARDO MARTINEZ GOMEZ
DEMANDADO: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Atentamente,

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE PASTO

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Dr. Edgar Guillermo Cabrera Ramos
E. S. D.

REFERENCIA	**:**	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
RADICACIÓN	**:**	**52001233300020200004200 (2020 – 00042)**
DEMANDANTE	**:**	**LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ**
DEMANDADO	**:**	**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

CARMEN AMELIA ESCOBAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.232.527 de Iles – Nar. y portadora de la Tarjeta Profesional No. 217.330 del C.S.J., actuando como apoderada judicial de la Procuraduría General de la Nación en virtud de poder a mi otorgado por el Jefe de la Oficina Jurídica, por medio del presente escrito, estando dentro de la oportunidad legal, me dirijo a Usted para dar **contestación a la demanda** de la referencia en los siguientes términos:

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

*"**1)** Se declare la nulidad del fallo disciplinario sancionatorio de primera instancia No. 021 proferido el 26 de septiembre de 2018 por la Procuraduría Provincial de Pasto dentro del proceso con radicado No. E-2013-124486 // IUC-D-2013-71-603669, en el que se sancionó al señor LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ en su condición de exalcalde del Municipio de Albán, con destitución del cargo e inhabilidad general de 10 años...*

***2)** Se declare la nulidad del fallo disciplinario sancionatorio de segunda instancia proferido el 27 de marzo de 2019 por la Procuraduría Regional del Cauca dentro del proceso con radicado No. E-2013-124486 // IUC-D-2013-71-603669, con el que se confirmó la sanción disciplinaria proferida en contra del ciudadano LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ en su condición de exalcalde del Municipio de Albán (N), con destitución del cargo e inhabilidad general de 10 años...*

***3)** Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación inmediata de los registros y antecedentes disciplinarios de mis representados efectuados en el Sistema e Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI de la Procuraduría General de la Nación.*

***4)** Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se indemnice al ciudadano LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ con la suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales…*

5) Que el cumplimiento de la condena se surta en los términos del CPACA, artículo 192." (Sic)

II. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Honorable Despacho, me permito manifestar de manera respetuosa que me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, por cuanto será demostrado en el proceso que la Procuraduría General de la Nación actuó de conformidad con la Constitución y la Ley para efectos de adelantar el trámite disciplinario en contra del demandante, aunado al hecho que durante todas las etapas se le garantizó el legítimo derecho a defenderse y contradecir las decisiones tomadas al interior del proceso administrativo sancionatorio.

Además de haberse atendiendo siempre la guarda y protección de los derechos fundamentales del disciplinado como lo podrán corroborar.

CUESTIONES PREVIAS

Sea lo primero manifestar de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que si bien es cierto el control que realiza la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de los actos sancionatorios disciplinarios demandados en sede judicial es amplio, también lo es que este control es de validez y no de corrección[1].

Por tal motivo, el Consejo de Estado consideró que el control judicial de los actos que imponen sancionas disciplinarias no puede convertirse en una tercera instancia en el que se pueda abrir nuevamente el debate probatorio, pues el Juez debe principalmente verificar "…*si la interpretación jurídica efectuada por el titular de la acción disciplinaria se enmarcó en los parámetros hermenéuticos, o si excedió los límites de la actividad disciplinaria…"*[2].

Por todo lo anterior, es claro que las diferencias hermenéuticas entre lo expuesto en la decisión disciplinaria y la interpretación que adopte el juez contencioso disciplinario frente a los mismos asuntos no constituyen por sí mismas razones para invalidar la decisión administrativa sancionatoria.

Lo anterior, sin olvidar que la carga argumentativa y probatoria para quien alega la ilegalidad del acto administrativo sancionatorio es mayor, y, por tanto, al demandante le corresponde el deber procesal de brindarle al juez razones suficientes que permitan efectuar una confrontación justificada conforme a la jurisprudencia del acto frente a las normas que se invocan como violadas.

La anterior interpretación también ha sido asumida por la Corte Constitucional en sentencia C – 401 de 2013, en el siguiente sentido:

> *"Por tratarse de un proceso administrativo, el proceso disciplinario cuenta con una garantía adicional a las mencionadas anteriormente.*
> *Se trata de una garantía posterior, que brinda la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de la decisión administrativa, mediante la jurisdicción contenciosa administrativa[3], la cual si bien no cumple la función de tercera instancia, sirve*

[1] Consejo de Estado. Sentencia del 11 de diciembre de 2012, Proceso IJ: 2005-00012-00. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
[2] Ibídem.

para verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario, se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba producida con violación al debido proceso, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad fundamental para el ejercicio del derecho de defensa.

Este mecanismo de defensa judicial también es propicio para que el juez administrativo analice de legalidad del acto, y establezca si en el proceso se respetaron derechos de rango constitucional, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre, el honor y la dignidad, entre otros.

Todo lo anterior implica que en la sede contenciosa administrativa, el debate discurre en torno a la protección de las garantías básicas, cuando quiera que el proceso disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, cuando el trámite impreso a la actividad correccional resulta intolerable frente a los valores constitucionales más preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de modo singular, si la producción y la valoración de las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la ley…."

Atendiendo estas circunstancias ha de concluirse que de ninguna manera los fallos de instancia incurren en estas circunstancias, pues tanto la decisión de primera instancia como la emitida por la segunda instancia, realizaron una valoración ajustada a las reglas de la sana crítica, y se destaca cómo los hechos que se atribuyen al ahora accionante sí resultaron probados.

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Hecho 1°. Parcialmente cierto. En el año 2013, el señor MARCO ANTONIO BOTINA ORDOÑEZ interpuso queja ante la Procuraduría General de la Nación, en contra del señor LIBARDO MARTINEZ GÓMEZ, quien fungió como Alcalde del Municipio de Albán (N), para el periodo 2012-2015, aludiendo que entre el 13 de abril y el 27 de diciembre de 2012 (no 2013 como alude el demandante), celebró, recibió a satisfacción y ordenó el pago de varios contratos, sin que estos se hubieran ejecutado en la realidad.

Hecho 2°. Parcialmente cierto. La Procuraduría Provincial de Pasto, el día 17/04/2013, profirió auto de apertura de indagación preliminar en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES, etapa en la que se practicaron las pruebas en los términos del CDU, es decir, dentro de los 6 meses aludidos en el artículo 150 de la ley en comento.

Hecho 3°. Parcialmente cierto. El día 28/02/2014 se apertura investigación disciplinaria en contra de LIBARDO MARTINEZ GOMEZ, FERNANDO AYALA y YULI GUTIERREZ en sus calidades de Alcalde, Secretario de Obras y Jefe de Control Interno del Municipio de Albán (fs. 302 a 306) y posteriormente se procedió a declarar cerrada la investigación disciplinaria con auto de 29 de octubre de 2014 (fl. 509), sin embargo del informe de la Gerencia Departamental de Nariño de la Contraloría General de la República, se tiene que los contratos que por lo que

se cuestionó el actuar de la señora YULI GUTIERREZ en su calidad de Control Interno, se cumplieron a cabalidad, razón por la cual se dispone cesar todo procedimiento en su contra y continuar la actuación con los otros dos investigados; razón por la cual se eleva pliego de cargos el 10 de diciembre de 2014 (fs. 565 a 573), se notifica personalmente a los investigados y se abre el proceso a pruebas con auto de 9 de marzo de 2015 (fs. 1.008 a1009) negando unas de las solicitadas, razón por la cual se interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Nariño, donde con proveído del 29 de diciembre de 2015, se declara la nulidad de lo actuado a partir del auto de cierre de investigación, y una vez subsanada la actuación se formuló nuevamente pliego de cargos el 21 de abril de 2016, (fs. 1096 a 1113), se ordenó la práctica de pruebas de descargos a través del auto de 27 de mayo de 2016, y el 12 de enero de 2017 se fija el proceso par alegatos de conclusión y el 31 de agosto de 2017, se profiere fallo de primera instancia sancionatorio (fs. 1486 a 1515, el que fue objeto de recurso de apelación por parte de los apoderados de los investigados. El 28 de noviembre de 2017, la Procuraduría Regional de Nariño, resuelve el recurso de apelación interpuesto, declarando la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos (fs. 1560 a 1583) determinación que fue objeto de recurso de reposición, el que se desató el 31 de enero de 2018 dejando en firme el fallo de segunda instancia.

Hecho 4°. Es cierto. Mediante auto del **18/05/2018**, la Procuraduría Provincial de Pasto dispuso formular por tercera ocasión pliego de cargos en contra de LIBARDO MARTINEZ GOMEZ y FERNANDO AYALA en sus calidades de Alcalde y Secretario de Obras del Municipio de Albán. En concreto, al señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ, se le formuló los siguientes cargos:

> *"1.- Posiblemente participar en la actividad contractual, en detrimento de patrimonio público del municipio de Albán (N), al suscribir las actas de liquidación donde consta que se cumplió con el objeto de los contratos números 2012-216 el 19 de febrero de 2013; 2012-268 el 25 de enero de 2012; 2012-210 el 11 de noviembre de 2012; 2012-209 el 26 de octubre de 2012; 2012-213 el 1 de noviembre de 2012; 2012-235 el 15 de diciembre de 2012 y el acta de recibo final del contrato 2012-207 del 9 de noviembre de 2012, y firmar los comprobantes de egreso números 6028 del 26 de diciembre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-216; 5539 del 26 de octubre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-209; 5540 del 26 de octubre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-213; 5707 del 27 de noviembre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-235: 5681 del 16 de noviembre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-207 y 5480 del 11 de octubre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-185-1 a pesar de que no se había cumplido con el objeto contractual , detrimento que puede ascender a la suma de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 21.680.941 M/C), tal como se desprende del informe técnico de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República fechado el 13 de octubre de 2016, dejando de presente que algunos avances de obra se hicieron con posterioridad a las visitas realizadas por esa misma entidad en los años 2013 y 2014, y obviamente al pago total de los contratos.*
>
> *2.- Posiblemente realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se comete … con ocasión… del cargo, en este caso las consagrada en los artículo 286 bajo la denominación de "falsedad ideológica en documento público y 410:"Contrato sin cumplimiento de*

requisitos legales" del Código Penal. Por cuanto suscribió las actas de liquidación y los comprobantes de egreso descritos en precedencia, a pesar de que no se había cumplido con el objeto contractual

3.- Posiblemente Participar en la actividad contractual al parecer desconociendo los principios de responsabilidad señalado en los numerales 1 y 5 del artículo 26 de la ley 80 de 1993, al suscribir las actas de liquidación donde consta que se cumplió con el objeto de los contratos números 2012-216 el 19 de febrero de 2013; 2012-268 el 25 de enero de 2012; 2012-210 el 11 de noviembre de 2012; 2012-209 el 26 de octubre de 2012; 2012-213 el 1 de noviembre de 2012; 2012-235 el 15 de diciembre de 2012 y el acta de recibo final del contrato 2012-207 del 9 de noviembre de 2012, y firmar los comprobantes de egreso números 6028 del 26 de diciembre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-216; 5539 del 26 de octubre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-209; 5540 del 26 de octubre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-213; 5707 del 27 de noviembre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-235: 5681 del 16 de noviembre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-207 y 5480 del 11 de octubre de 2012 ordenando el pago total del contrato 2012-185-1 a pesar de que no se había cumplido con el objeto contractual, por cuanto como alcalde municipal de Albán (N) tenía la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y por lo tanto estaba obligado a buscar el cumplimiento de los contratos antes descritos y a vigilar su correcta ejecución, y no proceder a suscribir las certificaciones de cumplimiento y las órdenes de pago cuando se repite los objetos contractuales no se habían cumplido".

Hecho 5°. Es cierto. En el auto del **18/05/2018**, la Procuraduría Provincial de Pasto dispuso formular tres cargos al señor FERNANDO AYALA en su calidad de Secretario de Obras del Municipio de Albán.

Hecho 6°. No corresponde a un hecho. Contiene una interpretación personal de la demandante respecto del valor probatorio de un concepto técnico emitido por un órgano de control y deberá probarse.

Hecho 7°. Contiene apreciaciones del actor, por lo tanto, deberá ser objeto de prueba.

Hecho 8º (7). Las afirmaciones vertidas deben ser objeto de prueba, no corresponden a un hecho.

Hecho 9º. Es cierto. La conclusión del análisis probatorio es la referida por el actor.

Hecho 9º -Sic-. Es cierto**.** En el acápite referido se señaló lo correspondiente frente a la descripción de la conducta y las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Hecho 10º. Parcialmente cierto**.** Se consideró en el pliego de manera provisional que las faltas eran gravísimas atendiendo lo normado en el artículo 48 del CDU y respecto a la forma de culpabilidad se estimó que fueron cometidas a título de dolo.

Hecho 11°. Es cierto**.** En cumplimiento a la norma disciplinaria se le otorgó al disciplinado la oportunidad de rendir descargos. En lo demás contiene apreciaciones del actor, pues de la lectura del fallo se puede determinar que se

analizaron tanto los descargos como los alegatos esgrimidos por la defensa luego del pliego de cargos.

Hecho 8° Sic. Es cierto. El día 26/09/2018 la Procuraduría Provincial de Pasto, profirió fallo sancionatorio de Primera Instancia en contra del señor LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ, con destitución e inhabilidad por el término de 10 años, al calificarse definitivamente las faltas endilgadas como gravísimas cometidas a título de dolo.

Hecho 9° Sic. Es parcialmente cierto, en el fallo de primera instancia se realiza un análisis de las pruebas aportadas y relacionadas con los contratos objeto de reproche disciplinario y analiza la conducta del actor frente a los mismos. Sin embargo, frente a las demás afirmaciones se observa que las mismas no corresponden a un hecho, sino a la interpretación del demandante frente al fallo disciplinario y el grado de participación de los dos disciplinados en la comisión de las faltas disciplinarias.

Hecho 10°Sic. Contiene apreciaciones del actor respecto a la participación del señor FERNANDO YASMANI AYALA en la comisión de las faltas disciplinarias.

Hecho 11°Sic. Contiene apreciaciones del actor respecto a la participación tanto de él como del señor FERNANDO YASMANI AYALA en la comisión de las faltas disciplinarias, por las cuales fueron sancionados dentro del fallo disciplinario.

Hecho 12°Sic. Contiene apreciaciones del actor respecto a la culpabilidad (dolo) con las que fueron calificadas las faltas por él cometidas en el fallo disciplinario a través del cual fue sancionado dentro del proceso disciplinario, desconociendo el amplió análisis efectuado por la Procuraduría Provincial de Pasto en el fallo en comento, en los que se explica claramente porque se considera que el actor cometió las faltas endilgadas a título de dolo.

Hecho 13.- Parcialmente cierto, la Procuraduría Provincial de Pasto mediante decisión del 26-09-2018 emitió fallo sancionatorio en contra del Señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ – Alcalde Municipal de Alban para la época de los hechos, con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10); fallo que fue debidamente motivado y sustentado en el material probatorio que reposa en el expediente plena observancia de los principios de la sana crítica tal como lo dispone el CDU y que condujo a la certeza de la falta y responsabilidad del investigado. Respecto a la afirmación del actor, "(…) sanción que conforme se desarrollará en el concepto de violación, resulta ajena a las pruebas obrantes en el plenario respecto a la responsabilidad de mi mandante sobre las conductas objeto de reproche (…)" que se demuestre.

Hecho 14.- Parcialmente cierto, Una vez la Procuraduría Provincial de Pasto notifica la decisión de Primera Instancia, el Señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ en su condición de sancionado y en uso del derecho de defensa, interpone Recurso de Apelación dentro del término legal relacionando los aspectos objeto de impugnación e interpretación de estos, por la parte demandante.

Hecho 15.- Es cierto parcialmente, La Procuraduría Regional del Cauca previo impedimento de la Procuraduría Regional de Nariño resuelve el recurso de alzada confirmando la decisión de Primera Instancia en contra del Exalcalde del Municipio de Alban – Nar. Sr. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ. Seguidamente se observa que la parte demandante realiza análisis a las consideraciones expuestas por el Ad-quem a su criterio.

Hecho 16.- Es cierto.

Hecho 17.- No es cierto, la investigación disciplinaria se surtió bajo los parámetros y ritualidades establecidos en la ley 734 de 2002; es así, que a partir del día 28 de febrero de 2014 que se vincula al Sr. Libardo Martínez Gómez a la Investigación Disciplinaria hizo uso de su derecho a la defensa en cada una de las etapas procesales que orientan el proceso disciplinario, como se puede observar en el expediente.

Hecho 18.- No me consta, que se pruebe.

Hecho 19.- No es un hecho. -

IV. NORMAS CITADAS COMO VULNERADAS

Ha señalado en el escrito de demanda la apoderada judicial de la parte actora que la Procuraduría General de la Nación transgredió las siguientes normas:

- Artículo 13 y 29 de la Constitución Política.
- Ley 734 de 2002, artículos: 6, 9, 13, 18, 30, 43-9, 128, 131, 141, 142 y 150.
- Convención Americana de los Derechos Humanos artículo 23.
- 28-2, 129, 130, 141, 175, 177, 162 y 165.

V. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Los actos administrativos que son dictados al seno de un proceso disciplinario están claramente circunscritos dentro del marco del control jurisdiccional respecto de su legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, y claramente dentro del límite de las acciones de su competencia.

En el presente caso se encuentra que la demanda impetrada, refiere a una acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho regido por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, la cual dirige en sus causales de anulación a las propias del artículo 137 del mismo compilado.

Lo anterior cobra importancia en cuanto a que dictamina las razones mediante las cuales puede ser un acto administrativo objeto de censura, por lo cual se debe señalar que se encuentran básicamente al respecto las siguientes circunstancias:

1. *Cuando el acto sea emitido por funcionario incompetente*
2. *Cuando el acto sea emitido en forma irregular*
3. *Cuando el acto vulnere las normas en que debía fundarse*
4. *Cuando se haya vulnerado el derecho de defensa*
5. *Cuando exista falsa motivación*
6. *Cuando se de la denominada desviación de poder.*

De la lectura del libelo demandatorio, si bien es cierto se alega por parte del actor una presunta vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, también se encuentra que en el mismo no se demuestra de manera alguna ninguna de las otras causales como nugatorias de los actos administrativos sancionatorios, si no que pretende en su texto el actor revivir el debate procesal y probatorio referente a la valoración de las pruebas y a la adecuación de su conducta, es decir, lo pretendiendo es volver la presente acción otra instancia dentro del debate propio del proceso disciplinario.

En ese entorno se debe anotar que el control de legalidad del proceso disciplinario no puede constituir una tercera instancia, sino que tiene dentro de su funcionalidad, única y exclusivamente la verificación del adelantamiento del mismo bajo las preceptivas de los derechos al debido proceso y Defensa, y revisar que la aplicación de la normatividad fue la correspondiente.

FRENTE A LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBÍA FUNDARSE. -
Si bien el actor acusó al operador disciplinario de la vulneración a la garantía al debido proceso, es menester de nuestra parte rechazar categóricamente dichas afirmaciones, pues es claro e incuestionable que la Procuraduría Provincial de Pasto como la Procuraduría Regional del Cauca actuaron con plena atención de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables al caso, por las siguientes razones:

No le asiste razón al demandante al afirmar que se le impidió participar en la Etapa de Indagación Preliminar la cual se adelantó “en averiguación de responsables” de la Alcaldía del Albán.

Es de precisar, que si bien es cierto la queja está dirigida en contra del Sr Libardo Martínez Gómez – Alcalde Municipal de Alban para la época de los hechos; también es cierto que ésta etapa procesal, tiene establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, los fines de la indagación preliminar que son: verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, para lo cual el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos, y una vez agotado el término procesal deberá pronunciarse, ya sea para ordenar el archivo definitivo o por consiguiente la apertura de la investigación, con fundamento en los medios probatorios allegados y aportados dentro del plenario el Despacho

procedió el 17 de abril de 2013, inicio de Indagación Preliminar en averiguación de responsables de la Alcaldía Municipal de Alban (fl 8).

Ahora bien, respecto al término de la etapa procesal de indagación preliminar, art. 150 ibidem, indica que esta tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. En el caso bajo estudio, se profirió auto de apertura de investigación disciplinaria el 28 de febrero de 2014 (fls 302 a 306); es decir cuatro (4) meses aproximadamente después de haberse ordenado la indagación preliminar.

No obstante, aunque entre el inicio de la indagación preliminar y la fecha en que se ordenó la apertura de investigación disciplinaria, medió un lapso mayor a los seis (6) meses previstos en la Ley 734 de 2002, es de anotar que este término se entiende que es perentorio para la práctica de pruebas y no comprende la evaluación de las mismas, lo que significa, que si se recaudan después del plazo establecido para la indagación, no tendrán valor probatorio dentro de la respectiva etapa.

En este sentido emitió concepto la Procuraduría Auxiliar de la Entidad, mediante oficio PAD No. 7722 del 21 de diciembre de 2000, dando alcance al pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-728 del 21 de junio de 2000, que declaró exequible el aparte “Cuando proceda la indagación preliminar no podrá extenderse por más de seis (6) meses”, al señalar que debe acatarse esta decisión por ser de obligatorio cumplimiento y de efectos erga omnes, pero teniendo en cuenta lo siguiente:

> *“1. Si transcurridos lo seis (6) meses después de dictado el auto de indagación preliminar, pero se alcanza a recopilar todas las pruebas dentro de este término se puede hacer la evaluación respectiva y dictar auto de apertura de investigación o de archivo según el caso. Esta interpretación surge de lo dicho por la Corte, en la parte motiva de la sentencia y sirve como criterio auxiliar para la aplicación de la misma. “….. es que el lapso de los seis meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el periodo de indagación, lo que permite que ese periodo sea utilizado íntegramente para la recopilación de pruebas”*
>
> *2.- Si por el contrario, transcurren los seis (6) meses y no se recauda una sola prueba en dicho lapso, debe dictarse el auto de archivo definitivo siempre y cuando no haya otros elementos que permitan abrir investigación.*
>
> *3.- Si se practicaron pruebas fuera del término de los seis (6) meses no serán consideradas válidas y, por lo tanto, se debe decretar el auto del archivo definitivo. Pero si existen más pruebas, recaudadas dentro del término de los seis (6) meses, éstas se evaluarán y se dictará el auto de apertura de investigación o el archivo definitivo, según el caso.” (Subrayas fuera de texto)*

Así las cosas, el plazo que transcurrió en la evaluación de las diligencias, después de vencido el término previsto para la indagación preliminar, ante la ausencia de disposición legal que señale un periodo determinado para la evaluación de las diligencias, no se podría hablar en el presente caso, de incumplimiento de términos en estricto sentido. Cosa diferente es que, en virtud del principio de economía, lo

ideal es adelantar los procesos disciplinarios con agilidad y en el menor tiempo posible, pero esta circunstancia, no constituye violación al debido proceso ni del derecho de defensa del investigado, como lo pretende el demandante.

En este orden, y considerando que la actuación fue desplegada por el titular de la acción disciplinaria y en el ámbito de las competencias regladas por el art. 74 y 78 de la Ley 734 de 2002 y Decreto 262 de 2000, art. 76 que atribuye a las Procuradurías Provinciales la facultad de conocer en primera instancia, salvo competencia se asigne a otra dependencia de la Entidad, los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de alcaldes y servidores públicos del orden municipal; por tanto el proceso se adelantó por funcionario competente.

Asimismo, se observa que en la actuación disciplinaria se respetaron las garantías a los investigados, tanto de manera procesal como sustancial y con apego a la ritualidad del proceso y la defensa. Las etapas procesales fueron realizadas con sujeción al debido proceso como norma primigenia entre el operador disciplinario y el investigado, que en efecto el derecho material fue efectivo y las garantías fueron las reglamentadas. En efecto, la decisión adoptada por la Primera Instancia fue proferida una vez se agotaron todas y cada una de las etapas procesales reglamentadas en el Código Disciplinario Único, tan es así, que al disciplinado se le garantizó su participación en las diferentes etapas procesales, notificación de actos relevantes, práctica de pruebas, descargos, alegatos de conclusión y apelación de la decisión.

FRENTE A LA GARANTÍA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. -
Es un presupuesto que acompaña al agente desde el inicio de la acción disciplinaria, hasta el fallo o decisión final, cuando éste ya se encuentre en firme; dicho fallo debe estar fundado en pruebas legales, conducentes, pertinentes y necesarias y gracias a la labor probatoria se logra materializar el principio de presunción de inocencia, por eso es de vital importancia el tratamiento que se da a los distintos medios probatorios, desde el procedimiento para su obtención y práctica, hasta la valoración que realiza el juzgador.

> *Por su parte Laurent (CONCHA, José Vicente. Elementos de Pruebas Judiciales. Librería Americana., P. 8), define la prueba como "la demostración legal de la verdad de un hecho, y también el modo mismo que las partes emplean para demostrar el hecho controvertido".*
>
> *En atención a la importancia del derecho probatorio, además de conocer qué es la prueba, se torna indispensable conocer el objeto de la misma. El tratadista Parra Quijano (PARRA QUIJANO, Jairo. Técnica Probatoria. Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". P. 25), señala que el objeto de la prueba "está constituido por los hechos, comportamientos, conductas o sucesos en general que admiten ser probados sin estar vinculados de manera directa a un determinado proceso".*

Significa lo anterior y como lo establece la Ley 734 de 2002 - art. 128, las decisiones proferidas por el operador disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, correspondiendo al Estado la carga de la prueba así como lo prescribe el Código Disciplinario que sólo se podrá proferir decisión de

fondo si obra en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, según lo exige el art. 142 ibidem.

En la necesidad de demostrar objetivamente la existencia de la falta, sea lo primero indicar que el fundamente de nuestro derecho sancionatorio se basa en el concepto dogmático del "derecho penal de acto", así la Constitución Política en su art. 29 diseña la estructura de nuestro derecho punitivo, incluyendo el disciplinario, como un derecho que sanciona al hombre por lo que hace, esto es, culpabilidad por el hecho, de tal suerte que es menester concretar de manera clara la situación fáctica para el efecto, sustentado en el análisis y apreciación integral de las pruebas, cumpliendo con ello lo señalado en el numeral 3 del art. 170 de estatuto disciplinario.

Los medios de prueba incorporados al expediente proporcionaron a los falladores de 1ra y 2da. Instancia un grado de conocimiento con el cual recrear la realidad de las circunstancias que rodearon la actuación de los servidores públicos investigados, en especial al Sr. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ quien fungía como Alcalde Municipal de Alban (N).

Los hechos que se evidenciaron y probatoriamente se soportaron durante el proceso dan cuenta que el Señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ, en su calidad de Alcalde Municipal de Albán (N), celebró, ordenó pago y liquidó los contratos 2012-216, 2012-220, 2012-268, 2012-210, 2012-209, 2012-213, 2012-235, 2012207 y 2012-185-1. Además, se extrae de los medios probatorios allegados al plenario, esto es, documentales y testimoniales que se presentaron irregularidades contractuales por falta de ejecución de las obras y el pago no se hizo a quienes registran como contratistas.

Lo expuesto de forma precedente, es suficiente para considerar que la Procuraduría fundó sus decisiones en material probatorio (prueba pericial) valida, como son los informes de la Contraloría, pero también en las pruebas documentales y testimoniales que reposan en el proceso y en todas se garantizó el derecho de defensa y contradicción.

En el art. 209 de la C.P., dispone que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones….", mandato este que reitera el art. 23 del Estatuto General de la Contratación Pública al dispones que "las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa".

Es de referenciar que en materia contractual los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, de tal suerte que no hacerlo vulnera directamente el Principio de Responsabilidad contractual, según lo establece el art. 26 de la ley 80 de 1993.

El principio de responsabilidad impone al servidor público la rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, esto es, que se realiza dentro del objeto, plazo y presupuesto contratado; procesos que debía ser vigilados de forma juiciosa y responsable.

Es de mencionar que para alcanzar el cumplimiento de los fines del estado los servidores públicos se encuentran en la obligación en el área contractual de alcanzar la satisfacción de las necesidades de la entidad, lo cual se garantizará cuando se encuentra de forma concreta y especifica determinado el objeto, obligaciones, plazo y demás aspectos fundamentales que conllevan a que con la ejecución de los contractos alcance el bien común a través de la observancia y respeto por las normas que rigen la actividad contractual.

En el presente asunto, quedó depurado y específicamente demostrado tanto por el A-quo y el Ad-quem que se vulneró el principio de responsabilidad, por cuanto no se vigiló el cumplimiento, ni se ejecutó adecuadamente el objeto contractual, pues se pagaran sumas sobre actividades no ejecutadas o materiales no entregados o se celebraron contratos con personas que manifiestan no haberlos firmado, ni ejecutado y mucho menos haber recibido pago alguno. Como quedó demostrado en el plenario, el Sr. Supervisor de los Contratos que todos recaen en el Sr. Fernando Ayala Erira, no cumplió a cabalidad tal como lo exige la norma la vigilancia de los contratos de conformidad con las minutas contractuales.

Por otra parte, el Sr. Libardo Martínez Gómez, suscribió actas de liquidación y ordenó el pago del 100% respecto de contratos que no se habían ejecutado o por lo menos no en su totalidad, vulnerando el principio de responsabilidad e incumpliendo con sus deberes, adicional incurrió en falsedad ideológica en documento público.

Entonces, se tiene que los falladores de 1ª y 2ª instancia tuvieron durante todo el despliegue sustancial y procesal la certeza de la existencia de las irregularidades contractuales advertidas a plenitud en todo el trámite disciplinario, por parte del Sr. Alcalde Libardo Martínez Gómez vulnerando con ello, los principios contractuales establecidos en la ley 80 de 1993 específicamente el principio de responsabilidad, y como resultado de la lectura y valoración de las pruebas documentales, testimoniales obrantes en el proceso se extrae que se generó un detrimento patrimonial para el Municipio de Alban (a) por valor de $21.680.941 como lo cuantificó igualmente la Contraloría, mediante informe que fue objeto de aclaración y se encuentra en firme y goza de legalidad, del cual se dio traslado a la partes quienes no lograron desvirtuar los hallazgos mencionados.

Igualmente, se demostró que las certificaciones, los pagos y las actas de liquidación no contenían la veracidad de lo que sucedió con los contratos, por lo que se estaría frente a una falsedad ideológica en dichos documentos y la liquidación de los contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos para ello.

Con estas actuaciones, los investigados, particularmente el Señor Martínez Gómez, incumplió sus deberes como servidor público e incluso incurrió en prohibiciones.

FRENTE A LA TIPICIDAD. -
Según el art. 26 de la ley 734 de 2002[3], es aquel sujeto disciplinable quien realiza algún comportamiento descrito en el ordenamiento jurídico como falta disciplinaria.

Para el asunto, dentro del proceso disciplinario seguido en contra del Sr. Martínez Gomez, se evalúo la conducta y se procedió a realizar la adecuación típica, esto es, el proceso de confrontación de la conducta de los investigados como manifestación objetiva de su comportamiento, en su calidad de servidor público y la norma como manifestación del deber ser, la cual ha sido establecida por el legislador con el fin de garantizar el ejercicio de la función pública.

Entre las formas de incurrir en falta disciplinaria, conforme al art. 23 ibídem[4], es la conducta que conlleva el incumplimiento de deberes o incursión de prohibiciones; ello nos traslada a mencionar la ley 80 de 1993 la cual se caracteriza por contener los principios y reglas generales que rigen la contratación estatal en todos los órdenes y niveles de la administración. Con sus disposiciones se busca que la gestión pública contractual se adelante con agilidad y eficiencia en el marco de los principios de transparencia, economía y responsabilidad aunado a los postulados que rigen la función administrativa.

En este caso particular, por fuente legal se determina lo siguiente:

> ***ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.*** *En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma. (subrayas fuera de texto original)*

Por tanto, existen disposiciones constitucionales y legales que rigen las actuaciones de las administraciones públicas, como es, en la contratación estatal, que se debe dar plena observancia a los principios contractuales, empero el Código Disciplinario Único ha determinado que su incumplimiento y el detrimento patrimonial que ello genere constituye una falta disciplinaria así:

> ***ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS:*** *Son faltas gravísimas las siguientes: (…)31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o*

[3] *ARTÍCULO 26. AUTORES. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla, (…)*
[4] *ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, (…), prohibiciones (…) sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.*

con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

Valorada la conducta desplegada por los señores LIBARDO MARTINEZ GONEZ y FERNANDO YASMANI AYALA ERIRA, concuerda con la que reprocha el legislador como incumplimiento de deberes e incursión en prohibiciones.

Es decir, que el reproche elevado al Sr. Martínez Gómez, se soportó por incurrir en falta al participar en la actividad contractual y ésta a su vez, en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento del principio de responsabilidad en la actividad estatal, así como la incursión objetiva de un comportamiento típico consagrado en la ley como delito sancionable a título de dolo, con ocasión de la función o abusando del cargo.

Asimismo, por parte del operador disciplinario en el trámite del proceso se advirtió que el Señor Martínez Gómez, al suscribir las actas de liquidación de los contratos objeto de investigación y en los cuales se hizo constar el cumplimiento del objeto y se ordenó el pago total de los mismos a sabiendas de que no se había cumplido con los mismos. Con este actuar, y conforme al informe técnico de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de La República se ocasionó un detrimento patrimonial.

Por consiguiente el derecho disciplinario conforme pronunciamiento de la Corte ha precisado que los funcionarios públicos están llamados a buscar el cumplimiento de los fines del Estado, bajo el cumplimiento de los estatutos y principios por parte de quienes se desempeñan en la función pública, así:

"... el derecho disciplinario pretende garantizar "la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo" (Sent. C-341 de 1996), cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" a que hace referencia la norma constitucional.

También se ha pronunciado la Corte en el sentido de los presupuestos legales que exige el cumplimiento de una eficiente y correcta administración pública:

“En este sentido también ha dicho la Corte que, si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que – por contrapartida lógica- son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia (C-181 de 2002).

En el proceso disciplinario adelantado en contra de los investigados Srs. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ y FERNANDO YASMANI AYALA ERIRA en calidad de Alcalde Municipal y Secretario de Obras respectivamente con su conducta objeto de reproche, vulneraron los principios de la contratación estatal y de la función pública, establecidos en la Ley 80 de 1993 y en el art. 209 C.P., especialmente el de responsabilidad generando un detrimento patrimonial; dicho comportamiento es reprochado por el derecho disciplinario, pues afecta los fines del Estado y los principios de la contratación pública, especialmente el principio de responsabilidad, los cuales se encuentran regulados en la norma.

En conclusión, los investigados incurrieron en una conducta tipificada como delito a título de dolo, a la luz del art. 48-1 Código Disciplinario Único; tal como quedó demostrado y soportado su actuar objeto de censura en el material probatorio que se recopilo de manera oportuna y legal. Por consiguiente, se comparte la adecuación normativa que realizaron los falladores de instancia.

FRENTE A LA ILICITUD SUSTANCIAL. -

"...La ilicitud sustancial como condición constitucional de las faltas disciplinarias.

"El ejercicio de la función pública debe estar enfocada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, destacándose los previstos en el artículo 2º C.P. Para cumplir con esta (sic) objetivo, la actividad de los servidores públicos debe guiarse tanto por los deberes específicos que le imponen a cada empleo el orden jurídico aplicable como, de una forma más amplia, los principios generales del ejercicio de la función pública, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (Art. 209 C.P.)

...Es el incumplimiento de estas reglas y principios los que activan la actividad sancionatoria propia del derecho disciplinario. Como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto para la existencia de una falta disciplinaria es la acreditación acerca del incumplimiento de un deber funcional del servidor público o, en otras palabras, la presencia de una conducta u omisión que interfiere en el ejercicio adecuado de la función estatal ejercida por dicho servidor del Estado.

. *.. Como se observa, el concepto de ilicitud sustancial de la falta disciplinaria concuerda con el criterio de afectación del deber funcional, antes explicado. Esto quiere decir que, desde la perspectiva constitucional, solamente podrán ser clasificadas como faltas disciplinarias aquellas conductas u omisiones que interfieran en el adecuado ejercicio de la función asignada por el ordenamiento jurídico al servidor público respectivo. En términos de la sentencia en comento y a partir de la reiteración de decisiones sobre el mismo tópico "'[l]as conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia **[13]** ha señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias."*

Entonces, se tiene que en el régimen disciplinario se consagra la normatividad que establece prohibiciones, obligaciones, mandatos y deberes que orientan y demandan el comportamiento y conducta de los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas y sobre los cuales se predica responsabilidad disciplinaria por acción, omisión, extralimitación de funciones, incumplimiento o desconocimiento lo que conlleva la respuesta represiva del Estado en el afán de proteger el normal funcionamiento de la administración pública; de manera que se sanciona cualquier omisión o extralimitación bien sea por dolo, descuido, imprudencia, impericia o violación del reglamento.

Significa que la administración pública se materializa con el ejercicio de una función para el cumplimiento de los fines del Estado, el incumplimiento al deber funcional determina la antijuricidad de las conductas consideradas como tipo disciplinario por la ley disciplinaria ya que atenta al buen funcionamiento del Estado.

En el asunto, el Sr. Martínez Gómez con su proceder vulneró los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 – principio de Responsabilidad, afectando el patrimonio público y desprende que esta actuación la realizaron conociendo la ilicitud, es decir actuaron con dolo. Es importante que para efectos de la configuración de la ilicitud no solo la norma que contiene los deberes y prohibiciones fueron vulnerados sino el fin que busca alcanzar a través de la observancia de los principios de la contratación y la administración pública.

En el aspecto contractual, los funcionarios deben garantizar el cumplimiento de los fines propios de un Estado Social de Derecho, como es en la ejecución de una obra, debe buscar el cumplimiento del objeto contractual al 100% que va dirigido en beneficio de una comunidad, y/o en caso de presentarse anomalías en el desarrollo del contrato realizar las acciones propias con el fin de salvaguardar el interés públicos y los recursos del erario amparados en el cuerpo normativo de la contratación pública; situación que en el presente asunto no sucedió; más aún, agravaron los hechos, certificaron, pagaron y liquidaron contratos sin cumplirse.

Las normas violadas y teniendo presente su carácter de fundamental para el buen funcionamiento de la administración pública y la conducta subjetiva compromete la función estatal en términos de legitimidad, eficacia, eficiencia, transparencia, moralidad; se está en presencia de normas que objetivamente infringidas implican una conducta con contenido ilícito sustancial; como ocurrió con la conducta desplegada por los servidores públicos investigados.

FRENTE A LA RESPONSABILIDAD Y CULPABILIDAD. -
Se comparte el criterio del fallador de primera y segunda instancia al concluir que el investigado LIBARDO MARTINEZ GOMEZ en su calidad de Alcalde Municipal de Alban para la época de los hechos, actuó contraviniendo el ordenamiento jurídico afectando la buena marcha de la administración municipal.

El disciplinado LIBARDO MARTINEZ GOMEZ, al suscribir las actas de liquidación de los contratos referidos y haciendo constar el cumplimiento de los mismos y además ordenar el pago total; teniendo en cuenta que no se había cumplido con el objeto contractual.

Exigía del disciplinado, por la condición de ser servidor público, las funciones que cumplían y el cargo que desempeñaban conocer y aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en concordancia con las normas que lo modifican y adicionan. También es de mencionar que la contratación adelantada por esta administración municipal estaba regida por la ley 80 de 1993.

En tanto, el Sr. Libardo Martínez Gómez – Alcalde Municipal de Alban – Nar., al estar investido de la facultad de representar legalmente al Municipio; tenía la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual como lo contempla el numeral 5º, art. 26 de la ley 80 de 1993, por lo cual no admite escudarse en la escasa formación o no contar con profesionales del derecho; ya que, al ocupar el cargo, asumió responsabilidades y entre ellas de la contratación pública del Municipio.

Así las cosas, el comportamiento desplegado por el disciplinado encuadra dentro de la definición de dolo pues inobservó normas de obligatorio cumplimiento a las cuales no se podían sustraer e incurrió con este actuar en conductas descritas como delitos en los arts. 286 y 410 del C.P.

Por lo referido, encontró el Ad quem probado que el Señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ – Alcalde Municipal de Alban; tenía conocimiento de los hechos, conocía y eran consientes de la ilicitud de su actuar y obraron con voluntad al realizar la conducta: ya que se demostró que por su cargo conocían los principios que regían la actividad contractual del Municipio, sabían que debían regirse por el principio de responsabilidad establecido en la ley 80 de 1993 y de esta manera vigilar la correcta ejecución del objeto contractual y proteger los derechos de la Administración Municipal, de lo cual se sustrajo y adicionalmente se consignó situaciones ajenas a la realidad contractual generando detrimento patrimonial.

En conclusión, se observa que los Operadores Disciplinarios encontraron demostrada la responsabilidad disciplinaria del Sr. Alcalde Municipal Libardo Martínez Gómez, por la falta gravísima contenida en los numeral 1 y 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, realizada a título de dolo.

Significa lo precedente, que se determinó con claridad la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad de la conducta, tanto el pliego de cargos, como los fallos de primera y segunda instancia, explicaron con suficiencia y claridad en que consistió la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad de la conducta por la cual se sancionó al señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ, razón por la cual no le asiste razón al demandante en este aspecto.

FRENTE A LAS FALENCIAS DE APRECIACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA
Refiere el disciplinado, que la autoridad disciplinaria incurrió en un error por falso raciocinio lo que según éste permite observa una falencia de apreciación y valoración probatoria, en la medida de que la sanción no está bien soportada probatoriamente, ni se aplicaron los postulados de la sana crítica al momento de proferirla.

Se extrae del libelo demandatorio, que la parte se ciñe a realizar juicios de valor en forma general y no especifica que pruebas no fueron debidamente valoradas por el operador disciplinario.

No obstante, y con miras a desvirtuar lo afirmado, se empezará por mencionar que de acuerdo al esquema procesal existente no se cuenta con una tarifa legal probatoria, razón por la cual y en aplicación de los criterios de la sana crítica, la libertad probatoria e investigación integral, se debe emitir e interpretar un juicio de valor con fundamento legal en las pruebas allegadas al proceso.

Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo.

En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y con explicación en la respectiva decisión del mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

> Sobre el particular la Subsección A advirtió: « […] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal21, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]»
>
> En el artículo 142 ibidem, indica, de manera precisa que «[…] No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado […]». De esta manera, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria debe tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público incurrió en la falta que se le imputa.

Frente a lo anterior, el material probatorio deja entrever el proceso contractual adelantado por el Sr. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ quien fue que convocó los procesos, los mismos que tienen la suficiente información normativa que los justificó en su momento, en los que se surtió todas y cada una de las etapas requeridas por la ley de contratación en los que participó de manera activa el hoy investigado puesto que así lo demuestran los documentos que reposan en el expediente.

No puede olvidarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y más exactamente, el principio de responsabilidad de los servidores públicos (Alcalde) están llamados a buscar cumplimiento de los fines contractuales, que en el presente asunto no era otro que el cumplimiento del objeto contractual, proteger los derechos de la entidad y a quienes podían afectarse con la no ejecución de los mismos.

Se reitera que la valoración de las pruebas se realizó bajo la egida de la sana critica, al contrario de lo afirmado por el demandante, se observa que en los fallos de primera y segunda instancia se valoraron las pruebas obrantes en el expediente bajo la egida de la sana crítica concluyendo de forma fehaciente el por qué se sanciona al disciplinado. Igualmente, se garantizó el derecho de contradicción de la prueba y la posibilidad de que el implicado aportara las pruebas que quería hacer valer.

En conclusión, el Sr. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ como Alcalde de Alban – Nar. participó en la actividad contractual que se le reprochó; el dar por recibida las obras y ordenar el pago en algunos contratos el 100%; hecho que no respondía a la realidad contractual causando y permitiendo un detrimento patrimonial del Estado representado en el Municipio de Alban – Nar. en la suma de $21.680.941 tal como se demuestra en el informe técnico de la CGR fechado el 13 de octubre de 2016; mismo que fue objeto de aclaración por parte de la defensa y no fue posible desvirtuar lo consignado; documento al que se corrió traslado a las partes.

FRENTE A LAS RAZONES QUE DETERMINARON LA SANCIÓN. –

> Respecto de las cargas para imponer una sanción en el derecho disciplinario, en la Sentencia C-290 de 2008[70], la Corte aclaró que se concretan en: "*(i) que la sanción sea establecida directamente por el legislador (reserva legal); (ii) que esta determinación sea previa al acto merecedor de la conminación; (iii) que el contenido material de la sanción esté definido en la ley[71], o que el legislador suministre criterios que permitan razonablemente tanto al disciplinable como a la autoridad competente contar con un marco de referencia cierto para la determinación; [y] (iv) [que ésta sea] razonable y proporcional, a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento de su imposición.*"
>
> Conforme lo expone la Corte, en aplicación al principio de legalidad[5], los funcionarios serán investigados y acreedores a la imposición de sanciones por incurrir en conductas descritas como faltas disciplinarias tal como establece el art. 23[6]. Además, la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la falta y para ello se debe orientar por lo establecido en el Código en relación a clasificación y los criterios para determinar la gravedad de la falta.

En este orden, las decisiones proferidas por los operadores disciplinarios de instancia remiten a que el Sr. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ en su condición de Alcalde Municipal de Albán para esa época, incurrió en falta disciplinaria que fue calificada como GRAVISIMA, tipificada en los numerales 1 y 31 del art. 48 de la 34 de 2002 y cometida a título de DOLO**,** conllevando a la Destitución del Cargo **de**

[5] Artículo 4°. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

[6] Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

Alcalde Municipal y además inhabilidad general para ejercer la función pública en cualquier cargo por el término de diez (10) años; sanción que se encuentra descrita en el art. 44-1 de la ley 734 de 2002.

Por tanto la autoridad disciplinaria ha obrado conforme lo establece el legislador, previa valoración y apreciación de las pruebas bajo el criterio de la sana crítica y arrimadas al proceso de forma legal; y permitiendo determinar que la conducta del disciplinado merecía tal reproche y por ende la imposición de la sanción; ya que en el plenario quedó demostrado el grado de culpabilidad con que actuó el Sr. MARTINEZ GOMEZ, en el entendido de que era consciente al momento de ordenar el pago y liquidar los contratos sin que estos se hayan cumplido; no podemos olvidar que el sancionado disponía de todos los medios e instrumentos materiales y legales, para verificar el cumplimiento del objeto contractual y por ende cumplir sus funciones y garantizar el bienestar y beneficio de la comunidad; y para finalizar el criterio para determinar la gravedad o levedad de la falta y en consecuencia la proceder a la imposición de la sanción se encuentran soportados en la norma. Por tanto, no se comparte lo expresado por el demandante.

FRENTE A LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA.
Como se señaló en precedencia, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa a través de su órgano de cierre, ha determinado que si bien el término de prescripción de la acción disciplinaria empieza a contabilizarse para la faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter continuado y permanente desde la realización del último acto, la expedición del acto principal y su notificación interrumpe el término de prescripción de la acción disciplinaria porque en esta decisión se define la conducta investigada objeto de reproche disciplinario y en la que se concreta la voluntad de la administración; entendiendo como acto principal el fallo disciplinario de primera instancia, así lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 29 de septiembre de 2019 en la que unificó a jurisprudencia referida a la prescripción de la acción disciplinaria, textualmente señaló:

> *"(…) Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria (…)*.

Por tanto, tratándose de régimen sancionatorio disciplinario la tesis jurisprudencial expuesta en la sentencia precitada es aplicable al caso bajo estudio, en el tendido que dentro de los cinco años establecidos por la norma disciplinaria se expidió y notificó decisión sancionatoria principal que resuelva el fondo del proceso.

En el caso sometido a juicio se tiene que el auto de apertura de investigación se profirió el 28 de febrero de 2014, así el operador disciplinario tenía hasta el 27 de febrero de 2019 para emitir decisión sancionatoria y notificarla al actor; como se aprecia en los documentos aportados como prueba el fallo de primera instancia se emitió el 26 de septiembre de 2018 debidamente notificado, de donde se colige que

el fallo de primera instancia se notificó antes de cumplidos los cinco años de prescripción de la acción disciplinaria.

FRENTE A LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. -
La Procuraduría en ejercicio de sus funciones, investiga las conductas irregulares en que puedan incurrir quienes desempeñen funciones públicas – art. 277 numeral 6º de la C.P. y norma disciplinaria.

Por tanto, las decisiones emitidas tanto por la Procuraduría Provincial de Pasto como por la Procuraduría Regional del Cauca se sujetaron a la constitucionalidad y legalidad y por tal razón son eficaces y deben producir sus efectos normales por haber guardado las formas prescritas para ello. Su motivación está impregnada de razones, fundamentos jurídicos y análisis probatorio que orienta a la tipificación de la conducta de los servidores públicos.

Dentro del trámite de la investigación disciplinaria se cumplió con la estructuración del proceso, tanto sustancial como procedimental; se atendieron reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias que corresponde al debido proceso garantizando los fines propios de la norma y salvaguardando los derechos de los involucrados.

Significa lo anterior, que si de la conducta de los sujetos desprende una sanción disciplinaria obedece al desconocimiento de los presupuestos jurídicos que demanda una función propia de un cargo público y no puede considerarse como una causa de un daño o perjuicio.

Es de tener presente, que la finalidad de la acción disciplinaria no es vulnerar el buen nombre ni la honra de las personas, sino velar por el cumplimiento y efectividad de los fines esenciales del Estado y que se cumplan los principios de loa función administrativa consagrados en el art. 209 del C.P.

Dentro de las garantías de la función pública, se establece que para salvaguardar la legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función el servidor público, ejercerán sus derechos, cumplirán los deberes, respetaran las prohibiciones y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses, establecidos en la norma constitucional.

Finalmente, las providencias proferidas dentro del proceso disciplinario se sustentaron de forma clara y precisa y las razones debidamente motivadas para proferir la sanción disciplinaria del demandante.

FRENTE A LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. -
En el caso en concreto, las decisiones adoptadas en el fallo de segunda instancia fueron ejecutadas a partir del 22 de abril de 2019 y la solicitud de conciliación, que interrumpe[7] el término de caducidad del medio de control de nulidad y

[7] Ley 640 de 2001 - **ARTICULO 21**. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este

restablecimiento del derecho fue radicada el día 24 de julio de 2019. Teniendo en cuenta que el demandante pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, respectivamente se advierte que el medio de control – nulidad y restablecimiento de derecho al que se pretende acudir no se encuentra afectado por la caducidad.

FRENTE A VIOLACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES. -
En el caso bajo debate, en el despliegue normativo constitucional se designa al Procurador General de la Nación como el supremo director del Ministerio Público y entre sus funciones están las de velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme y expresamente en el artículo 278.1 prescribe que el Procurador ejerce de forma directa la función de desvincular del cargo a los funcionarios públicos que cometan alguna de las faltas que allí se mencionan.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que el poder disciplinario al que alude el artículo 277.6 se aplica a todos los empleados del Estado. Esta premisa implica que la atribución de vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive de los funcionarios de elección popular, se vincula con la competencia disciplinaria y define los sujetos sometidos al poder disciplinario del Procurador General de la Nación.

En la sentencia SU712 de 2013 la Corte reiteró tal posición advirtiendo que la Constitución le asignaba al Procurador una competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a quienes desempeñen funciones públicas. Ello incluiría, tal y como lo explicó la referida providencia, a los funcionarios de elección popular y, entre ellos, a los Congresistas[31]. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 118, 123 y 277, consideró la Corte:

> *"Esta tríada normativa indica que la Constitución sí otorgó al Procurador General de la Nación competencia para ejercer la vigilancia superior de las funciones desempeñadas por los Congresistas de la República, en su calidad de servidores públicos y miembros de una corporación pública de elección popular, para lo cual puede adelantar las investigaciones e imponer las sanciones definidas en la ley. Corresponde a una competencia del jefe del Ministerio Público que emana directamente de la Constitución Política y cuya delimitación corresponde al Legislador."*
>
> *En sentencia CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) Bogotá D.C., nueve (9) de agosto del dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU) Actor: PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ : La Procuraduría General de la Nación – Es competente para investigar disciplinariamente a servidores públicos elegidos por voto popular La*

trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

acción disciplinaria busca garantizar la efectividad de los principios constitucionales y legales en el ejercicio de la función pública. Precisa el artículo 3 de la Ley 734 de 2002 que la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o avocar cualquier investigación o juzgamiento que sea competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Según lo indicado en el artículo 25 de la Ley 734, son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos. Los senadores de la República por expreso mandato constitucional son servidores públicos. (…) La Corte Constitucional en sentencia C- 500 de 16 de julio de 2014 sostuvo que el legislador, sin desconocer la Constitución Política y las normas internacionales, podía atribuir a los organismos de control del Estado la competencia disciplinaria para la imposición de sanciones que conllevaran a la destitución e inhabilidad general de los servidores públicos, esto último, como reproche al incumplimiento de sus deberes funcionales, en especial los referidos a la moralidad pública, la imparcialidad de la administración, el imperio de la ley o en el evento en que se comprometa la adecuada lucha contra la corrupción. Se recuerda que en sentencia SU-355 de 2015, se reiteró la posición respecto de la competencia de la Procuraduría General de la Nación, inclusive en los casos de servidores públicos elegidos por voto popular, a propósito de la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego.

Dicho de otra forma, la sanción impuesta al Sr. LIBARDO MARTINEZ GOMEZ - alcalde del Municipio de Alban de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD general por 10 años; fue adoptada por funcionario competente y por ende en ningún momento se ha violado normas constitucionales, legales y menos del orden internacional CADH.

VI. EXCEPCIONES

Innominada o Genérica: con el debido comedimiento, solicito declarar la existencia de toda aquella excepción cuyos supuestos de hecho resulten acreditados en el proceso.

VII. PRUEBAS

Para que obren como pruebas en el proceso solicito se allegue al proceso copia de la historia clínica psicológica del señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ.

Objeto de la prueba: Establecer fechas de inicio de tratamiento, patología padecida, tratamiento recibido y determinar si se relaciona con el hecho de soportar la sanción disciplinaria, por cuanto no se allegó certificación sobre valoración psicológica aludida por el demandante.

VIII. SOLICITUD

Acreditado como está que la Procuraduría General de la Nación actúo en ejercicio de la potestad constitucional y legal, profiriendo en primera y segunda instancia fallo contra el demandante, plenamente ajustado a la realidad probada dentro del proceso y a las disposiciones legales y constitucionales en que se fundaron, ruego respetuosamente se **DENIEGUEN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**.

IX. ANEXOS

1) Copia del expediente IUC-D-2013-71-603669 en medio magnético.
2) Certificado del comité de conciliación pre-judicial.
3) El poder conferido para actuar en el presente proceso.

X. NOTIFICACIONES

La suscrita recibirá notificaciones en la Procuraduría Provincial de Pasto, ubicada en la carrera 24 No. 20-58 Piso 6º Edificio Centro de Negocios Cristo Rey, teléfono 7292059 Ext. 24120 y en los email provincial.pasto@procuraduría.gov.co y caescobar@procuraduría.gov.co

Así mismo, la dirección principal de la Oficina Asesora Jurídica de le Entidad es la Carrera 5 N° 15 – 80 Piso 10°, teléfono 5878750 ext. 11001 y el email procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

XI. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA

Comedidamente le solicito reconocerme personería para actuar en este proceso.

Del Honorable Despacho,

CARMEN AMELIA ESCOBAR
C.C. 27.232.527 de Iles
T.P. 217.370 del C.S. de la J.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Dr. EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
E. S. D.

REFERENCIA:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN:	52001233300020200004200 (2020-00042)
ACCIONANTE:	LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ
ACCIONADO:	NACIÓN — PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

JULIETA RIVEROS GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.221.791, en mi condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, según Decreto No. 0094 del 30 de enero de 2020 y Acta de Posesión N° 0083 del 05 de febrero de 2020, y las funciones delegadas mediante Resolución No. 274 del 12 de septiembre de 2001, confiero poder especial, al (a) doctor (a) **CARMEN AMELIA ESCOBAR,** para que asuma la representación de la Entidad dentro de la acción de la referencia.

La apoderada, queda ampliamente facultada para adelantar las diligencias que considere necesarias en defensa de los intereses encomendados, especialmente para conciliar conforme las instrucciones del comité de conciliación de la Entidad.

Así mismo, y atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el artículo 5° del Decreto 806 del 04 de junio de 2020[1], se informa que el correo electrónico del (la) apoderado (a) que se reporta actualmente en el Registro Nacional de Abogados es caescobar@procuraduria.gov.co y el correspondiente para notificaciones a la Procuraduría General de la Nación es procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

Sírvase reconocerle personería para actuar.

Cordialmente,

JULIETA RIVEROS GONZÁLEZ
Jefe Oficina Jurídica

Acepto,

CARMEN AMELIA ESCOBAR
C.C. 27.232.527 de Iles
T.P. 217.370 del C.S. de la J.

---

[1] *Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.*

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2019
Oficio No. 0744

Doctor
ANDRES ORLANDO VILLOTA BENAVIDES
Profesional Universitario
Procuraduría Provincial de Pasto
E. S. D.

REF.: Solicitud de conciliación extrajudicial, Radicado No. 2019-0311

Doctor Andrés Orlando:

Me permito remitirle la certificación expedida en la fecha, que guarda relación con la decisión adoptada por el Comité de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, en **sesión realizada el día 29 de agosto de 2019**, respecto de la **NO PROCEDENCIA DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PRESENTADA POR EL SEÑOR LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ.**

Le agradezco el envío oportuno de la respectiva acta de la audiencia de conciliación extrajudicial a realizarse en la Procuraduría 35 Judicial II para Asuntos Administrativos de Pasto, el día 02 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m., para que repose en el archivo de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.

Atentamente,

NANCY ROCIO PULIDO CASTILLO
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación

Anexo: Lo enunciado.

Radicación No. 2019-0311

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, hace constar que en sesión **realizada el día 29 de agosto de 2019,** previa verificación del quórum deliberatorio y decisorio, los miembros del Comité de Conciliación, estudiaron la viabilidad de conciliar extrajudicialmente con el señor **LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ,** en su condición de Alcalde del Municipio de Albán, Nariño, quien convoca a través de apoderada, doctora Diana Aydee Onofre Meza, a la **Procuraduría General de la Nación,** con miras a cumplir con el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, reglamentado por el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009.

Se procede a realizar el análisis del concepto radicado en la Secretaría Técnica el 28 de agosto de 2019, suscrito por el doctor Jesús David Rodríguez Ramos, asesor adscrito a la Oficina Jurídica y los documentos que de él forman parte. Los miembros del Comité de Conciliación realizan las siguientes precisiones:

1. **Las pretensiones** de la parte convocante en la solicitud de conciliación extrajudicial son:

> "(…) A- Se revoque el fallo disciplinario sancionatorio de primera instancia No. 021 proferido el 26 de septiembre de 2018 por la Procuraduría Provincial de Pasto dentro del proceso con radicado No. E-2013-124486/IUC-D-2013-71-603669, en el que se sancionó al señor LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ en su condición de exalcalde del Municipio de Albán, con destitución del cargo e inhabilidad general de 10 años, "por haber incurrido en fallas disciplinarias gravísimas tipificadas en los numerales 1 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 a título de dolo".
>
> B- Se revoque el fallo disciplinario sancionatorio de segunda instancia proferido el 27 de marzo de 2019 por la Procuraduría Regional del Cauca dentro del proceso con radicado No. E-2013-124486/IUC-D-2013-71-603669, con el que confirmó la sanción disciplinaria proferida en contra del ciudadano LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ, en su condición de exalcalde del Municipio de Albán (N), consistente en destitución del cargo e inhabilidad general de 10 años, "por haber incurrido en las faltas disciplinarias gravísimas tipificadas en los numerales 1 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 a título de dolo".
>
> C- Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación inmediata de los registros y antecedentes disciplinarios efectuados en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de inhabilidad – SIRI de la Procuraduría General de la Nación.
>
> D- Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se indemnice al ciudadano LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ con la suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, a razón del sufrimiento que le acarreó el proceso disciplinario y el desenlace del

mismo, así como las implicaciones públicas por la divulgación del resultado del trámite en medios de comunicación, redes sociales y en la página web de la entidad.

E- Que el acuerdo se cumpla inmediatamente se surta su aprobación judicial.

F- Que se me reconozca personería adjetiva para representar al señor LIBARDO MARTINEZ GOMEZ conforme al memorial poder que se adjunta a la presente solicitud (...)".

2. Los miembros del Comité de Conciliación, procedieron a realizar el análisis del **objeto y el problema jurídico planteado en la solicitud** de conciliación extrajudicial y expresaron que los **argumentos de la parte convocante eran improcedentes,** toda vez que los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación se sujetaron a la constitucionalidad, legalidad y por tal razón son eficaces y deben producir sus efectos normales por haber guardado las formas prescritas para ello.

Dentro del trámite de la investigación disciplinaria se observaron las reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias que corresponden al debido proceso establecidos en beneficio del administrado, previstas por la ley como garantía para asegurar la vigencia de los fines estatales y salvaguardar los derechos de los asociados.

Además, el convocante tuvo oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demostraran sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan el marco probatorio al interior de los procesos disciplinarios, respetando en todo caso los términos y etapas procesales.

En estas condiciones, las decisiones emitidas por la Procuraduría General de la Nación se enmarcan en el carácter de las actuaciones propias de la administración en desarrollo del cumplimiento de sus funciones y no de actos arbitrarios o caprichosos, con el objeto especial de generar perjuicios.

La Ley 734 de 2002, vigente en la actualidad, impone a quien desempeñe funciones públicas – caso que nos ocupa –, el cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes, cuyo incumplimiento finalmente dio como resultado la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.

Finalmente, las providencias proferidas dentro del proceso disciplinario expresaron con claridad y precisión, las razones que se tuvieron en cuenta para proferir la sanción disciplinaria del convocante y el acervo probatorio, fue analizado de manera integral, con fundamento en la lógica y la sana crítica.

Con fundamento en lo anteriormente planteado y teniendo en cuenta que los actos administrativos cuya nulidad se pretende en virtud de la presente solicitud de conciliación, se ajustaron al ordenamiento legal, sin que se advirtieran motivos que pudieran cuestionar su presunción de legalidad, se concluye que la Procuraduría General de la Nación **no debe acceder** a las pretensiones conciliatorias propuestas por la parte convocante.

Así las cosas, decidieron los miembros del Comité de Conciliación acoger el concepto presentado por el doctor Jesús David Rodríguez Ramos, abogado adscrito a la Oficina Jurídica, el cual obra en el archivo de la carpeta del caso identificado con la Radicación No. 2019-0311 y declararon que **NO EXISTÍA ÁNIMO CONCILIATORIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA ACCEDER A LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PRESENTADA POR EL SEÑOR LIBARDO MARTÍNEZ GÓMEZ (...)".**

Se expide la presente constancia con destino al abogado que sea designado por la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, para representar a la entidad en el trámite conciliatorio extrajudicial que se adelantará ante la Procuraduría 35 Judicial II para Asuntos Administrativos de Pasto, el día 02 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m. Dada a los treinta (30) días del mes de agosto del mismo año.

NANCY ROCIO PULIDO CASTILLO
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación PGN

Radicación No. 2019-0311

Oscar Fernando Ruano Bolaños

Magister en Derecho Administrativo
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Especialista en Derecho Administrativo
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Especialista en Contratación Estatal
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

San Juan de Pasto, Julio de 2.020

Doctor
EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS
Honorable Magistrado
Tribunal Administrativo de Nariño
E. S. D.

REF.: PROCESO No. 520012333000-2020-00055
ACTOR: MARIA DORADALY BARON SALAZAR
DEMANDADO: UGPP
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO

Contestación de demanda

OSCAR FERNANDO RUANO BOLAÑOS, mayor y vecino de este municipio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98'396.355 expedida en Pasto, y provisto de la Tarjeta Profesional No. 108.301 del C. S. de la J., obrando en mi calidad de apoderado judicial de **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**, mediante poder general que me ha otorgado el Director Jurídico y apoderada general de la Entidad, en el proceso de la referencia, comedidamente llego ante el Despacho y dentro del **término legal**, para **CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO**, propuesta por la señora **MARIA DORADALY BARON SALAZAR**, a través de apoderado judicial, en los siguientes términos:

I. POSICIÓN FRENTE A LAS PRETENSIONES DE DECLARACIÓN Y DE CONDENA DE LA DEMANDA

En nombre de la **UGPP**, con fundamento en lo que más adelante sustentaré, manifiesto que me opongo a que se declaren probadas todas y cada una de las pretensiones de declaración y de condena contenidas en la demanda, por carecer de fundamentos de derecho, en consecuencia, solicito respetuosamente que en la sentencia se exonere de toda responsabilidad a la Entidad que represento, declarando probadas todas y cada una de las excepciones que propondré en el acápite respectivo.

II. POSICIÓN FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Por ser susceptible de ello, el (la) demandante deberá probar todos y cada uno de los elementos fácticos sobre los cuales edifica las pretensiones del libelo demandatorio, por los medios probatorios idóneos y pedidos en la oportunidad procesal respectiva.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito argüir:

DEL PRIMERO AL QUINTO: Son ciertos.

AL SEXTO: No es cierto, en tanto no se ha aportado al expediente original o copia auténtica de los actos administrativos que den cuenta de la vinculación legal y reglamentaria ni se han allegado en original o copia auténtica de los contratos de prestación de servicios que den cuenta de la prestación del servicio.

Finalmente, si en gracia de discusión se acepta la vinculación a partir del **18 de abril de 2001 hasta el 14 de mayo de 2002 y desde el 1 de enero de 2004 hasta el 6 de diciembre de 2019,** para el Municipio de Tumaco, este periodo no debe ser tenido en cuenta, en tanto fue a través de contratos de prestación de servicios, los cuales no generan vinculación legal y reglamentaria.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

AL SÉPTIMO: No es cierto que la actora haya adquirido el status pensional el día **8 de noviembre de 2011**, en tanto no se ha acreditado la vinculación legal y reglamentaria antes del 31 de diciembre de 1980 y posteriormente, allegando formalmente el Decreto de Nombramiento y Acta de posesión respectivas (en original o copia auténtica).

Además, debe dilucidarse en el proceso si la hoy demandante percibió sus salarios o parte de ellos de la Nación. Igualmente, no se encuentra debidamente acreditado que la demandante haya prestados sus servicios con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta.

AL OCTAVO: Es un hecho que deberá demostrarse en debida forma oficiando a las Entidades a las cuales prestó sus servicios como docente.

La buena conducta en el desempeño del cargo no se ha dilucidado totalmente, pues se requiere allegar al proceso certificación de la Entidad territorial en la que trabajó indicando si le ha sido impuesta sanción disciplinaria alguna. En cuyo caso se solicitará al Despacho oficiar a la Entidad territorial en tal sentido, indicando el tipo de sanción, su vigencia o duración y remitirá copia de los actos administrativos contentivos de la sanción y su ejecución, si los hay.

III. RAZONES DE LA DEFENSA

Constituye fundamento jurídico de la defensa los siguientes:

A. CONSIDERACIONES FÁCTICAS

1. VINCULACIÓN ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 Y POSTERIORMENTE NO TOTALMENTE ACREDITADA

NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADO LOS TIEMPOS DE SERVICIO DEL DOCENTE.
EN TAL VIRTUD, ES AL DEMANDANTE, A QUIEN LE CORRESPONDE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN VERIFICAR EL TIEMPO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES ECONÓMICAS PERCIBIDAS PARA QUE SEA BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN GRACIA.

Conviene resaltar en primer término que la Entidad, tuvo en cuenta en la expedición del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, todos aquellos elementos acerca del tiempo, modo y lugar respecto de este tipo de prestaciones, con el fin de conceder o no el derecho con arreglo a la ley.

Además, si en gracia de discusión se acepta la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, se debe tener en cuenta que no se ha dilucidado qué **tipo de vinculación** tenía la hoy demandante, ni **el origen de los recursos con que se pagaron las asignaciones, ni los actos administrativos de nombramiento o situaciones administrativas ni con anterioridad ni con posterioridad al 31 de diciembre de 1980.**

El documento idóneo para demostrar la vinculación como docente es el original o copia auténtica del Decreto de Nombramiento tomados del original, documentos sine quanon que no fueron aportados en vía administrativa para demostrar dicha relación legal y reglamentaria.

Se tiene que no existe certeza sobre los tiempos de servicio allegados, no existe la prueba idónea en donde conste el tipo de vinculación del hoy demandante, es decir, especificando si es de carácter Nacional, Nacionalizado, Distrital, Municipal o Departamental, así como la fecha de vinculación y el origen de los recursos con los que se financió dicha vinculación y copia de los actos de nombramiento y posesión respectivos.

Que la Ley 50 de 1986 "***por la cual se fijan reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones***" regula las eventualidades en las cuales los hechos que deben ser demostrados mediante prueba documental, puedan ser objeto de **prueba supletoria,** única y exclusivamente en forma excepcional, pruebas a las que tampoco se ha acudido. Así, tal y como lo preceptúan los artículos 7° a 9° ibídem, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable y bien justificada de la prueba documental, es posible recurrir a la PRUEBA SUPLETORIA

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios prestados a las entidades públicas. Situación que no aconteció en vía administrativa en el presente asunto, **NO SE HA JUSTIFICADO LA AUSENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE POR QUÉ EN LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD NO APARECEN LOS DECRETOS DE NOMBRAMIENTO, MENCIONANDO LA CAUSA ESPECIFICA QUE IMPIDE LA EXPEDICION DE LAS COPIAS AUTÉNTICAS.**

Como conclusión, se han desatendido los requisitos generales especiales que establece la Ley 50 de 1886 para la validez de la prueba supletoria, la norma establece unas **exigencias de admisibilidad para la misma,** señaladas en el art 8 ib:

"Artículo 8. En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al Código Militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que pueden reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente La prueba supletoria es también admisible cuando se acredite de un modo satisfactorio que no se pudo establecer oportunamente prueba escrita y las razones por las cuales esto sucedió."

Artículo 9. En todo caso en que conforme a esta ley, el Código Militar o a cualquiera otra disposición hayan de presentarse a cualquier autoridad o empleado pruebas testimoniales relativas a hechos que funden derecho a obtener pensión, dichas pruebas serán desestimadas cuando no contengan, además de las condiciones generales de todo testimonio, las siguientes:

1ªQue el testigo dé razón clara y precisa de su dicho o sea que exprese de qué modo tuvo conocimiento de los hechos sobre que declara; y que de esta expresión resulte que el testigo declara de sus propias y directas percepciones, de forma que lo que él afirma sea lo que vio, oyó o en general percibió directamente; 2ª Respecto de los hechos cronológicos que el testigo afirme, debe asimismo expresar si estuvo presente a todos los hechos que racionalmente dejan establecida la cualidad de cronológicos de los hechos sobre que declara; 3ª Que el funcionario que recibe la declaración haga constar que él mismo la recibió personalmente oyéndola del testigo y haciendo a éste todas las preguntas conducentes a establecer el convencimiento de su veracidad y de su pleno conocimiento de los hechos que declara y distintamente afirma.

- ***a)*** *La negligencia del funcionario en hacer que la declaración llene las condiciones que aquí se exigen y las demás generales de todo testimonio, vicia la declaración.*
- ***b)*** *Los funcionarios que en cualquier caso deban apreciar pruebas testimoniales en los asuntos de que trata esta ley o el Código Militar, para el efecto de conceder pensiones o recompensas a cargo de la Nación, tienen el deber de examinar por sí mismos los testigos cuantas veces sea útil o necesario, cuando éstos se hallen en el mismo lugar que aquellos funcionarios, o, en caso contrario a la más alta autoridad judicial o política del lugar de la residencia de los testigos. El examen en éste y en todo caso, no debe limitarse a las preguntas que hagan los interesados, sino que debe extenderse a todos los hechos y circunstancias que hagan conocer toda la verdad en la materia de que se trata, y respecto de las condiciones intelectuales y morales del testigo.*
- ***c)*** *En todo caso estará presente al acto de las declaraciones el respectivo agente del Ministerio público para que pueda hacer las preguntas que estime conveniente y para que vigile que el testimonio sea recibido con todas las formalidades y requisitos legales.*

Que una vez revisado el cuaderno administrativo, al no ser admisible la **certificación aportada, y al** no solicitarse o constituirse prueba supletoria en la que se acredite la existencia de los actos administrativos de nombramiento y de posesión respectivos o hacer verosímil su existencia, de los periodos en los cuales prestó sus servicios, prueba que debe llenar los requisitos exigidos por la norma en comento, y en tal virtud, al no tener certeza la Entidad acerca del tipo de vinculación de la demandante se debe proceder a desestimar sus pretensiones.

En este orden de ideas la prueba (certificados de tiempos de servicios) ha ido igualmente en contravía de los requisitos de admisibilidad y estimatibilidad, en el siguiente sentido:

LA ADMISIBILIDAD Y LA ESTIMATIBILIDAD, en relación con la primera, cabe destacar que solo es admisible en caso de falta absoluta, bien justificada de pruebas preestablecidas y escritas, por ejemplo, por inexistencia de archivo en la Entidad nominadora, pagaduría y fiscalizadora del orden correspondiente según la naturaleza del cargo servido que se pretende acreditar. En relación con la estimatibilidad, una vez admitida la prueba, se estimará si las pruebas acopiadas, además de las condiciones generales de la prueba, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 8° de la Ley 50 de 1886, situación que como se ha expresado no cumple con ninguno de estos dos aspectos.

Luego de analizar los medios probatorios acopiados, la parte actora de forma precaria probó los 20 años de servicio, argumento que motiva la negativa, desconociendo así la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en el entendido que los certificados que se expidan para acreditar los requisitos legales exigidos por la norma para el reconocimiento de la prestación social, deben ser precisos y contener datos fundamentales que reflejen la realidad de la vinculación y desarrollo de la función docente, pues la información incompleta que se consigne pude conducir a decisiones contrarias. Sobre el tema se cita la sentencia del Consejo de Estado de fecha 19 de enero de 2006, misma de la cual reiteramos los argumentos aplicables al presente caso.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

La certificación laboral resulta incompleta, no pudiendo analizar con claridad el tiempo de servicios, en consecuencia, no reuniendo los requisitos exigidos, pues éstas únicamente establecen fecha de nombramiento, no determina la autoridad que efectuó la vinculación, concluyendo que ante la falta de acreditación de la vinculación legal y reglamentaria, no se acceda a las pretensiones de la demanda.

Se debe tener en cuenta, además, que no existe **reconstrucción de los actos administrativos que cumplan con lo previsto en la Ley 50 de 1886, artículos 7 y 8, destacando que no puede ser admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos o por pruebas preestablecidas por las leyes** o con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 1564 de 2012.

A LA ENTIDAD NO LE CORRESPONDE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES ECONÓMICAS DEL ACTOR

Prueba que no se encuentra en cabeza de la Entidad, allegar la prueba documental **(DECRETOS DE NOMBRAMIENTO)**, por el contrario, se encuentra en cabeza del titular actor, pues es él el único que posee la facultad de desvirtuar los hechos y/o documentos base de la decisión contemplada en la resolución atacada, lo anterior al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

En tal virtud, se resalta que la accionante no cumplió los requisitos para conformar prueba supletoria y que se encuentra regulada en la Ley 50 de 1886, el actor desconoció las exigencias establecidas.

Las pruebas documentales no demuestran con certeza si existió algún siniestro, ni fecha alguna a efectos de impedir la no entrega de los decretos de nombramiento de la actora.

Tampoco el actor acudió a otras instancias, a efectos de demostrar su vinculación con el Municipio, como acudir al Ministerio de Educación Nacional, Archivo General del Departamento de Nariño, a fin de recurrir a aquellos documentos reemplazar los perdidos o hacer verosímil su existencia, y tampoco lo hizo.

2. **VINCULACION NACIONAL**

Si en gracia de discusión se aceptan los certificados de tiempo de servicio, se expresa entonces que el tiempo de servicio prestado por la actora en el Municipio de Tumaco a partir del **18 de abril de 2001**, no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia por ser éste de Carácter **Nacional**, es decir, si bien es docente oficial, no es del orden municipal sino Nacional. Se desestiman en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la cual establece que el carácter del régimen de los docentes vinculados con posterioridad al 01 de enero de 1990 es de orden **NACIONAL**, de la siguiente manera:

El art 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, en el num 2, literal B específicamente establece:

Artículo 15°.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

2.- Pensiones:
(…)
B. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

Con sustento en lo anterior tenemos que los tiempos laborados por el demandante en su calidad de docente del Departamento de Nariño y/o Municipio de Tumaco (N), desde el del **18 de abril de 2001**, son certificados por el ente territorial para el cual prestó sus servicios, sin embargo, teniendo en cuenta que **dichos tiempos corresponden a una nueva vinculación**, los mismos se consideran para todos los efectos nacionales.

Por lo expuesto, se considera que el accionante no reúne las condiciones que le permiten ser acreedor de la pensión gracia, es decir, no acreditó el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio prestados como docente de carácter territorial o nacionalizado.

Independientemente de lo que figure en el certificado del ente del nominador o pagador. Cuando un docente presente retiro y posterior vinculación, pierde el tipo de vinculación inicial y al realizar un nuevo nombramiento de igual manera tiene un nuevo tipo de vinculación.

En efecto, el cómputo de los periodos laborados como docente del orden nacionalizado y nacional no es procedente para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que dentro del marco legal que regula la materia no se encuentra establecida la posibilidad de computar los periodos laborados con diferente tipo de vinculación, como bien lo desarrolla la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Doctora BERTHA RAMIREZ DE PAEZ, mediante sentencia del 1° de octubre de 2009, expediente 0423-2008.

Que el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, establece:

"Los maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley"

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para efecto de las presentaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De este modo, sólo es viable contabilizar para efectos del reconocimiento de la pensión gracia todos aquellos tiempos de servicios que se originen en vinculaciones como docente territorial o nacionalizado previas al 1 de enero de 1990, conforme a lo establecido en el literal B del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

De conformidad con la norma antes transcrita y los tiempos laborados relacionados, se tiene que los docentes vinculados con posterioridad al 01 de enero de 1990, tal y como sucede en el caso particular, se considera de **orden NACIONAL**, motivo por el cual no le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 114 de 1913, y en consecuencia se niega el reconocimiento de la pensión gracia, al no ser viable contabilizar los tiempos de servicios con vinculaciones posteriores al 1° de enero de 1990, y las anteriores suman menos de 20 años de servicios.

Por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa vigente en el tiempo pese a su derogación por parte del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues el legislador expresamente dispuso que a los docentes "vinculados hasta 31 de diciembre de 1980" que "tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos". Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1° de enero de 1981, pues éstos docentes, "nacionales y nacionalizados", tendrán derecho "sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año".

Siendo ello así, es forzoso concluir que en relación con la pensión gracia que creó la Ley 114 de 1913, pueden presentarse, en la actualidad tres situaciones: la primera, la de quienes obtuvieron el

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

reconocimiento de la misma antes de la expedición de la ley 91 de 1989 y la continúan disfrutando; la segunda, la de quienes reunieron los requisitos para su reconocimiento pensional bajo el imperio de esa ley, y no la han reclamado todavía, pero pueden solicitarla; y la tercera, la de quienes la solicitaron y no han obtenido a la fecha su reconocimiento, pero éste se encuentra en trámite.

Queda claro, entonces, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 15, numeral 2°, literal b) de la Ley 91 de 1989, la pensión de gracia a que se ha hecho mención, sólo subsiste para los docentes que se vincularon al servicio oficial **antes del 31 de diciembre de 1980,** puesto que *"para los docentes **vinculados a partir del 1° de enero de 1981**, nacionales y nacionalizados, **y para aquéllos** que se nombren a partir del 1° de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año",* pensionados que "gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

En el anterior sentido, el Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente S-669, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, se pronunció explicando que la Ley 91 de 1989 tuvo como propósito el ponerle fin a la pensión gracia, cuando la norma pretranscrita estableció que los docentes "a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1° de enero de 1990" sólo tendrían derecho a la pensión ordinaria de jubilación, así se trate de docentes nacionalizados: (…).

3. VINCULACION POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Los tiempos de servicio prestados en el periodo comprendido entre del **18 de abril de 2001 hasta el 14 de mayo de 2002 y posteriormente desde el 1 de enero de 2004 hasta el 6 de diciembre de 2019** (con interrupciones) contenidos en la demanda, se desestima en atención a que la vinculación fue mediante contratos de prestación de servicios, los cuales no deben ser tenidos en cuenta, toda vez que no generan vinculación directa para con las Entidades con las que se laboró, por lo cual no se puede establecer el régimen prestacional con el cual se vinculó en desempeño de sus funciones como docente, es decir, que no se trató de una vinculación legal y reglamentaria y por cuanto además no se aportaron en el libelo genitor y no se han allegado copia auténtica de los respectivos contratos de prestación de servicios que den cuenta de dicha prestación de servicio

En síntesis, la hoy demandante, no cumplió con el requisito de 20 años de servicio docente con vinculación legal y reglamentaria como servidor público municipal, departamental o nacionalizado, toda vez que acredita desempeño mediante contratos de prestación de servicios, entre otras consideraciones para negar tal derecho.

La vinculación como docente de contrato de prestación de servicios se deben desestimar a efectos de reconocer la pensión gracia solicitada, en consideración a que la ley 115 de 1994 en su art. 105 consagra:

ARTÍCULO 105. VINCULACION AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. *La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.*

3.1. LA PRETENSIÓN DE DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE CONTRATO REALIDAD DEBIO VENTILARSE EN INSTANCIA JUDICIAL PREVIAMENTE A ESTE PROCESO

Conforme a los contratos de prestación de servicio no cumplen con los requisitos legales, toda vez que no existe nombramiento y posesión, además estos no generan prestaciones sociales, por lo tanto, no se pueden tener en cuenta para el reconocimiento solicitado y por ende, se niega la solicitud incoada por el actor, por lo tanto, dichos tiempos no acreditan vinculación, misma que no genera vinculación directa con la Entidad Territorial, y por lo tanto, no se puede establecer el régimen prestacional con el cual se vinculó en desempeño de sus funciones como docente.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

No se trata de una vinculación legal y reglamentaria, y si alguna diferencia ha surgido con ello, en su momento debió efectuarse la reclamación administrativa y judicial correspondiente, situación que no puede ventilarse en esta instancia judicial, como para subsanar o pasar por inadvertido esa circunstancia, cuya naturaleza, declaraciones y condenas son sustancialmente diferentes a las enjuiciadas en este momento, y cuya oportunidad procesal ya ha prescrito y, previamente no se ha presentado reclamación adtiva alguna ni ha provocado respuesta de la Entidad en ese sentido.

No siendo posible equiparar los diferentes tipos de vinculación de los docentes a las Entidades públicas sin desconocer las diferencias que representan cada una de ellas en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, no es de recibo, equiparar una relación de tipo contractual a una legal y reglamentaria, tomando como fundamento el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, pues de ser así se estarían desconociendo los elementos esenciales que rigen para que una persona acceda a la función pública en la modalidad estatutaria (SentC-555-1994).

De tal suerte, la orden de prestación de servicios, cuyas diferencias por tratarse de un contrato realidad con el sector público, deben ser debatidas ante esta Jurisdicción (contenciosa administrativa), pero a través de otra acción, a fin de obtener la indemnización por las pretensiones dejadas de cancelar en virtud de un contrato realidad. No siendo útil el tiempo laborado por el demandante para el Magisterio de **Tumaco (N)**, para reclamar la prestación solicitada, debiendo desestimarse las súplicas de la demanda.

En virtud de lo expuesto, se tiene que no hay lugar al reconocimiento de la prestación reclamada por cuanto la hoy demandante no acreditó los veinte (20) años en la docencia oficial de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posible para computar tiempos de servicio del orden nacional ni los desempeñados en cargos de carácter administrativo total o parcialmente, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada.

En efecto, el cómputo de los periodos laborados mediante **OPS** no es procedente para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que dentro del marco legal que regula la materia no se encuentra establecida la posibilidad de computar los periodos laborados con diferente tipo de vinculación, como bien lo desarrolla la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Doctora BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, mediante sentencia del 1º de octubre de 2009, expediente 0423-2008.

Los contratos de prestación de servicios, en cuanto al cómputo temporal, no pueden ser tenidos en cuenta a fin de acceder a la pensión gracia, dada su naturaleza, máxime cuando su pretensa primacía de la realidad sobre las formalidades no ha sido reconocido por vía judicial y dicha oportunidad procesal ya ha caducado.

Se debe resaltar la posición esgrimida por el Dr. PAULO LEÓN ESPAÑA PANTOJA, Honorable Magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, en salvamento de voto[1]:

"Considero que las normas que regulan el reconocimiento y pago de la pensión gracia, son claras en señalar que sólo se hace acreedor a dicha prestación el docente que cumpla todos los requisitos legales para ello, siendo el primero la sumatoria de 20 años de servicios como docente, lo que supone en consecuencia, la existencia de un vínculo legal y reglamentario.

Recuérdese que el derecho a la pensión, así como el reconocimiento de todas las prestaciones sociales a un trabajador del Estado, devienen de la existencia de una relación laboral, en las siguientes hipótesis (i) la existencia de un contrato de trabajo, (ii) un vínculo legal o reglamentario o (iii) por la declaratoria de existencia de un contrato realidad, en virtud del principio constitucional de primacía de la realidad.
Ahora, se tiene que el reconocimiento de prestaciones sociales, frente a la estructuración de un contrato realidad, no opera de facto, sino producto de una declaración judicial, en la cual sean debidamente debatidos y acreditados los elementos estructurantes de una relación laboral, lo que supone, en principio, que se formule tanto ante la administración, como en sede judicial la pretensión declaratoria de existencia de una relación laboral, con el consecuente pago de las prestaciones sociales, mismo que sólo procede a título de indemnización.

Ahora, descendiendo al caso en concreto, se encuentra que (i) en la providencia se relaciona y se reconocen los tiempos prestados por el demandante tanto al Municipio de Buesaco (N) como al Departamento de Putumayo, a través de ***Contrato de Prestación de Servicios.***

[1] *Salvamento de voto de fecha 22 de agosto de 2014, frente a sentencia del 22 de agosto de 2014 y dentro del proceso No. 2013-00326. Demandante: JORGE HERNAN BURBANO LARA. Demandado: UGPP.*

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

(ii) No se acreditó la fuente de los recursos con los cuales se remuneró al demandante, esto es, si fueron de nivel territorial o nacional, especialmente a parir del año 1993.
(iii) Igualmente tampoco se allegaron los actos de nombramiento y posesión del docente en procura de verificar el tipo de entidad a la que se vinculó a partir del año 1993 a 2008
(iv) Ahora, si eventualmente se computare el tiempo de servicios prestados a partir del año 1993 y parte de 1980, se tiene que tampoco se cumpliría con el requisito de 20 años de servicio exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia .
En mi criterio, considero que no puede sumarse como tiempo de servicios para el reconocimiento de la "pensión gracia" el tiempo acreditado por el actor por contrato de prestación de servicios, siendo que no hay declaración judicial que así lo permita"

En efecto, en el presente asunto no existe declaración judicial previa que reconozca la existencia de una relación legal y reglamentaria para el periodo de vinculación por contrato de prestación de servicios, o que declare la existencia de un contrato realidad.

4. DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE CANCELARON LOS SALARIOS

Que no existe certeza acerca de la fuente de los recursos con los cuales se canceló los salarios a la a hoy demandante.

Así las cosas, si la demandante recibió recursos provenientes de la Nación, no se cumpliría con el requisito contenido en el numeral 3 de la ley 114 de 1913, atinente a ***"que no haya recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional"***.

Si se demuestra que los salarios devengados por la demandante como docente del Municipio de **Tumaco (N) y/o Departamento de Nariño** se cancelaron con recursos de la Nación y/o del Sistema General de Participaciones, los cuales hoy según definición de la ley 715 de 2001 están constituidos por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios de salud, educación y vivienda, no tendría derecho a la reclamada pensión gracia.

Se precisa entonces que no basta que el docente tenga la condición de docente territorial, se requiere cumplir también el requisito de "que no haya recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional". Entonces, si el docente, así sea territorial, recibe sus salarios o subvenciones de la Nación (Sistema General de Participaciones) no tendrá derecho a ser beneficiario de la pensión gracia.

Se concluye que al tener en cuenta los señalados tiempos para el reconocimiento de la prestación solicitada se estaría contraviniendo el precitado mandato constitucional, en el entendido de haber recibido recursos provenientes de la nación.

Que en virtud de lo expuesto, y con sustento en las consideraciones efectuadas por la UGPP, se determinó y determina que el hoy demandante no tiene derecho al reconocimiento de la prestación demandada, motivo por el cual se debe proceder a confirmar la negación de su pretensión.

5. EL MUNICIPIO DE TUMACO ES CERTIFICADO EN EDUCACION EN EL AÑO 2000

Se debe considerar especialmente la vinculación posterior al año 2001 de la demandante como docente Municipal de Tumaco, por cuanto dicho Municipio, actualmente se encuentra certificado (en virtud de la Ley 715 de 2001). En consecuencia, se encarga de administrar el personal docente en su jurisdicción, con los recursos del Sistema General de Participaciones.

De este modo, debe establecerse si la demandante, fue o ha sido remunerada con recursos de transferencias o recursos **netamente** propios del Municipio, para determinar si no incurre en la prohibición de doble remuneración proveniente de recursos de la Nación.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

Además, téngase en cuenta que desde la Ley 91 de 1989 se prohibió el nombramiento de docentes con cargo a recursos de la Nación y considerando que la pensión gracia está a cargo de la Nación, si eventualmente está prestación se generó, tendría que estar a cargo del Municipio.

6. DE LA BUENA CONDUCTA

Igualmente, la buena conducta en el desempeño del cargo no se ha dilucidado totalmente, pues se requiere allegar al proceso certificación de la Entidad territorial en la que trabajó indicando si le ha sido impuesta sanción disciplinaria alguna. En cuyo caso se solicitará al Despacho oficiar a la Entidad territorial en tal sentido, indicando el tipo de sanción, su vigencia o duración y remitirá copia de los actos administrativos contentivos de la sanción y su ejecución, si los hay.

B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Conviene resaltar en primer término que la **UGPP**, tuvo en cuenta en la expedición de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, todos aquellos elementos acerca del tiempo, modo y lugar respecto de este tipo de prestaciones, con el fin de conceder o no el derecho con arreglo a la ley.

Así las cosas, se debe tener en cuenta que se deben cumplir con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, según lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas concordantes:

a) 50 años de edad o incapacidad para trabajar, conforme al numeral 6° del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, que reza así:

"Artículo 4 Ley 114 de 1913. Para gozar de la pensión gracia será preciso que el interesado compruebe:

b) 20 años de servicios oficiales como docente de enseñanza primaria, según se establece en el artículo 1° de la Ley 114 de 1913, o de enseñanza secundaria, según se extendió por medio del artículo 3° de la Ley 37 de 1933, o de enseñanza normalista y/o de inspección conforme a extensión hecha mediante el artículo 6° de la Ley 116 de 1928.

c) Vinculación de carácter territorial (departamental, distrital o municipal) o nacionalizado, conforme a lo establecido en el numeral 3° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913.

d) Vinculación originada antes o al 31 de diciembre de 1980, en aplicación a lo establecido en el literal A del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

e) Observar buena conducta y haberse desempeñado con honradez, consagración, según se indica en los numerales 1° y 4° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913.

Conforme a lo expuesto, la demandante **NO ACREDITÓ,** el requisito relacionado en el literal **b), c) y d).**

Por lo antes expresado, se sigue que el incumplimiento de uno de los requisitos para acceder a esta prestación especial por parte de un docente, conlleva a la UGPP, a negar la solicitud formulada por la ahora demandante a través de apoderado judicial para el efecto.

IV. EXCEPCIONES PROPUESTAS

Con el fin de enervar las pretensiones de declaración y condena solicitadas en el libelo genitor, me permito proponer las siguientes excepciones, de las cuales solicito sean declaradas:

A. EXCEPCIONES DE FONDO

1. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO FRENTE A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El reconocimiento de prestaciones sociales, por la configuración del denominado **"contrato realidad"** requiere de una declaración judicial, en la cual sean debidamente debatidos y acreditados los elementos propios de una relación laboral, en consecuencia, el actor debió solicitar ante la administración correspondiente el reconocimiento de una relación laboral, y de resultar desfavorable su petición,

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para lo de su competencia, en un término máximo de tres (3) años para que su derecho no prescriba, reconocimiento que no se ha solicitado.

Así las cosas, se ha configurado la existencia de prescripción del derecho frente a la no posibilidad de declarar la existencia de una relación laboral, legal y reglamentaria bajo los contratos realizados, y por ende la inexistencia de obligaciones de la Entidad demandada en tanto el tiempo laborado mediante los contratos de prestación de servicios, no es válido para efectos de ordenar el reconocimiento de la pensión gracia. Al respecto se puede consultar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño en esta anualidad, en la que se declaró configurada tal excepción[2], y por su parte el Consejo de Estado[3] expresó: "…***se reitera que el derecho a reclamas las prestaciones derivadas de un contrato realidad solo se hace exigible a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral; también lo es que el particular debe reclamar de la administración y del juez el reconocimiento de su relación laboral, dentro de un término prudencial que no exceda la prescripción de los derechos que reclama..***", argumentos que se solicita sean tenidos en cuenta por el despacho, para declarar la prosperidad de la excepción.

2. INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

La negativa al reconocimiento de la pensión de la demandante se realizó con estricta sujeción a la ley, lo que implica que se están garantizando los principios constitucionales y legales y no lo contrario como quiere hacer ver la demandante.

Tal como se mencionó, el reconocimiento de la pensión gracia no depende en absoluto de mi representada; a ella corresponde una tarea verificadora en la que se determinan los hechos probados en el reconocimiento de la pensión.

Cuando no se realiza, por parte del solicitante, el aporte de las pruebas, mi representada la reconoce o no la pensión sobre los aspectos normativos exigidos y debidamente acreditados y certificados, lo que otorga seguridad jurídica sobre las decisiones de la entidad y garantiza la protección de los principios constitucionales y legales.

Por lo tanto, al no existir la violación alegada por la demandante, no es dable al juez la declaratoria de nulidad y mucho menos una condena a mi representada, pues la UGPP, ha esgrimido razonablemente sus consideraciones para negar la pensión gracia a la hoy demandante, otorgando los respectivos recursos de ley.

3. COBRO DE LO NO DEBIDO

Ya que se pretende que se condene a mi representada a efectuar **reconocimiento de una pensión gracia**, sin haber ninguna obligación legal a cargo de la UGPP y a favor del (la) demandante, pues en el presente caso no se reúnen los requisitos legales para tal efecto. Al actor no le asiste ningún derecho real para fundamentar en forma plausible o con mérito las pretensiones de declaración y de condena reclamadas en la demanda. De donde resulta inane el cobro que se persigue con las pretensiones de la demanda.

4. PRESCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1848 de 1969, artículo 102, las prestaciones sociales **prescriben** en el término de tres años contados a partir de la última petición. La prescripción se contará desde que la obligación se haya hecho exigible. La jurisprudencia ha expresado que la pensión de jubilación y el derecho a los reajustes no prescriben, pero las mesadas **SI,** razón por la cual, están prescritas todas las obligaciones pensionales, reliquidaciones, reajustes pensionales, intereses corrientes

[2] **Tribunal Administrativo de Nariño. M.P. ALVARO MONTENEGRO CALVACHY, sentencia del 29 de enero de 2016. Actor: AURA DEL SOCORRO DEVRIES Vs MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y OTRO. Rad.: 2014-00565**
[3] **C. de E. Sección Segunda. Subsección A. CP. Dr. Luis Rafael Vargas. Sentencia. 20001-23-31-000-2011-00142-01 (0131-13). 9 de abril de 2014.**

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

y/o moratorios, indexación, que se hubieren causado con anterioridad a los tres años contados desde la fecha de presentación de la última petición.

5. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIONES

Honorable Magistrado, le solicito atentamente si en el transcurso del proceso encuentra probados hechos que constituyen una excepción de fondo, la reconozcan oficiosamente en la sentencia. Fundamento mi petición en lo preceptuado en el art 282 del Código General del Proceso que preceptúa: *"Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerlo oficiosamente en la sentencia…"*, aplicable al procedimiento administrativo por lo previsto en el art 306 de la Ley 1437 de 2011.

V. POSICIÓN FRENTE A LAS NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS POR LOS ACCIONANTES

Por lo anteriormente esgrimido, se tiene que en ningún momento la UGPP, ha violado las normas jurídicas constitucionales y legales citadas como tales en el libelo demandatorio.

VI. MEDIOS DE PRUEBA

Para demostrar los hechos expuestos en la contestación de la demanda y en las razones de la defensa, solicito al **Honorable Magistrado**, decrete y practique las siguientes pruebas:

A. DOCUMENTALES

Sírvase tener como pruebas los siguientes documentos:

1) Documentos aportados:

Me permito aportar en medio magnético copia del expediente administrativo del actor, con constancia de ser fiel copia del expediente pensional que reposa en la Entidad. Se entrega expediente magnético de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 3 de abril de 2012 "CERO PAPEL" en concordancia con el artículo 24 del Decreto 2609 de 2012 numeral C.

CLAVE PARA ABRIR LOS ARCHIVOS DEL CD (contiene expediente administrativo): 1m2g3n3sugpp

OBJETO DE LA PRUEBA: Verificar la correspondencia de las pruebas documentales aportadas por el apoderado de la parte demandante y la verificación de la **NO** acreditación de los requisitos propios para acceder a la pensión gracia solicitada.

2) Documentos solicitados

a. Oficiar a las Secretarías de Educación de **Tumaco y/o** Departamento de Nariño (Entidades donde prestó el servicio), a fin de que se sirva certificar o remitir lo siguiente:

1. Si todo el tiempo laborado por la señora **MARIA DORADALY BARON SALAZAR**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 30.728.488 expedida en Pasto, fue pagado con recursos presupuestales propios por cuenta del Municipio de **Tumaco** (N), del Departamento ó si se pagó con recursos **cofinanciados de la Nación**.
2. Si durante el tiempo de servicios tuvo la condición de docente nacional, nacionalizado o territorial.
3. Si los salarios devengados y cancelados a la señora **MARIA DORADALY BARON SALAZAR,** provienen de recursos del Municipio, del Departamento o de la Nación.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

Oscar Fernando Ruano Bolaños

Magister en Derecho Administrativo
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Especialista en Derecho Administrativo
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Especialista en Contratación Estatal
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

4. Si el Municipio de **Tumaco** (N), es un municipio certificado en materia de educación o el mismo es administrado por el Departamento. En el primer caso, indicará y remitirá los actos administrativos o normas que sustentan al Municipio de **Tumaco** (N), como municipio certificado en educación.
5. Si a la señora **MARIA DORADALY BARON SALAZAR**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 30.728.488 expedida en Pasto, le ha sido impuesta sanción disciplinaria alguna. En caso afirmativo, indicará el tipo de sanción, su vigencia o duración y remitirá copia de los actos administrativos contentivos de la sanción y su ejecución.
6. **Remitirá** copia auténtica de todos y cada uno de los actos de nombramiento, traslado, aceptación de renuncia o acto que modifique o extinga su situación jurídica como docente del Municipio de **Tumaco** (N) o del Departamento de Nariño o de la Nación. Remitirá igualmente copia auténtica de las actas de posesión respectivas.

OBJETO DE LA PRUEBA: Verificar la correspondencia de las pruebas documentales aportadas por el apoderado de la parte demandante y la verificación de la acreditación o no de los requisitos propios para acceder a la pensión gracia solicitada.

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como normas aplicables a la presente contestación, lo establecido en el artículo 175 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás normas concordantes y complementarias.

VIII. ANEXOS

El día 1 de julio de 2020, de manera electrónica fue aportada con la solicitud de reconocimiento de personería:

- Poder otorgado a mi favor, con los anexos de rigor que dan cuenta de la representación legal de mi mandante.
- Anexo los aportados en el acápite de pruebas.

IX. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

Las de la entidad demandada que represento en la calle 19 No. 68 A - 18 Bogotá D.C., correo electrónico: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co

La de la demandante se encuentra en el libelo genitor.

Las mías las recibiré en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de Abogado, ubicada en la calle 21 No. 22-09 Edificio JR, Apto 401 de esta ciudad.

Del Honorable Magistrado,

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO RUANO BOLAÑOS
C.C. No. 98'396.355 expedida en Pasto
T.P. No. 108.301 del C. S. de la J.

Calle 21 No. 22-09 Edificio JR Apto 401 Cel. 3217893766
San Juan de Pasto
oscarf.ruanob@gmail.com

RADICO CONTESTACIÓN DEMANDA 2020-55

O

oscar fernando ruano bolaños <oscarf.ruanob@gmail.com>
Mar 7/07/2020 11:43 AM

Para:

- Despacho 01 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto

CONTESTACION 2020-55 .pdf
391 KB

CC_30728488.zip
375 KB

30728488.zip
6 MB

3 archivos adjuntos (7 MB)Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Cordial saludo,

De la manera más atenta y respetuosa me permito enviar contestación de demanda dentr dentro del proceso **No. 2020-55**
DEMANDANTE: MARIA DORADALY BARON SALAZAR
DEMANDADA: UGPP

Muchas gracias por su atención.

Atentamente

Oscar Fernando Ruano Bolaños
Apoderado UGPP NARIÑO - MOCOA